

TOMO II

La política estamental, corporativa y fraudulenta como ámbito de disputas. La crisis política en los orígenes de la revolución de independencia y en las causas del colapso del aristocratismo republicano.

Capítulo 1

Introducción

Hemos visto en el primer tomo las crisis culturales, esencialmente educativas y comunicacionales, que operaron para desencadenar el fenómeno revolucionario y para posteriormente construir el estado-nación. En este segundo tomo y los cuatro (4) tomos siguientes habremos de ver en cambio las crisis puramente políticas. Para ello, la interpretación que históricamente se hiciera de las nociones de mito, política, poder, soberanía y violencia habrá de incidir en la concepción de las esferas de lo político. A juzgar por la metodología adoptada por Koselleck (1985, 1993) para que los vocablos poder y violencia se transformen en conceptos serían precisos previamente la formación de otra serie de conceptos acerca de lo público y lo privado, así como de la guerra y la paz. Ya la narrativa Medieval, protagonizada por Juan de París y Marsilio de Padua, en la Baja Edad Media, proponía en Occidente el nacimiento de la política y el estado.¹ Luego, la narrativa Renacentista, en la modernidad temprana, protagonizada por Maquiavelo, postulaba que el comienzo de algo políticamente nuevo requiere y justifica el uso de la violencia.² Esta legitimación de la violencia y la conquista militar vino a constituir el mito acerca del origen del estado y específicamente el origen del estado colonial. Más luego, el análisis Enciclopedista vino a reproducir los mitos griegos en la construcción de la república decimonónica. Y la narrativa Positivista pretendió borrar el pasado colonial en aras de la imitación de las naciones europeas que habían desplazado a España de la hegemonía mundial.³ Más luego la narrativa Marxista clásica subestimó la noción de poder definiéndolo como superestructura de los modos de producción. Más tarde, el funcionalismo (Parsons) le devolvió en parte su estatuto ontológico al definirlo como la autoridad actuando en pos de fines colectivos.⁴ Pero la verdadera ruptura epistemológica se dio con el estructuralismo (Poulantzas), quien definió al poder no como un objeto o autoridad sino como una relación de fuerzas.⁵

Finalmente, la lectura post-estructuralista de Foucault (1980) sostuvo que la noción de poder, tal como fuera definida por Poulantzas (1979), ignoraba que el poder no es sólo una fuerza negativa o represora sino que es también una fuerza positiva o productiva.⁶ Para Foucault, las crisis y transiciones políticas deben evaluarse de acuerdo a como el estado ejercía el poder: a) si era un estado jurídico, donde el monarca se erigía por sobre los señores feudales para proclamar su derecho exclusivo a dictar la ley; b) si un estado administrativo, donde la representación estaba limitada por la territorialidad de las fronteras nacionales; o c) si un estado gubernamental, donde el eje de la cuestión se trasladó de la representación dinástica a la territorial, y de esta última a la poblacional, con sus respectivos volúmenes y densidades.⁷ Para el post-estructuralismo de Higley, Burton y Field (1990) y de Lachmann (1990) lo relevante no eran las contradicciones primarias (socio-económicas) sino los conflictos intra-elites o contradicciones secundarias; y para la Nueva Ciencia Política, representada por Rokkan (1970),

Panebianco (1982, 1988), Przeworski (1991) y Bartolini (1993), en la fragmentación de antiguos regímenes (imperio colonial español primero y repúblicas oligárquicas después) incidía la combinación, superposición e intersección de fracturas genéticas o pre-modernas (centro-periferia, campo-ciudad, iglesia-estado, etc.). Y para Guerra y Lempérière (1998), lo relevante estribaba en la titularidad de la soberanía, la que en oportunidad del colapso de la monarquía o crisis de independencia fue transferida de los pueblos a sus representantes mediante un triple mecanismo de levantamientos, elecciones y el juego de la opinión.⁸ Finalmente, para Fukuyama (1996), los cambios en el primer nivel, el de la ideología, precipitan cambios en el segundo nivel, el de las instituciones, y los cambios en el tercer nivel --el de la sociedad civil-- dependen por su lentitud en un grado aún desconocido de las características peculiares del cuarto nivel: el nivel de la cultura.⁹

Producida la transición de la dominación dinástica Habsburga a la Borbónica, con la Paz de Utrecht (1713), y reforzado el estado colonial, a partir de las estrategias recolonizadoras implementadas por las denominadas Reformas Borbónicas, se puede concebir un mayor desarrollo del estado colonial, al margen y con una creciente independencia relativa respecto de la sociedad civil. La naturaleza inconclusa de la revolución de independencia en los territorios que constituyeron antaño el Virreinato del Perú y luego el antiguo Virreinato del Río de la Plata, y de la organización nacional en los territorios que constituyeron las Provincias Unidas del Río de la Plata, o en otras palabras, la no resolución de sus contradicciones políticas habría estado íntimamente vinculada con las sucesivas crisis o desajustes políticos que las precedieron. A medida que estas crisis o desajustes se acentuaban, las contradicciones estamentales o no-clasistas que se dieron en el seno de los patriciados se agravaron. La políticas colonizadoras Habsburgas (Virrey Toledo, 1580; Ordenanzas de Alfaro), las políticas recolonizadoras y centralizadoras Borbónicas (1782) y las políticas nacionalistas o nacionalizadoras implementadas a partir de la Revolución de Independencia (1810) y por la denominada Organización Nacional (1862-80) fueron desestructurando y reestructurando territorial, y culturalmente --mediante guerras, particiones, secesiones y una prolífica política de ingeniería institucional-- las relaciones que mantenían los reinos, las provincias, las ciudades y los individuos entre sí.¹⁰ En ese sentido, los patriciados de las ciudades más antiguas se sentían amenazados por los de las ciudades más nuevas.¹¹

Pero el estudio particular de cada una de estas crisis por sí solas no garantizaría el éxito de la empresa. Entre las crisis o desajustes políticos, la crisis que más habría incidido en la ruptura de los privilegios estamentales, de los fueros capitulares y de nobleza, del nepotismo y el etno-centrismo capitulares, y de la heredabilidad de los oficios públicos, habrían sido las crisis políticas propiamente dichas ocurridas en el seno de las elites y el parlamentarismo pre-moderno (Cabildos).¹²

Los conflictos se habrían manifestado en las acciones colectivas urbanas desatadas por las alianzas entre sectores de la elite, los gremios y la plebe por la consecución de objetivos puntuales, por lo general anti-fiscales; y en las luchas entre las facciones denominadas sarracenas (pro-jesuiticas) y ministeriales (partidarias de las políticas mercantilistas), contra las facciones anti-ministeriales (partidarios de la libertad de comercio, la Expulsión de los Jesuitas y la desjesuitización de las universidades);

En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse: ¿si las crisis política, social, eclesiástica y militar se hallaban o no relacionadas con los procesos de colapso o crisis terminal de la sociedad colonial?; y ¿si devino en mito institucional racional la estructura discursiva de las instituciones sociales del Antiguo Régimen, encarnada en los principios ritualizados de la

arbitrariedad del poder, la adscriptibilidad del status (primogenitura, varonía, legitimidad, hidalguía, casta y pureza o limpieza de sangre), la representatividad jerárquica (corporativa, estamental y territorial o vecinal), la religiosidad eclesial, el celibato sacerdotal, la reciprocidad penal, la patrimonialidad del funcionariado (venalidad capitular) y de la casta (gracias al sacar), la contingencialidad de la propiedad (derecho de retracto), y la responsabilidad colectiva?.

Para analizar la intensidad de la crisis política indagamos el rol jugado por la gestación de estrategias disciplinarias por parte de facciones rivales y las interminables disputas electorales, manifestadas en acciones colectivas tales como peticiones y movilizaciones (serenatas y cencerradas), donde abundaban los ingredientes culturales (música, canto, representaciones plásticas y parodia de los adversarios). Para investigar la intensidad de la crisis social y la estabilidad de la siesta colonial estudiamos la frecuencia de la fuga de esclavos y del bandolerismo. Para indagar el devenir de la crisis militar analizamos los conflictos entre los Comandantes de Armas y los Cabildos. Y para analizar la crisis eclesiástica estudiamos los conflictos entre los Cabildos Eclesiásticos y los Patronos de Capellanías.

A los efectos de estudiar todos estos casos, hemos recogido docenas de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC). La crisis política habrá de deducirse de las fianzas de saneamiento y Real Hacienda otorgadas. La crisis social de las compraventas y manumisiones de esclavos y los poderes para recobrar esclavos fugados. La criminalidad de los apartamientos de querella y los perdones de muerte o prisión. Y la orfandad de los menores miembros de las elites de los reconocimientos o legitimaciones de hijos naturales, los discernimientos de tutelas y curatelas, y las obligaciones a réditos pupilares.

En este tomo nos dedicamos a estudiar la crisis revolucionaria solo en sus distintas variantes políticas propiamente dichas, así como en las diversas regiones en las que se manifestó: Alto Perú, Paraguay, Litoral, Banda Oriental y Río de la Plata; para luego extenderme en los tomos siguientes a las burocracias civiles, militares, y eclesiásticas. En sus capítulos nos referimos a las nociones de acción colectiva, facción, disciplina, corrupción, conciencia criolla, leva, derramas, guerra ofensiva y defensiva, linajes bastardeados, etc. La crisis orgánica en el estado colonial americano, para el caso de Buenos Aires en el siglo XVII, es analizada en el capítulo 2. En el capítulo 3 estudiamos la crisis política, las acciones colectivas y el discurso contra el colonialismo en las provincias del Río de la Plata (1764-1810). Las facciones políticas y la crisis revolucionaria en el Río de la Plata y las Reformas Borbónicas y su impacto en los patriciados coloniales (1748-1784) son analizadas en el capítulo 4. En el capítulo 5 se estudia la crisis fiscal, la corrupción de la burocracia colonial Borbónica y los orígenes de la Revolución. En el capítulo 6 analizo el campo político como espacio de lucha y las fracturas corporativas y geográficas del interior Argentino (Siglo XIX). Y en el capítulo 7 estudio el comicio como encrucijada bélica en el interior argentino del siglo XIX.

NOTAS

¹ ver Ullmann, 1985, 111.

² ver Arendt, 1995, 43; citado en Esposito, 1999, 34; y Rinesi, 2003, capítulo 5.

³ Moreno Romo, 2002, 69.

⁴ Lukes, 1974, 28, citado por Philp, 1983, 31.

⁵ Poulantzas, 1979, 147.

⁶ Philp, 1983, 35; y Keenan, 1987, 15.

⁷ Jones, 1996, 23.

⁸ ver Guerra y Lempérière, 1998, 135-139.

⁹ Fukuyama, 1995, 8. Debo el conocimiento de la existencia del Journal of Democracy en la Universidad de San Andrés al Prof. Sebastián Saiegh.

¹⁰ ver Vives (1986); McGarry y O'Leary, 1993, citado en O'Leary, 2000, 101; y Taylor, 2000, 266-267.

¹¹ ver Robinson y Thomas (1974) y Colmenares (1991).

¹² ver Cotta, 1988.

Capítulo 2:

"La crisis orgánica en el estado colonial americano. El caso de Buenos Aires en el siglo XVII"

(publicado en 1984 en el *International Review of History and Political Science* [Meerut, India], XXI, n.2, 48-59; bajo el título: "An organic crisis in the Spanish American Colonial State. The case of Buenos Aires in the early Seventeenth Century", registrado en el HLAS, v.48, 1986, item 2832);

Los historiadores románticos de la Argentina decimonónica arrojaron cruciales cuestiones tales como las causas primarias del conflicto entre el puerto y las provincias y las causas básicas de las crisis internas de las diferentes corporaciones y grupos de intereses especiales en la ciudad de Buenos Aires misma. Un poco más tarde, influidos por el boom comercial de la década de 1860, los intelectuales positivistas locales, aunque reconociendo la existencia de una suerte de lucha de clases en el Buenos Aires del siglo XVII, negaban que la repercusión de las crisis políticas fueran extremas.¹

La aguda crisis experimentada por la historia política de la Argentina decimonónica forzó a una nueva tendencia de intelectuales progresistas a prestar atención a la base política de la sociedad argentina. Siguiendo esta escuela de pensamiento, Ricardo Levene, el más representativo de la Nueva Escuela Histórica, implementó una perspectiva evolucionista y la superestructura jurídica como criterio para caracterizar las estructuras políticas coloniales, en lugar de analizar las luchas intra-coloniales o las crisis políticas.² Sin embargo, a pesar de su conocimiento acerca del derecho colonial hispano-americano Levene fracasó en explicar la razón de la existencia en las colonias hispano-americanas de crisis políticas cíclicas.

Más luego, liberales de izquierda, siguiendo un paradigma idealista y unilineal, consideraron las crisis políticas en la era colonial como acontecimientos progresistas para socavar el régimen corporativo colonial y la estratificación social estamental, así como para debilitar el absolutismo virreinal y su política mercantilista. Ellos visualizaron las crisis políticas acontecidas en el seno de los cabildos como una expresión de las libertades coloniales en medio de una sociedad estamental, y la antesala de la emergencia de una burguesía nacional local.³ Como herramienta contra el liberalismo argentino la escuela Revisionista (nacionalistas) conjuntamente con los nacionalistas de izquierda consideraron que las crisis políticas en la era colonial estaban apoyadas en intereses capituladores orientados hacia el mercado externo (Confederados) y contrarios a la hegemonía de intereses patrióticos y nacionalistas (Beneméritos).⁴

El bloque histórico a estudiar era el resultado político de una larga crisis que había durado casi sesenta años. En ocho diferentes ocasiones entre 1580 y 1640, el bloque porteño en el poder alcanzó una crisis de hegemonía y profundas luchas intra-coloniales. Durante las primeras tres crisis, que obedecieron a un bajo grado de penetración comercial, la hegemonía del bloque en el poder correspondió a las viejas fuerzas orientadas hacia el mercado interno. Sin embargo, comenzando con la cuarta crisis, que constituyó una suerte de crisis revolucionaria, la hegemonía del bloque en el poder, debido a un alto grado de penetración mercantil, correspondió a fuerzas orientadas hacia el mercado externo. Aparte de la penetración comercial, la manera en que los oficiales públicos adquirieron sus cargos fueron también un motivo de crisis. En otras palabras, las posiciones capitulares devinieron en una fuente de crisis dependiendo que fueran fruto de una compra o de una elección.

Durante el comienzo del siglo XVII, los vecinos de Buenos Aires parecían estar menos preocupados acerca de la posibilidad de rebeliones criollas que los peninsulares de la década de 1580, cuando una población criolla en la ciudad de Santa Fé, la mayoría de los mismos mestizos (de origen mixto), amenazaron la hegemonía política de los españoles.⁵ Sin embargo, a fines de la década de 1580, una época de actividad comercial decreciente, el Cabildo de Buenos Aires estuvo por primera vez en confrontación con el Gobernador español Adelantado Juan de Torres de Vera y Aragón, sobre su intento de nombrar a algunos de sus parientes en puestos públicos. Como resultado de una impugnación legal, el Cabildo logró en abril de 1589 frustrar los esfuerzos del Gobernador.⁶ Inmediatamente después, en 1591, el Cabildo de Buenos Aires, aún representando a los productores orientados hacia el mercado interno, apoyados por el Consejo de Indias, desafiaron al mismo Gobernador Torres de Vera, cuando quiso monopolizar las vaquerías de ganado cimarrón.⁷ La principal resultado de esta crisis fue la habilidad del Cabildo de Buenos Aires de tomar ventaja de una subordinación antagónica a las autoridades metropolitanas, desafiando así por sí misma y por vez primera a un agente burocrático externo.

A fines de 1594 el Contador Real Hernando de Vargas, aliado a los productores criollos orientados hacia el mercado interno, desafiaron exitosamente al Gobernador Hernando de Zárate.⁸ En esta crisis, el Gobernador español representó por primera vez intereses orientados hacia el mercado externo, mientras que el Contador Real representó por última vez las fuerzas orientadas hacia el mercado interno.

Durante la tercer crisis, en 1607, el Gobernador fue capaz de prevalecer contra los Oficiales Reales dividiéndolos. Hernandarias desafiante designó al nuevo Tesorero Real Simón de Valdéz como su Teniente General, públicamente opuesto al Contador Real Hernando de Vargas. Este acto estuvo en contra de la voluntad de la mayoría del Cabildo. Finalmente, Hernandarias, a pesar de la oposición del Cabildo, fue capaz de reforzar su decisión mediante un decreto especial.⁹ Durante el mismo año 1607, Hernandarias entró en un conflicto severo con la Real Audiencia de Charcas, por haber procesado a Gaspar de Acevedo, Escribano de Registro y Real Hacienda, que había sido acusado de introducir ilegalmente docientos esclavos.¹⁰ Dos años más tarde, Hernandarias una vez más antagonizó con el Cabildo al asignar voz y voto a su nuevo designado Alguacil Mayor Gaspar Teves y Britos.¹¹ La principal peculiaridad de esta crisis fue la habilidad del Cabildo de tomar ventaja de las diferencias entre el Gobernador y la Real Audiencia de Charcas con respecto a la venta y designación de escribanos, tenientes gobernadores, y Alguaciles Mayores. Sin embargo, estas repetidas crisis del establishment político hegemónico proveyó las condiciones objetivas para una toma del poder por las nuevas fuerzas sociales.

Durante la cuarta crisis política (1614), la más crítica de todas, los constreñimientos externos directos fueron leves debido a la vigencia de la Tregua de los Doce Años (1609-1621) entre España y los Países Bajos. Como resultado de esta Tregua los constreñimientos externos indirectos (actividades de contrabando) o, en otras palabras, un alto grado de penetración comercial en Buenos Aires, fueron capaces de generar extendidas luchas intra-coloniales. La sola candidatura de Juan de Vergara, una suerte de intelectual orgánico de la facción Confederada, a alcalde en el Cabildo, era capaz de producir una profunda lucha intra-colonial. Los cabildantes Gonzalo de Carbaxal y Francisco de Salas Videla (Beneméritos) desafiaron la candidatura de Vergara sobre la base de que mantenía una cerrada amistad con Diego de Vega, un famoso contrabandista Portugués.¹² El orgullo y la vanidad de Vergara fueron profundamente heridos por el hecho de que fue tratado despreciativamente por residentes locales del viejo mundo encomendero, los que continuaban midiendo los valores humanos y el derecho a dirigir los negocios públicos por la cualidad de los ancestros. Para que Juan de Vergara, Sebastián de Orduña, Simón de Valdéz, y Tomás Ferrufino, los cabildantes Confederados, fueran capaces de ganar la mayoría del Cabildo, el Teniente Gobernador Mateo Leal de Ayala, una de las cabezas de la facción Confederada (que había reemplazado al Gobernador Marín Negrón, ausente en Santa Fé) tenía que

poner en prisión al cabildante Domingo Gribeo y al notario capitular Cristóbal Remón, y liberar de la cárcel a Juan Quintero, quien estaba en prisión por un crimen común. Valdéz y Ferrufino también ganaron para su facción al cabildante Francisco de Mansanares, un encomendero y terrateniente, y Felipe Navarro.¹³

En represalia por la manera que Gonzalo de Carvaxal actuó, contra la candidatura de Vergara, su voto fue declarado nulo, debido al hecho de que había votado por sí mismo, una actitud que estaba tradicionalmente prohibida.¹⁴ En retribución por la manera en que Francisco de Salas, el suegro del Cap. Gonzalo de Carvaxal, votó en el Cabildo, los líderes de la facción Confederada (Simón de Valdéz y Mateo Leal de Ayala) procesaron a Salas por su participación en una masacre indígena.¹⁵ Finalmente, veintiseis días después de las elecciones, el Gobernador Marín Negrón, quien aparentemente amenazaba el éxito de la conexión contrabandista, murió en Santa Fé como resultado de un sospechoso envenenamiento, y Domingo Guadarrama, un alguacil menor, quien también amenazaba la conexión contrabandista, fue asesinado en una emboscada.¹⁶

Grandes dificultades asoman con respecto a esta crisis, primero las volteretas de la crisis, donde por primera vez, debido al alto grado de penetración comercial, las fuerzas orientadas hacia el mercado externo removieron de la posición hegemónica el sector del mercado interno; segundo, el poder de una facción capitular para influir en la designación de un Teniente Gobernador, y su autoridad para despojar a alcaldes legalmente designados de sus derechos al voto; y tercero, la casi total omnipotencia de una facción capitular de activar la lucha intra-colonial dentro del Cabildo. Obviamente, esta situación crítica no podía continuar, y muy pronto la Real Audiencia de Charcas, conjuntamente con el Consejo de Indias, tuvieron que restaurar el poder de las fuerzas orientadas hacia el mercado interno, cuya lealtad a las autoridades reales era incuestionable, restaurando a Hernandarias como el nuevo Gobernador en 1616.

Desde que los juicios de residencia no controlaban más a las fuerzas corruptoras, y la Guerra de los Treinta Años (1618-48) ya se había desatado, la corona española decidió controlar sus colonias mediante Visitadores Reales. En 1620, un juez español, Matías Delgado Flores, fue despachado con poderes extraordinarios para investigar la conducta del Gobernador Góngora y para poner fin al contrabando holandés. El Gobernador Góngora encaraba un Cabildo pesadamente influido por la participación de los Oficiales Reales y por el desplazamiento de los cabildantes electos por cabildantes propietarios. De ahí que, Delgado Flores dejó de desafiar a la facción Confederada.¹⁷ Sin embargo, el Gobernador Góngora, a pesar de haber fomentado el contrabando, comenzó en 1621 por socavar la hegemonía Confederada aceptando la Real Cédula de Permiso (importaciones españolas directas) y acusando a Diego de Vega y a los Portugueses de introducir mercancías ilegalmente.¹⁸ Algunas consideraciones con respecto a esta crisis merecen mucha atención: primero, el Cabildo, el Gobernador, y los Oficiales Reales, se juntaron por primera vez para resistir exitosamente la intervención formal de un agente burocrático externo, enviado por el Consejo de Indias, quien respondió a las fuerzas orientadas al mercado interno; y segundo, la habilidad del Cabildo para tomar ventaja de una ambivalente elitización o circulación de la elite política (cabildantes electos versus propietarios). Finalmente, debido al fracaso de Delgado Flores para controlar la facción Confederada, la Audiencia de Charcas tuvo que enviar a un nuevo Visitador en la persona de Alonso Pérez de Salazar.¹⁹

Como resultado de renovados constreñimientos externos causados por las repercusiones periféricas de la Guerra de los Treinta Años (los Holandeses ocuparon Bahía y bloquearon El Callao en 1625), la penetración comercial y las luchas intra-coloniales decayeron. Con la ayuda del Gobernador Céspedes, los Beneméritos retornaron a su vieja posición de predominancia en los negocios públicos. El Capitán Pedro Gutiérrez, un viejo cabildante Benemérito, fue elegido por el Gobernador Céspedes en 1629 como Alcalde de Primer Voto, y el General Gonzalo de Carvaxal, también un ex cabildante que perteneció a la facción Benemérita, fue elegido por el Gobernador Céspedes en 1630 para

encabezar la expedición para recobrar Concepción del Bermejo.²⁰ Durante la sexta crisis política, en 1626-30, el Gobernador fue incapaz de activar la lucha intra-colonial para imponer sus intereses, especialmente dentro de la membrecía del Cabildo.²¹ Una alianza entre el Cabildo y el clero diocesano de Buenos Aires, en la persona de su primer Obispo, Fray Pedro de Carranza, un seguidor hacia treinta años del Obispo Victoria y del Obispo Trejo, desafió al Gobernador Céspedes, sobre la base de que este último, con sus propios hijos, estuvo embarcado en extensas actividades interlopes, en otras palabras, tratando de competir de una manera desleal con las tradicionales fuerzas orientadas hacia el mercado externo. Más aún, el Gobernador Francisco de Céspedes repitió lo que previamente hacia cuarenta años había intentado Vera y Aragón.²² Logró que sus hijos fueran indultados, en una suerte de acto nepótico. Sin embargo, cuando los hijos del Gobernador Céspedes fueron designados en puestos militares y Juan de Céspedes fue elegido como regidor, la comunidad entera protestó.²³ Como resultado directo de lo precedente, en septiembre de 1627, el Alguacil Mayor Francisco González Pacheco, anunció públicamente que los parientes de gobernadores y virreyes no podían participar en Cabildos ni ocupar puestos públicos.²⁴ Tan fuerte era la objeción oficial al nepotismo que incluso le era prohibido a un regidor dar su voto a un pariente en una elección.

Aparte de la cuestión del nepotismo, otras circunstancias contriibuyeron a una creciente animosidad contra los gobernadores. El trabajo del Notario del Santo Oficio de la Inquisición era el de hacer una copia fiel de las respuestas dadas a su Comisario por los pasajeros que arribaban a Buenos Aires así como la de declarar un manifiesto completo de los objetos secuestrados entre aquellos encontrados en situaciones ilegales. No es extraño entonces que el Gobernador Céspedes y el Notario Inquisitorial Juan de Vergara se enfrentaran entre sí.

Asimismo, así como el trabajo de Escribano de minas, registro y hacienda real fue responsable de chequear la trata de esclavos, investigando los navíos entrantes, conjuntamente con los gobernadores y Oficiales Reales, quienquiera que retuviera estos cargos estaba en una posición económica y política muy crucial. En aquel momento el Notario era Juan Antonio Calvo de Arroyo, un abierto defensor del Gobernador Céspedes. Consecuentemente, Vergara se encontró en la necesidad de ponerle fin a su carrera. La manera de hacer ello fue observando el no cumplimiento de las obligaciones financieras por parte de este Notario. Como Calvo continuaba debiendo parte del precio de su propio oficio a la corona y al vendedor, el Cabildo le impidió usar de su oficio. Socavando al notario de las Cajas Reales, Vergara encontró una forma indirecta de debilitar la posición del Gobernador.²⁵

Como resultado directo de esta particular lucha el Gobernador Céspedes puso a Vergara en prisión, y removió --de una forma que puede caracterizarse como el primer golpe de estado en la historia argentina-- a todos los miembros del Cabildo del poder. La alianza del Cabildo y el clero fue capaz de movilizar a la población Portuguesa contra el Gobernador Céspedes y a favor de la liberación de Vergara de su prisión. La movilización activa era el único instrumento político que los Portugueses tenían, dado que como no eran vecinos, estaban legalmente privados de los cargos capitulares. Más aún, el Obispo Carranza se atrevió a excomulgar al Gobernador Céspedes sobre la base de que no respetaba los fueros eclesiásticos.

No obstante, el Gobernador Céspedes logró perpetuarse en el cargo por unos años más obteniendo la absolución del Obispo y socavando con nuevos informes a la una vez poderosa facción Confederada. En efecto, el Gobernador Céspedes logró el apoyo de varios importantes vecinos tales como Juan de Tapia de Vargas, Diego Ruiz de Ocaña, Jerónimo de Medrano, Miguel de Rivadeneyra y Juan Montes de Oca (un primo de Fr. Juan de Vergara, el Provincial de la Orden Franciscana que apoyó al Gobernador Céspedes), al apoyar al Cabildo en su insistencia de abolir la Prohibición Real contra la introducción de plata y esclavos africanos.²⁶ Sin embargo, el inestable estado de los negocios no duró mucho, y el Gobernador Céspedes entró en problemas muy pronto con el nuevo Obispo Gabriel de Peralta. En 1630, un conflicto asomó sobre la naturaleza de quién debía "dar la paz". En

lugar de enviar un diácono o un presbítero para "dar la paz", el Obispo Peralta humilló al Gobernador Céspedes al designar a un muchacho de doce años vestido con sotana y sobrepelliz.²⁷

Para recuperar su imagen autoritaria, el Gobernador Céspedes designó a su hijo como regidor por una segunda vez en 1631. Como resultado de esta selección nepotica, la Real Audiencia de Charcas designo a Hernandarias como juez. Inmediatamente después, la corona española despidió al Gobernador Céspedes del cargo, reemplazandolo con el General Pedro Esteban Dávila.²⁸ Ahora, con la ayuda del Gobernador Dávila, los Confederados volvieron a sus posiciones políticas previas. Como resultado del caos político y el consecuente debilitamiento de la burocracia colonial, especialmente de su aparato represivo, una minoría se aprovechó de la crítica situación golpeando a la burocracia violentamente. En medio de esta crisis política, cuando el Gobernador Céspedes estaba en el proceso de su renuncia, durante el año 1631, el criollo Chileno Pedro Cajal, un hijo natural del Oidor de la Real Audiencia de Chile, y el Indio Altoperuano Juan Puma asaltaron la Tesorería Real de Buenos Aires robando casi diez mil pesos plata. Una vez que fueron apresados, ambos ladrones fueron públicamente ejecutados.²⁹ Este evento prueba que en períodos de crisis, cuando los crímenes arreciaban, los perpetradores eran sobrecastigados para enfatizar la superioridad intrínseca del poder Real.

Cuatro interesantes consideraciones asoman fuertemente en conexión con esta particular crisis: primero, el poder del Cabildo para quebrar el bloque burocrático **Benemérito** despojando al Gobernador del apoyo del Notario de las Cajas Reales; segundo, la preponderancia del gobernador sobre el Cabildo, y su autoridad para despojar de sus cargos a los regidores designados y de constituir un nuevo Cabildo; tercero, el completo control por parte de un Gobernador sobre un nuevo Cabildo que el hubiera ayudado a crear; y cuarto, la habilidad del Cabildo para sacar ventaja de la contradictoria relación entre la iglesia y el estado. Por cierto, estas condiciones políticas no podían continuar; la corona tenía que reestablecer la tradicional balanza del poder.

Durante la séptima crisis política, en 1637, la alianza del Cabildo y el Gobernador Dávila se opuso a que el nuevo Obispo Cristóbal de Aresti (del Paraguay) tratara de imponer un tributo eclesiástico denominado **Primicias** (primeros frutos), que gravaría vacas, yeguas, semillas, pollos y lechones.³⁰ El Cabildo logró rechazar las demandas del Obispo, pero el Gobernador sufrió a su vez el embate del contra-ataque obispal. Un tiempo después, el Obispo Aresti excomulgó al Gobernador Dávila fundado en razones morales que estaban basadas en su escandalosa vida privada (juego y mala vida).³¹ Esta vez el Cabildo no pudo apoyar al Gobernador Dávila. Como se probó que el Gobernador tomó prestado una considerable suma de dinero del Tesorero Real Juan de Vallejo, el Cabildo -- especialmente Juan de Vergara-- se rehusó a reinstalar a Vallejo en la Tesorería Real a menos que pudiera obtener nuevas fianzas --los fiadores previos habían fallecido-- que aseguraran la garantía de dos mil ducados.³² Socavando al Tesorero Real, un fuerte aliado del Gobernador Dávila, el Cabildo ayudó indirectamente a arruinar la posición del gobernador. Tres factores asoman en conexión con esta particular crisis: primero, el poder combinado del Cabildo y el Gobernador para predominar sobre la Iglesia; segundo, el poder del Cabildo para quebrar la posición del Gobernador despojándolo del apoyo del Tesorero Real; y tercero, la extremadamente débil posición del Gobernador para encarar la ofensiva combinada de la Iglesia y el Cabildo. Es interesante de notar que estos conflictos inter-corporativos entre el Gobernador y la Iglesia fueron responsables de establecer un conflictivo precedente en las relaciones iglesia-estado.

Finalmente, durante la octava crisis política, en 1640, la alianza del Cabildo y el Obispo Aresti, ahora tomándose revancha del anterior fracaso, desafió al Gobernador Mendo de la Cueva y Benavidez sobre la base de que estaba tratando de enlistar a los vecinos de Buenos Aires, contra su voluntad, en una expedición militar para cazar ganado salvaje en su propio provecho.³³ Algunos sobresalientes factores asoman sobre esta última crisis: primero, la cambiante naturaleza de la posición política del Obispo; segundo, el aparente poder del Obispo por sobre el Gobernador; y tercero, la capacidad del

Obispo de despojar al Gobernador de su poder político mediante exclusivos medios eclesiásticos. Cuando los prelados iban mas alla de su jurisdicción eclesiástica y usurpaban las prerrogativas reales, el excesivo uso de censuras eclesiásticas (excomuniones) era considerado materia judicial. De aquí que, el excesivo uso de la interdicción eclesiástica fue interpretada como constitutiva de **fuerza**. Casos de **fuerza** ocurrían cuando los prelados abusaban de sus poderes judiciales.³⁴ Sin embargo, considerando que el Gobernador Cueva y Benavídez fue reemplazado por otro Gobernador, pareciera ser que no tuvo la oportunidad de usar de sus derechos para protestar haber sufrido **fuerza**.

Este trabajo ha demostrado que los análisis vulgares de los conflictos políticos coloniales necesitan ser reemplazados con un explícito reconocimiento de que las crisis de hegemonía de diferentes niveles de complejidad, son susceptibles de evolucionar en forma diferente como respuesta al mismo estímulo, tal como la penetración del capital comercial. Considerando que Buenos Aires era solo un vínculo intermedio en el gran circuito mercantil que se extendía entre Angola y Potosí podemos concluir que la lucha colonial dominante (españoles contra indígenas) estuvo reducida en Buenos Aires a un conflicto subordinado entre comerciantes orientados al mercado externo (contrabandistas de esclavos) y productores orientados al mercado interno, muchos de los cuales eran de pionero linaje colonizador. Estas dos facciones opuestas compartían poder dentro del Cabildo, manipulando diversos cargos con el fin de cumplir objetivos diversos, y usando diferentes mecanismos para obtener su admisión en cargos públicos, cada facción tratando de consolidarse a sí misma dentro de una situación de conflicto crónico para obtener hegemonía. Durante los primeros tres conflictos, los intereses orientados hacia el mercado interno lograron preservar su hegemonía dentro del Cabildo. Durante los últimos cinco conflictos las fuerzas orientadas hacia el mercado externo fueron capaces de hegemonizar subordinando las fuerzas opuestas.

NOTAS

¹ ver Ingenieros, 1918, t.I.

² ver Levene, 1924; y 1946.

³ ver Garreton, 1933.

⁴ ver Molina, 1949.

⁵ ver Sierra, 1957, 391-395; Leiva, 1971; y Funes, 1974, 159-177.

⁶ ver Matienzo, p.204; Levene, 1911, 27-28; y Garreton, 1933, 345-350.

⁷ ver Matienzo, p.204; Garreton, 1933, 347; y Ramos Mexia, 1887..

⁸ ver Correspondencia de los Oficiales Reales de Hacienda del Rio de la Plata con los Reyes de España, t.I, 1540-1596, Madrid; Molina, 1964, 5-41; y Tiscornia, 1973, capitulo VII.

⁹ ver Molina, 1964, 3-27.

¹⁰ Correspondencia de la Ciudad de Buenos Aires con los Reyes de España (Madrid, 1918), t.II, pp27ss.

¹¹ ver Garreton, op.cit., 353.

¹² Acuerdos, II, 317.

¹³ ver Cordero, 273-274.

- ¹⁴ Acuerdos, Municip., II, 315.
- ¹⁵ Molina, Hernandarias, p.267.
- ¹⁶ Ibidem, 203-205; y Cordero, op. Cit., 210.
- ¹⁷ Acuerdos, Municip., IV, 42. Garreton, op. Cit., 376; y Carbia, 1914, 134.
- ¹⁸ Sierra, op. Cit., II, 141 y 144.
- ¹⁹ Sobre la Visita de Perez de Salazar, ver Canabrava, 1964, capitulo XII; y Mora Merida, 1973, 86.
- ²⁰ ver Cervera, 1907, I, 361.
- ²¹ ver Peña, 1916, V.
- ²² ver Crow, 1946, 358; y Registro Estadistico del Estado de Buenos Aires, 1859, I, 14.
- ²³ ver Matienzo, op. Cit., 204.
- ²⁴ ver Peña, op. Cit., 25-33.
- ²⁵ Acuerdos, Municip., V, 315-370.
- ²⁶ ver Sierra, op. Cit., 170; y Bruno, 1967, 157 y 161.
- ²⁷ ver Furlong, 1944, 87.
- ²⁸ ver Carbia, op. Cit., I, ch.IV; y Peña, op. cit., 49.
- ²⁹ ver Peña, op. cit., 53-60.
- ³⁰ ver Ugarteche, 1932, 130.
- ³¹ ver Palacio, 1954, I, 82.
- ³² Acuerdos, Municip., V, 291.
- ³³ ver Cervera, op. cit., 362-376.
- ³⁴ Cunningham, 1919, 420 y 423. Sobre esta particular institucion, ver Farriss, 1968, 70-83. Para propositos de comparacion, ver Logan, 1968.

TOMO II

CAPITULO 3

La Crisis Política. Las acciones colectivas y el discurso contra el colonialismo en las provincias del Río de la Plata (1764-1810).*

- Parte de este trabajo fue tomado de una ponencia que conjuntamente con Don José González Ledo presentamos en el Encuentro "Sociedad y Economía en el Mundo Colonial", organizado por el Centro de Estudios de Historia Americana Colonial (Universidad Nacional de La Plata) y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de Buenos Aires, celebrado el 27, 28 y 29 de junio de 1991 en el Museo Roca (Buenos Aires);

La naturaleza inconclusa de la revolución de independencia en el Río de la Plata, o en otras palabras, la no resolución de sus contradicciones políticas, económicas, sociales y culturales, estuvo íntimamente vinculada con las sucesivas crisis políticas, militares, sociales, eclesiásticas y económicas que la precedieron. Entre las crisis políticas, la que más habría incidido en la ruptura de los privilegios que otorgaban los fueros capitulares y de nobleza, la estamentalidad, el nepotismo y el etno-centrismo capitulares, y la heredabilidad de los oficios públicos, habría sido la crisis política propiamente dicha ocurrida en el seno de los Cabildos.

Lo que comenzó a fines del siglo XVIII como una aristocracia o como prácticas clánicas o localistas para defender intereses parroquiales o de familia, terminó --según los estudios de Blanco Fombona (1911), André (1922), Maeztu (1934, 1942), Felstiner (1976) y últimamente otro trabajo de este autor-- por envolver a los clanes patricios o criollos en serias disputas con la administración colonial española, surgida de las mismas Reformas Borbónicas.¹ El crecimiento del movimiento independentista y, con él, el de la crisis del Antiguo Régimen colonial,² fué atribuído ya en ese entónces a dichas alianzas clánicas.³ Para Wolf y Hansen (1967) y para Trindade (1986), la solidaridad política entre la docena de patriciados provinciales del interior Rioplatense, que llevó a la independencia del colonialismo español, "...fué fragmentada y regionalizada a causa de los conflictos políticos internos y los intereses económicos contradictorios".⁴ Taylor (1979,1987), fundado en Simmel (1964), sugirió que las rebeliones ocurrieron cuando las estructuras de acomodamiento entre los que gobernaban y sus súbditos perdían su viabilidad. La pérdida de la viabilidad ocurriría cuando: 1) declinaba la legitimidad y la vitalidad del grupo dominante; 2) los grupos subordinados recuperaban el poder; y 3) los grupos subordinados ponían en actividad un poder latente.⁵

Ultimamente, Ross (1985, 1995) ha sostenido que el grado de conflictividad de una sociedad es función inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función directa de la intensidad de su desarrollo económico, político y social (teoría de la complejidad política). Profundizando previas investigaciones de mi autoría, acerca del comportamiento del parlamentarismo pre-moderno --el de los Cabildos y las elites provinciales-- los vecinos del interior revelarían una intensa movilidad, una crónica inestabilidad política, y una profunda persistencia de sus pautas de conducta endogámicas y nepóticas que se prolongaron hasta fines del siglo XIX.⁶ Aplicando los puntos de vista de Aminzade, citados por Sewell (1990) y Tarrow (1993), en el repertorio de acciones colectivas propias del Antiguo Régimen colonial se contaban las peticiones, serenatas y cencerradas, preñadas de burla y escarnio hacia las autoridades acompañadas con música, canto y representaciones plásticas.⁷

En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse si las crisis política se hallaba o no relacionada con los procesos de crisis terminal de la sociedad colonial y de colapso de la dominación o colonización imperial española. Para analizar la intensidad de la crisis política indagamos el rol jugado por las interminables disputas simbólicas o rituales, electorales y anti-fiscales, manifestadas en acciones colectivas tales como peticiones, serenatas y cencerradas, donde abundaban la música, el canto, las representaciones plásticas y la burla de los adversarios. A los efectos de estudiar todos estos casos, hemos recogido docenas de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), el Archivo Histórico de Mendoza (AHM), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

Los casos del Alto Perú

En el caso de Cochabamba, en 1780, el Alcalde Ordinario Francisco Mendivil, descubrió que entre las seis y las siete de la mañana habían amanecido fijados en las paredes numerosos pasquines. Estos pasquines, tal como lo revela el apéndice A, denunciaban en versos octosilábicos el establecimiento de la Aduana, con el aumento del 2%. Es de destacar que esta grave presión fiscal perjudicó no sólo a los comerciantes criollos o españoles sino también a muchos indígenas.

En el caso de Oruro, Lewin (1957) nos cuenta que en 1782 los hermanos Jacinto Rodríguez de Herrera,⁸ y Juan de Dios Rodríguez de Herrera,⁹ personeros de los criollos, fueron excluidos del Cabildo por su odio a los peninsulares, desatándose con ello su activa participación en la famosa revuelta indígena.¹⁰ En el caso de Potosí, sus Regidores Joaquín de la Quintana,¹¹ Juan de Ybieta y Endeiza,¹² y Gregorio Barragán,¹³ enfrentados a la facción local liderada por el Coronel Indalecio González de Socasa,¹⁴ compuesta a su vez por los azogueros Luis de Orueta,¹⁵ Antonio Vargas y Flor,¹⁶ y Pedro Antonio Azcárate,¹⁷ y por los comerciantes Potosinos Manuel Bulúcu,¹⁸ Juan Bautista Elorreaga,¹⁹ Nicolás Ponte,²⁰ Nicolás de Oliden,²¹ Francisco Zenavilla,²² Joaquín Obregón Cevallos,²³ Martín de Gainza,²⁴ y el Diputado del Consulado en Potosí Domingo Achúcarro,²⁵ manifestaban en 1799

"...que al tiempo de su ingreso al uso de sus empleos...se hallaba el Régimen interior, político y público de aquel Cabildo reducido a un lamentable desorden, en todos los Ramos correspondientes a la inspección y Gobierno de sus Regidores".²⁶

A tal grado de desorden había sucumbido el Cabildo

"...que deprimidos y oprimidos sus fueros, privilegios y facultades con el gran peso de la autoridad y prepotencia de aquel gobierno, ya no eran Capitulares y Padres de la Patria sino en la apariencia o en el nombre; o sólo se reconocían tales para acompañar al Sr. Intendente en las asistencias y actos públicos".²⁷

En los Acuerdos ordinarios y extraordinarios

"...no dominaba otro espíritu que el del temor, o el de la condescendencia a las ideas del Jefe [Gobernador-Intendente], y su Asesor, viéndose los suplicantes en todo en la dura necesidad o de suscribirles, contra su propio dictámen, o de sufrir los fatales resentimientos a que hasen en el día una dolorosa experiencia".²⁸

Finalmente, también sufría este aplastamiento el Cabildo de Tarija, pues con motivo de las elecciones de 1803, los vecinos del lugar repudiaron la venta de los cargos concejiles operada en la Real Audiencia de Charcas, haciendo que los regidores perpetuos José María Dávalos,²⁹ Ignacio de Echazú,³⁰ y Juan de Dios Evia y Baca,³¹ se quejaron que habiendo comprado los oficios concejiles "...fueron injuriosamente despojados y privados de voz y voto en el escrutinio que precedió las elecciones de 1803".³² La causa que impulsó esta acción colectiva "...fueron las desavenencias y discordias de aquel Cabildo, originadas en parte de las facciones de familia".³³ A mas de este impedimento, los Regidores Benito López y José Básquez de Reyes, habían obtenido los oficios que compraron, "...con notorio vicio de ilegitimidad, y contra la forma prescripta por las leyes" al no haber justificado

"...si son naturales de estos Reynos cristianos, y de que raza o linaje, cuyos requisitos y calidades, que son de previa necesidad, y forma esencial, hallaron arbitrio para que se les dispensase, y supliesen con una fianza, al pretexto de la guerra".³⁴

Sin embargo, un lustro más tarde, en febrero de 1807, los cabildantes de Tarija obtuvieron por Real Cédula que su jurisdicción se desprendiera de la Gobernación-Intendencia de Potosí y del Arzobispado de Charcas, pasando a depender de la Gobernación-Intendencia y del Obispado de Salta.³⁵

El caso de Salta.

En la gestión de la administración capitular, Salta fué una de las provincias donde el nepotismo y el racismo, practicados en las elecciones concejiles, amenazaban desatar serios conflictos, alimentados por la intervención central. En las elecciones concejiles de 1795, cuando se lo eligió de Alcalde a Francisco Antonio Gonsález de San Millán,³⁶ el socio y amigo del Regidor Perpetuo y Fiel Ejecutor Mateo de Saravia y Jáuregui,³⁷ el Gobernador-Intendente Tadeo Fernández Dávila,³⁸ impugnó las elecciones, so pretexto de "...haber votado a su favor un cuñado [Figueroa y Toledo Pimentel] y un conculnado [Apolinario Xavier Usandivaras y Allende]".³⁹ Por otro lado, la mujer de San Millán, María Antonia de Figueroa y Toledo Pimentel,⁴⁰ era sobrina carnal de la mujer del Alcalde de segundo voto Roque de Avila;⁴¹ y el Regidor Don Apolinario Xavier Usandivaras era conculnado de San Millán y del comerciante Pedro José de Ibazeta,⁴² por ser sus respectivas mujeres hermanas de los Figueroa y Toledo Pimentel.⁴³ También viciaba la elección el hecho de haber votado a su favor Don Lino Rosales.⁴⁴ Este último, aunque no tenía un parentesco directo, tenía amistad y cierta relación de parentesco con todos ellos, por cuanto Don Bonifacio Toledo,⁴⁵ hermano de la mujer del Alcalde de segundo voto Roque de Avila, era su conculnado y tío de las mujeres de Francisco Antonio Gonsález y

de Apolinario Usandivaras.⁴⁶

En 1805, el bloque patricio liderado por el Regidor Perpetuo y Fiel Ejecutor Lic. Mateo de Saravia y Jáuregui,⁴⁷ y su aliado el ex-Regidor Francisco Antonio González y San Millán, insuflados de teorías aparentemente más conservadoras, era desplazado del poder capitular por un bloque liderado por el Gobernador-Intendente Rafael de la Luz,⁴⁸ y su Teniente Asesor Tadeo Fernández Dávila,⁴⁹ los cuales se habían negado a confirmar la fórmula electa por la mayoría del cabildo, sustituyéndola por la que resultó minoría en la persona de José Uriburu,⁵⁰ e integrada por españoles europeos, de teorías aparentemente más liberales.⁵¹ Los documentos que relatan las vicisitudes ocasionadas por la difusión de una serie de pasquines originados en la burla del resultado de dichas elecciones por parte del Gobernador-Intendente son parcialmente conocidos.⁵² No bien el Gobernador-Intendente confirmó a quienes no habían sacado la mayoría de votos en la elección de oficios concejiles de 1805, se empezaron a difundir en Salta diversos pasquines alusivos a los hechos y a producirse acciones colectivas inéditas. El primer pasquín de que se tuvo noticia, según el testigo José Eugenio Tirado, "...empezaba con el título 'Aviso al Público', tratando de Robespierre al Sr. Asesor Juez [José de Medeyros] de esta Información",⁵³ y el que le siguió en seguida, compuesto de algunas décimas y una quintilla, empezaba sin ambages con una acusación lapidaria: "De hombres sin religión, como es el Gobernador [Rafael de la Luz] y su Teniente Asesor [José de Medeyros]".⁵⁴ En este segundo pasquín, Tirado nos revela que a más de los dos referidos funcionarios, se nombraba con sorna al R.P. Felipe Antonio de Iriarte,⁵⁵ a Don José Tomás Sánchez, a José Gabino Blanco, a Don Antonio Aguela,⁵⁶ y a Matías Gómez Linares,⁵⁷ todos ellos vinculados con las autoridades del Cabildo (encabezadas por José Uriburu) electas por el menor número de votos y confirmadas por el Gobernador-Intendente. Al menos uno de ellos, Sánchez, había sido previamente partidario de Don Mateo de Saravia y Jáuregui. Asimismo, Tirado declaraba que quien le leyó el pasquín, probablemente su propio autor, fue el Clérigo Pbro. Don Santiago Arias Velásquez, o Arias y Saravia,⁵⁸ quien le preguntó al declarante

"...si había llegado a su noticia el dicho pasquín en verso, y como le dijese que lo tenía, pero que no lo había oído leer, prontamente sacó del bolsillo el dicho Don Santiago el papel indicado, se lo leyó caminando siempre a paso largo, conociéndose que lo había leído muchas veces, o lo sabía de memoria, y se lo volvió a guardar".⁵⁹

Por todas las circunstancias de lo que llevaba declarado, Tirado infería que los autores de tan insolentes papeles "...no pueden menos que ser alguno de los Saravia, o de su pandilla, como que son los resentidos de la confirmación hecha por el Sr. Gobernador".⁶⁰ Finalmente, el tercer pasquín de que se tuvo noticia, compuesto de cuatro décimas y cuatro quintillas, y que es el único que según tengo entendido ha llegado a nuestros días, publicado por Acevedo (1965), fue escrito en mofa de la minoría del Cabildo, con motivo del fallo de la Real Audiencia de Buenos Aires que derogaba la decisión del Gobernador-Intendente, y ha sido comentado por este autor con anterioridad.

El fallo de la Real Audiencia fue públicamente celebrado entre otros muchos electores y electos por un grupo de fuertes mercaderes compuesto por Manuel Antonio Texada, Juan Nadal y Guarda,⁶¹ Domingo Cardo (factor de Manuel Antonio Boedo), Julián Gregorio de Espinosa, Pedro Martínez de Vinuesa, Pedro José de Ibaseta, Lino de Rosales, Marcos Castellanos y Saravia,⁶² y Pedro Arias Castellanos, y su música y canto financiada por Isidro Matorras.⁶³ Es indudable, decía Tirado, con respecto a los integrantes de esta última acción colectiva, que los actuales capitulares, no sólo "...han demostrado vanidad y alegría por el vencimiento, sino que también han hecho farsa y pifia de los antecesores", habiéndole también asegurado Pedro Pablo Saravia (hermano de Mateo, Mariano, y Santiago de Saravia y Jáuregui) al declarante "...que al día siguiente de la reposición habían amanecido

colgados en la puerta del que fue alcalde de Primer Voto Don José de Uriburu unos testículos de carnero, u otro cuadrúpedo, lo cual sabía muy bien el Don Pedro Pablo por ser de la familia".⁶⁴ Concluía su declaración Tirado, manifestando que lo que él había dicho acerca de los Saravia, autores de los pasquines, "...no se entiendan ni incluyen el Coronel Pedro J. Saravia,⁶⁵ ni sus sobrinos Don Martín, ni Don Santiago Saravia, cuja imparcialidad y honroso modo de pensar es bien notorio".⁶⁶

Asimismo, en otro caso suscitado en Salta, en 1805, por el Regidor Antonino Cornejo y de la Corte,⁶⁷ acerca de una información sumaria y secreta,⁶⁸ sobre el linaje de Pedro Antonio Ramírez de Obejero,⁶⁹ el Síndico Procurador General Pedro Antonio Arias Velásquez,⁷⁰ miembro de un antiguo e influyente clan familiar, desplazado por el clan de los Fernández Cornejo, cuestionó al Teniente Asesor José de Medeyros,⁷¹ precisamente suegro de un hermano del Regidor Cornejo. El cuestionamiento de Arias Velásquez obedecía al intento de Medeyros de tomar él mismo dicha Información, cuando el Regidor Antonino Cornejo era "... cuñado de su hija y come con el mismo Asesor".⁷² Si para obviar estos inconvenientes la Ley de Indias establecía que nadie fuere abogado, donde su padre o suegro fuese Oidor, cuanto más perjudicial sería entónces, se preguntaba Arias Velásquez "...que el Dr. Medeyros sea único Asesor y Auditor de Guerra, donde tiene tantas conexiones, y su yerno Don Juan José Cornejo es Comandante y ejerce jurisdicción?".⁷³

El caso de Santiago del Estero

Al compás de los cambios generados en la submetrópoli porteña, como consecuencia de la invasión napoleónica, la ruptura del equilibrio del poder Europeo y la reconquista de Buenos Aires, pareciera ser que en Santiago del Estero algunos vecinos, especialmente los miembros de la Casa de los Palacio, liderada por el ex-Alcalde Manuel de Palacio y Amavíscar,⁷⁴ tomaron nuevos bríos. Tan violento fué este contraste, que el Comandante de Armas y Sub-delegado de Real Hacienda Juan José Iramain,⁷⁵ le manifestaba al nuevo Virrey Santiago de Liniers que el poderío de Palacio "...llega más allá de la esfera de Alcalde ordinario", pues mediante bandos se introducía en la esfera de lo militar. Lo mismo ocurría con Don Joseph Frías,⁷⁶ quien le manifestaba al Gobernador-Intendente de Salta que los Palacio "...con una notoria injusticia al mérito de otros vecinos, no an echo más que acomodar en los empleos públicos, a todos aquellos sus parciales, y que son [sus] deudores, o dependientes...".⁷⁷ Así lo eran el Alcalde electo de primer voto Don Pedro Ignacio de Urrejola,⁷⁸ el de segundo voto Don Lorenzo Unzaga,⁷⁹ y el Procurador electo Don Félix Sánchez

"...sin que para más demostrar su coligada subordinación, haigan trepidado en elegir para Alférez Real a un hijo de la misma Casa Don Santiaguito Palacio, jóven y aún bajo la patria potestad, que apenas podrá contar cosa de 21 años, postergando a este otro su hermano de mayor edad y vecino".⁸⁰

Desconfiando de su gestión con el Gobernador-Intendente, Frías eleva una semana más tarde al Virrey Liniers un oficio donde le revela que

"...hace tiempo que este Pueblo se halla vajo la opresión de un partido dominante, que apoderado sucesivamente de todo el gobierno de la República, distribuye los empleos a su antojo, resistánlo o no, las leyes, sean dignos o indignos los sujetos".⁸¹

El responsable de esta opresión era para Frías, Don Manuel de Palacio que "...aunque ya es fallido, dejó vinculada en la posteridad de sus dependientes y deudores a su Casa, por perpetua memoria, la infalible observancia de tan perjudicial sistema".⁸²

El caso de Catamarca.

En Catamarca, que dependía de la Gobernación-Intendencia de Salta, Francisco Montilla y Cano escribía en diciembre de 1809 al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros que desde hacía muchos años "...se gobierna este pueblo por un bando compuesto de unas mismas familias, el más pernicioso y perjudicial que se puede comprender".⁸³ En efecto, dicha familia no era otra, según podrá observarse en el Cuadro CAT-I, que la de Francisco Acuña,⁸⁴ el Comandante de Armas y Ministro Tesorero de la Real Hacienda. Acuña había elegido en 1798 como Procurador General a su consuegro Fernando Soria y Olmos,⁸⁵ y este había dispuesto a su vez que su primo, José Antonio Olmos de Aguilera,⁸⁶ dirigiera y mandara a Alcaldes y Regidores como si fueran de su facción. Soria cuidaba que ningún pariente quedara sin cargo concejil, al menos sin el de Síndico Procurador General, "...con el cual destruye y devora a todo este Pueblo,...complaciendo a los abarros a quienes se alla subyugado por crecidas acreencias, nacidas de sus libertinos, escandalosos, e incorregibles vicios".⁸⁷ Esta parcialidad, a juicio de Montilla y Cano

"...no distingue calidades, ni escojen conductas, ni reparan en costumbres con tal que firmen y consientan en sus torpezas, lleven el régimen de que todo el Cabildo y demás individuos sean de sus Casas, aunque no sepan hablar, y [sean] criollos, sin admitir Europeo, a quienes abominan".⁸⁸

El elemento central a tener en cuenta por quien quiera fuese el responsable del poder, era la distribución del agua de riego. Este régimen o sistema lo practicaban el Comandante de Armas Acuña y sus aliados para poder "...robar a los demas vecinos interesados el Agua de sus pertenencias, con satisfacción, y que no se oygan sus clamores, con la que laborean crecidas haciendas".⁸⁹ Don Francisco de Acuña, había procurado "...en todos tiempos dominar aquel vecindario y hacer árbitro de todas las disposiciones del Cabildo, constituyendo Alcaldes y Regidores de su Casa y devoción".⁹⁰ Con relación a las elecciones de 1802 se objetaban las tachas legales que tenía el Regidor electivo Félix Plá para poder votar por su cohermano o cuñado el electo Alcalde de primer voto Don Feliciano de la Mota Botello.⁹¹ También se objetaba la elección recaída en Don Nicolás de Sosa y Soria, como Defensor de Pobres, por hallarse emparentado con el Alcalde ordinario de segundo voto Don Juan Manuel Correa,⁹² así como la recaída en Don Nicolás Rivera, como Mayordomo del Hospital, por estar emparentado a través de los Segura con el electo Alcalde ordinario de primer voto Manuel de Salado.⁹³ Y con respecto a las elecciones de 1809 y 1810, los Regidores Ramón Rivera,⁹⁴ y su sobrino Juan Ignacio Soria y Medrano,⁹⁵ yerno de Francisco Acuña, eligieron a su hermano Manuel Soria y Medrano.⁹⁶ El Regidor Juan de Bustamante, con su primo Feliciano de la Mota Botello, eligieron como Defensor General de Pobres a su pariente Joaquín de Bustamante.⁹⁷ El Alcalde de Aguas sacó de Regidor en 1809 a su hijo, "...jóven insolvente y sin más versación que su pública constitución de apacentar ganado en la Serranía".⁹⁸ Y el Alcalde de segundo voto Capitán de Milicias Sebastián Barros y Espeche eligió en 1810 de Regidor Mayordomo del Hospital a su yerno José Ambrosio Cansinos, de Alcalde de primer voto a su cuñado Gregorio Segura, y de Alcalde de Aguas a su sobrino segundo carnal Félix Castro.⁹⁹ En una palabra, para el Dr. Antonio Domingo de Ezquerrenea,¹⁰⁰ abogado en el recurso contra dichas elecciones capitulares, "...no hay individuo alguno de cuantos se eligieron por capitulares para 1810, que no lo haya sido al menos por dos votos de individuos enlazados con el mismo y recíprocamente por parentescos de consanguinidad dentro de grados prohibidos".¹⁰¹

El caso de Tucumán.

La burla y el escarnio de las autoridades fueron un lugar común en las protestas acontecidas durante el Antiguo Régimen. En el Tucumán, la resistencia de los patriciados urbanos se manifestó primero en 1752, en la oposición elevada al Marqués de Valdelirios contra el Tratado de Permuta (1750), por la cual se entregaba a la corona de Portugal los territorios pertenecientes a los Siete Pueblos de las Misiones Orientales,¹⁰² y más luego, en 1772, en una rebelión anti-fiscal, con motivo de la implantación de la Real Renta de Tabaco y Naipes.¹⁰³ En oportunidad de la implantación de dicha Real Renta, gran parte del patriciado Tucumano, bajo la dirección del poeta Francisco Camboño,¹⁰⁴ orquestó una protesta pública o acción colectiva contra el nuevo Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes.¹⁰⁵ Camboño era yerno del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda,¹⁰⁶ estrechamente vinculado a la élite Tucumana. También era concuñado del Capitán José Pascual Alurralde, y asociado a la flor y nata del Tucumán colonial en la orquestación de dicha protesta. En efecto, en ocasión de arribar a Tucumán, procedente de Córdoba, en junio de 1772, el Coronel de Milicias Gaspar de Salcedo,¹⁰⁷ un hombre de quijotesca figura, acompañado por su ayudante Don Dionisio Romero y Pontero, hombre bajo y rollizo, se desató una manifestación popular que bien podría ser considerada como el primer "tucumanazo" de su historia. En unas coplas formadas por ocho octavillas, cuyo aparente autor fué Francisco Camboño, publicadas en forma de bando, que se fijaron repetidas veces en las puertas de la casa del ex-Administrador de la Renta de Tabaco Coronel Manuel Estéban de Castro,¹⁰⁸ donde transitoriamente moraban Salcedo y Romero, se recibieron burlescamente, por primera vez en nuestro país, las menciones del Quijote y de Sancho Panza. Según Saldías (1893), citado por Apraiz (1905) y Montero Reguera (1992), al Quijote lo habían hecho suyo las Repúblicas de habla castellana porque encarnaba las nociones de democracia y libertad, "...asegurando que hacia 1810 era el más popular de todos, el que mas leían y releían los hombres de la revolución".¹⁰⁹

La difusión de coplas y versificaciones con discursos políticos de protesta, se remontaba a la oportunidad en que se expulsó a los Jesuitas.¹¹⁰ A la par de insultarlos "...hasta cargar las puertas de gruesos maderos y cabezas de ganado vacuno con aspas, executándolo a todas horas de la noche", Salcedo y Romero fueron amenazados con que "...si no salía de la Ciudad en aquella noche, a la siguiente le sacarían en una carreta, y atarían en el rollo".¹¹¹ El rollo era la columna de piedra que en cada ciudad oficiaba de insignia de jurisdicción, y que en muchos casos servía también de picota.¹¹² El pasquín que se arrancó del rollo --cuyo autor a juzgar por las denuncias del abogado Juan José Mariano Barón del Pozo,¹¹³ agente del Gobernador de Salta, fué Francisco Camboño, de quien se carece de noticias acerca de su actuación posterior--¹¹⁴ consistía de ocho octavillas, que amanecieron fijadas en las puertas de la morada del Administrador Coronel Castro.

En la primer redondilla de la quinta octavilla Camboño se refiere a la algarada ocurrida en Tucumán con motivo de la llegada de Salcedo. En efecto, al anochecer del 20 de junio de 1772 salió por la plaza y calles públicas una multitud encabezada por Diego Sabando,¹¹⁵ Juan Silbestre Deheza y Helgueros,¹¹⁶ Martín León García,¹¹⁷ Juan José de las Muñecas,¹¹⁸ el Teniente Coronel de Milicias de Santiago del Estero Martín Angel Barón,¹¹⁹ Pedro Antonio Aráoz,¹²⁰ "...un Platero llamado Casiano, un Don Manuel que ignora el testigo su apellido [pero que más que seguro se trataba de Manuel Padilla],¹²¹ Capitan de forasteros, y uno de los músicos llamado Juan Félix el Violinista,...con Bulla, Algazara, y Gritería", repudiando al Estanco de Tabaco, y acompañando al volver de San Francisco "...una carreta destoldada, iluminada, tirada de bueyes, y en ella un coro de música compuesto de varios instrumentos".¹²²

Mas la protesta no quedó en poesías, pues en la mañana del 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, aparecieron en la Plaza pública dos voluminosas y grotescas efigies o estatuas, que permanecieron colgadas hasta después de la Misa Mayor, a la que había concurrido el Alcalde de Primer Voto. Al estilo de las imágenes procesionales profanas --que en España eran paseadas en carromatos en los días de carnaval, y también en las colonias inglesas de Nueva Inglaterra--¹²³ esas dos estatuas o figuras estaban "...colgadas de las argollas o cadenas, que están pendientes del elevado y vistoso Rollo, que está colocado en medio de la referida Plaza".¹²⁴ A juzgar por el testimonio que el propio Salcedo produjo las estatuas o imágenes de bulto "...se asimilaban la mayor a mi Persona, y la otra menor, a Don Dionisio Romero y Pontero, que venía en mi compañía, las que estaban adornadas a lo militar, con peluca, remedando el vestuario, que regularmente traíamos,...el de uniforme de Coronel de Milicias desta".¹²⁵ Para más satirizar al Administrador y su acompañante las dos grotescas estatuas "...tenían en las manos, la una un Frasco, o Bote de guardar Tabaco en Polvo, y la otra un mazo o manojo del de Rama remedado y ambas figuras con varios rótulos y letreros".¹²⁶ Escandalizado y horrorizado porque permaneciese abierto al público un espectáculo tan "irregular y extraño", donde

"...todas clases, estados, y sexos, vieron, reconocieron y se acercaron a dichas estatuas, sin que hubiese, quien las quitase, o se atreviese a ello, con concurrencia de muchachos y gente plebe continúa, jugando y gritando, con las propias estatuas".¹²⁷

Salcedo tuvo que hablar con Pedro Antonio Aráoz, que se hallaba con la vara en depósito de Alcalde de segundo voto, para que descolgara las insultantes estatuas.¹²⁸ Como vemos, en este singular caso la poesía de protesta estuvo acompañada por una representación plástica, sin precedentes en la historia colonial.

Aparentemente, en el caso específico ocurrido en Tucumán la protesta tuvo sus frutos, por cuanto Salcedo debió marcharse sin cumplir su misión.¹²⁹ A la luz de lo afirmado por Gruzinski (1991), esta acción colectiva se emparentaría con las fiestas campesinas típicas del Antiguo Régimen, en las cuales la música, el ruido y la intoxicación alcohólica "...eran ocasión para la reafirmación de una identidad colectiva a escala de pueblo".¹³⁰

El caso de Cuyo.

En la composición de los Cabildos, jugaba un rol determinante el origen geográfico de los candidatos así como la cantidad de plazas vendidas al mejor postor. En Mendoza, en las elecciones de su Cabildo, ocurridas en 1762, habiendo empatado Diego Videla,¹³¹ y Juan Martínez de Soto y Rozas,¹³² el Corregidor Félix José de Villalobos dijo para desempatar en favor de Videla que tenía "...entendido que por ley se debe preferir al natural o criollo primero que al forastero".¹³³ En 1771, el Gobernador Vértiz designó en la Presidencia de la Junta Municipal de Temporalidades al Corregidor Juan Manuel Ruiz.¹³⁴ Este a su vez propuso al Cabildo integrar dicha Junta con el Alcalde de primer voto Pedro Nolasco Correas,¹³⁵ el Regidor Decano y Fiel Ejecutor Pedro Ortiz, el Tesorero Teniente de Oficiales Reales Juan de Gamboa,¹³⁶ y el Procurador General Francisco Javier Santander.¹³⁷ Quince años después, en 1786, el sistema político se limitó aún mas. En efecto, se decidió reducir las elecciones anuales de capitulares a sólo las de los Alcaldes de segundo voto y los Alcaldes de la Santa Hermandad, promoviendo automáticamente como alcalde de primer voto a quien hubiere sido elegido alcalde de segundo voto en la elección del año anterior. Otros diez años más tarde, en 1796 el Alcalde de primer voto Lic. Manuel Ignacio de Molina dijo que la elección de José Agustín Sotomayor,¹³⁸ como Alcalde de segundo voto era viciosa

"...porque contra este sujeto hay Decreto librado por el Gobernador Intendente para que se le haga el pago de cinco mil y más pesos, pertenecientes a Temporalidades, cuyo Ramo por cédula se estima oy como Hacienda Real por privilegio".¹³⁹

Sin embargo, para el Regidor Nicolás Corvalán,¹⁴⁰ la elección debía ser válida

"...porqué lo que se ha expuesto por el Señor Alcalde de primer voto no lo perjudica a obtener el oficio de Alcalde Ordinario por ser la dependencia no causada por él sino por la testamentaria del finado su padre, y no ser de Real Hacienda".¹⁴¹

Y en agosto de 1803, habiendo quedado vacantes en el Cabildo tres plazas de Regimiento (regidurías), el Gobernador-Intendente de Córdoba Coronel José González,¹⁴² bajo cuya jurisdicción se hallaban las ciudades Cuyanas, mandó convocar la elección "...para nombrar tres vecinos de honor, sin perjuicio de sacarlas a público remate por si hubiese quien las compre".¹⁴³ Pero el Regidor Propietario Juan de la Cruz Vargas,¹⁴⁴ temeroso de perder electoralmente su hegemonía en dicho Cabildo, interpuso por ante el Gobernador-Intendente un recurso contrario a la convocatoria electoral. Por el contrario, el Teniente Coronel y Comandante de las Milicias Urbanas de Mendoza Don Miguel Telles Meneses,¹⁴⁵ "...teniendo acción qualesquiera del Pueblo para representar por su particular interés",¹⁴⁶ reclamó a fines del siglo XVIII del Gobernador-Intendente la convocatoria electoral, sirviéndose "...mandar llevar a debido efecto su Superior providencia".¹⁴⁷ Fundaba Telles su pedido de convocatoria electoral en que "...Nada es más práctico en todo el reyno, que esta costumbre".¹⁴⁸ En lo que hacía al Virreinato del Río de la Plata, Telles manifestaba que a excepción de las ciudades correspondientes a la provincia de Cuyo,

"...no hay otro Cabildo donde no se elixan anualmente los regidores que son de dotación, porque en ninguna hay arriba de dos o tres propietarios, y porque en todas combiene, que supla la elección anual, completándose por ella el número de regidores y vocales de un cuerpo, que debe siempre ser íntegro, para que por su defecto, no peligre el servicio y público bien de las ciudades".¹⁴⁹

Pero si bien los patriciados de Tucumán, Cuyo y las demás provincias, con excepción de las del Alto Perú, pudo durante la colonización hacerse "fronda", por falta de asedio desde la base social, la amenaza de la hegemonía porteña puso un triste fin a lo que Real de Azúa (1961) irónicamente denominara "actividad lúdica".¹⁵⁰ Luego del ajusticiamiento ocurrido en Agosto de 1810 en el Monte de los Papagayos, localidad de Cabeza de Tigre (donde el ex-Virrey Liniers, Juan Gutiérrez de la Concha, Santiago Alexo de Allende,¹⁵¹ y Victorino Rodríguez,¹⁵² perdieron la vida a manos de un pelotón de fusilamiento dirigido por el Teniente Coronel Juan Ramón Balcarce), a la facción de los Funes se incorporan los integrantes del linaje de los Allende que estaban desde fines de siglo distanciados del Coronel Santiago Allende, no sólo por razones políticas sino también por intereses particulares.¹⁵³ Estos eran su primo hermano José Norberto de Allende Ascasubi,¹⁵⁴ veinte años menor que el Coronel, y los tres sobrinos segundos del mencionado Coronel, llamados Tomás Bailón y Faustino de Allende y Torres,¹⁵⁵ y José Antonio Cabrera y Allende.¹⁵⁶ La incorporación de Tomás Bailón viene acompañada con una suerte de indemnización simbólica por la triste suerte corrida por su tío segundo el Coronel Santiago Allende. Como premio a su actuación a favor del bando patriota, la Primera Junta le remitió los despachos del grado de Coronel de Ejército con un introito que por si sólo es una muestra del nuevo discurso político que se inaugura con la Revolución, que sanciona sólo la responsabilidad individual y elimina la aplicación de la arcaica responsabilidad colectiva. Comienzan los considerandos del despacho advirtiéndole que "...los suplicios no manchan el honor de las familias,

sino los crímenes que los han producido", para más luego acreditar al mundo entero el revolucionario dogma de que "...el crimen de un individuo no trasciende a sus parientes".¹⁵⁷ Finalmente, el despacho justifica el proceder de la Junta refiriéndose a la personalidad del Coronel ajusticiado en los siguientes términos:

"...La Ilustre Casa de los Allendes no recordará con horror la muerte del Coronel tío de V.S., sino el intolerable desvío con que haciendo traición a su sangre y a su patria, empeñó todos sus esfuerzos en favor de los conspiradores que trabajaron la división de los pueblos, su anarquía y su ruina".¹⁵⁸

La integración de los Allende de filiación patriota es lograda, sin embargo, no sin fuertes resistencias, pues en Julio de 1811 el Dr. Manuel Félix de Tejada y Fernández de Loria,¹⁵⁹ Antonio Arredondo, Dalmacio Allende Moyano,¹⁶⁰ y Silvestre Martínez cuestionaron que se hubiera propuesto a hombres asociados a la Casa de los Allendes, "...como sino hubiesen más vecinos que los de este apellido". José Norberto de Allende Ascasubi era primo hermano de la mujer de Ambrosio Funes y tío segundo carnal tanto de Tomás y Faustino Allende como de José Antonio Cabrera (es decir en el quinto grado de parentesco), y estos últimos eran entre sí primos hermanos.¹⁶¹ También se sumaron al nuevo bloque de poder José Manuel de Isasa,¹⁶² Eduardo Pérez Bulnes,¹⁶³ Juan Pablo Pérez Bulnes,¹⁶⁴ Gaspar del Corro,¹⁶⁵ el Presbítero Miguel Calixto del Corro,¹⁶⁶ Lorenzo y Narciso Moyano Peralta,¹⁶⁷ y José y Benito Lascano.¹⁶⁸ Del grupo mencionado sólo dos de ellos alcanzaron en el pasado cierta notoriedad como comerciantes: Lorenzo Recalde y Cano,¹⁶⁹ y Miguel del Corro.¹⁷⁰

El caso de Córdoba.

Del creciente proceso de descomposición de los linajes encomendiles y de las casas patricias del interior del espacio colonial era factible que sus descendientes varones, aquellos que carecían de la posibilidad de concertar un matrimonio conveniente o de acceder al Cabildo, recayeran en lo que Halperín (1979) denunciaba como una ruralización o barbarización de la élite.¹⁷¹ En el caso preciso de Córdoba, la erosión de la encomienda había traído por consecuencia una crisis muy profunda en la composición de su élite. La élite nativa cordobesa --que había logrado fusionar sus intereses mediante el matrimonio concertado entre Francisco de Armesto y Allende con la hermana del Alcalde Provincial Domingo Garay y Molina Navarrete-- sufrió en 1782 una tremenda convulsión. En efecto, el Alcalde Provincial Don Domingo Garay, fué hallado culpable por el Juez Ambrosio Funes y Bustos, de haber degollado en el Corral de Barrancos, Puesto de Don Luis de Aguirre, en sus propias camas, al matrimonio constituido por Pascual Cortés y su mujer Isidora Orco, y a la jóven de 12 años, Candelaria Cortés, hermana de Pascual.¹⁷² Las circunstancias que rodeaban la personalidad de Garay, los respetos debidos a su empleo, las conexiones de su casa, que incluían al linaje de los Allende, formaban, al decir del Canónigo Gregorio Funes en carta al Virrey, "...un conjunto de cosas temibles a mi hermano, si su Dios y su Rey no fuese la única cosa que él teme".¹⁷³ No eran infundados sus temores, pues apenas se verificó la prisión de Garay

"...empezó en esta Ciudad un murmullo de toda su parentela, que nos llenó de confusión. Ellos nos han difamado públicamente con la nota de mulatos, y con cuantas calumnias puede inspirar una torpe venganza".¹⁷⁴

Si bien dicha prisión no duró demasiado la inconducta reincidente de Garay confirmó al vecindario de la justa actitud del Juez Ambrosio Funes. En 1790 Garay fué nuevamente procesado por inferir lesiones a Carlos Andino, marido de María Teresa Lorca, y privar indebidamente de su libertad a la parda liberta

María de los Santos Morales, y maltratar a su esposo Valentín Cáceres.¹⁷⁵ Con motivo de este proceso se le embargan los bienes.¹⁷⁶ Un año después vuelve a reincidir intentando asesinar a Florentino Rojas.¹⁷⁷ En una época en que los crímenes de los individuos "trascendían a los parientes", los mismos significaron la defenestración política y social de su hijos varones José Justo Garay y Justo Pastor Garay,¹⁷⁸ y de su yerno el ex-Alcalde José del Portillo. Finalmente, su nieto José Lorenzo Garay y Peralta, hijo de Justo Pastor, perseguido por la justicia cordobesa se radicó en Buenos Aires.¹⁷⁹ La destacada actuación de Funes en dicho juicio, donde demostró poseer una inusual independencia de carácter, le sirvió para diferenciarse del bloque de los Allende, de cuyas filas había partido su designación como Alcalde de Segundo Voto, e inaugurar una nueva facción que con el correr de los años se convirtió en un bloque de poder de neto corte anti-allendista.

En el incumplimiento de las promesas de esponsales es donde más se vé la impotencia de las élites rurales bastardeadas para acceder a la élite urbana central. En una carta que el Rector de la Universidad de Córdoba Fr. Pedro José de Súlivan,¹⁸⁰ dirigiera el 16 de noviembre de 1800 a su amigo y ex-discípulo el Dr. Juan José Castelli,¹⁸¹ lo provee de información genealógica acerca del mestizaje sufrido por la familia de los Tejeda. Esta información la necesitaba Castelli para que, fundado en la falta de consentimiento familiar,¹⁸² refutara la demanda que por incumplimiento de promesas de esponsales iniciara en 1798 María Victoria Pereyra y Mariño, hija del Administrador Principal de la Villa de Luján Antonio Pereyra y Mariño, y de la cordobesa Teresa Bruno y Tejeda, contra el Teniente Juan Ramón Balcarce.¹⁸³

La implantación de la Real Ordenanza de Intendentes, que erigió a la ciudad de Córdoba en cabecera de la Gobernación-Intendencia de Córdoba, si bien amplió su espacio jurisdiccional, disminuyó la soberanía relativa de su propio Cabildo.¹⁸⁴ Asimismo, la erección del Real Consulado de Buenos Aires, con sus Diputados en cada ciudad cabecera del interior del espacio colonial, también había disminuído la soberanía relativa del Cabildo cordobés.

El caso del Litoral.

Por último, en las provincias litorales, la fronda patricia tampoco cesaba, y se encarnizaba por la participación matriarcal. En Corrientes, la rebeldía local contra el poder real se manifestó en 1764, en las acciones colectivas más crudas de que se tuviere memoria, por incluir participación femenina, oportunidad de la denominada Rebelión Comuna.¹⁸⁵ Según el testimonio de José Borjes, corría la versión en la ciudad de Corrientes,

"...que unos bersos que cantaban los comuneros, haciendo relación de su istoria, aplaudiendo su Gobierno y motejando el del Tte. [Manuel] Rivera, a quien en la puerta del cuarto donde estaba Preso se los cantaban los soldados que estaban de Guardia les había compuesto Fr. Roque Delgado religioso de San Francisco quien compuso sobre el particular poesías de distintos modos, victoreando a los que en la noche de la prisión del Tte. Rivera se havían señalado, y en expecial a Paredes que havía entrado por delante, en los que tocaban por escarnio y burla, a los que no habían tenido por parte en el común [apelados agarrotados], y al crédito de algunas familias y mugeres que volvían por el Tte., y que dho religioso hera mucho de la parte de los Comuneros y del cura [Antonio] Martínez y lo más del día asistía con estos, y que estos también frecuentaban mucho al Convento de San Francisco y a la selda del Pe. Lector Agüero íntimo amigo de dho Cura Martínez".¹⁸⁶

De todas maneras, las prácticas centralizadoras Borbónicas desplegadas en Corrientes no lograron

desplazar del poder comunal a la antigua oligarquía pro-jesuitica. Después de dicha Rebelión, no obstante los esfuerzos de los anti-jesuitas, el Cabildo fué copado por los ajesuitados encabezados por Nicolás Patrón y Centellas, y su concuñado el más luego Familiar del Santo Oficio de la Inquisición Ziprián de Lagraña.¹⁸⁷ Veinte años después, en 1795, Antonio Hidalgo,¹⁸⁸ fué separado de la Alcaldía de primer voto, presumiblemente "...por el veneno que lo llenaba contra los vecinos Europeos de la jurisdicción de Corrientes, calidad que hace más detestable sus excesos".¹⁸⁹ Esta separación benefició a su sobrino político Phelipe Díaz Colodrero, un yerno de Juan Estéban Martínez.¹⁹⁰ Otros diez años después, no obstante el incremento demográfico provocado por la inmigración de peninsulares, la proporción de la población española (blanca) sobre el total no había variado substancialmente, aumentando sí la de los mestizos y mulatos. Por ello es que en su Cabildo, a pesar de su dilatado vecindario --su composición demográfica alcanzaba a más de 2.000 padres de familia-- sólo se atendía "...al pribado interés de aliados y parientes, ...sucediéndose unos a otros".¹⁹¹ Por ejemplo, en las elecciones capitulares de 1805, éstas habían recaído en Don León Saucedo y Pedro José Cabral Báez, quienes, según el Informe del Comisionado General al Virrey Sobremonte, fueron reprobadas por la Gobernación-Intendencia debido a los vicios mencionados.

Un año después, en 1806, se produjeron incidentes y el Alcalde Juan Estéban Martínez,¹⁹² se vió precisado a elevar al Virrey Sobremonte una representación o petición colectiva donde denunciaba los vicios padecidos por las elecciones celebradas en ese año. Según Martínez los dos juzgados ordinarios estaban gobernados por la asociación de Manuel de Bedoya y Cossio,¹⁹³ y el Alférez Real Serapio Benítez de Arriola,¹⁹⁴ "...quienes precisamente eligen para los empleos concejiles a sujetos que los ha de gobernar".¹⁹⁵ Los parciales de Bedoya eligieron para Alcalde de primer voto a Don Manuel Gómez Cossio, "pariente inmediato del citado Vedoya", y para alcalde de segundo voto a Eugenio Tomás Cabral.¹⁹⁶ Al parecer el Alférez Real Benítez de Arriola contaba con influyentes sobrinos carnales, entre los cuales se destacaron José Ignacio Benítez, Juan González (por hallarse casado con una hija de Josefa Benítez, hermana de Don Serapio), y Juan Estéban Benítez, quien se hallaba casado con una hija de Eugenio Cabral.¹⁹⁷ Martínez en cambio había elegido infructuosamente para Alcalde de Primer voto al Comandante de Armas Pedro Fondevila,¹⁹⁸ para Alcalde de Segundo Voto a Bartolomé Varela y Montoto, "criollo del Reyno de Galicia", y para regidores a José Ramírez y José Antonio Peñalver, ambos españoles y "sujetos de lustre y conveniencia", entendiéndose por conveniencia, status económico.¹⁹⁹ Sin embargo, dos años después, en 1808, Martínez logra su propósito, y Fondevila es confirmado Alcalde de Corrientes "...con el sólo voto del Alguacil Mayor y contra los de todos los demás capitulares".²⁰⁰ Esto origina una protesta de los Alcaldes y Regidores del Cabildo de Corrientes, representados en 1809 por Mariano Moreno.²⁰¹ Amén de las Alcaldías, la Administración de Correos también estaba expuesta a serios conflictos provocados por las diferencias existentes entre linajes locales. Cuando fué designado Virrey Santiago de Liniers recayó el nombramiento de Administrador de Correos en Estéban María de Perichon, yerno del Alguacil Mayor Martínez; y apenas fué designado Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, recayó la designación de Administrador en Vicente de Goytía. Producida esta última, se desató en Corrientes una acción colectiva, similar a la registrada en Tucumán con motivo de la erección del Estanco de Tabaco, "...y entre los de música y vítores se comprendieron el comerciante Don Fermín Félix Pampín, yerno de Goytía y un hijo de este llamado Don José Joaquín, oficial del Correo".²⁰² La expresada música fué considerada "...en clase de pifia de la casa y familia de dicho Alguacil Mayor [Martínez], y [del Teniente Gobernador] Don Pedro Fondevila, notorio parcial de dicho Alguacil".²⁰³

En el Paraguay, entre los gobernadores designados para imponer el Ramo de las Temporalidades (Bienes de los Expulsos) se destacó el Sargento Mayor de la Plaza de Buenos Aires

Agustín Fernando de Pinedo,²⁰⁴ manifiestamente impopular ante la población paraguaya, en especial entre los vecinos miembros de su Cabildo, la mayoría encomenderos,²⁰⁵ por sus reiterados abusos que comprendían opresión, nepotismo, malversación de los recursos fiscales, y actividades comerciales privadas, pero en realidad por su interés en abolir las encomiendas.²⁰⁶ Fue el Alcalde José Marcos Vallejos, quien denunciara en mayo de 1776 su manejo de las reducciones de Indios.²⁰⁷ A tal extremo se acentuó en el vecindario de Asunción la impopularidad de Pinedo que a fines de la década del 70 menudearon los pasquines, con "décimas" que denunciaban la crueldad del Gobernador. Hemos logrado rescatar del olvido --gracias a una querella iniciada por el Comandante de la Villa Real de Concepción Ayudante de Milicias Manuel García Barrazábal-- siete de esas "décimas" y algunos estribillos, las que no guardan las leyes métricas de la espinela. Si bien dichas "décimas" fueron leídas en los parajes públicos de Asunción por un mulato menor de edad llamado Manuel Tello, hijo de un tal José María Tello, debemos descartar que algunos de estos sea su autor, pues nos inclinamos por Vallejos, como posible creador de las mismas. Según Manuel García de Barazábal, el método de interrogar al reo consistía en leerle cada décima y estribillo y preguntarle por su inteligencia y por la de cada término en determinada forma significativa.²⁰⁸ Para ello no "...asido dable separar muchos ternos de las décimas y estribillos porque entonces no significan mal y solo tienen perversa inteligencia rexidos del verbo que los determina".²⁰⁹

Asimismo, en Buenos Aires, corría la intriga y la cizaña. En casa de Francisco Antonio de Escalada, le fue hechado un pasquín anónimo en dos oportunidades en que celebraban su acostumbrada tertulia, por la ventana que de la sala "...cae a la calle".²¹⁰

También, en la campaña de Buenos Aires, más precisamente en Luján, al encontrar los hacendados en su Cabildo un seguro refugio, se reproducen situaciones conflictivas provocadas por el nepotismo.²¹¹ Confirmando esta situación, Nicoletti (1987) descubrió que en el Cabildo de Buenos Aires Manuel Antonio Warnes,²¹² había cuestionado el voto del Regidor Gregorio Ramos Mexía,²¹³ en favor de Miguel de Azcuénaga,²¹⁴ por el parentesco en cuarto grado, así como observado con acierto que en el Cabildo de Buenos Aires se habían nombrado en diferentes años al padre, abuelo, y tíos de Azcuénaga, sin que nadie hubiere puesto obstáculo alguno a dichos nombramientos.²¹⁵ Finalmente, en vísperas de la Revolución de Independencia, Felipe Contucci, el vocero de la Princesa Carlota, nos revela en los destinatarios de la propaganda Carlotista el rol que tuvieron en la élite criolla las solidaridades familiares.²¹⁶

Pero la crisis provocada a comienzos del siglo XIX en el comercio exterior, y en la producción minera, y por consiguiente en el mercado interno colonial, y en la cadena del crédito comercial, y la consabida crisis fiscal que se desató en todas las provincias correspondientes al Virreinato del Río de la Plata, necesariamente provocó fisuras y rivalidades entre las solidaridades familiares, como las que en este trabajo hemos comprobado, que con posterioridad la revolución y la guerra civil se encargaron de acentuar a niveles hasta entonces desconocidos. Pese a la llamada Organización Nacional, durante la segunda mitad del siglo XIX, y a la expansión económica de la década del 80, las elites regionales no se nacionalizaron. Los casos de alianzas matrimoniales de corte interprovincial, constituyen la excepción que no confirma la existencia de una mal llamada oligarquía argentina.²¹⁷

Como consideración final, podemos afirmar, en base a los innumerables acciones colectivas suscitadas a fines del siglo XVIII aquí relatadas, que la causa eficiente de las mismas fue por lo general el cerrado comunismo provocado por las prolongadas estructuras de parentesco, más fuertes que cambio político alguno, incluídas las Reformas Borbónicas y la Revolución de Independencia, pues lograron perpetuarse en el tiempo, hasta que la inmigración, la alfabetización y el sufragio universal

lograron acelerar la movilidad social, y con ella la circulación de las elites políticas, transformando a la llamada oligarquía argentina en una burguesía dependiente.

NOTAS

¹ Alvarez, 1966; y Saguier, 1991-92, y 1992.

² Por crisis de estado se entendería, a criterio de Goldstone (1986), una situación en la cual una administración central que alega soberanía sobre un territorio y una población dados es incapaz de imponer su autoridad y sus leyes o recaudar sus impuestos a una porción significativa de su territorio y población.

³ Blanco Fombona, 1911, 29 y 45; André, 1922, 78; Maeztu, 1942, 42; Felstiner, 1976, 67 y 74; y Mires, 1988, 70-78.

⁴ Trindade, 1986, 144.

⁵ Taylor, 1987, 199.

⁶ ver Cotta, 1988; y Saguier, 1991 y 1993.

⁷ Sewell, 1990, 527-52; y Tarrow, 1993, 87 y 88.

⁸ Alcalde Ordinario de primer voto en 1767, 1770, 1777 y 1778 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

⁹ Alcalde Ordinario de segundo voto en 1766, y Alcalde Ordinario de primer voto en 1769, 1772 y 1779 (Cajías de la Vega, 1987, Cuadro 2). Dueño de los Minerales de Poopó, Antequera y Abicaya, y de los Ingenios Alantaña y Guariguari, en las riberas de Sora Sora y Sepolturas.

¹⁰ Lewin, 1957, 564-565.

¹¹ Dueño del Ingenio Canteros, marido de María Lizarazu, hija del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III y Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120).

¹² Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ejecutado por los indígenas durante la rebelión de Tupac Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (FB, 1986-90, IV, 144).

¹³ En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18).

¹⁴ Síndico Procurador General de la Villa de Potosí (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.150, Exp. 5). Era criollo, hijo de Juan Angel González de Socasa y González de Velazco, y de Lorenza Zorrilla del Barrio; y probablemente hermano del comerciante Pedro González de Socasa, quien contrajo en 1797 un par de operaciones de fiado con comerciantes porteños por valor de \$12.399.

El apellido Socasa es originario del lugar de Villaverde, Valle de Soba, Santander (García Carraffa, XXXVIII, 214). En 1793 y 1795 le fué negado el grado de Teniente Coronel, que recién le es concedido en 1797 (AGN, Reales Ordenes, Libro 23, f.177; Libro 25, f.328; y Libro 27, f.177). Su conducta fué puesta en tela de juicio en numerosas Informaciones, que terminan recomendando su persona (AGN, División Colonia, Guerra y Marina, Leg.28, Exp. 9 y 11; Criminales, Leg.43, Exp.1; Hacienda, Leg.88, Exp.2289; y Tribunales, Leg.86, Exp.2; Leg.97, Exp.11; Leg.128, Exp. 22; y Leg.129, Exp.7). Es designado Coronel de Milicias de Puno en 1798 (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio, Libro 9, f.186). Estallada la revolución de independencia se volcó al bando realista. A las órdenes del General Vicente Nieto perdió Potosí a manos del General porteño Antonio González Balcarce. Participó en las batallas de Cotagaita, Huaqui y Sipe-Sipe. Fué Gobernador de Salta entre agosto de 1812 y marzo de 1813. Vencedor en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma (Cutolo, III).

¹⁵ Natural de Oñate, hijo de Domingo de Orueta Balansátegui y de Ana María de Eguinoa, natural de Elgueta (García Carraffa, LXIII, 271). Desconozco su parentesco con Miguel de Orueta, chileno, desposado en 1703 con Josefa Díez de Medina, padres de María de Orueta, mujer de Juan de Rojas, quien a su vez era padre de Don Ramón de Rojas y Orueta, el suegro del Brigadier General Don Sebastián de Segurola (Aránzaes, 1915). Orueta era el azoguero más bien parado, y de más grueso giro, por trabajar en diez cabezas de ingenio, y por ser también el que con más exactitud, escrupulosidad, y distinción llevaba las cuentas de sus beneficios y explotación.

¹⁶ Dueño en 1786 de las labores San Agustín y San José (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.37, Exp.965).

¹⁷ Arrendatario del ingenio Ichuni en 1788, del ingenio Chaca en 1797, y del ingenio San Miguel en 1800 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.71, Exp.19; Justicia, Leg.36, Exp.1055; y Hacienda, Leg.95, Exp.2461). Contrajo matrimonio primero con Carmen Petrona Scholl y Quintanilla, hija del azoguero Miguel Scholl y Quintanilla; luego con Rosa Segovia; y finalmente con Clara Zamudio, hija adoptiva del azoguero Pedro Zamudio. En 1809, Indalecio González de Socasa, en oficio reservado dirigido al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, advierte que "...Don Pedro, es hombre de bien, y fué uno de los más pudientes, con los auxilios que se repartieron de la azoguería, ha caído con el tiempo en la mayor inopia, hasta no poseer bienes algunos libres de hipoteca, por tenerlos todos gravados con la responsabilidad, a los gruesos suplementos que ha ido negociando para el tráfico de la minería= Desconfiando el público de su solvencia, celebró acta este illustre Cabildo en 7. de marzo de este año, para que rindiese las cuentas de su administración, sin duda por el recelo de que pudiese haber imbertido en beneficio de su trabajo, los fondos que hubiese ido recaudando. En el siguiente Cabildo, inculcaron la misma resolución; pero todo quedó eludido con haber expresado el escribano de cabildo, que no había tenido lugar para hacerle saber la providencia, sin que se hayan rendido las cuentas, ni oblado los productos hasta la fecha, sin embargo de que se hizo uso de ellos, para remitir 12 mil pesos al Excelentísimo señor Liniers, en pago de otros tantos que por donativo gracioso para él y sus hijos, prometió contribuir este Cabildo por años del ramo de propios" (Mayo Documental, X, 106).

¹⁸ Capitán de la Sala de Armas de la Villa de Potosí. Participa en la elección de los Situadistas (AGN, Comerciales, Leg.18, Exp.5). Fiador del Administrador de Tabaco de Potosí Ignacio Crespillo (AGN, Hacienda, leg.86, Exp.2250). En 1789 y 1792 contrajo con comerciantes porteños un par de operaciones de fiado por valor de \$124.284 (AGN, Protocolos, Registro 1, año 1789, fs.164; y Registro

1, año 1792, fs.48). Probablemente sobrino de María Nicolasa Bulúcu, mujer del Contador de las Cajas Reales y Tesorero de la Santa Cruzada Juan Antonio Foronda, suegros de Feliciano de Alquiza y de Ramón de Roxas y Orueta (Aránzaes, 1915, 303).

¹⁹ Nacido en Abadiano, Durango, Vizcaya, hijo de Juan Bautista de Elorriaga y de Josefa de Urizar, casado con María Leocadia de Seguro, hija de Francisco de Seguro y de María Bernarda de Lezica (FB, 1987, II, 278). Entre 1796 y 1804 contrajo media docena de operaciones de fiado por valor de \$55.639 (AGN, Protocolos, Registro 1, año, 1796, fs.70v.; Registro 6, año 1796, fs.36v. y 43v.; Reg.1, año 1800, fs.66; Reg.5, año 1803, fs.64; y Reg.6, año 1804, fs.664).

²⁰ En 1795 se dictó una Real Provisión para que Ponte satisfaga la cantidad demandada por el Marqués de Rocafuerte y costas a que a sido condenado por la Real Audiencia de Charcas por la retención que tenía en calidad de depósito (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.3, fs.3v.).

²¹ Hijo de Francisco Ignacio de Oliden y de Francisca Antonia de Erazo, y casado con Prudencia Molina, hija de Francisco Molina (FB, 1990, V, 59).

²² Alcalde de Segundo Voto de Jujuy, marido de María del Carmen Martínez de Iriarte, hija de Domingo Martínez de Iriarte y su segunda esposa Florencia de la Cámara y Díaz de Elizondo, y conuñado de Ventura de Marquiegui y Gostoa, natural de la Villa de Elgueta, y de Juan de Simón y Olasso, natural de Burgos (Zenarruza, 1991, 399), y de Juan Manuel de Pucheta; y probablemente hermano de Pedro Zenavilla, marido de María Justa Allende y Funes, hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de María Mercedes Funes (LC, I, 28).

²³ socio de Juan Estéban de Anchorena y Domingo de Ezcurra. Entre 1768 y 1785 contrajo con mercaderes porteños cuatro operaciones de fiado por valor de \$8544.

²⁴ Subdelegado del Partido de Atacama. Hijo de Juan Antonio Gainza y Sopeña y de la sanjuanina María Rosa Sánchez de Loria, casado con María de los Dolores de Ascó, hija del Capitán de Dragones Juan de Ascó y de María Luisa de Merlos, suegro de Ramón Aquino, y conuñado de Juan Bautista de Aguiar (FB, 1986-1988, I, 177; y III, 103-104).

²⁵ Arrendatario del Ingenio de la Purísima Concepción de Turú.

²⁶ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.

²⁷ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.40, Exp.1197.

²⁸ Idem.

²⁹ Alcalde Provincial de la Villa de Tarija (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.124, Exp.1, Fs.7v.).

³⁰ Receptor de Penas de Cámara (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.124, Exp.1, Fs.7v.).

³¹ Depositario General (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.127, Exp.14).

³² AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.14.

³³ Oficio elevado al Virrey el 29-XI-1804 (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.14).

³⁴ Oficio elevado al Virrey el 29-XI-1804 (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.14).

³⁵ Cornejo, 1977, 68, 81 y 82; y Echazú Lezica, 1987, 351.

³⁶ El apellido San Millán es originario de la Villa de Azcoitia, partido judicial de Azpeitia, Guipúzcoa (García Carraffa, LXXX, 167). Casó con María Antonia de Figueroa y Toledo Pimentel, hija del Coronel Antonio de Figueroa y Suárez de Cabrera, nieta paterna del Cap. Antonio de Figueroa Suárez de Cabrera, santiagueño, y de María de Suasnábar (Libro II de Matrimonios de Salta, folio 40; dato proporcionado por Carlos Jáuregui; ver también Cornejo, 1937, 167). Era probablemente hermano o primo del comerciante avecindado en Potosí Don Dionisio Gonsález de San Millán. En 1795 es impugnado por el Cabildo de Salta para el cargo de Alcalde, del cual en 1805 es despojado (AGN, Interior, Leg.36, Exp.4; Tribunales, Leg.199, Exp.12). En 1795 pide ser Proveedor de los Fortines San Fernando y San Luis (AGN, Interior, Leg.43, Exp.6).

³⁷ Español americano, descendiente del fundador de Salta, y cuya Casa paterna se originaba en portugueses ingresados en el siglo XVII por Buenos Aires. Graduado como abogado de la Universidad de Charcas, acaudilló al bloque americano en el Cabildo de Salta, donde tenía en vilo a las nuevas autoridades borbónicas con sus escritos y sus pleitos. Don Mateo era hijo de José Domingo Saravia y Aguirre y de Martina Jáuregui, y hermano de Mariano Ramón (casado con Teresa Maurín), de José María (casado con Bernarda Díaz de Zambrano), de Santiago (casado con Josefa de Tejada y Blanco), y de Saturnino, (casado con Luisa Saravia). En el expediente que se iniciara acerca de la merced de los terrenos de Miraflores y Ortega, Don Mateo alegaba en su favor los servicios que hicieron sus mayores "...como el que fueron trascendentales hasta la misma frontera y reducciones, cuos establecimientos, la conversión de Indios, y sus gloriosas paces se devieron a los empeños de mi abuelo Don Martín de Jáuregui" (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.11, fs.9). Se había casado con la potosina Mercedes Paradis, con quien no tuvo descendencia alguna y de la cual se separó casi inmediatamente de desposarse. Sin embargo, Don Mateo crió siete hijos, de los cuales cinco de ellos fueron adoptados - entre los cuales dos, José María y Manuel Antonio, fueron Gobernadores de Salta- y dos mujeres, las únicas que reconoció, una de ellas casada con un vasco llamado Juan Mendilaharsu, y otra separada del caudillo santiagueño Juan Felipe Ibarra. En 1789 se abre una causa por habersele encerrado y privado de la Asesoría del Cabildo de Salta (AGN, Tribunales, Leg.212, Exp.5 y 6). En 1795 inicia una demanda contra el Gobernador-Intendente de Salta y el Alcalde de Segundo Voto (AGN, Tribunales, Leg.196, Exp.5 y 6; y Leg.219, Exp.3). En 1806 promovió sendos expedientes para obtener en propiedad las haciendas de dos reducciones, la de Miraflores y la de Ortega (Levaggi, 1981, 440-445; y AGN, Solicitudes Civiles, S-Z, f.7). En 1806 obtiene del Marqués de Sobremonte la merced del Carmen, que consistió en 120 leguas cuadradas de campo en la frontera de Santiago del Estero y Córdoba. Falleció en 1836, dejando dos testamentos públicos, por el último de los cuales, otorgado en Chulumani, Bolivia, el 28-XII-1834, legó a sus cinco hijos varones, Manuel Antonio, Mariano, Juan Manuel, Nicolás, y Javier, su estancia El Carmen (Fallos de la Corte Suprema de Justicia, Serie 4a., t. 56, fs.237).

³⁸ Doctorado en la Universidad de Charcas en 1770, Teniente Gobernador y Justicia Mayor de

Jujuy entre 1778 y 1780, en la misma época en que sus compatriotas los hermanos Fernández Cornejo controlaban el Cabildo de Salta (Cutolo, II, 484; y Cornejo, 1947, 151-158). Era tío carnal de Juan Estéban Tamayo, Teniente Asesor en 1796 del Gobernador Intendente Ramón García Pizarro (Cutolo, VII, 270). Según Acevedo (1965) cuando esta designación fué sospechada de nepótica por las autoridades centrales Fernández Dávila fué permutado por Medeyros, que era Asesor en La Paz (Acevedo, 1965, 144).

³⁹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.38.

⁴⁰ Hija del Comandante de Armas y Encomendero de Salta Coronel Antonio de Figueroa, y de María de Toledo Pimentel e Hidalgo Montemayor, nieta paterna del Cap. Antonio de Figueroa Suárez de Cabrera, santiagueño, y de María de Suasnábar (Libro II de Matrimonios de Salta, folio 40; dato proporcionado por Carlos Jáuregui Rueda; ver también Cornejo, 1937, 167).

⁴¹ según declaró en 1795 el Gobernador-Intendente de Salta "...Don Roque Avila no es natural de esta Provincia, si no de la de Córdoba, y aunque no tengo noticia de su familia, le supongo de noble estirpe, pero su porte es tan obscuro, que hace cerca de veinte años reside insociable en una estancia, sirviéndole de albergue un rancho" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.51v.). En su defensa, el Dr. José Miguel Carvallo arguyó que "...ya ha sucedido haberse quitado a un Hombre el Arado de las manos, para hacerlo empuñar el cetro y sentarlo en el Trono de una Nación culta y opulenta como sucedió con Wamba Rey Godo de las Españas [elegido Rey a la muerte de Recesvinto en 672, se destacó por haber sometido a los Vascos], según refieren algunos de nuestros Historiadores por que solo se atendió a su capacidad y valor para Gobernar ¿que desproporción puede haber para que Don Roque Avila se le haga dejar los instrumentos de la agricultura, y tome la vara de Alcalde para despachar quatro negocios de poca entidad en un Pueblo corto, maiormente con el auxilio de Letrado de quien debe valerse aun la persona mas entendida y adornada de capacidad como no sea jurisperito" Iidem, fs.68v.).

⁴² Apellido originario del partido judicial de Guernica, Vizcaya (García Carraffa, XLII, 164). Citado por Frías, 1924, II-III, 142 y 196.

⁴³ Eran hermanas de: Fructuoso Figueroa (casado con Francisca Güemes y Goyechea); Francisco Xavier de Figueroa (casado con Magdalena Fernández Cornejo, hija del Coronel Antonio Fernández Cornejo y Rendón y de María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, padres ambos de 13 hijos); Santiago Figueroa (casado con Isabel Aráoz y Figueroa, hija de José Manuel de Aráoz y de Nicolasa Figueroa, padres del Coronel Mariano José Figueroa; Apolinario Figueroa (casado con María Mercedes Fernández Cornejo y de la Corte); Trinidad Figueroa (casada con Francisco Xavier Aráoz); y Narciso Figueroa (casado con Gabriela de Goyechea y Cornejo).(AC, 1972, 107; y 1983, 42-45).

⁴⁴ Casó con Juana Burela y Aguirre, hija de José Burela y de Juana de Aguirre, hermana de Inés de Burela y Aguirre, mujer de Bonifacio Toledo Pimentel (Cornejo, 1982, 44; y notas facilitadas generosamente por Carlos Jáuregui Rueda).

⁴⁵ Hijo del Maestre de Campo Francisco de Toledo Pimentel y Burgos de Célis y de Doña Juana Crisóstoma Hidalgo de Montemayor y Arias Velásquez; marido de Inés de Burela y Aguirre; hermano de María de Toledo Pimentel, mujer de Antonio de Figueroa y Suárez de Cabrera; de Luisa Pastora de Toledo Pimentel, mujer de Juan Francisco de Alvarado; de Vicente de Toledo Pimentel, marido de

Feliciano Castellanos, la cual era viuda de Agustín de Zuviría; de Feliciano de Toledo, mujer del Coronel Lorenzo Martínez de Mollinedo; y de Antonio de Toledo Pimentel, marido de María Josefa Porcel de Peralta y Aguirre; y padre de Tomasa de Toledo Pimentel, mujer de José María Todd, y de Gregoria de Toledo Pimentel, mujer de Matías Gómez Linares (Cornejo, 1982, 44-45).

⁴⁶ AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.4, fs.37v.

⁴⁷ Al pasar por Tucumán, Mateo de Saravia y Jáuregui, Juan Silvestre Deheza y Helgueros oyó públicamente decir: "...que el objeto principal por que ocurrir a la Capital de Buenos Aires, no era solo el asunto de elecciones, sino el defender el Ramo de Sisa por haber una Real Cédula por la que multaban a los Cabildos en \$4.000, sino lo hacían; a cuyo fin llevaba poder de todos los vocales, que el día antes de la Elección se le confirieron porque el Sr. Gobernador pretendía se custodiasen las Fronteras por Milicianos, y que oponiéndose el Cabildo se suspendió, que la mira del Sr. Gobernador era, que custodiándose por las Milicias, se ahorrara los gastos a la Sisa para que desempeñase el alcance supuesto, en que decían se hallaba debiendo haber dinero sobrante después de pagadas todas las plazas y pensiones" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.33, Exp.2, fs.52).

⁴⁸ Coronel, nacido en España, designado Gobernador-Intendente de Salta en 1796, cargo que asumió en 1798 (Cutolo, 1967, IV, 307).

⁴⁹ Nacido en Moquegua, al igual que los tres hermanos Fernández Cornejo, doctorado en la Universidad de Charcas en 1770, Teniente Gobernador y Justicia Mayor de Jujuy entre 1778 y 1780 (Cutolo, 1967, II, 484; y Cornejo, 1947, 151-158).

⁵⁰ Nacido en Mendieta en setiembre de 1766, hijo de Francisco de Uriburu y Ajuria y de María Cruz de Basterrechea (García Carraffa, LXXXVI, 151). Contador de las Cajas de Oro, casó con Manuela de Hoyos y Aguirre, hija del Alcalde Domingo Gonsález de Hoyos y de Francisca de Aguirre y Aguirre (Calvo, 1936, II, 348; Cornejo, 1937, 579).

⁵¹ El R.P. Felipe Antonio de Iriarte, Don José Tomás Sánchez, José Gabino Blanco, Don Antonio Aguela y Matías Gómez Linares (Arenas Luque, 1943).

⁵² Mariluz Urquijo, 1955, 95; y Acevedo, 1965, 425.

⁵³ José de Medeyros era nacido en la Colonia del Sacramento, hijo de un Portugués. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de Guanta, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aránzaes, 1915, 480). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte, cuyo padre era natural de Moquegua, al igual que Tadeo Fernández Dávila (AC, 1972, 65).

⁵⁴ AGN, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg. 13, Exp. 382, fs. 3v.

⁵⁵ Nacido en Jujuy en 1759, protector de Mariano Moreno.

⁵⁶ Comerciante en efectos de Castilla matriculado en la Diputación Salteña del Consulado de Buenos Aires en 1804.

⁵⁷ nacido en Fuenterrubia, Galicia; hijo de Matías Gómez de Fonceca y de Beatris Moroña; marido de Juana Gregoria Toledo Pimentel, hija de Bonifacio Toledo Pimentel y de Inés de Burela y Aguirre; y hermano de José María, Fr. Juan, Miguel y Mariano Gómez de Linares.

⁵⁸ Hijo de Pedro Pablo Arias Velásquez y de Josefa Antonia de Saravia y Aguirre.

⁵⁹ AGN, Sala IX, Tribunales Administrativos, Leg. 13, Exp. 382, fs. 3v.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ Alcalde de Segundo Voto de Salta en 1796. Nacido en la Villa de Calaf, Barcelona. En 1796 solicita se lo exima de servir de Alcalde (AGN, Solicitudes Civiles, Libro 5, M-O).

⁶² hijo del Lic. Juan Bautista Castellanos y de su tercera esposa Juana Francisca de Saravia y Aguirre; marido de Magdalena Velasco; y padre de Aaron Castellanos (Cutolo, II, 196).

⁶³ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21. De este listado surge a las claras la fuerte composición mercantil de este militante grupo político. Texada, el más fuerte de todos, llevaba practicadas con Buenos Aires 26 operaciones de fiado entre 1771 y 1791 por valor de \$220.234. Rosales concertó con Buenos Aires entre 1784 y 1808 media docena de operaciones con los acreedores Juan Martín de Pueyrredón, Francisco Ignacio de Uriarte, Manuel de Arana y Torrezuri, Tomás de Valansátegui, Domingo Belgrano Pérez, y Diego Agüero, por valor de \$42.818. Nadal y Guarda celebró entre 1786 y 1805 una docena de transacciones, acreditadas por Juan Antonio de Lezica, Tomás de Valansátegui y Juan José de Lezica, por la suma de \$33.568. E Ibaceta alcanzó a concertar entre 1798 y 1804 cuatro operaciones, adelantadas por Juan Antonio de Lezica y Anselmo Sáenz Valiente, por valor de \$19.825.

⁶⁴ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21.

⁶⁵ Caballero de la Orden de Carlos III, dueño de las estancias Castañares y Buena Vista, casado con Bárbara Martínez de Tineo (AC, 1973, 40).

⁶⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 8; y Leg.138, Exp.21.

⁶⁷ Hijo Juan Adrián Fernández Cornejo, dueño de Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, y de Clara de la Corte, y hermano de Juan José Fernández Cornejo, casado este último con la única hija del Teniente Asesor José de Medeyros.

⁶⁸ solicitada por el R.P. Fr. Ilario Torres O.M.

⁶⁹ Nacido en Salta, propietario de la Hacienda de Ledesma, hijo de Pedro Antonio Ramírez de Ovejero y de Rosa González y Soza, casado con María Antonia de la Zerda y Urristi, hija de Luis de la Zerda y de María Trinidad Urristi, padres del que fuera Gobernador de Salta en 1867 Sixto Ovejero Zerda (Cutolo, VI, 164; Cornejo, 1937, 164; Jáuregui, 1976, 132).

⁷⁰ Hijo de Pedro Pablo Arias Velásquez y de Josefa Antonia de Saravia y Aguirre, nacido en 1772 y casado con María Josefa de la Corte, hija de Anselmo de la Corte y de María de los Santos de León y Aguirre (Cornejo, 1937, 479-492). Era hermano del Clérigo Pbro. Don Santiago Arias y

Saravia, y primo hermano de Mateo de Saravia y Jáuregui. Su mujer era prima hermana de José Antonino Fernández Cornejo, de Gaspar Arias Velásquez y de la Corte, y de Magdalena Goyechea y de la Corte, madre del General Martín Miguel de Güemes (Cutolo, I, 234). Poseía una valiosísima biblioteca jurídica (Romero Sosa, 1949). Como juez fué recusado en 1806 por el Gobernador Rafael de la Luz en el caso sustanciado contra el Administrador de la Renta de Tabacos José Tomás Sánchez (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp. 3143, Doc. No. 8). Su primo carnal y político Gaspar Arias Velásquez era también poseedor de una valiosa biblioteca (Cornejo, 1945).

⁷¹ nacido en la Colonia del Sacramento en 1748, hijo de un Portugués. En 1791 fué Asesor de la Junta Municipal de Temporalidades. Casó con Jerónima Rosa Martínez de Iriarte, natural de San Miguel de Tucumán, viuda del Gobernador de Guanta Juan de Zubiaur, e hija de Juan Martínez de Iriarte y de Felipa Campana (Aranzaes, 1915, 480; y Cornejo, 1944, 95-101). Según Calvo era hija de Domingo Martínez de Iriarte y Cordoba, natural de Jujuy, y de su segunda mujer Florencia de la Cámara Elizondo; cuñado del Pbro. Felipe Antonio Martínez de Iriarte y del Gobernador de Armas de Jujuy Domingo Martínez de Iriarte; y conculado de Francisco Zenavilla, de Juan Manuel de Pucheta, del Coronel Ventura José Marquieguy Marquieguy y de Juan de Simón y Olazo (Calvo, VI, 24). Fué padre de Gertrudis de Medeyros, casada en junio de 1799 con el Coronel Juan José Fernández Cornejo y de la Corte (Cornejo, 1972, 65). En 1807 el Cabildo salteño, se quejaba de la traición de su Asesor José de Medeyros, quien pretendía erigir a San Miguel de Tucumán en capital de la Gobernación y sede de su Obispado.

⁷² AGN, Tribunales, Leg.62, Exp.24, fs.49.

⁷³ *Ibídem*.

⁷⁴ Nacido en Vizcaya en 1747, casado en primeras nupcias con María Inés Santillán, viuda de Manuel Fernando Bravo de Rueda [padres del asesinato José Bravo de Rueda], y en segundas nupcias con Agustina Iramain, hija de Agustín Iramain y Josefa Santillán (Figueroa, 1927, 77 y 119). Agustina era hermana de Juan José Iramain, Gobernador de Armas en 1786, y Subdelegado de Real Hacienda en 1787 (Figueroa, 1927, 177). Era conculado de Pedro de Medina y Montalvo.

⁷⁵ Hijo del Maestre de Campo Agustín de Iramain y de Josefa Santillán, casado en primeras nupcias con Paula López de Velazco, sin sucesión, y en segundas nupcias con Pascuala Bailona Díaz Gallo (Figueroa, 1927, 57). Fueron padres de Juan Manuel Iramain, marido de Micaela Aranda, y de José Domingo Iramain, marido de Francisca Borges y Urrejola, hermana del Coronel Juan Francisco Borges (Di Lullo, 1948, 147).

⁷⁶ marido de Casilda Araujo, y padres de Bernarda Frías, mujer de Pedro Pablo Gorostiaga (Figueroa, 1927, 33).

⁷⁷ Joseph Frías al Gobernador-Intendente de Salta, Santiago del Estero, 3-X-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

⁷⁸ Casado con Josefa Ignacia Gorostiaga.

⁷⁹ marido de Jacinta Argañaráz y Murguía y padre de Pedro Ignacio Unzaga (Cutolo, VII, 424).

⁸⁰ Joseph Frías al Gobernador-Intendente de Salta, Santiago del Estero, 3-X-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

⁸¹ Joseph Frías al Maestre de Campo Santiago de Liniers, Santiago del Estero, 12-X-1808 (AGN, División Colonia, Intendencia de Salta y Santiago del Estero, Sala IX, 5-7-7).

⁸² *Ibídem*.

⁸³ AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.8.

⁸⁴ Natural de Galicia, hijo de Jacobo Acuña y Ocampo, y de Juana de Alomón Coello y Torrado, casado en 1772 con María de la Trinidad de Vera y Aragón, hija del Maestre de Campo Juan Ascencio de Vera y Sánchez de Loria, y de Josefa de Avila; y nieta paterna de Juan de Vera y Aragón y de Petronila Sánchez de Loria (Luque Colombres, 1973, 151). Padres de los Presbíteros Jacobo, Pedro Ignacio y Joaquín Acuña; de los Doctores Tadeo y Pío Acuña (abuelo del Gobernador de Catamarca Joaquín Acuña Molina); y de Josefa Acuña, mujer de Andrés Herrera (abuelos de los Gobernadores de Catamarca Marcos Figueroa Herrera, casado con Victoria Augier Molas, y de Julio Benigno Herrera Gonsález, casado con Carmen Castellanos Díaz de la Peña); de Tránsito Acuña, mujer de Juan Ignacio Soria y Medrano; y de Clara Acuña, mujer de Gregorio Ruzo (Velasco Ledesma, 1946; Calvo, III, 13; I, 236; y Soria, s/f, 7, 203, y 238). Francisco Acuña registró como deudor en Buenos Aires una sola operación, en 1786, contraída con Xavier Saturnino Saraza, por valor de \$2.096 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1786, fs.75).

⁸⁵ Hijo del Teniente Gobernador de Catamarca Maestre de Campo Juan de Soria Medrano y Olmos de Aguilera y de su prima Josefa Olmos de Aguilera y de la Vega, casado con Justa Rivera, hija de Ignacio Rivera y de Catalina Segura, hermana del Regidor Ramón Rivera (Calvo, V, 278). Fernando Soria Medrano era padre de María Isabel Soria, casada en 1808 con José María Burgos, de Juan Ignacio Soria, casado en 1802 con María del Tránsito Acuña, y de Segundo Soria, casado con Beatriz Navarro de Velazco, hija de Juan Diego Navarro de Velazo, VII Señor de Capayán, Villapuna, y Chancogasta, V Señor de Allega, y de María Antonia Segura y Guadalupe (Calvo, V, 279; y Soria, s/f, 228).

⁸⁶ Nacido en Catamarca en 1768, Alcalde, Tesorero de la Real Hacienda, hijo del Capitán Ignacio Olmos de Aguilera y Tres Palacios, y de Isabel Barrionuevo, casado en 1791 con Rosalía de Guzmán, padres de Carlos, Luis, María Salomé, Romana, Juana Luisa, y Casilda Olmos de Aguilera (Calvo, V, 132; y Soria, s/f, 181). Jose Olmos registró en Buenos Aires como deudor una sola operación, contraída con Tomás de Valansátegui en 1796, por valor de \$2.458 (AGN, Protocolos, Reg.1, 1796, fs.263).

⁸⁷ AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.8.

⁸⁸ *Ibídem*.

⁸⁹ *Ibídem*.

⁹⁰ AGN, División Colonia, Interior, Leg.47, Exp.12. Así, por ejemplo, con relación a las elecciones de 1798, al Teniente de Milicias Victorino Ferreyra le constaba que el Defensor de Menores

Maestre de Campo Pedro Pablo Ponce de León "...es pariente afinico [político] del Alcalde Juan Bustamante" y que el Regidor Alcalde de Aguas Marcelino Vera y Sánchez de Loria "...lo es también pariente afinico del Regidor suplente Don Santiago Leiva y sobrino afinico del Ministro Tesorero Don Francisco Acuña" (AGN, División Colonia, Interior, Leg.47, Exp.12).

⁹¹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.57, Exp.7, fs.49v. Don Feliciano fué Alcalde de primer voto y Oficial Interino de Correos de Santa Fé, hijo de Francisco Mota Botello y de Isabel Ruiz Gallo, y marido de Maximiliana Robin y Vera. En 1794 es Alcalde en el Cabildo de Catamarca, y en 1800 se propone rematar el empleo de Alférez Real de la misma (AGN, Hacienda, Leg.72, Exp.1912; Leg.96, Exp.2502; Tribunales, Leg.159, Exp.44-46; y Justicia, Leg.4, Exp.1206). En 1808 el Alcalde de Segundo Voto de Catamarca José Vicente Reinafé formula queja de su proceder como funcionario (AGN, Justicia, Leg.5, Exp.1511). En 1819 es designado Gobernador Delegado del Tucumán, siendo destituido por el Motín de Arequito, y reemplazado por Bernabé Aráoz. Botello registraba en Buenos Aires como deudor una sólo operación, contraída con Agustín Casimiro de Aguirre en 1788 por valor de \$7.749 (AGN, Protocolos, Reg.6, 1788, fs.283v.).

⁹² Hijo de Juan Manuel Correa Navarro y de María Antonia Soria Medrano y Olmos de Aguilera (Calvo, V, 278; y Soria, s/f, 57).

⁹³ Hijo de Juan Antonio Salado, español, y de Isabel Segura, casado en 1779 con Teresa Barrionuevo (Soria, s/f, 209).

⁹⁴ Hijo de Ignacio Rivera y de Catalina Segura, hermano de Justa Rivera, mujer del Regidor, Alcalde y Alférez Real Fernando Soria Medrano (Calvo, V, 279; y Soria, s/f, 228).

⁹⁵ Casado con María del Tránsito Serapia de Acuña y Vera, hija del Comandante de Armas Francisco de Acuña y Alonso Coello, y de Trinidad de Vera y Avila (Calvo, V, 279; y Soria, s/f, 228).

⁹⁶ Hijo de Fernando Soria y Olmos, y de Justa Rivera, y sobrino de los Regidores Ramón Rivera y José Antonio Olmos, Defensor General de Menores. Contrajo primeras nupcias en 1807 con Bernardina Segura, y segundas nupcias con María del Señor Navarro, hija de Juan Diego Navarro de Velazco, y de María Antonia Segura (Soria, s/f, 87, y 230).

⁹⁷ AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.8.

⁹⁸ *Ibídem*.

⁹⁹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.9.

¹⁰⁰ Nacido en Buenos Aires en 1764, hijo de José Domingo de Ezquerrenea y Axpide, y de Benedicta Dominga Pacheco de Malaver y Peralta (Cutolo, 1963, 40). Acerca de Ezquerrenea, ver Nieva Malaver, 1936; y Cutolo, 1961, 64-75.

¹⁰¹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.64, Exp.9.

¹⁰² Acuerdos, III Serie, I, 206; y Carbonell de Masy, 1992, 276.

¹⁰³ También se registró en Chile una resistencia contra la implantación del Estanco (Carmagnani,

1961, 168-177).

¹⁰⁴ yerno del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda, concuñado del Capitán José Pascual Alurralde, y primo del reo Agustín Fabeiro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.8, capítulo 399).

¹⁰⁵ primo del reo Agustín Fabeiro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.8, capítulo 399).

¹⁰⁶ AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 398). Ojeda era dueño del Potrero de Raco (Avila, 1920, 255).

¹⁰⁷ probablemente pariente del Gobernador Vértiz y Salcedo.

¹⁰⁸ En 1755 conjuntamente con Antonio de Guzmán y Mendoza había iniciado juicio contra Nicolás Ballesteros (AGN, Tribunales, Leg.269, Exp.4). En el mismo año había demandado a Mariano Vidal (AGN, Tribunales, Leg.266, Exp.8). En 1756 inició otra demanda contra Domingo de Chávez (AGN, Tribunales, Leg.C-7, Exp.6).

¹⁰⁹ Saldías, 1893, 259-260, citado por Montero Reguera, 1992, 134. Ver también Caballero Calderón, 1948; Miró Quesada, 1948; Apraiz, 1985; y Fernández, 1994.

¹¹⁰ Acevedo, 1969, 144.

¹¹¹ Extracto de los Autos obrados por el Coronel de Milicias Don Manuel de Castro, Administrador de la Renta de Tabacos, sobre el establecimiento de dicha Renta en 1773 (AGN, División Colonia, Dirección General de Tabacos, Sala IX, 12-1-5).

¹¹² Rázori, 1945, I, 562-567.

¹¹³ Acerca de la cultura y las aventuras de Pozo, ver Furlong, 1952, 470-476; y Acevedo, 1993.

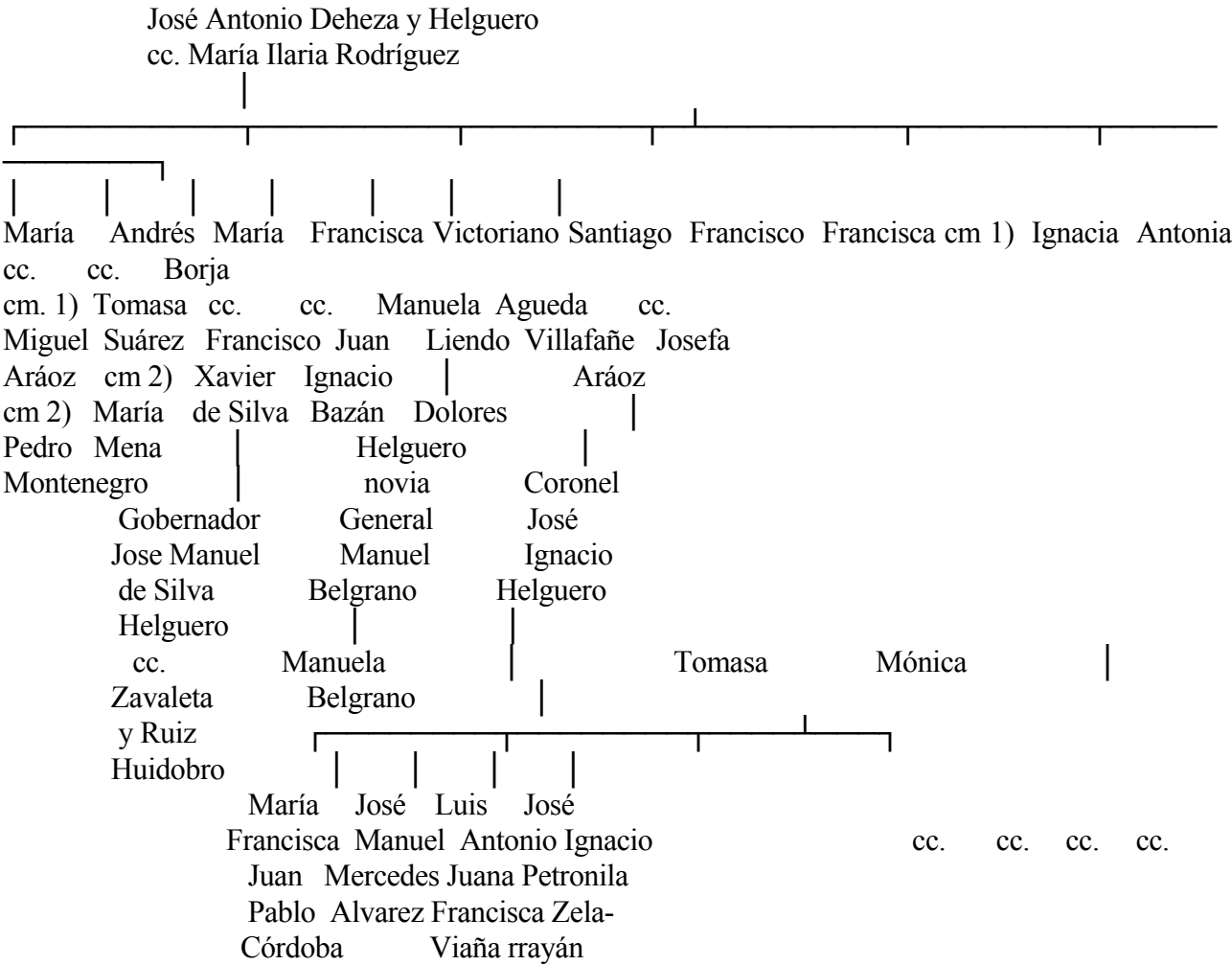
¹¹⁴ AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9.

¹¹⁵ personaje aún no identificado. Existió en La Paz entre 1761 y 1770 un comerciante denominado Blas José de Sabando (Jáuregui Cordero y Pérez Velasco, 1993, 130).

¹¹⁶ Coronel, Gobernador de Armas (1775-1777), Justicia Mayor (1781-82), y Subdelegado de Tierras (1781), b. el 31-XII-1743 (Díaz de Molina, 1946, 44). Era hijastro del Sargento Mayor y Provincial de la Santa Hermandad Juan Francisco Deheza y Helguero, segundo marido de su madre, y de Francisca Xaviera Sánchez de la Madrid, sobrino carnal del Cura Párroco de Tucumán Dr. Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid, y sobrino político de Francisco Javier de Cabrera, vecino de Córdoba, y de Miguel de Aráoz, por ser estos dos últimos casados con hermanas de su madre (Luque Colombres, 1942, 38; y Corominas, 1987, ítem 155, 101, y 35). Juan Silvestre estaba casado en primeras nupcias con María Antonia de Villavieja, hija de Francisco Xavier de Villavieja, natural de Madrid, y de Francisca Gonsález de Abreu, con sucesión; y en segundas nupcias con Catalina Carriaga y Balderrama, sin sucesión. También era hermano de José Antonio Deheza y Helguero, propietario de las estancias El Manantial y Vipos, por compra a la Junta de Temporalidades; y de Manuela Deheza, mujer de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid; y tío de María

Francisca Helguero, mujer de Miguel Aráoz, hijo de Miguel Ignacio Aráoz y de Gregoria Gramajo; de María Ignacia Helguero, mujer de Francisco Xavier de Silva, hijo del Cap. Ignacio de Silva, nacido en 1728, y de María de Aguilar y Mercado, padres del Gobernador de Tucumán (1828-29) José Manuel Silva y Helguero, casado con Tomasa Zavaleta Ruiz Huidobro, ambos padres a su vez de Dolores Silva, mujer del Mártir de Metán Don Marcos Avellaneda; de Victoriano Helguero, marido de María Manuela Liendo, padres de la que fuera la amante del General Manuel Belgrano; y del Maestro de Postas Francisco Borja de Helguero, casado con Josefa Aráoz, hija de Pedro Antonio Aráoz y de Francisca Antonia Núñez, padres estos últimos del Comandante General de Armas y Gobernador Delegado del Tucumán Coronel José Ignacio Helguero, amigo y primo del General Gregorio Aráoz de Lamadrid (Calvo, 1936, I, 108; Murga, 1979, 223-228; y Corominas, 1987, ítems 35 y 145).

Cuadro A



(Fuente: Calvo, 1936, I, 108; y Murga, 1979, 223-228).

¹¹⁷ natural de Tucumán, hijo de Lorenzo García de Valdés y de Juana de la Lastra, marido de Dominga de Villafañe, hija de Diego de Villafañe y de María de Corbalán y Castilla; sobrino político de Francisco Xavier Fernández Campero; y cuñado del R.P. Diego Villafañe S.J., de José de Molina y

de Francisco Antonio Zorrosa; y padre de Diego Villafañe y García de Valdés (Corominas, 1987, ítem 206). Acerca de sus descendientes, ver Schleh (1955).

¹¹⁸ Apellido originario del Consejo de Sopuerta, partido judicial de Valmaseda, Vizcaya (García Carraffa, LVIII, 65). Marido de Elena Alurralde, hija de Miguel Alurralde y de Josefa de Villagra López. Sin sucesión, su viuda contrae segundas nupcias con José Ignacio de Garmendia (Avila, 1920, 50; y Calvo, 1936, I, 49). Ella era hermana de Pascual Alurralde, quien casó con Josefa de Ojeda Carrasco, hija de José de Ojeda. A pesar de la afirmación de Avila (1920), Calvo (1936) trae un hijo llamado Juan José de las Muñecas Alurralde, casado con Catalina Aráoz, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid, cuya viuda contrae segundas nupcias con Fermín Ruiz Poyo (Calvo, 1936, I, 77).

¹¹⁹ Coronel de Milicias y Teniente Tesorero de la Real Hacienda de Tucumán. Presenta quejas contra el Justicia Mayor Juan Silvestre Dehesa y Helgueros (AGN, Justicia, Leg.13, Exp.284).

¹²⁰ era hijo de Diego Ignacio Aráoz y del Campo y de Josefa Paz de Figueroa; marido de Francisca Núñez de Herrera; hermano del Cura Vicario de Monteros Diego Aráoz; padre del Pbro. Pedro José Miguel Aráoz; y tío de la poetisa Josefa Rosa Aráoz Valderrama, mujer de Salvador Alberdi.

¹²¹ Regidor, Capitán del Regimiento de Voluntarios de Caballería del Tucumán y agregado al Cuerpo de Arribeños. Nació en Cabrejas del Pinar en 1748. En 1808 Manuel Pérez Padilla hizo renuncia de su oficio de Regidor en su hijo Miguel (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.52, Exp.1508, fs.49). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, los Aráoz extrajeron del Colegio Jesuítico del Tucumán, luego de la Expulsión, para la casa de Isabel García Aráoz "...todo lo que respecta a vidriería que había encajonada, y aún los vidrios que ya estaban colocados en las ventanas" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

¹²² Extracto de los Autos obrados por el Coronel de Milicias Don Manuel de Castro, Administrador de la Renta de Tabacos, sobre el establecimiento de dicha Renta en 1773 (AGN, División Colonia, Dirección General de Tabacos, Sala IX, 12-1-5).

¹²³ Maier, 1972, 54, citado por Tarrow, 1993, 78. Montero Reguera (1992) refiere que en Mexico, en 1621, se paseó por la ciudad una máscara en la que figuraban varios caballeros andantes, y en Lima, en 1630, la Universidad realizó un desfile de carros entre los que figuraba el de Marte (Montero Reguera, 1992, 135).

¹²⁴ AGN, División Colonia, Dirección General de Tabacos, Sala IX, 12-1-5.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ *Ibidem*.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ Céspedes del Castillo, 1955, 8-10; y Rivarola Paoli, 1988, n.1, 27.

¹³⁰ Gruzinski, 1991, 247.

¹³¹ Hijo de Simón de Videla Azoca Pardo Parragués y de Elena Martínez de la Peña; cuñado de Miguel de Molina Chacón, de Juan Mateo de León y Guevara, y de Nicolás de Godoy y del Pozo (Calvo, I, 309; y IV, 344, 347; y Morales Guíñazú, 1936, 65ss.; 1939, 114, 335, y 338).

¹³² Hijo de Marcos Martínez de Soto y Rozas y de Francisca López de Liñero y Torres, naturales de Regules; casado en 1746 con María Prudencia Correas y Villegas, hija de José Correas de Larrea y de Francisca Ruiz de Villegas; y fué padre del Gobernador de Concepción, Chile, Juan Martínez de Rozas, y suegro de Francisco de Borja Corvalán y Chirinos, del Alferz Real Miguel Téllez de Meneses, y de Tomás de Lima Melo y Jofré (Calvo, II, 377; IV, 110 y 350; y V, 185; y Comadrán, 1962, 47).

¹³³ Archivo Histórico de Mendoza, Actas Capitulares, Carpeta No.15, Documento N.2.

¹³⁴ Fontana, 1962, 78.

¹³⁵ Hijo de Pedro Nolasco Correas y Villegas y de Magdalena Corvalán y Chirinos, marido de Magdalena Almandós, y cuñado del Teniente Coronel Francisco Javier de Rosas, de Bernardo Ortiz, y de Francisco Segura (Calvo, V, 39; y Morales Guíñazú, 1939, 73).

¹³⁶ Hijo del Alcalde Felipe Gamboa Avendaño, bautizado en Vizcaya, y de Josefa Videla y Puebla; cuñado de Manuel Segura; medio hermano del Dr. Manuel Ignacio Molina Videla; y sobrino político de Antonio de Ferramola (Calvo, IV, 351; y Morales Guíñazú, 1939, 297).

¹³⁷ Hijo de Gregorio Santander. Cuando en 1787 pretendió desposarse con María Gerónima Coria, su padre le opuso disenso judicial (AGN, Tribunales, Leg.208, Exp.27).

¹³⁸ Hijo de José de Sotomayor y Dávila, y de Maria Villafañe y Tejeda, casado en 1744 con Isabel Videla y Zalazar, padres de Juana Sotomayor, mujer de Félix Correas; de Manuela Sotomayor, mujer de Domingo Corvalán; de Ventura Sotomayor, mujer de José Clemente Benegas; de Petronila Sotomayor, mujer de Isidoro Sáinz de la Maza; y de Josefa Sotomayor, mujer de Francisco Xavier de Molina (Comadrán, 1962, 45). Corregidor de la Ciudad de Mendoza, en 1778 pide cargo de Coronel de Milicias (AGN, Solicitudes Militares, Libro 4, f.269-271).

¹³⁹ Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

¹⁴⁰ Hijo de Francisco Corvalán de Castilla y Clara Escalante Videla; cuñado de Hilarión Almandóz Puebla, de Onofre Lemos Ladrón de Guevara y de Gaspar Serrano; marido de Manuela Mayorga Molina; y suegro de Marcelino Videla Godoy y Clemente Segura Gamboa.

¹⁴¹ Archivo Histórico de Mendoza, Civil, Epoca Colonial, Carpeta No.17, Documento No.11.

¹⁴² Nacido en España. Fué designado Gobernador de Córdoba en 1796 en reemplazo de Sobremonte. Partió a España en 1800, volviendo a tomar el cargo en diciembre de 1803 (Garzón, 1898, 385-390).

¹⁴³ AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

¹⁴⁴ Hermano del Alguacil Mayor Rafael Bargas.

¹⁴⁵ Natural de Portugal, prisionero de la Colonia del Sacramento en 1776, y confinado por el Gobernador Cevallos en Mendoza (Sosa Morales, 1965, 11). Era casado en 1786 con María Juana Martínez de Rozas y Correas, hija del Alcalde y Procurador de Mendoza Maestre de Campo Juan Martínez de Rozas y López Piñero, nacido en Nogales, Valle de Soba, y de María Prudencia Correas de Larrea, y cuñado de Francisco de Borja Corvalán de Castilla, y de Tomás de Lima Melo (Calvo, IV, 110).

¹⁴⁶ AGN, División Colonia, Interior, Leg.55, Exp.3, fs.24.

¹⁴⁷ *Ibídem*.

¹⁴⁸ *Ibídem*, fs.25.

¹⁴⁹ *Ibídem*, fs.26v.

¹⁵⁰ Real de Azúa, 1961, 65, nota 74.

¹⁵¹ Se había ganado los despachos de Coronel de los Reales Ejércitos participando en la represión de la sublevación indígena del Alto Perú, donde se había destacado en las acciones de Orubumda y Oropesa, comandando las tropas reales en el combate de Saylla a las órdenes del Coronel Avilés, y asistiendo a las acciones de Secuani y Condorcuyo (Oficio del 16-XI-1804 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.12, Sala IX, 5-10-7; y Leg.10, Sala IX, 5-10-5]. El 14-II-1782, en el Cuzco, le fueron dadas a Santiago Alejo de Allende las Instrucciones para combatir a Gabriel y Diego Tupac Amaru [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.I. n.13]. El 24-II-1782, en Sicuani, fué elevado un Memorial solicitando el grado de Coronel en favor de Santiago Alejo de Allende [Archivo Museo Mitre, A.B., c.22, P.2, n.17]. El 6-XI-1783, en el Cuzco, se libra el Certificado de Servicios de Santiago Allende [Archivo Museo Mitre, A.B.,c.23, P. I, n.6; A.B., c.28, P.I.,n.29]. [Debo esta valiosa información a la generosidad de la Prof. Estela Barbero]).

¹⁵² Hijo del Maestre de Campo José Rodríguez, dueño de la estancia de Alta Gracia, por compra a las Temporalidades, y de Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Era hermano de José Antonio Rodríguez, casado con María Agueda Allende y Mendiolaza, hija del Alcalde Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz Mendiolaza; y de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María del Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Sáa y los Rodríguez Jurado (LC, I, 336). Su padre era adicto al bando de José Antonio de la Bárcena, líder de la facción de los Echenique (AGN, División Colonia, Interior, Leg.13, Exp.5).

¹⁵³ El Coronel Santiago Alejo de Allende, pese a su prestigio guerrero logrado en la represión del alzamiento indígena de Tupac Amaru, se había desacreditado por su fallida reconquista de Maldonado de manos del Ejército Inglés y por su fuga de la costa de Montevideo cuando el desembarco de las legiones de Achmuty (Cutolo, I, 151).

¹⁵⁴ Nacido en Junio de 1773, hijo de José de Allende y Losa y de María Isidora de Ascasubi,

casado con Petrona de Goicoechea, hija de Martín de Goicoechea y Tadea Grimau (LC, 1936, I, 16, y 36). José Norberto Allende era cuñado del Teniente Coronel Félix Mestre, primo hermano de Francisco Armesto y Allende, de Pedro Lucas y Santiago Alexo de Allende, y de la abuela del General Paz, y suegro de quién fuera Gobernador de Córdoba José Francisco Alvarez y de las Casas, hijo éste de Francisco Javier Alvarez y Arias, y de Francisca Carlota de las Casas y Pavón (LC, 1968, II, 151). José Norberto heredó la propiedad de la estancia de Saldán, y recién en 1865 su hijo Carmen L. de Allende y otros proponen la división o venta de la misma (AHC, Escribanía N.1, Leg.521, Exp.8).

¹⁵⁵ Ambos eran hijos de Pedro Lucas de Allende Vicentelo y de María Javiera de Torres, hermanos menores de José Manuel Allende, y primos hermanos de la mujer del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza, y de la mujer de José Antonio de la Bárcena. También eran primos segundos de la madre del autor de las célebres Memorias, el General José María Paz, y primos terceros del Coronel Dalmacio Allende. El Teniente Coronel Tomás Bailón de Allende y Torres casó con Inocencia Díaz de la Fuente, hija del comerciante Jacinto Díaz de la Fuente y de Juana Arias de Cabrera; y el Sargento Mayor Faustino de Allende y Torres casó con Rita Trinidad Moyano y Deza, hija de Gregorio Salvador Moyano y Cabrera y de Juana Deza y Moyano, dueños de las estancias Monte Redondo, Toro Guañusca, El Totoral, Talas y Pozo Grande. Rita Moyano era prima hermana carnal del Coronel Dalmacio Allende Moyano (LC, 1936, I, 30 y 445; III, 196).

¹⁵⁶ Era hijo de Nicolás de Cabrera Zeballos y de Tomasina de Allende Vicentelo, sobrino del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende, y nieto materno del General Tomás de Allende Losa Bravo (Díaz de Molina, 1966, 62). José Antonio Cabrera era primo hermano de la mujer de José Antonio de la Bárcena, y por ende tío segundo del Coronel Manuel Bárcena.

¹⁵⁷ Gaceta, 6-IX-1810, citado por AN, 1964, 113; y Halperín, 1979, 258 (AGN, División Colonia, Tomas de Razón, Libro 65, Folio 309, Sala IX, 8-8-1).

¹⁵⁸ *Ibidem*.

¹⁵⁹ Natural de Salta, hijo de Manuel Antonio Texada y de Catalina Fernández de Loria, y avecindado en Córdoba, casado con María Mercedes Funes y Luján, padres de Manuela Tejada, mujer de Braulio Piñero y del Castillo (Buscá-Sust, 1981, 84). Era sobrino político del Deán Funes.

¹⁶⁰ Si bien el Coronel Dalmacio Allende Moyano era primo carnal en tercer grado de Tomás y Faustino de Allende, su parentesco con éste último era más cercano a través de la mujer del Sargento Mayor Faustino de Allende, Doña Rita Moyano, de la cual era primo hermano (LC, 1969, III, 193). El Coronel Dalmacio Allende era también sobrino carnal en segundo grado de Nicolás Cabrera Zeballos, pues su madre Catalina Moyano era prima hermana de éste último (Calvo, 1924, 74).

¹⁶¹ Tonda, 1981, 139.

¹⁶² Nacido en marzo de 1777, hijo de José de Isasa y Ayesta, natural de San Sebastián, Alcalde de Primer Voto de Córdoba en 1795, y de María del Rosario Ponce de León, casado con Mercedes Caballero, hija de Lorenzo Caballero y de Josefa Ramírez de Arellano (Díaz de Molina, 1966, 204-208).

¹⁶³ Hijo de Juan Pérez Bulnes y de Dolores Pavón.

¹⁶⁴ Hijo de Juan Pérez Bulnes y de Dolores Pavón, casó con María Ignacia Funes y Allende, hija de Don Ambrosio Funes (Díaz de Molina, 1966, 150-154, y Mengo de Velásquez, 1983). Su padre era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

¹⁶⁵ Hijo de Miguel Antonio del Corro y Bringas y de Jerónima de Cabanillas, y casado con Romualda Moyano y Deza, hermana de la mujer del Sargento Mayor Faustino de Allende y Torres.

¹⁶⁶ Hijo de Miguel Antonio del Corro y Bringas, Santanderino, dueño de la estancia de Macha, y de Jerónima de Cabanillas, y hermano de Gaspar del Corro.

¹⁶⁷ Ambos hermanos eran hijos de Cipriano Moyano Quijano y de María Dolores Porcel de Peralta, casados con dos primas segundas del Coronel Santiago Alexo de Allende y Pedro Lucas de Allende, hijas de Juan Bautista Losa Bravo y Cabrera, y de María Mercedes Olmos y Aguilera (LC, 1936, I, 300; y III, 193). Cipriano Moyano era primo hermano de Catalina Moyano Cabrera, la mujer de José Antonio de Allende.

¹⁶⁸ Converso, 1980; y Luque Colombres, 1973, 283-345.

¹⁶⁹ Natural del Paraguay, nieto o sobrino de Juan Manuel Cano de la Pera. Fué dueño de los terrenos del Cerro de Aparipí, Paraguay, probablemente la estancia de Carandaipirú, que había litigado con los herederos de Sebastián Agüero (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. 193, Expedientes 1, 2, 3, y 4; y Aguirre, 1950, XIX, 165). Fué yerno del Alcalde de Córdoba Antonio del Castillo (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.208, Exp.14). En 1782 se le otorgan sus certificados por sus servicios militares (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio, Libro 16, f.143-159). Recalde había concertado entre 1757 y 1801 una decena de operaciones por la suma de \$34.651. Entre sus acreedores se encontraban Francisco Guerrero Villalobos, Juan Antonio Egusquiza, Pedro José Doye, María Josefa Balbastro, y Tomás de Valansátegui (AGN, Protocolos, Reg.1, 1757, fs. 8, 16, 55v., 107v., y 178; Reg.2, 1762, fs.220; y Reg.1, 1785, fs. 204.).

¹⁷⁰ Había celebrado entre 1767 y 1775 tres operaciones con Baltasar Montis, Roque Sánchez y José Andonaégui por valor de \$17.648 (AGN, Protocolos, Reg. 6, 1767, fs.297v.; R.1, 1774, fs.208; R.4, 1775, fs.342; y R.3, 1775, fs.227).

¹⁷¹ Halperín Donghi, 1979, 70, 380, 384.

¹⁷² AHC, Crímen, 1782, Leg.36, Exp.1; 1784, Leg.38, Exp.10; y 1796, Legajos 70, Exp.5 y 72, Exp.11.

¹⁷³ Gregorio Funes al Virrey, Córdoba, 24-VI-1782 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5).

¹⁷⁴ *Ibidem*. Dicha acusación recayó en los hermanos Funes, pese a ser Ambrosio Funes marido de María Ignacia de Allende y Vicentelo de la Rosa.

¹⁷⁵ AHC, Juzgado del Crímen, 1790, Leg. 50, Expedientes 16 y 18.

¹⁷⁶ AHC, Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13.

¹⁷⁷ AGN, Crímen, 1791, Leg.54, Exp.22.

¹⁷⁸ José Justo Garay, marido de Isidora Josefa de Urtubey, hija de Juan Luis de Urtubey y María Ana Villarroel, es procesado en 1800 por desacato (AHC, Crímen, 1800, Leg.86, Exp.21). En agosto de 1809 representa los perjuicios que en sus bienes patrimoniales le había inferido su madre Isidora Zamudio (Oficio del 28-VIII-1809, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4).

¹⁷⁹ José Lorenzo Garay y Molina, fué también procesado en 1793 conjuntamente con otros cómplices, por ladrón y otros excesos (AHC, Crímen, 1793, Leg.58, Exp.11). Una década y media más tarde, en 1808, como soldado de la Compañía de La Carlota, José Lorenzo deserta de la misma, y aparentemente se oculta en Buenos Aires (Oficio del 16-IX-1808, AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.16, Sala IX, 6-1-4). Finalmente, Garay contrae matrimonio con Pascuala de la Torre y Cordobés (Calvo, 1924, 164).

¹⁸⁰ hijo de Salvador Súlivan y de María Leocadia Fuentes (Apolant, III, 1713).

¹⁸¹ Fué miembro de la Academia de Práctica Forense de Chuquisaca (Cutolo, 1963, 114).

¹⁸² ver Gibert, 1947.

¹⁸³ Ver Apéndice C-I correspondiente al tomo III.

¹⁸⁴ Ya en 1754 el Comandante Félix Cabrera había enunciado la debilidad de los Cabildos, vis a vis el poder de los Gobernadores.

¹⁸⁵ Ver Labougle, 1953; y AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19. Respecto al rol que jugaron las mujeres en dicha rebelión, la primera en ser detenida fue Catalina González y más luego "...a Morphy lo tenían ya persuadido [Manuel Rivera y otros] a que se pusiesen en prisión algunas mujeres: sobre lo que me atacaron una tarde los tres, y les hablé resueltamente, que por mi dictamen no: que bien podían aprisionarlas; pero que yo no había de hacer caso de ellas para nada; porque todo su delito, decían era haber hablado algo a favor del común" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.4, Exp.5, fs.12 y 41v.).

¹⁸⁶ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19. Ver Bruno, 1967, V, 314.

¹⁸⁷ Integraban también esta facción Luis de Soto (marido de Pascuala Navarro), Juan Solís, José Ponciano Rolón (marido de Ana Pera), José Díaz (marido de Felipa Cavallero), Pedro Juan Sotelo (marido de Isabel Luque), y Fernando Soberón (Labougle, 1953, 149 y 194; y Mazzuchi, 1992, ítems 18, 415, 523, 653, 694, 328, 404, 853 y 872).

¹⁸⁸ hijo de Alonso Hidalgo Viera y Torres y de Lorenza Casajús y Fernández.

¹⁸⁹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.7, fs.31v.

¹⁹⁰ AGN, División Colonia, Interior, Leg.26, Exp.12. Felipe Díaz Colodrero casó con una hija de Juan Estéban Martínez y Francisca Hidalgo Casajús.

¹⁹¹ Acuerdo del Cabildo de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, 1-I-1794 (AGN, División Colonia, Interior, Leg.35, Exp.2).

¹⁹² suegro de Felipe Díaz Colodrero y Estéban María Perichón de Vandeuil.

¹⁹³ Casado en 1775 con Margarita Lagraña, hija de Ziprián de Lagraña y de María Gregoria de Dícido y Zamudio, pertenecientes a la facción ajesuitada; y padres de Josefa de Bedoya y Lagraña, mujer de su primo segundo José Simón García de Cossio y Zamudio (Calvo, IV, 33; Palma, 1957; y Bonastre, 1936).

¹⁹⁴ Tío carnal de José Ignacio Benítez, de Juan Gonsález (por hallarse casado con una hija de Josefa Benítez, hermana de Don Serapio), y de Juan Estéban Benítez, quien se hallaba casado con una hija de Eugenio Cabral.

¹⁹⁵ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp. 8, fs.7.

¹⁹⁶ Tío carnal del Alcalde de segundo voto Don Francisco Baldéz, casado éste con María Antonia Gonsález, hija de Margarita Cabral, la cual era hermana de Eugenio Cabral, y pariente este inmediato del Alcalde Provincial.

¹⁹⁷ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.147, Exp. 8, fs.7.

¹⁹⁸ Teniente Gobernador de Corrientes.

¹⁹⁹ *Ibíd*em, fs.7v.

²⁰⁰ AGN, Sala IX, Interior, Leg.51, Exp. 1253.

²⁰¹ Levene, 1960, 123.

²⁰² AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.234, Exp.20, fs.-8v.

²⁰³ *Ibíd*em.

²⁰⁴ Natural de Burgos, Asturias. Nombrado Gobernador del Paraguay en 1771, Presidente de la Real Audiencia de Charcas en 1776, y Brigadier de los Reales Ejércitos en 1779 (AGN, Reales Cédulas, t.20, f.313; y Reales Ordenes, Libro 9, f.244). Falleció en 1780 (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.214, Exp.17).

²⁰⁵ En la gobernación del Paraguay, a diferencia del Alto Perú, los encomenderos no fueron desplazados por la clase de los corregidores.

²⁰⁶ Lynch, 1958, 209; y Saeger, 1981, 69-70.

²⁰⁷ AGN, División Colonia, Reales Cédulas, tomo 23, fs.350, Sala IX, 24-8-3.

²⁰⁸ AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.16, Exp.27.

²⁰⁹ Ibídem.

²¹⁰ AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.15, Exp.20. Recogido y leído por el Dr. José Vicente Carrancio decía el pasquín los siguientes versos en octosílabos libres:

"Si has quedado satisfecho
de mi anterior Papelón
prosigo con la intención
de lo que quedó en mi pecho
Vana mente satisfecho
está desy un Abogado:
El Sr. Regidor Ramos,
compone bien una Copla
Dn. Luis Ramírez lo sopla

por la boca de un embudo:
Lorente de un estornudo;
estrellas buelve en cometas:
de sombrero echa soletas
a los Zapatos Sanjuan:
Correa se haorra el Pan
porque siempre está de dieta:
con un baile haze la fiesta
mañana la de Balbastro:
La Manuela Echabarría,
ha acortado un poco el paso:
Mariño y Cuesta trabajan
día y noche sin cesar;
Velarde les vá a ayudar,
y en vela la noche pasan:
Ybáñez corre esta caza,
y otro Ybáñez les apunta:
Zamudio anda de Repunta,
y en la Quinta les encaja.
La Peluca de Colina;
se ha peinado esta semana:
Dió a luz sus grandes deseos
Nro. Monigote Arana:
Carrancio vá consiguiendo,
la gracia de su Compadre
Cabrera el Viejo alograrse,
anda siempre pretendiendo:
Pegose con gran primor
Medina a los de Palacio:
No puede gritar despacio
Aedo porque es de humor:
Agraciado es el Señor

Dn Ignacio de Yrigoyen:
Se eleban todos los que oyen
producir al Reloxero:
A la moda es el Sombrero
con que Azcuénaga se viste:
este catarro consiste
de lo que nos acatarran
quantos han venido agarran
para si el mejor remedio:
se le va aplacando el tedio
a Dn Bernardo Larrea:
con los rizos de Jalea
luze Dn Baltasar Franco,
y con nabos de Galicia
pretende poner estanco
El Doctor Avellaneda
mandó a París por anteojos:
de su Preñez los antojos
matan al doctor Cañete,
sobrepeliz y bonete
no hai como la de Mancilla,
Hecho vá una maravilla
al Cabildo Tocornal:
Pura gracia y pura Sal
el ayre es de Rospilloso:
parece una cosicosi
con su bastón Ribadabia:
Fue soldado en la Moldavia
el Sr. Dn Juan de Pita:
Nada el Juicio me quita
Mas que el Ayre de Pacheco,
Canta y tiene muy buen eco
Dn Benito de la Fuente:
No abrá quien mas bien ostente
Que el Gallego Figueroa:
Le vino al Doctor Soroa,
la reducción de los Pampas:
Una factura de estampas
a los Reyes le han mandado
Pica por lo enamorado
Dn Francisco de Carnilia,
mandó traer de Sicilia
varias semillas Warnes,
toda variedad de carnes
olfatea Altolaguirre:
Le venden en lo de Aguirre,
las uñas de siete pelos.

Cuenta muy bien por los dedos
 El Sr. doctor Andújar,
 Con tanto comer azúcar
 perdió los dientes Perales:
 Viene de los doze Pares
 la intrepidez de Sotoca:
 Me cae en gracia la boca
 de Dn Juan de Romanet
 deseo saber por que
 se empeña tanto Albear.
 Es Mro. de tocar
 Pedregal el violín.
 Y esta relación dá fin
 hasta que discurra el arte
 quienes llenarian el blanco
 de la otra tercera parte.

(AGN, División Colonia, Criminales, Sala IX, Leg.15, Exp.20, fs.48-48v.).

²¹¹ Marquiegui (1990) relata entre otros los casos de las familias Colman, Torres, y López Camelo (Marquiegui, 1990, 31-33).

²¹² Sobrino de Adrián Pedro Warnes y Sabina Sorarte. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con María Josefa Benedicta Arráez y Larrazábal, hija de Martín de Arráez y de Tomasa Larrazábal, y sobrina de su socio Antonio Larrazábal; y segundas nupcias con Ana Jacoba García de Zúñiga, hija del Regidor Perpetuo Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar; con cuñado primero del Regidor de Potosí Felipe Santiago de Arce, y luego de Juan Angel Lazcano, Juan Ignacio de Elía y José María Calceite; y suegro de su cuñado Juan Francisco García de Zúñiga, marido de Francisca Warnes y Arráez (FB, I, 162; III, 153; y JR, 1989, ítem 5246).

²¹³ Nacido por 1732 en Sevilla, hijo de Juan Ramos Mexía y de María Márquez de Velazco; marido en primeras nupcias de Ana María Antonia Conget y Rodríguez de la Mata, y en segundas nupcias de María Cristina de Ros y Pozo (FB, V, 286; y JR, 1989, ítem 4234).

²¹⁴ Bautizado en 1754, hijo de Vicente Azcuénaga y de Rosa Basavilbaso; marido de Justa Rufina Garfías, hija de Manuel de Basavilbaso y Urrutia y de Francisca de Garfías y Gallen; cuñado de Agustín Antonio de Erézcano, de Francisco Ignacio de Ugarte, y de Gaspar de Santa Coloma; y suegro de Mariano Lozano y del Virrey Olaguer y Feliú (FB, I, 201; y JR, 1989, ítem 6161).

²¹⁵ Nicoletti, 1987, 103.

²¹⁶ Mayo Documental, IV, 196-199, citado por Halperín Donghi, 1979, 157.

²¹⁷ Los Roca de Tucumán con los Díaz de Córdoba, los Castellanos de Salta con los Anchorena de Buenos Aires, los Paz de Tucumán con los Cascallares de Buenos Aires, etc.

TOMO II

CAPITULO 4

Las Facciones Políticas y la Crisis Revolucionaria en el Río de la Plata. Las Reformas Borbónicas y su impacto en los patriciados coloniales (1748-1784)

En la historiografía de la crisis revolucionaria, la de la crisis política propiamente dicha giró tradicionalmente alrededor de las repercusiones que la Revolución Francesa tuvo en Buenos Aires, y en especial alrededor de los episodios desencadenados por las Invasiones Inglesas.¹ Sin embargo, las repercusiones socio-religiosas que tuvieron primero en el siglo XVII las proposiciones erasmianas, relativas a los rituales, las ceremonias y los sacramentos, en especial del matrimonio, rescatadas muchas de ellas de antiguos textos latinos; y luego en el siglo XVIII, las repercusiones políticas secularizadoras y desacralizadoras del estado colonial, y revisionistas de la Contrareforma o contra-reformación, que tuvieron las Reformas Borbónicas (expulsión de los Jesuitas) en el seno de los patriciados y el parlamentarismo pre-moderno (capitular), que regían el interior del Virreinato, fueron por lo general ignoradas o dejadas de lado. Excepcionalmente, Castellero Calvo (1985) como Lavallé (1987) han incursionado en las luchas políticas que se libraron en la vida política del mundo colonial español. En el Tucumán y el Río de la Plata, Acevedo (1969) y Barba (1978,1980), seguidos por Mariluz Urquijo (1987), fueron los primeros en aproximarse a esta realidad. En este capítulo, coronación de otros trabajos,² desarrollaremos la correlación entre la conflictividad externa y la interna, formulada por Ross (1985, 1995); y las formas de negación, interpelación y oposición, bosquejadas por Hirst (1977) y Hindess (1985), por Gorski (1993) y por Masasri (1996), enfatizando el rol jugado por las alianzas y rivalidades facciosas celebradas a lo largo y ancho de todo el virreinato.

La implementación de estas nuevas hipótesis a la explicación de la transformación y crisis del estado y la sociedad estamental colonial así como a la explicación de la naturaleza inconclusa de la revolución de independencia encuentra sin embargo graves dificultades. El pasaje de las nociones de Antiguo Régimen y de patriciado al de sociedad burguesa moderna encuentra en el estado colonial puntos límites de inflexión constituídos por cuatro fenómenos históricos:

- 1) la transformación del estado colonial mismo, es decir la caída de Portobello (1742), la concertación de la Paz de Aquisgrán (1748), el Tratado de Límites con la corona de Portugal (1750) y la apertura del tráfico del Atlántico sud (1748);
- 2) la implementación de estrategias secularizadoras, contrapuestas por facciones políticas rivales, expresadas con la Expulsión de los Jesuitas (1767) y la imposición de la Administración de Temporalidades (1768) y la Real Renta de Tabaco y Naipes (1769);

- 3) la centralización e intervención del poder colonial, es decir las Reformas Borbónicas (Reglamento de Libre Cambio, 1778; fundación del Virreinato, 1778; formación de la Administración de Correos; derogación de los Corregimientos de Indios, 1782; imposición de la Real Ordenanza de Intendentes, 1782; y fundación del Real Consulado de Buenos Aires, 1794);

y 4) la disolución de dicho estado, es decir, la Revolución de Independencia (1810) y su fragmentación territorial, que dió lugar al nacimiento de nuevos estados (Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay).

Las políticas transformadoras borbónicas, que se iniciaron en el Río de la Plata con la apertura del tráfico del Atlántico sud, a raíz de la caída de Portobello (1742), tuvieron en el plano de las políticas mercantiles y fiscales su correlato en todas las ciudades de las carreras del Perú y de Chile. Este correlato se manifestó en Córdoba, con la polarización producida a raíz de las funciones del Tenientazgo del Rey; y en Buenos Aires, con las oposiciones generadas a instancias del Comandante de la primera Expedición Demarcadora de Límites a las Misiones, Marqués de Valdelirios,³ así como a raíz de las prisiones provocadas por las denuncias de contrabando,⁴ y de los conflictos generados por la elección de los Diputados Porteños de los Consulados de Cádiz y Lima (1755) y los Diputados provinciales del Consulado de Buenos Aires.⁵ Estas políticas transformadoras se consolidaron en el campo del pensamiento, la expresión literaria, la ideología y las estrategias disciplinarias con la Expulsión de los Jesuitas (1767), y lograron su apogeo administrativo con la Real Ordenanza de Intendentes (1782), las cuales dieron lugar a que se prolongaran alianzas entre parcialidades pertenecientes a ciudades diversas.

Si bien Córdoba contaba con un Cabildo dotado de fuertes tradiciones mercantiles, éste se hallaba dividido por la presencia del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,⁶ quien logró capitalizar a su favor a un grueso número de vecinos, detallados en el Apéndice Z-I, y antagonizar a otro numeroso grupo de intransigentes opositores del mismo, integrantes del clan de los Echenique, e íntimamente ligados a las actividades pecuarias en el Desierto del sud de Córdoba, detallados en el Apéndice Z-II.⁷ En cuanto a Buenos Aires, si bien careció hasta 1794 de un Consulado de Comercio propio, contaba con la presencia de Diputados elegidos por los Consulados de Lima y de Cádiz.⁸ En 1755 y 1756, a sugerencia del Gobernador José de Andonaegui y por orden del Virrey de Lima, se celebraron elecciones periódicas de Diputados.⁹ Por votar en ellas peninsulares y vecinos, ambos grupos alegaron el derecho al voto activo y pasivo. A dicho interminable conflicto puso fin el Gobernador Pedro Antonio de Cevallos suprimiendo la discutida magistratura, en perjuicio del Consulado de Lima, motivo por el cual comenzó el distanciamiento entre Cevallos y el Marqués de Valdelirios.¹⁰

La lucha política entre los Consulados.

Esta lucha política --primero a mediados de siglo, en las elecciones de los Diputados porteños de los Consulados de Comercio de Lima y de Cádiz, y más luego, a fines de siglo, en las elecciones de Diputados al Consulado de Buenos Aires-- se manifestaba entre todos los comerciantes de la carrera del Alto Perú y de Chile, y reflejaría también las contradicciones por la renta minera misma. A su vez, la lucha por el control del Situado Real (subsidio fiscal remesado por las Cajas Reales mayores a las Cajas Reales subsidiarias de las regiones periféricas), que se manifestaba entre los Diputados del Consulado de Comercio, reflejaría las contradicciones por la renta fiscal entre "burocracias" correspondientes a jurisdicciones administrativas antagónicas.¹¹

El Consulado de Lima tuvo por sus adictos en Buenos Aires y en toda la carrera del Alto Perú y Chile a un poderoso grupo de comerciantes, ligados entre sí con estrechos lazos de parentesco y de intereses políticos y mercantiles, que venía desde hace años lidiando con los Jesuitas y operando en el contrabando con la Colonia del Sacramento, mediante las remesas de plata y oro remitidas desde el interior del espacio colonial. Este grupo lo inspiraba el Marqués de Valdelirios y lo componían Domingo de Basavilbaso,¹² el General Antonio de Larrazábal,¹³ el Coronel de Milicias Manuel Antonio Warnes,¹⁴ Francisco Rodríguez de Vida,¹⁵ Juan de Lezica y Torrezuri,¹⁶ y Juan Francisco Bazurco.¹⁷ El Apéndice Z-III nos revela los estrechos vínculos que este grupo mantenía con numerosos clientes residentes en las cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile. Analizando la información de este apéndice hallamos muy pocas transacciones con los Corregidores de Indios residentes en el Alto Perú. En ese sentido, el Apéndice Z-IV nos revela las transacciones concertadas por dichos Corregidores.¹⁸

Por el otro lado, la comunidad mercantil de Cádiz ejerció una muy fuerte influencia en el desarrollo de las facciones políticas del que luego fuera el Virreinato del Río de la Plata. El grupo de comerciantes gaditanos era extremadamente numeroso alcanzando a casi un par de centenares.¹⁹ De entre ellos sólo tres (Antonio de Aguirre, Pedro Behic y Juan Antonio Herreros) asistieron en 1764 a la asamblea constitutiva de un cuerpo mercantil en Sevilla para luego ser elegidos Diputados por los comerciantes mayoristas nacionales y extranjeros.²⁰

La causa Jesuítica y la polarización de las elites.

Las estrategias disciplinarias inherentes a la organización de la Compañía de Jesús pueden haber ejercido un atractivo propio en las elites e incluso en aquellos miembros de la plebe que valorizaban el orden impuesto por la Contrareforma o Contra-reformación así como dificultado la penetración de la Ilustración o iluminismo español (Feijóo) y la implementación de las políticas secularizadoras de las Reformas Borbónicas. Con la expulsión de los Jesuitas, en 1767, las facciones o coaliciones político-mercantiles --que se habían inaugurado luego de la caída de Portobello (1742), la concertación de la Paz de Aquisgrán (1748), el Tratado de Límites (1750) y las Guerras Guaraníticas (1754-56)-- se polarizaron aún más de lo que ya estaban. Con el fin de hacer Alcaldes y ganar los Cabildos de seis ciudades de la Gobernación de Córdoba del Tucumán para sus planes de consolidación de la facción anti-jesuítica y de despojo de los bienes jesuíticos, el Gobernador Juan Manuel Fernández Campero,²¹ salió de Córdoba a principios de Diciembre de 1766.²² Para 1768, las conflictivas actitudes de Campero habían provocado en las provincias nortenas una extensa coalición de vecinos defensores de los Jesuitas.²³ En Jujuy, Campero había logrado desplazar al Justicia Mayor José Antonio de Zamalloa,²⁴ quien se hallaba aliado a un numeroso grupo de vecinos, listados en el Apéndice Z-V, desatando con ello una acción colectiva o rebelión que precipitó su caída.²⁵ De dicho listado del vecindario de Jujuy, compuesto de 23 vecinos, sólo cinco, Asevey, Gorriti, Muruaga, Zegada y Zamalloa, estuvieron ligados al comercio con Buenos Aires.

El caso de las provincias del norte.

Asimismo, Campero logró imponer en el Cabildo de Salta a los hermanos Juan Adrián,²⁶ Pedro Vicente,²⁷ y Antonio Fernández Cornejo y Rendón,²⁸ pero al precio de enemistarse con una facción integrada por otro numeroso grupo de vecinos, también listados en el Apéndice Z-V. De este listado, compuesto de 26 vecinos, sólo cuatro, Erquicia, Ojeda, Rioja y Viniegra, estuvieron vinculados al comercio con Buenos Aires. Y en el Cabildo de Tucumán el Gobernador Campero apoyó al clan de los

Aráoz, liderado por el Fiel Ejecutor Propietario Coronel Diego Ignacio Aráoz del Campo.²⁹ Como la implantación de la Real Renta de Tabaco y Naipes, al perseguir el cultivo clandestino de tabaco, perjudicó económicamente a la elite Tucumana, a partir de que la Presidencia de la Junta Provincial de Temporalidades recayera en 1774 en manos de Fermín Ruiz Poyo,³⁰ dicha elite fue compensada con el despojo de las tierras Jesuíticas: Julián Ruiz de Huidobro,³¹ con la estancia "El Rincón" (6 leguas cuadradas); Juan Antonio Aráoz,³² con la estancia "Carapunco" (4 1/2 leguas cuadradas), en Monteros; Francisco Javier Sánchez de la Madrid,³³ con el potrero "Río Blanco" (7 1/2 leguas cuadradas); Juan García Cárdenas,³⁴ con el Potrero de San Jenuario, entre Lules y Famaillá, y la suerte de Los Cardones de 1 1/2 legua cuadrada, uno de los tres desprendimientos del Potrero de Tafí;³⁵ Juan López Ríos,³⁶ con el Potrero de San Javier; José Silvestre de Ojeda,³⁷ con el Potrero Raco, en Trancas; y Fermín de Paz,³⁸ con los Potreros de Las Tipas y Angostura, también en Trancas.³⁹

El caso de Córdoba.

En Córdoba, meses después de la expulsión de los Jesuitas, Fernando Fabro, designado como Teniente de Rey de Córdoba del Tucumán por el Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán Francisco de Bucarelli y Ursúa,⁴⁰ y cohechado por el clan de los Allende, impuso en 1768 como Alcaldes a los patricios Joaquín de Mendiolaza,⁴¹ y Francisco de Armesto y Allende;⁴² y para 1769 a los europeos Phelipe Haedo y de la Sota,⁴³ y Melchor Otero.⁴⁴ Finalmente, en Buenos Aires, la facción pro-jesuítica, cuyos miembros eran conocidos por el apelativo de Sarracenos, detallados también en el Apéndice Z-V, carecía antes de la llegada de Cevallos de una cabeza visible. A juicio de Marilúz Urquijo (1988), con la llegada de Cevallos, y beneficiados con la libertad de comerciar con España, se agruparon a su alrededor Eugenio Lerdo de Tejada,⁴⁵ Miguel de Rocha y Rodríguez,⁴⁶ Pedro Medrano,⁴⁷ José Blas de Gainza,⁴⁸ Juan de Eguía,⁴⁹ Juan de Mansilla, Pedro José Doye, Manuel de Escalada Bustillo,⁵⁰ Juan Antonio Bustillo Cevallos,⁵¹ Juan Bautista de la Sala,⁵² Roque San Martín,⁵³ Miguel García de Tagle,⁵⁴ y muchos otros comerciantes residentes en Buenos Aires.⁵⁵ También el Apéndice Z-VI incluye entre sus partidarios a los testigos que se presentaron en su juicio de Residencia.⁵⁶ Según el Apéndice Z-VII este grupo Cevallista, denominado sarraceno, mantuvo estrechos vínculos con clientes residentes en las cabeceras de las provincias de las carreras del Alto Perú y de Chile. Por el contrario, otro numeroso grupo de vecinos comerciantes, listados en el Apéndice Z-VIII, ligados con los estancieros criollos, se agrupó detrás del Marqués de Valdelirios y del Gobernador Bucarelli.⁵⁷ Según el Apéndice Z-IX este grupo también mantenía estrechos vínculos con clientes residentes en las Casas Comerciales de la Metrópoli y en las cabeceras de las ciudades del Tucumán, Cuyo, el Alto Perú y el reino de Chile. La Tabla C-IV, correspondiente al tomo I, ilustra la nómina de mercaderes estancieros que se dieron en Buenos Aires a lo largo del siglo XVIII. El Apéndice Z-X nos brinda una lista comparativa de las familias involucradas en ambos bandos.

El partido ante-ministerial, partidario de la libertad de comercio.

Con la imposición del Reglamento de Libre Comercio (1778) y la Real Ordenanza de Intendentes (1782), las facciones o coaliciones político-mercantiles, que se habían iniciado antes de la concertación de la Paz de París (1763) y de la expulsión de los Jesuitas (1767), se consolidaron todavía aún más. A juicio del Gobernador del Paraguay Pedro Melo de Portugal, en un conflicto que mantuvo en 1784 con su Teniente Asesor Letrado, el Dr. Mariano Lorenzo Grambel,⁵⁸ en los cabildos y demás corporaciones empezaron a darse facciones o coaliciones que excedían las fronteras de un solo municipio.⁵⁹ Por ejemplo, el partido de gentes denominado por Melo ante-ministerial, partidario de la libertad de comercio, tenía en Asunción

"...una liga ofensiva y defensiva, con otros partidos que hay en esa Ciudad [Buenos Aires] y Chuquisaca, a fin de conseguir providencias favorables de todos los Tribunales para con ellos hacer frente a los que no son sus secuaces, y alucinar a los que protegen y representan papel entre ellos".⁶⁰

En esa liga, la facción ante-ministerial de Asunción habría estado aliada en Corrientes con la facción anti-jesuítica de los Casajús y en Buenos Aires con la del Marqués de Valdelirios, el Obispo Manuel Antonio de la Torre y los Gobernadores Bucarelli y Vértiz. El Apéndice Z-XI nos detalla la identidad de los miembros de esta facción en el interior del espacio colonial.

La facción ministerial, partidaria de las políticas mercantilistas.

Por el contrario, la que vendría a llamarse facción ministerial, partidaria de las políticas mercantilistas, se habría coaligado con las facciones antiguamente pro-jesuíticas, beatas, peluconas, sarracenas o conspícuas del interior del Virreinato. En esta otra liga, la facción ministerial se habría aliado en Buenos Aires con un grupo constituido por los partidarios de Cevallos, llamados sarracenos; los mismos que en 1778 habían sido castigados por el Rey por haber implorado la confirmación de Cevallos en el cargo,⁶¹ constituido por el cabildante Judas José de Salas,⁶² y los comerciantes y cabildantes Bernardo Sancho Larrea,⁶³ Manuel Martínez de Ochagavía,⁶⁴ Diego Mantilla y de los Ríos,⁶⁵ Miguel Mansilla,⁶⁶ Manuel Joaquín de Tocornal,⁶⁷ Pedro Díaz de Vivar,⁶⁸ Francisco Antonio de Escalada,⁶⁹ Cecilio Sánchez de Velasco,⁷⁰ Manuel Joaquín de Zapiola,⁷¹ y Juan Antonio de Lezica.⁷² Los Apéndices A-III y A-VI, correspondientes al primer tomo, detallan las conexiones de este grupo con el interior del espacio colonial. El siguiente Apéndice Z-XII nos detalla la identidad de estas vinculaciones correspondientes al interior de dicho espacio colonial.

La condición de extranjero.

La condición de extranjero agregaba uno de los elementos más conflictivos en la caracterización de un mercader. Por lo general, era una de las muletillas más comunes para excluir a algún competidor de los beneficios mercantiles. La presencia de comerciantes extranjeros, la mayoría Portugueses, en los mismos orígenes del Buenos Aires colonial dió lugar a intensas polémicas historiográficas. Mientras una historiografía liberal sostenía que estos comerciantes constituían una minoría oprimida, otra historiografía "nacionalista" opinaba que constituían una minoría opresora. Por el contrario, el que suscribe, en un trabajo publicado en 1985, sostiene que dicha minoría fué una minoría intermediaria en el proceso de mudarse de esa posición a una dominante.

Sin embargo, la xenofobia proteccionista, alimentada por el mercantilismo vigente entónces, cumplía --es preciso reconocerlo-- un rol obstaculizador en el funcionamiento normal del mercado interno, que inmovilizaba la estructura social colonial, haciendo de aquella remota mudanza social un acontecimiento efímero y fugaz. La Lista Z-I revela la nómina de los Portugueses entrados en Buenos Aires sin licencia y bajo fianza que se hallaban fugados. Pero la protección que las políticas xenofóbicas dispensaban era una protección al comercio monopolista y no a la producción. Era el mismo criterio que se seguía en la práctica de la política aduanera medieval, según el cual en la inmensa mayoría de los casos sólo tributaban los forasteros.⁷³ En el caso de Adrián Pedro Warnes,⁷⁴ ocurrido en 1729, Pedro Prieto Laso de la Vega, Caballero de la Orden de Santiago, pide se lo excluya a Warnes como consignatario de Guillermo Terry, una de las principales casas monopolistas de Cádiz, por ser hijo de extranjero holandés.⁷⁵ Veinte años más tarde, en 1752, se suscitó un sonado caso con

Juan Bautista Patrón,⁷⁶ un genovés, Capitán de un barco mercante, quien aunque desposó una criolla llamada Antonia Díaz Pimienta,⁷⁷ fué expulsado por extranjero.⁷⁸ En otro caso planteado en 1756 con motivo de declararse la insustancialidad de un instrumento de cesión otorgado por un irlandés, Patricio Lynch,⁷⁹ que vino de repostero en el navío La Lidia, el denunciante afirma que

"...ningún extranjero puede tratar ni contratar en estas partes vajo de las penas en ellas establecidas, ni igualmente poder ser apoderados de mercaderes para compras, ventas, cesiones, y finiquitos...por el fraude que se seguiría a la Real Hacienda que tan estrechamente les prohíbe todo género de trato y contrato, pues con el pretexto de apoderado simularían contratos en nombre de sus partes que en verdad eran suyos propios, viniendo a quedar el poderdante hecho un testafierro".⁸⁰

En el caso planteado por Francisco Mariño Barros,⁸¹ contra Bernardo Fuster,⁸² sobre pretender derecho a los efectos embargados por el Comandante de la Guardia de Pergamino Francisco Noguera, Mariño manifestaba en 1771 que el principal obstáculo para la administración de la justicia es "...ser yo extranjero, y en no serme lícito comerciar en esta ciudad por ser Puerto de Mar".⁸³ Si bien, Mariño agradece haber dado con un fiscal o denunciante que promueva los derechos de la corona, se pregunta "...¿está prohibido, que el extranjero cobre lo que se le debe?".⁸⁴ Si esto es cierto, como lo afirma Mariño, "...¿que duda tiene el contrario, en que yo aunque sea extranjero cobre un débito legítimamente causado, y sin perjuicio de la corona real?".⁸⁵ Es lícito que alguien que no tiene ninguna facultad, "...se tome las que sólo son privativas del Sr. Gobernador para censurar mi residencia, y mis cortas cobranzas?".⁸⁶

El poder de la burguesía mercantil monopolista estaba fundado sobre su capacidad para controlar el rubro más dinámico de su tiempo, el comercio a larga distancia de las mercancías europeas y la mercancía-moneda americana. Este control la colocó a la vanguardia del desarrollo mercantil dependiente. Pero, la progresiva y paulatina hegemonía de esta fracción, no presupuso que en este patrón de acumulación, los únicos beneficiarios serían exclusivamente los grandes comerciantes monopolistas. La alianza de grupos mercantiles organizada bajo la hegemonía de la gran burguesía comercial monopolista habría incorporado, en una posición subordinada cada vez que había paz entre España e Inglaterra, los intereses de otras minorías comisionistas de origen local. A través de estas alianzas, lograría redefinir un modo de inserción en la estructura comercial colonial permitiéndole obtener una cierta parte del excedente generado por este modelo de articulación lógica, entre producción y circulación.

La fundación de un Consulado de Comercio.

Para esa época, la Junta de Comerciantes y Mercaderes, convocada esporádicamente por el Virrey, se reunía para presionar por la fundación de un Consulado de Comercio. En 1785 se reunió nuevamente para elegir como sus autoridades: primero a un triunvirato integrado por Bernardo Sancho Larrea, Manuel Rodríguez de la Vega,⁸⁷ y Martín de Sarratea,⁸⁸ y luego a una comisión compuesta por otros quince mercaderes mayoristas para servir como comité consultivo de las tres autoridades elegidas previamente.⁸⁹ Recién en 1794, diez años después de dichas elecciones, fué erigido el Consulado de Comercio de Buenos Aires,⁹⁰ entrando su Junta de Gobierno a controlar el tráfico comercial con todo el interior, designando Diputados en cada cabecera de provincia, y quedando la antigua Junta de Comerciantes definitivamente disuelta. Pero en tiempos de las guerras napoleónicas, cuando el equilibrio político Europeo entró en crisis, a semejanza del macizo andino, el control que la metrópoli española ejercía en el Río de la Plata sobre su aparato estatal y su comercio distó de ser

monopólico. Es decir, para Malamud (1985) y Cooney (1986) las estrategias monopolistas habrían dejado de ser en tiempos de las guerras napoleónicas algo actual pasando a ser sólo algo puramente eventual. La lucha contra las estrategias monopolistas convirtiéndose entonces, en los prolegómenos de la Revolución de Independencia, en lucha contra una amenaza puramente potencial, pues en ese entonces prevalecía, en virtud de las franquicias del comercio con colonias extranjeras y el transporte en buques neutrales, una estrategia librecambista cuasi internacional. Las guerras entre España y Francia primero, y España e Inglaterra más luego, desatadas en 1791 y 1796, alteró entonces la privilegiada situación de los monopolistas porteños, al hacer aparición nuevos actores con motivo del permiso que la metrópoli se vió obligada a conceder primero a la Trata de Negros, personificada en el gran comerciante Tomás Antonio Romero,⁹¹ y sus colegas esclavistas Pedro Dubal,⁹² Nicolás Acha,⁹³ y Manuel Hermenegildo de Aguirre;⁹⁴ y segundo al comercio con Colonias Extranjeras y en buques neutrales,⁹⁵ personificados en comerciantes tales como Pedro Dubal, José De María,⁹⁶ Manuel Aguirre y Ventura Marcó del Pont.⁹⁷ Un año después, en 1797, se estableció que los hacendados, íntimamente ligados hasta entonces al contrabando, compartirían los cargos con los comerciantes en partes iguales, siendo estos últimos por lo general los dominantes, al estar apuntalados por el Cabildo porteño.⁹⁸ Finalmente, el Apéndice Z-XIII detalla la nómina de los Diputados del interior. Entre sus tareas tenían la de dirimir los conflictos entre comerciantes y la de controlar las extorsiones que los Cabildos y las Juntas de Comerciantes exigían tradicionalmente a los apoderados del Presidio de Buenos Aires. Entre ellas las contribuciones para las cinco corridas de toros que se practicaban anualmente y para la Festividad de Corpus Christi.⁹⁹

Este control comprendía también la elección del conductor del Situado, puesto que en Potosí, en la década del 50, estaba a cargo del Cabildo y de los Mercaderes de Plata;¹⁰⁰ y en la década del 60, en vista de los repetidos desfalcos, a cargo del Procurador de la Compañía de Jesús.¹⁰¹ Era tradicional que quienes detentaban las varas concejiles e integraban el Gremio o Junta de Comerciantes, influyeran en la designación de quienes conducirían los Situados con destino a Buenos Aires. Estas presiones para designar el Conductor del Situado, que sufría el Apoderado del Presidio de Buenos Aires de parte de los cabildantes y Oficiales Reales de Potosí, del Gobernador de Buenos Aires, de los Visitadores Generales, de los Corregidores, del Virrey del Perú y de los oidores de la Real Audiencia de Charcas, eran infinitas. La persona en quien recaía la designación de Conductor del Situado, por lo general, operaba en el negocio minero.¹⁰² Por ejemplo, Juan Francisco Uzal S.J., Procurador del presidio de Buenos Aires, no dudaba en Enero de 1753 que había en la selección del Conductor del Situado "...muchos empeños para sujetos de esta Villa [Potosí],...como Don Manuel Prego de Montaos,¹⁰³ Don Pedro Maquiriain,¹⁰⁴ Don Joseph de Lezica,¹⁰⁵ y otros, y aún los mismos Sres. Oficiales Reales con preferencia el Sr. Marqués de Casa Palacio".¹⁰⁶ Más luego el cargo de conductor del Situado fué subastado al mejor postor, habiendo sido sus detentadores en 1766 Gregorio de Zegada, entre 1780 y 1794 Tomás Antonio Romero, entre 1794 y 1795 Tomás Fernández de Betoño, y entre 1795 y 1800 Tomás Villota.¹⁰⁷ En la década del 90 la Junta de Comerciantes de Potosí había aprobado un Reglamento de Situados con 17 puntos en donde se estipulaban los términos, condiciones, fianzas, y obligaciones.¹⁰⁸ De flete el situadista cobraba entre 1/4% y 1/2% del valor de la remesa ganando de \$1.500 a \$4.000 en cada viaje.

La cláusula del Reglamento de Situados más objetada por el Consulado de Buenos Aires era la de que los situadistas debían ser, al igual que los Alcaldes ordinarios de su Cabildo, oriundos o residentes de Potosí. Esta cláusula generó toda suerte de animosidades en los comerciantes de toda la carrera entre Potosí y Buenos Aires, precipitándose finalmente el conflicto en el seno de la misma Junta de Comercio potosina.¹⁰⁹ Por un lado se hallaban los residentes Potosinos, propietarios de ingenios e integrantes del Gremio de Azogueros, seguidores de Indalecio González de Socasa,¹¹⁰ y por el otro un

grupo liderado por el comerciante, regidor y contador Juan de Ybieta y Endeiza.¹¹¹ El poder político de Socasa descansaba en el apoyo que le prestaba una numerosa facción compuesta por vecinos azogueros de Potosí así como por comerciantes de Potosí, Salta y Buenos Aires. Entre los salteños figuraba Pedro de Ugarteche,¹¹² y entre los Potosinos se contaban Manuel de Bulúcu,¹¹³ Juan Bautista Elorreaga,¹¹⁴ Nicolás Ponte,¹¹⁵ Nicolás Oliden,¹¹⁶ Francisco Zenavilla,¹¹⁷ y Joaquín Obregón Cevallos.¹¹⁸ Entre los porteños que apoyaban su grupo se encontraban Anselmo Sáenz Valiente,¹¹⁹ Juan Estéban de Anchorena,¹²⁰ Domingo de Ezcurra,¹²¹ y los Diputados del Consulado en Potosí Domingo Achúcarro,¹²² y Martín de Gainza.¹²³ Ybieta en tanto, estaba apoyado por los dueños de ingenios Gregorio Barragán,¹²⁴ y Joaquín de la Quintana;¹²⁵ los Diputados del Consulado en Chuquisaca Manuel Fernández de Alonso,¹²⁶ y Domingo Antonio de Achával;¹²⁷ los mercaderes porteños residentes en Potosí José Ramón de Ugarteche,¹²⁸ Manuel Alejandro Obligado,¹²⁹ Ramón de Aramburu Zavala,¹³⁰ Juan González y Torres y José Miguel de Tagle,¹³¹ y los comerciantes minoristas Antonio González de Ortega, Gerónimo Tudó,¹³² y Miguel de Amatller.¹³³ Finalmente, en vísperas de la revolución de independencia los sobornos a la elite capitular de Potosí devinieron en una corrupción abierta, con cómplices en toda la carrera de Potosí a Buenos Aires.¹³⁴

Las contradicciones por la renta minera se reflejaron también en la luchas que se dieron en el seno de las Diputaciones del interior y del Consulado de Comercio de Buenos Aires por conducir el mineral amonedado, de plata y oro, hasta los puertos de salida. Si bien las contradicciones entre los intereses del capital comercial gaditano y limeño se resolvieron a favor del primero, las contradicciones entre los intereses del capital agro-minero y los intereses del capital comercial no alcanzaron a resolverse en el siglo XVIII. La abolición de los repartos mercantiles habría perjudicado a la clase azoguera altoperuana, la cual solía financiar sus empresas mineras con el crédito otorgado por los Corregidores, y en su lugar beneficiado al grupo de comerciantes monopolistas porteños. Dicha abolición habría alimentado la mayor parte de los conflictos suscitados en la Junta o Gremio de Azogueros y en el Cabildo de Potosí en la segunda mitad del siglo. Sin duda, en esta fractura de la unidad minero-exportadora reside la raíz de la impotencia de los patriciados Altoperuanos, la consiguiente fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de la segregación boliviana.

En suma, podemos aseverar, a la luz de lo aquí relatado, que las alianzas y rivalidades políticas a lo largo y ancho de todo el virreinato, que ocurrían en las corporaciones del estado colonial (Cabildos seculares y eclesiásticos, Universidades, Gremios y Cofradías), tenían como substrato material las sociedades y compañías articuladas por el capital mercantil invertido en el comercio de larga distancia.

NOTAS

¹ ver Caillet-Bois, 1929 y 1939; y Maniquis, et. al., 1989.

² Ver Saguier, 1991a, 1991b, 1991c, 1991d, y 1991e.

³ Gaspar Munibe y Tello, nacido en Huamanga, Perú, en 1711, y fallecido en 1793. Redactor del Mercurio de Lima. Protector de los contrabandistas de la Colonia del Sacramento (Carbonell, 1992, 276). Testigo del matrimonio de Blas Gascon con Tomasa de Arce y Báez, viuda de Juan de Vargas Macías (JR, 1989, ítem 4241). Probablemente primo o tío del Conde de Peñaflorida, Francisco Xavier María de Munibe e Idiaquez, autor de El borracho burlado (1764), ópera cómica en castellano y vascuence.

⁴ Entre otros imputados, el Diputado del Comercio Francisco Pérez de Saravia fué acusado por Ceballos de contrabandista, pues habiendo llegado a Buenos Aires en calidad de criado del Gobernador Andonaegui "...no tuvo otro ejercicio que el de contrabandista, con tanto exceso y descaro, que con dificultad tendría ejemplar". También fué acusado de haberse quedado en su calidad de albacea con los bienes de la testamentaría de Juan Antonio de Alquizalet. Fué condenado en 1766 a ser confinado a la Isla de la Piedra (Barba, 1978, 224; y 1980, 60). En 1767, Juan Conde declaró que "...deseando quitar los remordimientos de su conciencia y que no le coja la muerte sin hacer lo que debe como buen cristiano, ha determinado declarar que en la causa que al Cap. de Infantería Francisco Pérez de Saravia le hizo el Exmo. Pedro de Cevallos suponiéndole muchos delitos y haciéndole padecer una rigurosa prisión, entre otros testigos que fueron solicitados fué uno el compareciente en los términos que va a referir, movido de su conciencia y sin que para hacerlo tenga otra idea que el sosiego de su espíritu= a los dos días...de la prisión del referido Don Francisco le dixo Don Pedro Ximénez que Don Roque de San Martín le llamaba como así fué... a su casa en la cual el citado San Martín expresó, como el había sido empeño con su...mencionado Conde saliese de la prisión de la ciudad de Montevideo de donde acababa de llegar, y que era preciso fuese a dar una declaración contra dicho Saravia a la quinta donde estaba S.E. y que sino lo hacía conforme quería y era gusto de S.E. se echaba a perder todo lo que había trabajado a su favor, y volvería a estar preso en Montevideo, instándole para que lo ejecutase, porque así le convenía, y como no tenía ninguna cosa que decir contra el referido Saravia se fué afligido y comunicó lo que le pasaba al citado Ximénez, quien le consoló y expresó que podía ir, pues ya el había asegurado que el mencionado Conde no sabía cosa alguna de lo que se solicitaba y así se encaminó a la Quinta donde estaba S.E. el que lo recibió con grandes cariños y empezó a proponerle que el mencionado Saravia era un hombre muy malo, relacionando muchísimos delitos de amancebado, escandaloso, de contrabandos y de pleitos y enredos, diciendo que tenía escandalizada y alborotada la ciudad, con otras infinitas cosas que le dijo asegurándole que todas ellas la sabía el referido Conde y las ha de declarar porque así era preciso, mostrando la mayor pasión y enojo contra el citado Saravia y que si el declarante le daba gusto en ello, lo había de perder para siempre, y en medio de tan terribles amenazas, le respondió que no sabía nada de lo que S.E. le preguntaba y decía, pidiéndole que por amor a Dios se apiadase de él, y luego S.E. pasó a preguntarle y decirle que el citado Saravia se carteaba con el Sr. Brigadier José Joaquín de Viana, y que...también se mezclaba en contrabandos, y a esto le respondió lo mismo, de que era falso, y ultimamente le aseguró que Saravia había sido introductor de un contrabando que el año de sesenta se descargó por el Bajo, y dueño de unos cueros de una lancha que embargó Don Alonso Cerrato en las Barrancas del Riachuelo de esta Ciudad y que era preciso lo dijese. Y habiéndole dicho Sr. de esa hacienda eran dueños otros y Don Francisco Saravia no tenía en ella nada. A lo que replicó S.E. de nadie quiero saber sino asegurarle a ese pícaro de Saravia todo lo qual pase entre S.E. y dicho Conde, en la sala de su habitación, ofreciéndole que no se sabría mandándole fuese a una... que está en el corredor de dicha quinta, en el que se hallaba solamente Don Pedro Medrano, quien le previno que tenía que declarar y que lo hiciese interrogándole por un pliego de papel escrito con muchas preguntas, a todas las cuales respondió que no sabía, y hace memoria que también le preguntó por el contrabando que va dicho, de la hacienda que el año de sesenta se descargó por el Bajo, y de los cueros que el mismo año embarcó en una lancha Cerrato, y a estas dos preguntas respondió que era verdad, que dicho Saravia fué conciente; pero que en la Hacienda creía no tenía interés ni que se había puesto en su casa, cosa alguna de ella; porque sabía y le constaba al declarante, que su dueño era Don Manuel de Abarrategui y otros que introdujeron y llevaron a esconder por la calle de Santo Domingo para arriba, y los Cueros bajaron los Oficiales Reales, y mandaron que con su guía siguiese a un Navío de Registro de Don Manuel de Borda para donde hiban, no teniendo en uno ni otro el mencionado Saravia intervención; pues solo se ocupaba en saber por el declarante y por otros lo que hacían los portugueses en las Murallas de la Colonia y la tropa y municiones que venía a ella; a

todo lo qual fué escribiendo dicho Medrano, como que allí no había otra persona,...debe confesar que es falso que dicho Saravia fuese conciente de lo cual desde luego se retracta; pues se lo dijo así, fué temeroso de las amenazas que le hizo S.E. y por no volver a padecer más prisiones. Asimismo confiesa que desde el año de cinquenta, que entró de corsario contra el Comercio ilícito de este Río, armado por el Sr. Gobernador de Montevideo don José Joaquín de Viana, conoce al expresado Don Francisco Pérez de Saravia y no le ha ocupado ni oído decir se mezcle en contrabandos (AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.71-73).

⁵ Acevedo, 1972; Marilúz Urquijo, 1987, 47-83; y Tjarks, 1962.

⁶ Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (LC, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). Falleció en enero de 1775 (Acevedo, 1972, 265).

⁷ Acevedo, 1972, 259.

⁸ Marilúz Urquijo, 1987, 77.

⁹ Barba, 1978, 95.

¹⁰ Marilúz Urquijo, 1987, 78-80.

¹¹ Cuando los Mercaderes de Plata de Potosí defraudaron las expectativas de las burocracias periféricas el control del Situado respectivo cambiaba de manos (Saguier, 1989, 287-317).

¹² Capitán de Milicias de Caballería, Tesorero Mayor de la Iglesia Catedral. Nació en Villa de Orozco, Vizcaya, hijo de Domingo de Basavilbaso y Mujica y de María Rosa de la Presa y Ereynosa; marido de María Ignacia de Ortubia y Toledo; suegro de Vicente de Azcuénaga, Pascual Ibáñez de Echavarry, Domingo Ignacio de Urien, y José Ignacio de Merlos (Fernández de Burzaco, I, 245; y Jáuregui Rueda, 1987, ítem 2272). Con su hijo Manuel, Marcos José de Riglos y Juan Gregorio de Zamudio figura entre los que deponen contra la Compañía de Buenos Aires, formada por Francisco de Mendinueta, Pedro de Astruarena e Iturralde, y José de Aguirre y Acharán, en la Información levantada por el Cabildo de Buenos Aires (Mariluz Urquijo, 1989, 128).

¹³ Nacido en Portugalete, Vizcaya, hijo de Miguel de Larrazábal y de María Antonia de Basualdo; marido de Agustina Avellaneda, porteña, hija de Gaspar de Avellaneda y de Juana de Labayén; y suegro de Martín José de Echauri, Juan de Otárola, José Antonio Iturriaga, José Fernández, el Gobernador de Tucumán Gerónimo Matorras, Martín de Arráiz y Pablo de Aoíz (FB, 1989, IV, 113 y 298; y JR, 1987, ítem 1415).

¹⁴ natural de Cartagena; hijo de Patricio Benito Warnes y de Juana María Durango; sobrino de Adrián Pedro Warnes y Sabina Sorarte. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con María Josefa Benedicta Arráez y Larrazábal, hija de Martín de Arráez y de Tomasa Larrazábal, y sobrina de su socio Antonio Larrazábal; y segundas nupcias con Ana Jacoba García de Zúñiga, hija del Regidor Perpetuo Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar; con cuñado primero del Regidor de Potosí Felipe Santiago de Arce, y luego de Juan Angel Lazcano, y de los Coroneles Juan Ignacio de Elía y José María Calceite; y suegro del Capitán Carlos Joaquín Vivero, de Juan José Ballesteros, del Dr. Bernardo Campusano, del Teniente de Navío Baltasar Unquera, de Joaquín Prieto y Vial, y de su cuñado Juan Francisco García de Zúñiga, marido de Francisca de Warnes y Arráez (FB, I, 162 y 214; II, 48; III, 153; V, 243; y VI, 213 y 295; y JR, 1989, ítem 5246).

¹⁵ Alguacil Mayor del Santo Oficio de la Inquisición, Síndico de los Conventos de San Francisco y Monjas Capuchinas, nacido en Villa de Cabra, Andalucía; hijo de Diego Rodríguez de Vida y de Josefa de Mendoza y Palomeque; marido de Josefa Navarro, nacida en Córdoba, hija de Luis Navarro y Petrona Meneses; padre de Francisco Javier Rodríguez de Vida; y suegro de José de Astuena, Manuel Alfonso de Sanginés, María Josefa de Roo y Cabezas y María de la Concepción Conget y Giles Bravo (FB, V, 391-392; y JR, 1987, ítem 2145; y 1989, ítem 5469).

¹⁶ Hijo de Juan de Lezica y de María de Torrezuri, vecinos de la Anteiglesia de Cortezubi; marido de María Elena de Alquiza y Peñaranda; suegro de Manuel Joaquín de Zapiola, Francisco Seguro y Pablo Ruiz de Gaona; tío carnal de Juan Antonio de Lezica y Ozamiz, quien fuera marido de Rosa de la Torre Tagle; y tío político de José de Endeyza y Alvear y de Francisco Javier de Riglos (Cortabarría, 1987, 53-96; y FB, IV, 144).

¹⁷ Hijo del Capitán Francisco Bazurco, natural de Motrico, Guipúzcoa, y de Juana María de Herrera y Labayén; hermano del Obispo de Buenos Aires Dr. José Antonio Bazurco; y cuñado de Ana Rodríguez de las Varillas (FB, I, 252; y JR, 1987, ítem 1128).

¹⁸ muchas más transacciones que no fueron registradas notarialmente se podrían hallar si se rastrearán los poderes especiales para cobrar librados por los comerciantes porteños.

¹⁹ Exactamente tengo registrados 183 comerciantes gaditanos, en el Apéndice A-I, de un trabajo inédito del autor, titulado "La Articulación comercial del espacio colonial Rioplatense. Las presiones mercantiles y el Reparto Forzoso".

²⁰ Tinoco Rubiales, 1982, 273.

²¹ Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco. Sobrino del Brigadier Diego de Hesles Campero, Secretario del Virrey del Perú. Marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, y padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero; sobrino de Alexo Martierena del Barranco, nacido en Pasajes (Guipúzcoa), y de la II Marquesa del Valle de Tojo Manuela Micaela Fernández Campero; y primo hermano del III Marqués del Valle de Tojo Juan José de Martierena y Campero (Cutolo, II, 74; y III, 50; Lohmann Villena, 1947, II, 377; y Acevedo, 1969, 94). Según Acevedo (1969), Campero utilizó la expulsión de los Jesuitas como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969, 117).

²² "...caminando en coche anduvo la Provincia que abraza sobre 400 leguas en 23 días, en cuyo viaje, como dijeron varios, ocasionó más daño a la Provincia, a excepción de no derramarse sangre, que han podido hacer los indios infieles en 20 años; pues con sólo decir, que para el tránsito de un monte y serranía intransitable, ocupó centenares de hombres, unos en cargar el coche, y otros en desmontar y cargar faroles, porque caminaba sin cesar de día y de noche, y sin pagar cabalgaduras, trabajo, herramientas ni aún bastimento que cada uno debía llevarlo" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

²³ Learte, 1926, capítulos XIII y XIV.

²⁴ Bidondo, 1983.

²⁵ Acevedo, 1969, 98.

²⁶ Dueño de Campo Santo, introductor de la caña de azúcar, casado con Clara de la Corte y Rosas, dueño de la estancia Campo Santo e introductor de la caña de azúcar, padre de Gaspar, Juan José, casado con Gertrudis Medeyros, José Antonino, y Francisco María Fernández Cornejo, y suegro de Lorenzo de Goyechea (AC, 1972, 20).

²⁷ Miembro del Cabildo de Salta en 1778, casado con Rosa Zeballos, y padre del Sargento Mayor Tiburcio Cornejo, casado en primeras nupcias con Ventura Boedo, y en segundas nupcias con Petrona Zenarruza (AC, 1972, 14).

²⁸ Alcalde de Salta en 1778, casado con María Teresa Castellanos y Arias Velázquez, hija de Pedro Francisco de Escobar Castellanos y de María Arias Velázquez, padre de Gabino Fernández Cornejo, casado con María del Carmen Torino, Sinforoso Fernández Cornejo, casado con Josefa San Millán, y Justo Pastor Fernández Cornejo, marido de Evarista de Elgueta; y suegro de Antonio Pardo, de Francisco Xavier Figueroa y Toledo Pimentel, de Gaspar Fernández Cornejo, y de Juan Pablo Arias Rengel (AC, 1972, 107).

²⁹ Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán. Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila; hermano de Bartolomé Santos, Ignacio Inocencio y Juan Gregorio Aráoz; marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo; cuñado de Francisco Solano, Domingo, y Juan José de Paz y Figueroa; y conculado de Gaspar de Goncebat y del Maestre de Campo Roque Jacinto López de Velazco (CC, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Era padre de Pedro Antonio Aráoz, del R.P. Diego Miguel Aráoz, Cura Vicario de Monteros, y del Dr. Miguel Ignacio de Aráoz, Cura de la Iglesia de Famaillá. Según el Cura apóstata Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio de Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Sus hijos se enfrentaron entre sí duramente a raíz de la herencia del padre.

³⁰ Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las Muñecas Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y

de Catalina Sánchez de la Madrid (Calvo, 1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo demandan por mal desempeño en sus funciones de Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15). Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor que estaba en la Sacristía, por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo dicho Poyo para su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas a las Estancias dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo y del Vicario [Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

³¹ Marido de Mercedes Aráoz de la Madrid, hija de Miguel Araoz y de Catalina Sánchez de la Madrid, y concuñado de Juan José de las Muñecas y Francisco Díaz Vélez (Díaz de Molina, 1946-47). Padres de Dolores Ruiz Huidobro, mujer del Gobernador de Tucumán Clemente Zavaleta, hijo de Prudencio Zavaleta y Maria Agustina de Indá y Tirado (Cutolo, VII, 1969).

³² Hijo de Miguel de Aráoz y Echávez, y de Catalina Sánchez de la Madrid y Villafañe; hermano de Miguel Ignacio, del Coronel y Comandante de Armas Francisco Xavier, del Presbítero Francisco de Borja, de Pedro Nolasco, y de José Manuel Aráoz; y cuñado de Julián Ruiz Huidobro, de Juan José de las Muñecas, y de Fermín Ruiz Poyo (CC, I, 1936, 68). Era marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez, hija de Lucas de Córdoba y Figueroa Mendoza y de Josefa Gutiérrez Pérez Palavecino; hermana de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, y marido de Manuela Deheza y Helgueros; cuñada de José Colombres y Thames; y tía del Obispo y Congresista de Tucumán e introductor de la caña de azúcar Monseñor José Eusebio de Colombres, y de Francisco y Santiago Colombres, casados con las dos hermanas Trinidad y Tadea de Alurralde y Avila (CC, III, 199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82; y Murga, 1979, 223-228). Eran padres de María Agueda Aráoz, mujer del Dr. Juan Venancio Laguna, hijo del Alcalde Miguel Laguna y de Francisca Bazán; de Catalina Aráoz, desposada en 1800 con Miguel Sánchez de la Madrid; de Pedro Aráoz, marido de Dionisia de Usandivaras Figueroa; y de Miguel Jerónimo Aráoz, marido de Inés de Usandivaras Figueroa; y padres del que fuera caudillo de Monteros y Gobernador de la República de Tucumán Bernabé Aráoz, fusilado por Francisco Javier López Molina, y casado con Teresa Velarde Villafañe, hija del Interventor de la Renta de Correos de Tucumán y Diputado del Comercio por el Consulado de Buenos Aires Don José Velarde y de María Teresa Villafañe (Avila, 1920, 62, 91 y 94; Jaymes Freyre, 1911; CC, I, 71; y Cutolo, I, 191).

³³ Alcalde Provincial de la Ciudad de Tucumán (AGN, Justicia, Leg.12, Exp.268). Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán; hermano de Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid, mujer de Francisco Xavier Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5); marido en primeras nupcias de Claudia Aráoz, hija de Bartolomé Santos de Aráoz y del Campo, y de Catalina de Echávez y Elorriaga; y en segundas nupcias, en 1758, de Clara de Paz, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de Paz y de Gregoria Aguirre; cuñado de Diego de Villafañe y García de Valdés; padre de José Manuel La Madrid; y tío político de Cayetano Rodríguez y de Cayetano Fernández Moure (Avila, 1920, 62, y 99; y Corominas, 1987, ítem 181). Dueño del Potrero Río Blanco, por compra a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).

³⁴ Español, nacido en 1732 en la Villa de Huelva, arzobispado de Sevilla, hijo de Melchor García y de Ana de Baesa de Cárdenas. Contrajo primeras nupcias con Eugenia Indarte, y segundas nupcias

con María Trinidad Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Álvarez de Toledo. Era conuñado del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez; y suegro de Miguel Pérez Padilla, del boticario Hermenegildo Rodríguez, y de José Fermín Molina (Corominas, 1987, ítem 204; Avila, 1920, 87 y 101; y Padilla, 1987, 90). Dueño del Potrero de San Jenuario, por compra a las Temporalidades de los Jesuitas Expulsos (Avila, 1920, 255). En 1778 se ordena al Cabildo de Tucumán se lo confirme como Regidor (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). En 1785 litiga el título de Regidor y en 1808 renuncia al mismo (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). Para el abogado Juan José Mariano Barón del Pozo, la casa del dicho Cárdenas "...es una de las de mayor recogimiento, y que dá exemplo a todas las demás en la crianza y educación de la familia, y así el dicho García, como su mujer, son unos vecinos de acreditada virtud y honradez (AGN, Tribunales, Leg. 142, Exp.9, capítulo 83)

³⁵ Santamarina, 1968, 25-28; y Avila, 1920, 250-259, citados por Rosenzvaig, 1986, 140.

³⁶ Natural de la Villa de Espinosa de los Monteros, en el Arzobispado de Burgos, hijo de Manuel López y de María Ríos, casó en 1759 con (Lorenza) Ignacia Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieira). Era también conuñado del Capitán José de Molina, de Fermín Texerina, y de Francisco Xavier Villafañe (Corominas, 1987, ítem 118, 156, 196, y 214).

³⁷ Subdelegado de Real Hacienda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez, casado en 1760 con Teresa Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Álvarez de Toledo, conuñado del Regidor Juan García de Cárdenas, y suegro del poeta popular Francisco Camboño y del Capitán José Pascual Alurralde (Corominas, 1987, ítem 204; y AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 398). Era Camboño primo del reo Agustín Fabeyro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 399). Ojeda era dueño del Potrero de Raco (Avila, 1920, 255).

³⁸ hijo del Tte. Gobernador de Santiago del Estero y Encomendero de Sumaná Juan José Paz de Figueroa e Ibáñez del Castrillo y de Melchora de Sosa. Casado con su prima hermana María Josefa Goncibat y Paz, hija de Gaspar de Goncibat y de Josefa Paz de Figueroa e Ibáñez del Castrillo, y padre del Gobernador Juan Benjamín Paz, casado con Plácida Mariño Castro.

³⁹ AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6)

⁴⁰ Bucarelli se consideraba Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán a partir del recibo de la orden en que se le mandaba expulsar a los Jesuitas (Acevedo, 1969, 110). Carecía de vínculos de parentesco con familias locales. Para más detalles ver Díaz Trechuelo et.al., 1967, 385-658.

⁴¹ Hijo de Gaspar de Mendiola, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí. Casó con Teresa de las Casas y Ponce de León, hija del Maestre de Campo Ignacio de las Casas y Jaime y de Teresa Ponce de León y Bazán de Pedraza, y cuñada del Alcalde Marcos Ascasubi. Era hermano de Fr. José Ignacio de Mendiola, y conuñado de Santiago de Allende y Losa (LC, II, 151).

⁴² Hijo de Francisco Armesto y de María de Allende y Losa (LC, I, 27). Casado con Petrona Garay (Allende Navarro, 1964, 85), padres de Felipe Armesto y de Luisa Armesto y Garay, mujer de Mariano Moyano Cornejo, hijo este último de José Lorenzo Moyano Cornejo y de Antonia Pacheco y

Agüero (LC, I, 449). Estaba Francisco Armesto en el tercer grado de parentesco con sus tíos. Francisco Armesto y Allende era propenso a mantener pleitos por tierras con numerosos vecinos. En 1774 le dijo en un oficio al Alcalde de Córdoba que "...consta haber recaído en mí el derecho a las tierras de estancia" de San Antonio, a 8 leguas de Córdoba, en el Paso de la Cruz, que fueron de Doña Isabel de Mercado, y que hubo Armesto por compra que hizo al Monasterio de Santa Catalina de Sena (AHC, Escribanía N.1, Leg. 389, Exp.5). En 1775 mantuvo un pleito por tierras con Juan Ramallo (AHC, Escribanía N.3, Leg.23, Exp.3), y en 1777 fué demandado en un pleito de tierras por Luisa Gutiérrez (AHC, Escribanía N.1, Leg.389, Exp.5). Al fallecer Mariano Moyano en 1797 le deja bienes a su hijo Felipe Armesto (AHC, Escribanías N.1, Leg.427, Exp.8).

⁴³ Natural de Santander, casado con María Mercedes Roldán y Allende, hija del Comisario General Bernardo Roldán y de María Allende y Losa, y prima hermana del Coronel Santiago Alexo de Allende y Mendiolaza y del Caballero de Carlos III Don Pedro Lucas de Allende Vicentelo. Phelipe de Haedo y Mercedes Roldán eran padres de Tiburcia de Haedo y Roldán, mujer de José Paz de Codecido, padres a su vez del autor de las célebres Memorias, General José María Paz (LC, 1936, I, 27; y CC, 1939, IV, 169). También eran padres de María Josefa Pía Haedo y Roldán, mujer de José de Leániz y Luján de Medina, y abuelos de María Mercedes Leániz y Haedo, mujer del que fuera Gobernador de Córdoba Manuel Estéban Pizarro y Liria (AN, 1964, 81). Era poseedor de una valiosa biblioteca personal (Furlong, 1944, 67).

⁴⁴ En 1762 se lo procesa por contrabando de negros esclavos, en 1771 es asesinado por el negro Lorenzo, esclavo del Gobernador de Tucumán (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.216, Exp.4, fs.48v.), y en 1776 se le abre su sucesión (AHC, Escribanía N.2, Leg.31, Exp.1; Leg.52, exp.9; y Leg.57, Exp.6).

⁴⁵ Nacido en Nájera, La Rioja; y casado con María Josefa Bustillo de Zevallos, hija del Capitán Ignacio Bustillo de Zevallos y de Ana Domínguez Ravanal. Era según Fernández de Burzaco compadre del Gobernador Gerónimo Matorras, y según Acevedo (1969), primo de Matorras (FB, II, 135; y IV, 138; y Acevedo, 1969, 210).

⁴⁶ abogado de la Real Audiencia de Charcas. Fué acusado por Sabina Sorate, viuda de Francisco Pérez de Saravia, de manejar por medio de los religiosos de la Compañía de Jesús "...los negocios más arduos de aquel gobierno, siendo hombre de tan perversas inclinaciones y de tanta audacia que tuvo el atrevimiento de trabajar un folleto [replicado por el Provisor del Obispado Juan Baltasar Maziel] intentando demostrar que los señores Reyes de España no eran legítimos soberanos de los Pueblos de Indios del Uruguay, y que por esta causa no pudo el Rey Fernando VI cederlos a la corona de Portugal" (Barba, 1978, 226; y AGN, Sala IX, Criminales, Leg.5, Exp.11, fs.22-26). El motivo principal de su salida de Charcas "...fue el de haber llegado a traslucir los Sres. Don Francisco Xavier de Palacios y Pheliz de Llano, Oidores desta Audiencia, el descubrimiento de varias confianzas que tuvieron del dicho Rocha por la satisfacción con que le trataban (especialmente el Sr. Llano que fue su compañero en la familia del Difunto Sr. Arzobispo Don Agustín Rodríguez), lo que le hizo tan odioso que recelando Rocha lo perseguirían luego que se supiesen sus declaraciones hechas en la pesquisa que actuó el Sr. Presidente Don Francisco de Pestaña contra los Ministros [de la Real Audiencia de Charcas] de Orden de Su Majestad dispuso su viaje para el distrito de la Audiencia de Chile, que dirigió después a Buenos Aires, adonde lograba una estimación que nunca tuvo en la Ciudad de La Plata, y especialmente su mujer por ser de vil clase e hija de un Notario Eclesiástico Jose de Arteaga" (AGN,

Sala IX, Criminales, Leg.6, Exp.4).

⁴⁷ Oficial Real de las Reales Cajas, nacido en Navarrete, Logroño; hijo de Pedro Medrano y de la Plaza y de María de Otárola; marido en primeras nupcias de Micaela Montaner, hija de Bartolomé Montaner y de Margarita de Oliva Jofré; y en segundas nupcias de Victoriana Cabrera, hija de Francisco Cabrera y de Antonia de Saavedra; padre del Obispo de Buenos Aires Mariano Medrano; compadre de Martín de Sarratea, Mateo Ramón de Alzaga, el Alférez A. Jaramillo, Manuel Gutiérrez, Francisco Cabrera, y Bernardo Sancho Larrea; y suegro de José María Romero (FB, IV, 309; y JR, 1989, ítem 5207).

⁴⁸ nacido en San Sebastián, Guipúzcoa, hijo de Pedro de Gainza Mendizábal y de Teresa de Luysa; sobrino de Agustín de Leyza, y marido de María Teresa de Eguía y San Martín, hija de Juan de Eguía y de Gerónima Isabel de San Martín (FB, II, 273; y III, 103).

⁴⁹ marido de Gerónima Isabel de San Martín, hija de Juan Ignacio San Martín y de María Rosa Avellaneda; y compadre de Antonio de Larrazábal, Juan de San Martín y Pedro de Lea (FB, II, 273).

⁵⁰ Nacido en las Montañas de Burgos, Valle de Castañeda, Santander, tuvo con Luisa de Sarria, natural de Santiago de Chile, un par de hijos naturales a quienes reconoció:

a) Francisco Antonio de Escalada, marido de María Gertrudis Bustillo de Cevallos;

y b) Antonio José de Escalada, marido en primeras nupcias de Petrona de Salcedo y Silva, sobrina del Gobernador y luego Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, y en segundas nupcias de Tomasa Francisca de la Quintana y Aoíz (FB, II, 285 y 286)

⁵¹ Oriundo de las Montañas de Santander, casado con Isabel Nicolasa Marín, hija de Antonio Pablo Marín y de Antonia Rian; suegro de Francisco Antonio de Escalada (FB, I, 326); y tío carnal de José Manuel Bustillo de Zevallos, marido de Juana María Ibáñez Basavilbaso; y célebre por el público amancebamiento que cultivó en Oruro con Manuela Camacho y Pinto, la hija del Maestre de Campo Sebastián Martínez Camacho (Socolow, 1987, 219-220).

⁵² Caballero del Hábito de Santiago, natural de Monein, Bearne, Bajos Pirineos; hijo de Pedro de La Sala y de María de Bachaulet; marido de Juana Agustina Fernández de Larrazábal, hija de Juan José Fernández de la Cruz y de Manuela Ursula Francisca de Larrazábal; sobrino político de José Antonio de Iturriaga; y suegro de Miguel Fermín de Riglos y de Ramón de Oromí (FB, IV, 116; y V, 78; y JR, 1989, ítem 4316).

⁵³ Hijo del Maestre de Campo Juan Ignacio de San Martín y de María Rosa de Avellaneda; cuñado de Juan de Eguía y de Marcos José de Riglos; y socio de Pedro de Arriaga (FB, VI, 40).

⁵⁴ Hijo o sobrino del rico comerciante Melchor García de Tagle. Fué Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Buenos Aires (Socolow, 1987, 77). Marido de Cayetana Josefa de San Román de Illescas, y compadre de Martín José de Altolaquirre y Martín de Sarratea (FB, III, 151).

⁵⁵ Marilúz Urquijo, 1988, 31.

⁵⁶ Barba, 1978, 212.

⁵⁷ Barba, 1978, 222. La indignación causada por la Compañía de Jesús fué provocada entre otros

motivos por la expulsión que sufriera de sus filas el cura Bernardo Ibáñez de Echavarri (Furlong, 1933).

⁵⁸ Lamentablemente no he hallado biografía alguna de este interesante personaje.

⁵⁹ Dicho conflicto versó acerca del fuero militar de los Milicianos Paraguayos que ejercían el comercio con las provincias de abajo.

⁶⁰ Pedro Melo de Portugal al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 12-IX-1784 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1).

⁶¹ Lynch, 1967, 197; y Socolow, 1978, 123. Dichos capitulares fueron Judas José de Salas, Bernardo Sancho Larrea, Manuel Martínez de Ochagavía, Diego Mantilla y de los Ríos, Miguel Mansilla, Manuel Joaquín de Tocornal, Pedro Díaz de Vivar, Francisco Antonio de Escalada, Cecilio Sánchez de Velasco, Manuel Joaquín de Zapiola y Juan Antonio de Lezica (Barba, 1978, 303). Es interesante observar que en oportunidad de ser designado el nuevo Virrey del Río de la Plata circulaban en Buenos Aires toda clase de rumores. En carta a Dámaso Padrón, residente en Córdoba, Francisco Gutiérrez de Cevallos le comentaba que "...lo se dijo que el Sr. Vértiz, después que el Sr. Cermeño, se olvidó este y se trató del primero, y ultimamente se ha dicho de ayer acá que el Sr. Rudecindo Tilli, Comandante de Artillería, le ha de suceder: Yo no se de donde salen estas noticias por que S.E. a nadie lo comunica aunque me temo que el Sr. Vértiz sea el que quede (que Dios no lo permita) por que la Casa de Ustáriz ha hecho grandes esfuerzos para este logro en la Corte aunque el ha manifestado mucha oposición" (Francisco Gutiérrez de Cevallos a Dámaso Padrón, Córdoba, 16-II-1778 [AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp.71, fs.65]).

⁶² Hijo del Fiscal de la Real Audiencia de Charcas José Perfecto de Salas y de María Josefa Corvalán; cuñado del chileno José Antonio de Rojas; y primo hermano de los Corvalán de Castilla, una de las "tres casas reinantes" de Cuyo (Amunátegui Solar, 1925, 185-272; y Comadrán Ruiz, 1962, 42).

⁶³ Bautizado en La Rioja, Castilla la Vieja, hijo de Juan Sancho Larrea y de Josefa de Aranzuy y Repes; marido de María Isabel Cevallos, hija de Ignacio Bustillo de Ceballos y de Ana Domínguez Rabanal; con cuñado de Eugenio Lerdo de Tejada; y padre de María Josefa de Vélez Sancho Larrea y Zevallos, fallecida sin sucesión (Fernández de Burzaco, I, 326; IV, 138; y VI, 61; Nicoletti, 1987, 115; y JR, 1989, ítem 5308)

⁶⁴ natural de la Villa de Nalda, La Rioja, España, marido de María Bernarda Sequeira, natural de Río de Janeiro; con cuñado de Manuel Dutra; compadre de Francisco Tagle Bracho y Nicolás de Acha; y suegro de José Ramón Baudrix y del Corregidor de Yamparaes Andrés Tinajero de la Escalera (FB, IV, 288; y JR, 1989, ítem 4129).

⁶⁵ Era nacido en Burgos, marido de Juana Inés de Fresneda y Esquivel; compadre de Domingo Cueli, José de Arroyo, Jerónimo Matorras, Gaspar de Bustamante, Francisco Cabrera, Juan Bautista González y Fr. Roque de los Remedios; y suegro de Benito Gómez de la Fuente, José María Arrascaeta y Diego Antonio de Pró (FB, IV, 234).

⁶⁶ Regidor Perpetuo y Alguacil Mayor de Buenos Aires; nacido en Cádiz, hijo de Pedro de Mansilla y de María Elvira Ruiz; marido de Margarita García Posse, hija de Pedro García Posse y

María Josefa Cabezas; compadre de Manuel Gutiérrez, Juan Bautista Altolaquirre, Manuel Posadas Bustamante y Pedro Vázquez; y suegro de José María Cárdenas y José de Solivéz. Falleció en 1796, sucediéndolo en el cargo su hijo Manuel Mansilla (FB, IV, 232; y JR, 1989, ítem 4457).

⁶⁷ Natural de la Villa de Laredo, hijo de Manuel de Tocornal y de Antonia del Hoyo Burgos; marido de Josefa de Villa; padre del Regidor Perpetuo Fermín de Tocornal; y compadre de Benito Gómez de la Fuente (Cutolo, VII, 340; y FB, VI, 179).

⁶⁸ Director de la Casa de Expósitos. Era nacido en Toledo, marido de Melchora o Micaela de Salinas, hija de Juan de Salinas Valdés y de Sabina del Barranco y Crespo Flores; y suegro de Buenaventura Marcó del Pont y de María del Rosario de Alzaga y Cabrera (FB, II, 242; y IV, 237).

⁶⁹ Nacido en las Montañas de Burgos, Valle de Castañeda, Santander, hijo natural de Manuel de Escalada y de Luisa de Sarria; marido de María Gertrudis Bustillo de Cevallos, hija de Juan Antonio Bustillo y de Isabel Nicolasa Ryan; compadre de José Zevallos; y suegro de Paulino Campbell, José Lino de Castro Lahore, nacido en San Juan, y de Antonio José de los Reyes Marín (FB, II, 45, 116 y 286; y JR, 1989, ítem 4644)

⁷⁰ natural de Granada; hijo de Sebastián Sánchez y de María Jiménez Amador; marido de Magdalena Trillo Cárdenas, hija de Domingo Trillo y de Micaela Cárdenas Rendón, viuda de Manuel del Arco; suegro de Martín Thompson y Juan Washington de Mendeville; y compadre de Joaquín del Castillo y Bustamante (Gammalsson, 1980, 401; FB, VI, 60; y JR, 1989, ítem 4554).

⁷¹ natural de la Villa de Arrio, Guipúzcoa; hijo de Pedro de Zapiola y de Josefa de Oyamburú; marido de María Encarnación de Lezica y Alquiza, hija de Juan de Lezica y Torrezuri y de Elena de Alquiza; suegro de Antonio Isla, natural de León, Obispado de Astorga, y de Manuel de Luzuriaga y Mexía, natural de Lima (FB, I, 235; II, 242; IV, 144, 200, 232, 234, 288; y VI, 310; y JR, 1989, ítems 5519, 6228 y 6506).

⁷² Nacido en la Anteiglesia de Cortezubi, hijo de Ignacio de Lezica y de Ignacia de Ozamiz; marido de María Ramona Victoria de la Torre de Trassierra, hija de Bernardo de la Torre de Trassierra y de Petrona de Tagle Bracho; padre de Ambrosio Lezica, quien financiara la expedición militar al Alto Perú; compadre de Juan de Lezica; y suegro de Martín Ochoteco, Juan Llano, y Juan Antonio Santa Coloma (FB, IV, 143; y Navarro Floria y Nicoletti, 1990, 212; y JR, 1989, ítem 4597).

⁷³ Heckscher, 1943, 524.

⁷⁴ natural de Cádiz, contrajo primeras nupcias con Gabriela Zamudio y segundas nupcias con Sabina de Sorarte, hija de Diego Sorarte y de Juana Báez de Alpoim (FB, VI, 295).

⁷⁵ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-3, Exp. 20, fs. 67-70v, 120 y 120v.

⁷⁶ Casó con María Antonia Díaz Pimienta, y fué suegro de Pablo Sisur, de Miguel de Luca, de Francisco de Paula Saubidet y de Lorenzo Cavenago (FB, V, 142; y JR, 1987, ítem 3019).

⁷⁷ Hija del soldado José Díaz Pimienta y de Juana Morales, cuñada de Lorenzo Infante, Lorenzo Patrón y Francisco Ratto (FB, II, 239; y JR, 1987, ítem 3421).

⁷⁸ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. P-6, Exp. 37; Leg. C-7, Exp. 3; Leg. 270, Exp.7.

⁷⁹ Casó con María Rosa de Galain y Sorarte, hija de Martín de Galayn y de Francisca de Sorarte y Báez de Alpoin (FB, IV, 201).

⁸⁰ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. E-3, Exp. 13.

⁸¹ marido de Catalina Abascal, hija de José Abascal, aguatero, y de María, mulata libre; y padre de Francisco Mariño de Barrios, marido de María Gabina Palliz, natural de Areco (VM, 1988, ítem 1934; y FB, I, 16).

⁸² probablemente Catalán.

⁸³ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.13, Exp. 21, fs. 68v.

⁸⁴ Idem.

⁸⁵ Ibídem.

⁸⁶ Idem.

⁸⁷ Soltero, miembro de la Hermandad de la Santa Caridad.

⁸⁸ Hidalgo de Oñate, Guipúzcoa, Hermano Terciario de la Orden Dominica, hijo de Juan de Sarratea y de Antonia de Idígoras; marido de Tomasa Josefa Altolaguirre, hija de Martín de Altolaguirre y María de Pando y Patiño; cuñado del Factor de Cajas Reales Martín José de Altolaguirre; y suegro del Virrey Santiago de Liniers y del Gobernador del Paraguay Lázaro de Rivera y Espinosa de los Monteros (Cutolo, VI, 733; y JR, 1989, ítem 4924)

⁸⁹ Socolow, 1978, 124.

⁹⁰ Al mismo tiempo se erigieron Consulados en otros puertos de América, ver Kinsbruner, 1972; Lampros, 1980; Meltzer, 1978; Villaseñor Bordes (1970); y Woodward (1966).

⁹¹ Situadista entre 1780 y 1794.

⁹² Natural de Chiclana, Arzobispado de Cádiz, hijo de Francisco Dubal y de Juana Bache; y marido de Josefa Pérez Vásquez de la Barrera, hija de Diego Pérez y de Josefa Vásquez de la Barrera (FB, II, 258; y JR, 1989, ítem 4818).

⁹³ Nacido en Bilbao, hijo de Domingo de Acha y de Lucía Avendaño; marido de Lucía Martínez de Tirado y Contreras, viuda de José Gallen, nacida en San Juan, hija de Juan Martínez de Tirado y de María Fernández de Castro; con cuñado de Pedro Carvajal, de Saturnino Saraza, y de Alonso Rodríguez y Ortiz Barrientos; padre natural y legítimo de Nicolás Antonio de Acha, y compadre de Saturnino Saraza (FB, I, 32; II, 65; IV, 291; y V, 385; y JR, 1989, ítem 6113).

⁹⁴ hijo de Agustín Casimiro de Aguirre y de María Josefa de Alonso y Lajarrota; cuñado de Antonio de las Cajigas y de José Laguna Moscoso; marido de Victoria Ituarte; y suegro de Mercedes Anchorena (FB, I, 49).

⁹⁵ Ingenieros, 1951, 486, nota 1; Socolow, 1978, 126; y Malamud, 1985, 23.

⁹⁶ Nacido en Cádiz, hijo de Domingo De María, nacido en Nápoles y de Rosa Camuso, nacida en Lombardía; marido de María Eugenia de Escalada, hija de Antonio José de Escalada y de Petrona de Salcedo; y suegro de José Antonio De María, natural de Puerto Real (FB, II, 214; y JR, 1989, ítem 7765).

⁹⁷ Nacido en Vigo, hijo de Buenaventura Marcó del Pont y Borey y de Juana Angel y Méndez; marido de Francisca Javiera Díaz de Vivar, hija de Pedro Díaz de Vivar y de Melchora Salinas Valdéz y del Barranco; concuñado de María Rosario de Alzaga y Cabrera; y suegro de Manuel Muñóz, natural de Bibiesca (FB, IV, 237; y JR, 1989, ítem 7287).

⁹⁸ Ingenieros, 1951, I, 486.

⁹⁹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.8.

¹⁰⁰ banqueros privados que tenían el monopolio del comercio de la plata amonedada antes de la creación del Banco de San Carlos.

¹⁰¹ Saguier, 1989b, 298-308.

¹⁰² La demora en la partida de los Situados obedecía al afán que tenían sus detentadores en especular con los dineros del propio Situado, adelantándolo en operaciones de avío a la minería. Las utilidades en el avío de la minería se realizaban por lo general en el rescate de piñas y barras. El rescate de un marco de plata en piña se lograba en Potosí a 7 pesos y 2 3/4 reales, mientras que en los Asientos de Minas de Oruro se rescataba a 7 pesos el marco, y en los de Aullagas a 6 pesos y 4 reales el marco (En Oruro se compraba la plata a 143 y 3/4 el ensayado, mientras que en Potosí se abonaba a 146 pesos [Cañete, 1952, 127]). No subiendo de 10 reales el costo de convertir cada marco de plata en moneda, le quedaba al que habilitaba a los mineros con moneda sencilla, en cada marco de las platas de Carangas, la ganancia libre de 7 1/2 a 8 reales, y en la de Oruro, de 4 a 5 reales. Las utilidades se realizaban también en el rescate de barras, las cuales eran practicadas preferentemente en Oruro y Chucuito y no en Potosí. Esta preferencia obedecía al hecho de que en las Cajas de aquellas se toleraba que las barras se fundieran de hasta 230 marcos de peso cada una en Oruro, y de hasta 165 marcos en las de Chucuito (Saguier, 1989b, 305, nota 66).

¹⁰³ Dueño del Ingenio Pampa, Administrador de la Renta de Tabacos y amigo personal del Visitador Jaime San Just. Casado en España, fué instado en 1768 por Real Cédula a restituirse a España (AGN, Reales Cédulas, t.42, f.236). Dos años después, en 1770, San Just logró que se suspendiera su remisión a España hasta que terminase la causa que se le siguió sobre introducción ilícita en Potosí (AGN, Reales Cédulas, Libro 43, f.150). Padre o hermano del Cura de la Provincia de Lipas Santiago Prego de Montaños, procesado por excesos en 1782 (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.24, Exp.582).

¹⁰⁴ Lagunero de la Villa de Potosí en 1736 (AGN, Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramiento de Oficiales Reales, Libro 2, f.200).

¹⁰⁵ Hijo de Juan de Lezica y María de Torrezuri, vecinos de la Anteiglesia de Cortezubi; marido de Ana Ortega y Carbajal, nacida en Potosí; suegro de José de Endeyza y Alvear y del Dr. Francisco Javier de Riglos, el primero ajusticiado por los indígenas en la rebelión de Túpac Catari; y hermano de Juan de Lezica y Torrezuri, el benefactor de la Villa de Luján (FB, 1986-90, IV, 144).

¹⁰⁶ Juan Francisco Uzal a Nicolás de la Quintana, Potosí, 23-I-1753 (AGN, Sala IX, 27-4-6).

¹⁰⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.Z-3, Exp.7; y Buechler, 1989, 406, nota 20.

¹⁰⁸ Tjarks, 1959, 49.

¹⁰⁹ Ver Saguier, 1989, 314-315.

¹¹⁰ Socasa contaba en 1803 con cuatro paradas de molinos de granos y dos ingenios de moler metal sin mita en Porco, habiendo alcanzado para esa época el grado de Coronel y el cargo de Comandante de Infantería en Potosí (AGN, Despachos Militares y Cédulas de Premio (DMCP), Libro 9, f.187).

¹¹¹ Sobrino carnal de José de Endeyza y Alvear, ajusticiado por los indígenas durante la rebelión de Tupac Amaru, quien a su vez era yerno de José de Lezica y Torrezuri (Fernández de Burzaco, 1986-90, IV, 144). A juicio de Indalecio González de Socasa, formulado en 1795, Ybieta "...tiene una ambición declarada por las distinciones civiles, y por el honor de los empleos públicos, según el precio excesivo de \$6.000 en que compró el nombramiento de Teniente sustituto de Contador entre partes a sabiendas de que no podía dejarle lucro alguno un Ministerio que había de despachar por mano agena por su poca inteligencia en materia de cuentas,..., además de otras pruebas que ha dado Ybieta en los Pleitos que trae sobre el uso del uniforme de Oficiales Reales por sólo el prurito de hacer figura" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.14, fs.61).

¹¹² Capitán del Regimiento de Voluntarios de Caballería de Salta. Nacido en octubre de 1762, y casado en 1789 con María Josefa Posadas, hija del Maestre de Campo Felipe Posadas, Alcalde de primer voto de Salta en 1770, y de Josefa Gertrudes de Echalar y Morales, la cual había sido viuda de Domingo de Isasmendi (AC, 1937, 580). Fueron padres de Manuela Ugarteche, mujer del Sargento Mayor realista Juan Cobo (AC, 1937, 580). En 1808 pide permiso para pasar a Buenos Aires (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 16, f.178-179). En 1808 litiga por cobro de pesos (AGN, Tribunales Administrativos, Leg.22, Exp.720).

¹¹³ Capitán de la Sala de Armas de la Villa de Potosí. Participa en la elección de los Situadistas (AGN, Comerciales, Leg.18, Exp.5). Fiador del Administrador de Tabaco de Potosí Ignacio Crespillo (AGN, Hacienda, leg.86, Exp.2250).

¹¹⁴ según Fernández de Burzaco era nacido en Abadiano, Durango, Vizcaya, y según Jáuregui Rueda en la Anteiglesia de Arrázolo, Obispado de Calahorra; hijo de Juan Bautista de Elorriaga y de Josefa de Urizar, casado con María Leocadia de Segurola, hija de Francisco de Segurola y de María

Bernarda de Lezica (FB, 1987, II, 278; y JR, 1989, ítem 6379).

¹¹⁵ En 1795 se dictó una Real Provisión para que Ponte satisfaga la cantidad demandada por el Marqués de Rocafuerte y costas a que a sido condenado por la Real Audiencia de Charcas por la retención que tenía en calidad de depósito (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.176, Exp.3, fs.3v.).

¹¹⁶ Hijo de Francisco Ignacio de Oliden y de Francisca Antonia de Erazo, y casado con Prudencia Molina, hija de Francisco Molina (FB, 1990, V, 59).

¹¹⁷ Alcalde de Segundo Voto de Jujuy, marido de María del Carmen Martínez de Iriarte, hija de Domingo Martínez de Iriarte y su segunda esposa Florencia de la Cámara y Díaz de Elizondo, y con cuñado del Dr. José de Medeyros, de Juan Manuel de Pucheta y del Coronel realista Ventura José Marquiegui (CC, VI, 24); y probablemente hermano o tío de Pedro Zenavilla, marido de María Justa Allende y Funes, hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y de María Mercedes Funes (LC, I, 28).

¹¹⁸ socio de Juan Estéban de Anchorena y Domingo de Ezcurra. Entre 1768 y 1785 contrajo con mercaderes porteños cuatro operaciones de fiado por valor de \$8544.

¹¹⁹ natural de la Villa de Nieva de Cameros, Obispado de Calahorra, Navarra; hijo de Francisco Sáenz y de María Valiente; marido de Juana María de Pueyrredón, hija de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan; y suegro de Antonio Francisco Leloir (FB, VI, 18; y JR, 1989, ítem 4905). Sáenz Valiente fué auxiliar de comercio de su suegro Juan Martín de Pueyrredón. Ocurrido el asesinato de Pedro de Lagrava (representante de Pueyrredón) en Oruro durante la rebelión indígena de Tupac Amaru, y destruidas la totalidad de las mercaderías almacenadas en esa y otras plazas por el pillaje de los indios, Pueyrredón (padre) comisionó a Sáenz Valiente para restablecer las sucursales arrasadas, por lo que fué ascendido a representante y habilitado con ingentes remesas de mercancías. Finalmente, Sáenz Valiente se casó con la hija de Pueyrredón (Ver Cutolo).

¹²⁰ Nacido en Pamplona, hijo de Domingo de Anchorena y de Juana Fernanda de Zundqueta; marido de Romana Josefa López de Anaya, hija de Manuel López de Anaya y de Juana Josefa Ruiz Gamiz; compadre de Cristóbal de Aguirre; y suegro de Bonifacia de Lezica y Vera Pintado, Andrea Ibáñez y Marín, y María Victoria García de Zúñiga (FB, I, 114; y JR, 1989, ítem 4586).

¹²¹ Su parentesco con Juan Ignacio Ezcurra lo desconozco.

¹²² Arrendatario del Ingenio de la Purísima Concepción de Turú.

¹²³ Subdelegado del Partido de Atacama. Hijo de Juan Antonio Gainza y Sopeña y de María Rosa Sánchez de Loria, casado con María de los Dolores de Ascó, hija del Capitán de Dragones Juan de Ascó y de María Luisa de Merlos, suegro de Ramón Aquino, y con cuñado de Juan Bautista de Aguiar (FB, 1986-1988, I, 177; y III, 103-104; y JR, 1989, ítem 4833).

¹²⁴ Hijo de Bernardo de Barragán y de Eugenia Muñoz de Cuéllar, y marido de Juana Guillisástegui, hija de José de Guillisástegui y de Ildefonsa Bohórquez (Morales, s/f). En 1792 le arrienda un ingenio a Manuel Pío García (AGN, División Colonia, Interior, Leg.32, Exp.18).

¹²⁵ Dueño del Ingenio Canteros, fué el único miembro del Gremio de Azogueros que se opuso a

la implementación del Código Carolino. Era marido de María Lizarazu, hija del Gobernador de Armas de Potosí, Alguacil Mayor de Santiago de Chile, Caballero de Carlos III y Conde de Casa Real de Moneda General Juan de Lizarazu Viamonte y Navarra (Lohmann Villena, 1947, II, ítem 120). Heredero legítimo de Alejandra de la Quintana, que lo fue por testamento de su hermana la Marquesa Bárbara de la Quintana, quien por igual institución hereditaria había sucedido en los bienes de su marido José de Palacios, y tío de Estéban Giráldez [nieto de Antonia de la Quintana] (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.92, Exp.51).

¹²⁶ Regidor de la Villa de Potosí. En 1795 pide permiso para pasar a Potosí (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 6, f.197). En 1800 es procesado por injurias y calumnias (AGN, Criminales, Leg.46, Exp.9). En 1802 le prohíben votar en las elecciones concejiles (AGN, Interior, Leg.52, Exp.18). Ver en Morales (s/f) según Quesada (1988).

¹²⁷ Nacido en Vizcaya, b. 17-2-1759, hijo de Antonio de Achával y de Ana de Sasturri, y casado con Josefa Barrón, hija de Diego Barrón y de Agustina Berecoechea. Era cuñado de Diego Barrón, Administrador de la Real Renta de Tabacos de Charcas, y primo del Intendente de La Paz y Director General de la Real Renta de Tabaco y Naipes Francisco Ortega y Barrón (FB, 1986, I, 33).

¹²⁸ natural de Sondica, Obispado de Calahorra, Vizcaya; hijo de Andrés de Ugarteche y de Juana de Echevarría; y marido de Marcelina Josefa Pinto, hija de Joaquín Pinto de los Ríos y de Rita Antonia Lobo (FB, VI, 211; y JR, 1989, ítem 5733).

¹²⁹ Mantuvo un arduo litigio con Indalecio González de Socasa y Joaquín Castro contra las contribuciones para las fiestas de toros y de Corpus Christi que exigía el Cabildo de Potosí (AGN, División Colonia, Interior, Leg.36, Exp.8). Hijo de Antonio Obligado y Fausta Fernandez. Regidor y Alcalde Ordinario de Primer Voto en Potosí en 1796, casó en primeras nupcias con la potosina Isabel Carrasco de Arrascaeta; y en segundas nupcias con Juana Tejedor Garayo, hija del Teniente General Blas Miguel Tejedor y de Manuela Garayo; y suegro de Juan Bautista Arana (FB, I, 130; y V, 46; y JR, 1989, ítem 7059).

¹³⁰ b.1783, hijo de Adriano de Aramburu Zavala, nacido en Escoriaza, Guipúzcoa, y de Catalina de la Torre (FB, 1986, I, 127).

¹³¹ Dependiente del comerciante porteño José Martínez de Hoz (Romero Cabrera, 1973).

¹³² Contrajo con mercaderes de Buenos Aires entre 1793 y 1796 siete operaciones de fiado por valor de \$25.477 (AGN, Protocolos, Registro 6, año 1793, fs.254v.; Reg.1, año 1795, fs.560v.; Reg.1, año 1796, fs.353; Reg.3, año 1796, fs.372; y Reg.6, año 1796, fs.337 y 329)

¹³³ Padre de Alejandra Amatller, quien contrajo una operación de crédito en Buenos Aires en 1809 por valor de \$7105 (AGN, Protocolos, Registro 4, año 1809, fs.32).

¹³⁴ Ampliamente detallado en Saguier, 1989b, 313.

TOMO II

CAPITULO 5

La Crisis Fiscal. La Corrupción de la Burocracia Colonial Borbónica y los Orígenes de la Revolución.

(publicado con otro título en 1992 en el *Jahrbuch für Geschichte von Staat Wirtschafts und Gesellschaft Lateinamerikas* [Colonia, West Germany], 29, 1992, pp.149-177);

En este capítulo, complementario de otros trabajos,¹ me he propuesto demostrar la íntima conexión existente entre la corrupción generalizada vigente en la administración colonial borbónica y los orígenes históricos del fenómeno revolucionario, uno de los causantes del desmembramiento del espacio político Virreinal. Para ello, exploramos el comportamiento de aquellos funcionarios que detentaban cargos públicos en el interior del espacio colonial y cuya tenencia tenía su origen como consecuencia de la aplicación de mecanismos patrimoniales de reclutamiento. A esos efectos distinguiremos como corrupción sólo aquellas actividades que --como el cohecho o soborno, y el desfalco, quiebra o malversación de las Cajas Reales-- violaban la confianza puesta por el público en los funcionarios.² Ciertos modelos teóricos se propusieron analizar los ciclos y bloques históricos y las prácticas discursivas instrumentadas en períodos de crisis sobre la base de las presiones fiscales causantes de las crisis de estado. A diferencia de Morse (1964), que fundándose en Max Weber, definía la organización del fisco colonial como un caso de dominación patrimonial, Phelan (1967) le agregaba la dominación carismática y legal.³ Pero el peligro para la subsistencia del poder patrimonial peninsular --que las presiones fiscales provocaban-- no se originaba, según Bonilla (1981), al interior de la burocracia colonial Borbónica, sino que provenía de la propia estructura económico-social colonial.⁴

Y a diferencia de la historiografía clásica acerca de las revoluciones, común a liberales, nacionalistas y marxistas, Trimberger (1978) y Skocpol (1979), propusieron que los fenómenos revolucionarios habrían surgido de una crisis de estado (y no de una crisis social o económica), condicionada por la posición de este en los sistemas internacionales políticos y económicos y por su relación con la clase social dominante. Skocpol (1984) es la única autora que argumenta que las presiones y crisis fiscales, que precipitaron los conflictos de estado, tenían a las elites urbanas ubicadas en el centro del fenómeno revolucionario.⁵ Pero fué Trimberger (1978), quien primero arguyó, al referirse a las revoluciones japonesa (meiji), turca (kemalista), egipcia (nasserista), y peruana (velasquista), que las elites capaces de responder a las presiones externas llevando a cabo cambios sociales revolucionarios --incluyendo reformas agrarias, abolición de tradicionales distinciones de status y rápida industrialización-- eran sólo aquellas cuyos lazos con los grupos propietarios eran débiles.⁶ Al examinar la resultante de dichas revoluciones, Trimberger descubre que ellas alcanzaron, en general, un éxito limitado. Cerrar la brecha que las separaba de las economías centrales requería el

desvío de grandes excedentes de la producción de bienes primarios para la inversión de capitales.⁷ Véliz (1984), uno de los autores perteneciente a la corriente revisionista, les atribuye a dichos funcionarios españoles, a diferencia de los criollos, una supuesta "probidad", y a la prevención de las actividades corruptas un "éxito notable". Estas virtudes habrían generado, según Véliz, en las capas más altas de la sociedad criolla, un profundo resentimiento contra los funcionarios españoles.⁸ Para Sherwin-White (1982), Richardson (1987) y Lintott (1990), quienes analizan las luchas sociales en la república Romana, y para Padgett y Ansell (1993), quienes las analizan en la aurora de la Edad Moderna, las crisis fiscales provocadas por las guerras, repolarizaban las clases sociales y tentaban a los oligarcas a incursionar en campañas represivas.⁹ Finalmente, para Burrow (1987), las historias antiguas de Grecia y Roma ofrecen a la crítica de la política contemporánea la herramienta o analogía histórica del llamado ciclo vital de la corrupción.¹⁰ En el caso de la América Latina colonial, para Pietschmann (1982), Andrien (1984) y Saguier (1989a, 1990, 1992a) el clima de corrupción y la consiguiente crónica crisis fiscal aceleró las condiciones materiales del fenómeno revolucionario. En este trabajo, continuación de otros anteriores, nos hemos propuesto indagar el rol cumplido por los Cabildos y otras instituciones del estado colonial en las prácticas fiscales de transferencia del excedente, en etapas posteriores a la centralización del poder estatal colonial, y en sus correspondientes impactos en la estructura social.¹¹

El clima de corrupción y la consiguiente crónica crisis fiscal que aceleró las condiciones materiales del fenómeno revolucionario, que balcanizó al antiguo y tardío Virreinato del Río de la Plata, se extendió no sólo a la recaudación de la Alcabala, la Sisa, el Diezmo, y los Propios y Arbitrios, ni al Situado Real, cuyas peripecias las he desarrollado en otros trabajos, sino también a otras ramas y estancos no menos importantes de la Real Hacienda. La Casa de Moneda, la Compañía de Azogueros, las cofradías, las Comandancias de Fronteras, los Cabildos Eclesiásticos, la Renta de Tabaco y Naipes, la Renta de Tributos, la Administración de Temporalidades, y la Renta de Correos, fueron durante el período de recolonización borbónica, a diferencia de lo que sostiene Véliz (1984), fuentes usuales de corrupción. Asimismo, este clima de corrupción no se concentró exclusivamente en las regiones más ricas, como el Alto Perú, sino que alcanzó a otras regiones geográficas de la llamada carrera del Perú.

El Ramo de Sisa.

Con referencia al Ramo de Sisa, recién a partir de la fundación del Virreinato del Río de la Plata en 1778 dicho Ramo fué incorporado a la Real Hacienda.¹² El Cabildo debía contar en dicho Ramo con los ingresos derivados de las tropas de carretas entradas a Córdoba, que transportaban cargas de aguardiente, tabaco, yerba y jabón, así como de los ingresos derivados de las arrias de mulas y vacas procedentes de Cuyo, Santa Fé y Buenos Aires, pero cuya recaudación estaba a merced de la discrecionalidad de los Alguaciles Mayores y de los Tenientes de Oficiales Reales.¹³ Tanto los Mayordomos de Propios como los Alguaciles Mayores eran funcionarios capitulares elegidos por los clanes familiares que monopolizaban el Cabildo de Córdoba. En cambio los Tenientes de Oficiales Reales eran funcionarios de la Real Hacienda elegidos por el Virrey. Sin embargo, y pese a su pertenencia a la Real Hacienda, dicho cargo recaía por lo general en miembros de los clanes familiares que gobernaban el Cabildo.¹⁴

La corrupción se extendía a los ramos de la Real Hacienda, como era el caso del ramo de Sisa, y los Diezmos,

"...¿A quien se oculta en la Rioja, [se preguntaba el mismo Francisco Antonio Ortiz de Ocampo], que en el ramo de la cisa y aguardientes ha mantenido Dn José de Noroña tratos

públicas con los Peñalosas, con Dn. Gabriel Sotomaior, con Dn. Miguel y Dn Basilio Moreno, todos vecinos de aquella ciudad? que él por separado ha hecho comercio de aguardientes; que se ha interesado públicamente por los remates de Diezmos haciendo para el de ganados compañía con Dn. José Antonio Mercado, que ha girado en los caldos, que ha comerciado en el ramo de salitre, haciéndolo conducir a Chile, y que ha hecho empleos en esta Capital, en Córdoba y Catamarca; que tiene tienda pública en la misma tercená y que en el comercio no le va en zaga el Subdelegado [Bustos]".¹⁵

También fué el caso en Salta, tres años después, en 1802, del Comandante Diego José de Pueyrredón,¹⁶ quien según un extenso escrito,¹⁷ elevado al Virrey del Pino por un numeroso grupo de vecinos,¹⁸

"...lo que es más escandaloso, es el tabaco que siembra públicamente con su suegra, sin licencia, hace muchos años, con lo cual abastece la tropa, y a los Indios, y vende a los abastecedores de aquella Frontera".¹⁹

El informe en que se manifestó el repudio del pueblo Riojano por el avasallamiento de su autonomía y el despojo de la administración de su Renta de Tabaco, elevado en 1784 por el Subdelegado de la Real Hacienda y el Ministro Tesorero de La Rioja al Gobernador de Córdoba Marqués de Sobremonte, revelaba que sus autoridades estaban persuadidas que son mal vistos los Oficiales Reales no sólo por la condición de Europeos sino por la calidad de sus empleos, consistentes en recaudar los Ramos de la Real Hacienda. Tanto se encrespaban los ánimos que los Oficiales Reales se vieron precisados "...a contenerse y no extender a lo que es debido el punto de la recaudación de los ramos de la Real Hacienda por temor que de ello pueda resultarles persecución".²⁰ En el mismo expediente de la serie de Hacienda, donde se halla el Informe elevado en 1784 por el Cabildo de La Rioja al Gobernador-Intendente de Córdoba, se encuentra también como prueba de los hechos un pasquín con cinco estrofas en décimas, de netos perfiles insurreccionales, que hemos denominado en otro trabajo "Décimas de Protesta".²¹ En Salta, en 1802, un numeroso grupo de vecinos,²² se quejaba del Ministro de Real Hacienda Don Gabriel Güemes Montero,²³ quien influía para que las mulas que gravaba en ejercicio de sus funciones de sisero se inviernaran en los campos del yerno del Teniente Asesor José de Medeyros, el Comandante de Frontera Juan José Cornejo,²⁴ del cual era primo hermano su propia mujer, Magdalena Goyechea y de la Corte. Alcaldías de Hermandad como las de la provincia de Buenos Aires se hallaban también mediatizadas por las decisiones adoptadas por la administración de la Renta de Tabaco y Naipes. Doña Catalina Zambrano,²⁵ mujer de Juan González, vecina del pago de Areco, se quejaba en 1799 del estancquillero Agustín de la Iglesia,²⁶ quien la había denunciado por la fuga de su esclavo, a quien Doña Catalina le había prestado un caballo, por cuanto "...se cree autorizado para oprimir a quien no se somete a sus injustas ideas".²⁷ Iglesia se había tomado

"...un asendiente sobre todos aquellos pobres hombres, que habitan el partido de Areco de modo que quiere, que no haya quien resista sus voluntariedades, y echo temible a los Alcaldes Pedáneos, y al vecindario".²⁸

Por cuanto a fines de siglo, la Corona estaba interesada en promover exclusivamente la comercialización del tabaco cubano, combatía cualquier cultivo que se hiciera en otras regiones. Para ello la Real Renta de Tabaco llegó a constituir en la jurisdicción del Río de la Plata 12 administraciones generales, 71 administraciones particulares, y 480 tercenás y estancos.²⁹ En sólo la ciudad de Chuquisaca existían en 1802 más de una docena de estancos de tabaco con la responsabilidad entre otras de impedir el fraude y los cultivos clandestinos.³⁰ A juzgar por un documento de la serie de Hacienda de 1778 el tabaco que se consumía en el Alto Perú no provenía de la Real Fábrica de Sevilla, ni de la Fábrica de tabaco en rama del Paraguay, que entraba en Buenos Aires, por no ser costumbre en

el Alto Perú el mascar tabaco, sino el fumar tabaco en polvo manufacturado en México y Cuba, que se remitía anualmente desde Lima.³¹ También se consumía, aunque menos, el tabaco en rama que se cosechaba y sembraba clandestinamente en algunas provincias del Alto Perú y Salta del Tucumán. Francisco de Paula Sanz señala en su correspondencia de 1779 que algunos hombres procedentes de Tarija habían procedido en Tucumán hacía seis años al cultivo del tabaco, por haberse restringido las siembras en Tarija.³² Para perseguir los cultivos clandestinos y restringir así las siembras, a principios del mes de abril de cada año salían del Estanco del Tabaco de Tarija para dirigirse al Pueblo de la Laguna y desde ahí recorrer durante tres meses la Quebrada de Santo Domingo de 10 a 14 hombres con un baqueano, los cuales arrancaban, quemaban, y destruían

"...la multitud de tabacales clandestinos, que regularmente ascienden a 200 o 300 mil plantas de tabaco que en diversos lugares y terrenos de dicha Quebrada se crían, y aún cultivan por algunos individuos para el fomento del contrabando".³³

Tan frecuentes eran los fraudes que a principios de cada mes de septiembre el personal del Estanco de Chuquisaca debía volver a salir para practicar la visita de las administraciones provinciales de Yamparaes, Oruro, Sinti, y Tomina, inspeccionar las cuentas de sus administradores y estanqueros, tomar razón de sus existencias, y recoger y conducir los caudales de la Administración General.³⁴ También se perseguían los cultivos clandestinos en la provincia de Salta del Tucumán. José Tomás Sánchez, Administrador General del Real Estanco de Salta informaba a la Dirección General que José Mariano Soloaga,³⁵ Administrador Principal en Tucumán, solicitaba se le abonaran \$2253

"...impendidos en la laboriosa operación que verificó para destrozár, y aniquilar las siembras clandestinas de tabaco, que con detrimento de los intereses del soberano se practicaban en los bosques, y serros de aquella jurisdicción",³⁶

El otorgamiento de licencias.

Respecto de las licencias para la carga y salida de los barcos, beneficio de yerbales, recogida de ganado cimarrón y expendio de tabaco y naipes, estas también provocaban severas crisis entre los cabildos locales y sus Gobernadores. En cuanto a la expedición de licencias para la carga y salida de barcos y el beneficio de yerbales, el Gobernador-Intendente del Paraguay, se reservaba, en su condición de Comandante de Armas, la facultad de dar estas licencias, así como la de ordenar las Visitas de Barcos y Balsas en que se conducían los efectos comerciables de la Provincia. Dicha reserva la fundaba en 1784 el Gobernador Pedro Melo de Portugal en que las Visitas eran negocio militar "...porque los peones que sirven en [la carga de] dichas embarcaciones son de las tropas milicianas de esta Provincia".³⁷ Con sólo el pretexto de que eran soldados los peones que cargaban las embarcaciones, las autoridades les exigían traer certificados de sus Jefes respectivos de que no hacían falta en sus respectivas guarniciones. Pero como la tramitación de los certificados se demoraba por las distancias que los peones debían recorrer para obtenerlas, el Teniente Asesor Letrado Dr. Mariano Lorenzo Grambel alegaba, en conflicto con el Teniente de Gobernador Manuel García Barrazábal,³⁸ que esto era "...coartar la libertad de comercio impidiendo las embarcaciones que están prontas para viajar".³⁹ Finalmente, Grambel recurría al Virrey Marqués de Loreto para que declarare que el uso y ejercicio de dichas facultades no correspondían al Gobierno Militar

"...sino al político y económico inherentes a las cuatro causas de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra, y que no corresponde al Gobierno Militar sino al Intendente según lo declara el artículo 6 de la Real Ordenanza".⁴⁰

Tres años después, en 1788, el nuevo Teniente Asesor Letrado, Dr. Miguel Gregorio de Zamalloa,⁴¹ en oficio dirigido al Gobernador Joaquín Alós, le hacía presente cuán perjudicial era en el Paraguay "...la separación de mandos [civil y militar]".⁴² Sin embargo de ser tan claro que las licencias para la carga y salida de los barcos era un asunto meramente de Policía, en que igualmente se interesaba la Real Hacienda, el Comandante de Armas le disputaba al Teniente Asesor Letrado esta regalía "...con el pretexto de que la Visita de la Gente de la tripulación, le era privativa a él, sucediendo lo mismo con las licencias de los Beneficios de la Yerba".⁴³ Estas y otras discusiones obstaculizaron la función de Justicia, al extremo de embarazar "...las más de las veces el uso de su Jurisdicción, con el pretexto de ser Milicianos todos los vecinos de esta Provincia, y gozar del fuero militar fuesen o no de los casos comprendidos en él".⁴⁴ Este mismo método siguió el Teniente Gobernador García de Barrazábal con el Teniente Asesor Zamalloa, al extremo de ordenarle al Administrador del Ramo de Guerra le diera a él como Teniente Gobernador y no al Teniente Asesor los recibos que solía dar a los Beneficiarios de los yerbales.⁴⁵

Las Comandancias de Fronteras.

Con relación a las Comandancias de Fronteras, un extenso escrito,⁴⁶ elevado al Virrey del Pino en 1802 por un numeroso grupo de vecinos de Salta,⁴⁷ daba cuenta de serios casos de corrupción. Estos fueron cometidos por los Comandantes Diego José de Pueyrredón,⁴⁸ y Juan José Cornejo,⁴⁹ pues a juzgar por dicho escrito, el primero de los Comandantes mencionados era "...dueño de los terrenos donde está el Fuerte principal de Ledesma", donde pone "...mulas a invernar, mantiene ganados y hace labranzas, principalmente para el cultivo y plantío de caña dulce, en lo cual ocupa la Tropa y en continuos enviados a Jujuy, de donde es vecino".⁵⁰ A más de ello, tiene Pueyrredón "...a los dos costados vecinos, otras dos haciendas de cañaverales de su suegra,⁵¹ proveídas de indios convertidos e inconversos, que facilita con su comando".⁵² La presencia de estos indios, era para los firmantes del escrito, perjudicial para la frontera, "...por los conocimientos y vaquía, que adquieren para las invasiones y alianzas que hacen con este motivo con los [indios] reducidos".⁵³ Dicha provisión de mano de obra indígena le valía a Pueyrredón "...más que el salario de 600 peones anuales, y las excesivas raciones que tiene de carne, vizcocho, tabaco, y yerba".⁵⁴ Tenía además Pueyrredón "...la vergonzosa grangería del vizcocho para racionar a la tropa, y aunque el Ramo la paga por de superior calidad, él lo da como Abastecedor, de inferior [calidad] y muchas veces, lo abona a razón de doce reales abonándose el Ramo a 18 reales".⁵⁵ Asimismo, Pueyrredón tenía "...interés en el abasto de la carne".⁵⁶ Pero más escandaloso, era el tabaco "...que siembra públicamente con su suegra, sin licencia, hace muchos años, con lo cual abastece la tropa, y a los Indios, y vende a los abastecedores de aquella Frontera".⁵⁷ En cuanto al Comandante Cornejo, era dueño

"...no sólo de las tierras donde está el Fuerte de San Fernando, sino también de otras estancias en aquella Frontera del Río del Valle, de que se hizo dueño con poco dinero que dió a la Real Hacienda al amparo del Asesor de esta Intendencia, su suegro Dr. Medeyros".⁵⁸

También por ser primo hermano carnal de Magdalena Goyechea y de la Corte,⁵⁹ mujer del Tesorero Ministro Principal de Real Hacienda Gabriel de Güemes Montero, recibía Cornejo en "...dichas tierras crecido número de mulas en invernada".⁶⁰ Con el servicio de los soldados, presidiarios e indios infieles, Cornejo hacía "...mucha grangería, no sólo en dichas invernadas, sino también en sementeras, curtidurías de suelas, y fábricas de xabón".⁶¹ Para aumentar sus beneficios, "...a cualquiera novedad de los enemigos, hace por donde se aumente la guarnición, para que se consuma más ganado en raciones de que es Abastecedor con su hermano Don Antonino".⁶² Si bien la revista mensual de los Fuertes del Río del Valle era practicada por un Comisionado, como éste era "...amigo y pariente de Cornejo, jamás se llegará a notar la menor falta de soldados que tiene fuera del real servicio, y en el [servicio] de su

suegro Dr. Medeyros".⁶³ A más de los soldados fijos, llamados ordenanzas, que tenía Medeyros, como el Reglamento de Sisa no se los permitía, "...no [a]parecen como ordenanzas, sino como Partidarios [pagados de la partida del Ramo de Sisa], y puestos en lista de los Fuertes".⁶⁴

Los Cabildos Eclesiásticos.

Respecto a la corrupción reinante en los Cabildos Eclesiásticos, bastaría con señalar como botón de muestra que el encubrimiento de la barraganía de los integrantes de dichos Cabildos era moneda corriente. El caso más descollante fué el que se suscitó en Córdoba a fines del siglo XVIII por el Obispo Angel Mariano Moscoso acerca del concubinato del Chantre José Lino de León.⁶⁵ Si bien Bruno (1967) menciona el caso bajo la caracterización de interposición, elude definirlo con trazos más gruesos.⁶⁶

La Renta de Tributos.

Con relación a las defraudaciones de la Renta de Tributos el caso más notorio fué el del Corregidor de la Provincia de Atacama, Don Francisco Argumanis Fernández, quien en 1774 embolsó la suma de más de \$7.000 procedente de los tributos de San Juan y Navidad.⁶⁷ También fué famoso el caso del Subdelegado de Carabaya, Carlos Rogers,⁶⁸ quién con la complicidad de los Tesoreros José Ballivián y Juan de Dios Villamor fueron acusados en 1797 de malversar las Cajas de Carabaya en provecho propio, en el orden de los \$50.000.⁶⁹ Otro caso muy sonado fué el de Paria, cuyo Subdelegado Juan de Grandidier,⁷⁰ fué culpado en 1792 de defraudar los tributos a la Real Renta en \$10.714.⁷¹ Y otro caso fue el de Arpita, cuyo Hilacato fue procesado por usurpar los tributos.⁷² Pero también hubo otros casos que aunque menos notorios no por ello dejaron de causar graves trastornos a las Cajas Reales. Ellos fueron los casos de la Caja de Carangas, primero en 1780, en la persona de su Tesorero Pablo Gregorio de Castilla;⁷³ y luego en 1803, en la persona del Ministro Contador Juan Muñoz Villegas, natural de Carrión, en el Reino de México, de 63 años de edad, por \$84.968;⁷⁴ la de la Caja de Potosí en 1803, en la figura del Contador Fermín de Aoíz por \$5.100;⁷⁵ la de la subdelegación de Apolobamba en 1806, en la persona de José de Santa Cruz y Villavicencio;⁷⁶ la de la Renta de Chulumani y Yanacachi sumariada en 1809 en la persona de Faustino Gómez, por la suma de \$31.528;⁷⁷ la de la Renta de Irupana en la figura de Rodrigo Flores Picón, por \$8.130; y la de la Renta de Sorata sustanciada también en 1809 en la persona de José Manuel Molinos, por \$1.107.⁷⁸

En el caso de la Renta de Yanacachi, Don Antonio de Zubiaga, Contador de Rentas unidas de la Presidencia del Cuzco y Juez Visitador de las Reales Cajas, declaraba en 1803 que Domingo de la Torre Leyrado, Receptor de la Renta de Yanacachi, había sido acusado de ser el autor del ingente desfaldo de miles de pesos que "...aquella Recepturía ha padecido anualmente en sus ingresos".⁷⁹ En el caso de la Caja de Carangas, Muñoz Villegas, confesaba que la quiebra fué el resultado "...de los gastos que tiene practicados...en el trabajo de minas y en el de haber concluído un socabón en el Cerro de Chiarague,...como igualmente en la refacción del Ingenio y Mina del Carmen [en el Cerro de Conajagua, en el Asiento de Santa Rosa]".⁸⁰ A su vez, la causa por la cual se vió obligado a trabajar minas e ingenios fué la necesidad imperiosa que tuvo de indemnizarse de un quebranto anterior, que le había producido "...un considerable derrame y pérdida que experimentó en la especie de azogue, de donde proviene la falta de este magistral".⁸¹ En el caso de la Caja de Potosí, la gravedad del quebranto no estribaba tanto en el monto sino en la naturaleza de la persona involucrada en el desfaldo. Aoíz era un porteño, viejo funcionario de la administración colonial, que había sido Alguacil Mayor de las Reales Cajas de Potosí en 1779, Contador Mayor en 1781, y Ministro Honorario del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires en 1794, hijo a su vez de quien había sido Contador de las Cajas Reales de

Potosí y de Tomasa Larrazábal y Avellaneda, y yerno más luego de quien fuera Corregidor de Potosí, el Coronel José Antonio de Otálora, integrante de una de las familias más prominentes del Buenos Aires colonial. Lo particular del caso es que se hubiera confiado las Cajas Reales de Potosí a quien no gozaba de antecedentes morales intachables. Esta tela de juicio se confirma si tenemos en cuenta que en 1776 la propia madre de Aoíz manifestaba que "...cuando él estuvo viviendo a mi lado hice de él más confianza de la que debía".⁸² En efecto, Doña Tomasa Larrazábal puso el manejo de la Casa en su hijo Fermín y llevada de aquel concepto que había formado de su recto proceder no dudó en firmarle muchos documentos a la mera narración que le hacía de su contenido. Pero Doña Tomasa lo acusa que

"aprovechándose de mi sencillez ha tenido el atrevimiento de sorprenderme, faltando a todas las reglas de la buena fé...pues Dios save muy bien que jamás e pensado confirmarle los pagarés que hacen caveza en los autos, ni nunca he visto semejantes documentos sino cuando se me mandaron reconocer, y así sostengo, y sostendré siempre que yo no he firmado tales vales".⁸³

El desfaldo practicado por Aoíz en Potosí consistió en la desaparición del azogue, como consecuencia del "hecho escandaloso de la escavación del Almacén". La criminalidad del acto se fundaba en haber procedido Aoíz a la ejecución de una escavación o boquete, clandestina y arbitrariamente, sin licencia del gobierno, "...exponiendo como expuso a desplomarse todas las paredes del edificio de la Real Caja con el forado de cinco varas que se había dado de profundidad desde el piso superior del suelo a dicho almacén".⁸⁴ Entre las habilidades que debía poseer un azoguero si quería prosperar en el negocio minero era el de mantener fluídas relaciones (sobornos en forma de gratificaciones) con quién detentare el azogue, ya fuere el Banco de San Carlos o las Reales Cajas. Don Pedro Vicente Cañete y Domínguez nos revela en el ignorado documento de 1802 que "...muchos azogueros sacaban de los Reales Almacenes mucho más azogue del que necesitaban para tenerlo guardado en sus propias casas, acrecentando los valores del fiado que después no podían pagar a los debidos plazos".⁸⁵ Este abuso en el aprovisionamiento de azogue llevó a que algunos pocos azogueros se endeudaran con el Banco de San Carlos muy por encima de lo que le correspondía al giro de su producción de metal. Con respecto al Gremio de Azogueros Cañete alegaba, precabiendo acerca de las nocivas consecuencias que la corrupción reinante en Potosí podía traer:

"...no tanto por la dificultad de la cobranza, a unos sugetos que nunca han sido tenidos por poderosos, quanto por los grandes abusos que fácilmente pueden introducir contra el buen servicio de la mita, y contra el buen orden de las Minas con las pretenciones ambiciosas, que son consiguientes a tan grande extensión de empresas, después de la prepotencia que han adquirido sobre todos los demás Azogueros para hacer valer su voz por la del Gremio entero a favor de sus intereses particulares".⁸⁶

Los monopolios que en ese entonces hegemonizaban la producción de plata era lo que le preocupaba a Cañete, de modo que su posición no era fruto de un resentimiento, como lo presume Buechler (1977), o de la defensa de los dueños de los ingenios como lo sugiere Villava, sino producto de una honda meditación acerca del futuro de la Mita y la Azoguería del Potosí. Como consecuencia del incumplimiento de las Reales Ordenanzas

"...dos o tres azogueros, reúnen entre sí, una mitad de la fuerza de todo el Gremio...Ahora mismo trabajan 26 cabezas Orueta, Bargas y Azcárate, y siguen con la mira de abarcar los que vacaren en adelante en teniendo abundancia de Mita: sin que parezca extraño el poder pronosticar que al cavo de algunos años vendrá a parar toda la Rivera en solas seis o siete manos".⁸⁷

En cuanto a los auxilios (subsidios) semanales que los azogueros recibían de manos del Banco de San Carlos, Cañete agregaba:

"...Ya he dicho que en las quince semanas debe percibir Bargas 30 mil pesos, Orueta 24 mil pesos, y Azcárate 12 mil y más, y entre los tres cerca de 70 mil pesos, que es casi una mitad de los 200 mil".⁸⁸

De resultas de la protesta de Cañete, el gremio de azogueros acordó finalmente en Enero de 1804 exonerar de la contribución de un real por marco a los mineros provincianos. Sin perjuicio de dicha exoneración, la deuda acumulada por el Gremio de azogueros para con la Real Hacienda le hacía pronunciar a Cañete un año después que

"...si he de hablar con mi corazón, debería decir que todo este caudal se halla acumulado y bien escondido entre tres o cuatro azogueros, que los pueden apuntar con el dedo, cuantos han estado en Potosí: porque todo el Mundo ha visto, y está viendo el lujo escandaloso de sus casas, sus ricos menajes, sus cacerías, sus haciendas de campo, y el alto poder que han ganado, por este medio, no habiendo tenido antes de los auxilios ni uno ni otro".⁸⁹

La Renta de Correos.

Respecto a la Renta de Correos, ella tampoco le iba a la zaga en materia de desfalcos y defraudaciones. Como los Administradores designaban a sus oficiales subalternos, mozos de oficio, maestros de posta, correos conductores y demás empleos inferiores, cualquier irregularidad producida por estos últimos recaía en los primeros. Un expediente de la serie de Hacienda nos revela que el Administrador de la Estafeta del Correo de Sicasica, Francisco Medrano, fué acusado en 1796 de defraudar la caja de la administración.⁹⁰ El Administrador del Correo de Oruro, Don Manuel de Aurrecoechea, también fué acusado de estafar a su propia oficina.⁹¹ Aurrecoechea había adelantado en 1777 de las rentas del Correo \$72.000 al Alférez Real Diego Antonio Flores, para el trabajo de sus minas e ingenios. Como el Interventor en la Administración de los Correos de Lima, Don José Alvarez Nava había proyectado que los productos de los Correos de Cochabamba y La Plata se llevasen a Oruro, y que en dicha Villa se retuviesen también los caudales del Comercio de Potosí, que se acostumbraban remitir a Lima por el mismo Correo, "...para que comprando marcos y fundiendo barras tuviese la Renta [de Correos] la utilidad que dejan", sus subalternos en dicha administración implementaron el Proyecto a su manera. Advertido el Administrador Principal de Correos de Lima Don José Antonio de Pando del escándalo que estas malversaciones podían desatar recurrió ante el Tribunal de Cuentas de Lima. Sustanciado el caso ante el Tribunal fueron todos sorprendidos

"...con dolo y mala fé, porque sólo constaba que Aurrecoechea había usado de la plata de la Renta, silenciando que no es de ella, sino de Encomiendas, o usurpada a Luna [Juan Ruiz Luna era el Conductor aprobado por el Gobierno de Lima para transportar los Caudales de las Cajas desde Carabaya y las demás Cajas hasta Potosí] y que la tenía embebida en las minas e ingenios de Flores, lo que tampoco es así porque quando la invirtió en estas Labores y trabajos, ya hacia más de un año que él lo manejaba como propio",⁹²

Asimismo, la Bula de la Santa Cruzada había sido en el Alto Perú objeto de abusos sin número. Las bulas se vendían por vía de la Santa Cruzada y podían ser de latrocinios o de composición. Las primeras se adquirían para que los fieles pudieran comer productos lácteos en tiempos de Cuaresma y podían valer entre \$1 y 2\$ cada una. Las segundas se compraban con el fin de restituir los daños y

perjuicios que el comprador podía haber ocasionado en su vida a terceros, y podían costar desde 2 reales hasta \$30 cada una para difuntos, y desde \$1 hasta \$60 para vivos. Por lo general, las bulas se adquirían en artículo mortis y se consignaba en testamentos y codicilos. Por ejemplo, Juan de Peñarubia, conocido azoguero de la Ribera de Potosí y patrono del Convento de Nuestra Señora de las Mercedes ordenó en su testamento que le comprasen 200 bulas de composición de a 12 reales cada una.⁹³ La recaudación procedente de esta subasta colectiva solía también provocar tentaciones de toda especie. Pablo Tarabello y Francisco Ruiz de Sorzano, recaudadores de la Bula en Oruro, fueron acusados en 1802 de defraudar sus rentas.⁹⁴ Aparentemente, Lamberto de Sierra, un conocido funcionario que se había enfrentado con Cañete, también tuvo experiencia en estos casos, pues había incriminado a Isidro José de Escarza, Recaudador de la Bula de la Santa Cruzada, por haber hecho un uso indiscriminado de los caudales reales. Escarza alegaba que "prevalido de la retardación de la entrega" había sido autorizado por el propio Sierra para poner "en giro" dicho caudal, siempre "...que estuviera seguro y pronto el dinero para cuando llegase el caso de su entero".⁹⁵ Escarza confesaba asimismo por escrito que

"...el deseo de adelantar mis intereses, me hizo entrar en el laboreo de una mina que ofrecía superabundantes ventajas en un cerro llamado de Andacava distante cinco leguas desta Villa, en la que al principio de este trabajo logré sacar algunas piñas que introduxe en este Real Banco, y siguiendo con la explotación me pintó tan mal, que después de cerca de once meses de trabajo y una habilitación de más de nueve mil pesos, no me fué posible sacar producto alguno, ni resarcir siquiera los gastos semanales que hacía".⁹⁶

Si bien los casos más escandalosos de defraudación fiscal se registraron en las Provincias del Alto Perú, también se registraron casos graves en las Gobernaciones-Intendencia del Tucumán y del Río de la Plata. Era usual entre el vecindario de la época atribuir el origen de la acumulación de capital de los grandes comerciantes a la connivencia fraudulenta con los altos funcionarios reales. Es conocida la corrupción general en que estaba sumida la Corte de Madrid en lo que se refiere a la distribución y venta de las designaciones, ascensos y destinos en la burocracia administrativa civil, militar y eclesiástica colonial. Por cierto, entre los cargos más apetecidos estaban los corregimientos y los grados militares. Estos últimos eran duramente disputados y altamente cotizados, debido al privilegio del fuero que les otorgaba la condición de militar, esencial para zafarse de cárceles y embargos en caso de quiebras fraudulentas.

Una vez en funciones, los agraciados debían resarcirse de su inversión y satisfacer a los acreedores y fiadores que les hubieren financiado la adquisición del cargo, por lo general, fuertes comerciantes locales. En el caso particular de la gobernación de Buenos Aires, Apolant (1966) abunda en detalles referentes a la tramitación de dichos cargos en la Corte.⁹⁷ El Gobernador Agustín de Robles no fué una excepción al respecto, y tuvo como su fiador al más importante proveedor de mulas del Alto Perú, el General Miguel de Riblos. Entre las maniobras fraudulentas más comunes cometidas por estos funcionarios figuraba la morosidad en el pago de los salarios de la oficialidad y la tropa acantonada en el fuerte de Buenos Aires, lo cual les permitía especular con el efectivo mientras durara la misma.⁹⁸ En el juicio de residencia que a los comienzos del siglo XVIII se le iniciara al ex-Gobernador de Buenos Aires Agustín de Robles, Pedro Costanza (apoderado de Francisco Rivera, vecino de Madrid, en quién Mateo de Ayora había cedido una obligación otorgada por el ex-Gobernador Robles) acusa a Miguel de Riblos que no fué prodigalidad el haberse obligado a pagar por Robles. Con el fruto de las ventas de mulas en el Alto Perú, y merced a la vista gorda del Gobernador de Buenos Aires y los oficiales del Presidio bajo sus órdenes, Riblos había podido adquirir durante toda la gestión de Robles mercadería foránea en la Colonia del Sacramento, la que una vez introducida ilegalmente engrosaba sus arrias al Alto Perú. En su descargo contra las acusaciones de Costanza, Riblos refiere que

"...respecto de que cuando vino [Robles] a gobernar estas provincias me hallaba sin medios sin casas y con muchas deudas y que desde el tiempo que [Robles] me hizo arbitro de sus dependencias e buscado mucho caudal he edificado Palacios y aumentado las haciendas de campo que tenía perdidas, de manera que sobre hauer sido siempre mis tratos tan caros son tantos los débitos que tengo que cobrar en esta ciudad y en el resto destas Provincias que son muy pocos los que no me deben, en medio de haber dejado a muchos sin casas en que vivir con la mano que tenía de dicho Excelentísimo Señor, de donde saca la razón de la obligación que tenía de pagar por él".⁹⁹

La Renta de Tabaco y Naipes.

Pero de todos los ramos de la Real Hacienda la piedra del escándalo que generara un extendido repudio hacia los funcionarios españoles o porteños era, indiscutiblemente, la Renta de Tabaco y Naipes. Este ramo, como es sabido, fué una creación borbónica. Si bien en teoría el tabaco contaba con tarifas oficiales, en la práctica, los administradores, tercenistas, fieladores, y estanquilleros del Estanco de Tabaco y Naipes imponían, discrecionalmente, el precio con que forzosamente se debían repartir dichas mercancías.

En ese sentido, fueron proverbiales las acusaciones recaídas en los Corregidores de Indios por sus sospechosas relaciones con los Administradores de la Renta de Tabacos. Con motivo del tabaco contrabandeado por Juan Bautista Buytrago en la Provincia de Chichas en la década del 70, el Corregidor de la Provincia de Tarija, Francisco Xavier García de Prado, fué acusado de estar coludido con Buytrago al atropellar al Administrador de la Real Renta de Tabacos Francisco Xavier Savano, cerrándole los estancos.¹⁰⁰ Más luego, en oportunidad de la Rebelión de Tupac Catari, García de Prado, como consecuencia de la nefasta reputación adquirida en el ejercicio de su cargo, fué ajusticiado por los indios.¹⁰¹ También fueron famosas en su momento (1790-95) las acusaciones que recayeron sobre el Administrador General de Tabaco y Naipes de Puno, Miguel de Echenique y su cuñado, el Contador Interino Francisco Vásquez, por una suma que sobrepasaba los diez mil pesos plata.¹⁰² Aparentemente también las Comandancias de Armas se hallaban mediatizadas por las decisiones impuestas por la administración de la Renta de Tabaco y Naipes. En La Rioja, en 1781, el Administrador de la Renta de Tabacos y Capitán de Milicias José Antonio Mercado,¹⁰³ fué arrestado bajo la acusación de haber esquilmado a sus propios soldados con los juegos de azar (naipes y dados) y la venta de bebidas espirituosas.¹⁰⁴ Mercado estaba al frente de las tropas que guarnecían la frontera del Río del Valle.¹⁰⁵ Y veinte años más tarde, la corrupción continuaba, pues el Sub-Inspector de Real Hacienda, cumpliendo las funciones de Gobernador de Córdoba, incomodado con las repetidas quejas contra el Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes, y Alcalde de 2o. Voto José de Noroña y Losada,¹⁰⁶ propuso en 1799 al Comandante Dn. Juan José de Villafañe y Dávila,¹⁰⁷ se hiciese cargo de desempeñar la administración de Tabacos y tenencia de Oficial Real. Para ello se preguntaba en 1799 Francisco Antonio Ortiz de Ocampo,¹⁰⁸ con el patrocinio letrado del Dr. Mariano Zavaleta,

"...¿Acaso hay cosa más pública y notoria que el comercio mantenido por Dn José [Noroña] en compañía de Gervasio Agüero de los tabacos por algunos años interesados por mitad en las utilidades? ¿Por ventura se ignora en la Rioja que el tabaco de oja que se remitió de esta Capital para expendio en la misma tercena y en la jurisdicción, que algunos particulares entre ellos Juan Angel Corso quien con título, que le confirió Dn. José Noroña bajó al partido de los Llanos, e hizo la venta por cueros a maior precio que el de las tercenas, siendo constante también, que el título se le quitó a Corso por el tercenista del partido Dn. Juan de la Vega?."¹⁰⁹

El dinero que entraba en caja por rendimientos de una administración de tabaco y naipes era aquel que entregaban los expendedores por ventas de los efectos que recibían. Mensualmente, los tercenistas y estanquilleros presentaban sus productos con un estado o cuenta general que detallaba lo que recibieron, lo que habían vendido, y las existencias que les quedaban. Sobre las ventas que hubieren tenido se les hacía la deducción del premio que cada uno disfrutaba, y en aquel acto mismo se les pagaba. Todo esto se hacía a presencia de los Libros de oficina y de la cuenta que llevaba el expendedor. Concluido el año, cada expendedor presentaba su cuenta, la cual debía abrazar los efectos recibidos y las ventas hechas en los doce meses del año. Tal era el poder discrecional de los estanquilleros, que en 1799 en un pago (distrito) de la provincia de Buenos Aires tan próximo a las rutas comerciales como San Antonio de Areco, Doña Catalina Zambrano, viuda de Juan González, denunciaba que el estanquillero de Areco, Agustín Iglesia, "...se ha echo temible a los alcaldes pedáneos...y se crée autorizado para oprimir a quien no se somete a sus injustas ideas".¹¹⁰ Según Doña Catalina, el estanquillero Iglesia se ha tomado un ascendiente sobre todos aquellos "...pobres hombres que habitan el partido de Areco, de modo que quiere, que no haya quien resista sus voluntariedades".¹¹¹

También hallamos esta clase de discrecionales funcionarios del Estanco entre los mismos administradores. Entre 1772 y 1774 encontramos que el Coronel Manuel Castro, nacido en Lugo, Galicia, y designado administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán en 1769, fué hallado luego de fallecido, culpable de dejar la Renta casi quebrada.¹¹² Más luego, en 1782, mientras fuera administrador en Córdoba se le hallaron también deficiencias en las cuentas.¹¹³ Efectivamente, una vez fallecido, el Contador Francisco de Urdaneta, de la Real Renta de Tucumán, descubrió que el Coronel había dejado la Renta fallida con un alcance (déficit) del orden de los \$2.600. Juan Manuel de Castro y Carreño,¹¹⁴ su hijo, que luego fuera Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes de San Juan, tuvo a su cargo defender la memoria de su padre y en representación de sus hermanos y sobrinos cuestionó por "injusta y fantástica" dicha suma. Injusta porque no podía quedar debiendo su padre lo que los administradores particulares y estanquilleros de la provincia de La Rioja Fabián González y José Antonio Mercado habrían defraudado.¹¹⁵ Si bien era cierto que Castro los había nombrado y debían haber dado fianza de sus administraciones, su hijo alegaba que "...es constante la especie de conspiración que se tramó en aquella provincia para no admitir dicho encargo y frustrar por este medio el establecimiento del Estanco, de suerte que todos se excusaban de aceptar dicha comisión".¹¹⁶ Es por ello que su padre se vió obligado, para no dar lugar al boicot, a relevar de las fianzas a aquellos que "...sin este gravámen se querían hacer cargo de la administración,...sin que jamás la Dirección General le reprobase un adbitrio".¹¹⁷

Los tercenistas y los estanquilleros de la Real Renta de Tabaco y Naipes contaban en tiempos de la recolonización borbónica con más poder que los Cabildos, lo cual confirma lo aseverado por Palacio (1954) en su célebre polémica con la historiografía liberal. Guzmán (1985) anota que los administradores de las tercenas de Catamarca no sólo negociaban el tabaco y los naipes, sino también los productos cosechados y elaborados en la provincia, al igual que los géneros y artículos ultramarinos que traían los mercaderes de Córdoba y Buenos Aires.¹¹⁸ En el caso concreto de la Administración dirigida por el Coronel Manuel Castro, ésta gozaba de toda suerte de privilegios, pues a más de estar sus tercenistas y estanquilleros exceptuados de hecho de tener que poner fiador, tampoco estaban, al menos en La Rioja, sujetos a la justicia ordinaria, emanada de los funcionarios capitulares locales o de las Diputaciones del Consulado. Por lo general, las pulperías estaban ubicadas próximas a los estancos, no sólo por la necesidad de adquirir naipes sino también por la necesidad de hallar amparo o fuero contra la intervención de la justicia local. Este era el motivo por el cual los Juzgados no podían imponer justicia "...porque los que allí existen de a pié y de a caballo, se pasan luego [de cometer un crimen] al estanco, haciendo alarde de hallarse en sagrado, y dejar así burlada a la justicia".¹¹⁹ También era injusto

que Urdaneta declarara que lo que Castro debía cobrar por concepto de su administración era del 6% del producto de la Renta, compuesto por el 4% en calidad de salario y el 2% restante por vía de gratificación. Siendo estos porcentajes manifiestamente menores a lo dispuesto por el Virrey de Lima en el título por el cual se lo nombró, su hijo Juan Manuel reclamó se diera por nula la ejecución librada. En el despacho de su nombramiento expedido el 11 de octubre de 1769 se especificaba que por compensativo se le asignara a Castro el 10% del tabaco en polvo y en rama que se vendiere al por mayor en las tercenas, y el 5% de lo que se vendiere al por menor en los estanquillos.

Sin embargo, si bien era cierto que en las Ordenanzas Generales del Estanco se prescribía que los Administradores Particulares debían percibir el 10% de lo que producía el tabaco en polvo, no lo era así con respecto al tabaco en rama, para el cual se establecía sólo el 4%. Sin duda, para Juan Manuel, el Virrey quiso premiar a su padre "...compensándole con el aumento del 1% sobre el 4% de esta especie".¹²⁰ En conclusión, la asignación establecida por el Contador Urdaneta, consistente en un 4%, más un 2% en concepto de gratificación, cuando lo que se establecía en las Ordenanzas era el del 10% más un 5%, era "repugnante" por cuanto "...la gratificación era precisamente aquello que se le da a alguno sobre y además del sueldo o salario que debe percibir".¹²¹ Pero el caso de la resistencia que ofrecían los vecinos de La Rioja al Real Estanco no termina con el caso del Coronel Castro. Como es sabido, con la Real Ordenanza de Intendentes de 1782, La Rioja dejó de estar políticamente subordinada a Salta, para pasar a depender de Córdoba.¹²² Cuando en 1781 los Milicianos enviados desde Córdoba y Buenos Aires para reprimir las Provincias del Perú, se apartaron del camino y entraron "tumultuariamente" en La Rioja lo primero que hicieron fué apropiarse del Estanco para ponerle al tabaco el precio que quisieron.

Pero con estas quiebras y abusos no terminan las desventuras de la Renta del Tabaco. El Gobernador Intendente de Córdoba Nicolás Pérez del Viso y el Administrador interino de la Real Renta de Tabaco y Naipes de Córdoba, Don Manuel de Alfaro, fueron procesados en 1803 por el desfaldo descubierto en el Estanco Real. Desde abril de 1799 en que Alfaro se hizo cargo del Estanco, por fallecimiento del anterior Administrador Don Rafael María Castellanos, hasta Diciembre de 1802 en que Alfaro cesó su manejo por suspensión de su empleo, embargo de sus bienes, y arresto de su persona, la administración produjo \$101.727.¹²³ Deducido los gastos, sueldos, remesas y demás erogaciones que llevaron los tres años y nueve meses de la administración debió tener Alfaro en caja \$38.340. Mas no habiendo entregado al Comisionado Martín José de Goycochea más que \$13.096, habían resultado de descubierto \$25.244. Alfaro quizo cubrirse con la excusa de haber sido él mismo quien denunciara el descubierto de \$21.979. Pero los denunciantes Agustín de Olavarrieta, Vicente Caudevilla y Escudero, y Rufino de Cárdenas advierten que su delación no fué hecha sino después de haberse descubierto la falla por el recuento y tanteo que "...a consecuencia de nuestras prevenciones hizo en aquella administración el Gobernador- Intendente interino Don Nicolás Pérez del Viso", de modo que su delación "...lejos de ser libre y espontánea, fué sin disputa coactada por la sorpresa de un recuento que no esperaba".¹²⁴ La Comisión dada a Goycochea para visitar el Estanco de Córdoba fué reservada, "...su marcha desde esta capital a la de Córdoba más precipitada y violenta que la de un correo", al extremo que Alfaro confiesa que lo tomó de sorpresa.

Todos los testigos presentados fueron contestes en señalar que el Gobernador Intendente Pérez del Viso "...aunque venía a practicar las visitas en algunas ocasiones, unas se contaba el dinero y otras no, y que luego pasaba a la Contaduría en donde presume firmaba los estados, y que en otras ocasiones sin que viniese a esta administración se los llevaba a firmar".¹²⁵ Como la obligación periódica e insoslayable de los funcionarios superiores era visitar mensualmente a los funcionarios subalternos y tener que abrir las Cajas Reales con tres llaves distintas, depositadas en diferentes funcionarios,

solamente con una complicidad dolosa se podían superar los obstáculos burocráticos para quien quisiera delinquir. Respecto a la connivencia del Administrador con el Gobernador de Córdoba todos los testigos presentados fueron unánimes al afirmar que Alfaro ofrecía frecuentes banquetes a los que asistía el Teniente Gobernador Intendente Nicolás Pérez del Viso. Y cuando los testigos denuncian que la casa de campo donde Alfaro ofrecía sus banquetes la compró al Teniente Gobernador, se puede entender porqué el Administrador del Estanco "...mantenía en su poder dos llaves de dicha Caja, una que correspondía a él, y la otra al Sr. Teniente Gobernador".¹²⁶ Más aún, cuando los testigos concuerdan que el Administrador del Estanco de Tabaco solía habilitar con tabaco, cigarrillos y naipes a pulperías y billares, sin estar obligado a rendir cuentas, y otro testigo declara "...que el mismo Alfaro le previno a el declarante que hiciese la vista gorda en cuanto a los cigarrillos de contrabando que se vendían en las pulperías", se sobreentiende que la impunidad reinante era tal que no puede sorprender que el fisco fuere defraudado, y los administradores reales pudieren recuperar con creces el caudal desembolsado en la adquisición del cargo, para el cual también prestaban cuantiosas fianzas. Con el fin de deslindar responsabilidades Alfaro culpó del desfaldo al Tercenista y Fiel de Almacenes de la Administración, Don José de Castro, a quien le acusa de tener malos modos para vender, de tener compañía con su cuñado Dámaso Piedrabuena para el expendio en Río Cuarto del mejor tabaco de la Tercena, de vender por encima del precio de tarifa, así como de hacer entrar al peón que robaba la Tercena por la ventana.¹²⁷ Si bien Castro niega los cargos, se contradice al reconocer que "...me hice cómplice en su delito por apaciguar algún remordimiento, y conocer el raro modo con que [Castro] obraba".¹²⁸ Esto último no pudo ser de otro modo que "...o tomando parte de lo que Alfaro robaba, o robando libremente con el beneplácito de éste".¹²⁹ Acreditaba Castro sus descargos, hechos obviamente sin abogado alguno por confesada falta de medios, con el argumento de que "...yo nunca le he ofrecido la llave que estaba en mi poder,...pues no necesitaba hacer entrar al peón por la ventana con traer mi llave,...pero quise averiguar el raro modo con que extraía los tabacos".¹³⁰ Amén de Castro, el Contador Interventor Alexo Antonio Gil y Planzón, también fué hallado cómplice del desfaldo.¹³¹ Por haber Gil llevado libros, sentado partidas, recogido documentos, formado estados y cuentas, y haber prestado su intervención en todos los actos y operaciones de cuenta y razón, debió haber reclamado o protestado lo que a él le correspondía. Gil podía ignorar lo que se extraía fraudulentamente del almacén y de la caja, y aún podría no saber igualmente si se introducían o no los caudales y efectos que debían custodiarse, pero lo que no podía ignorar era que los recuentos mensuales y anuales no se hacían, y que aún cuando uno u otro se practicase, "...era ilegal y vicioso pues jamás se contaban las existencias".¹³² No terminaron ahí las desventuras de Alfaro pues al poco tiempo fué nombrado Interventor de la Renta de Tabacos de Buenos Aires. En su nueva gestión Alfaro dió también lugar a otra quiebra, cuya investigación fué posible merced a la labor de Martín José de Goycochea, como Comisionado del Visitador Diego de la Vega.¹³³

También se extendió la fiebre defraudadora a la provincia de Salta. Cuando en 1806 el descubierto (saldo deudor) del tercer clavero de Arca y Almacenes de la Real Renta de Tabacos de Salta, apellidado Riestra, llevó a la quiebra a su Administrador José Tomás Sánchez, se comprobó que éste último, so pretexto de la "afabilidad y buen corazón" de Riestra, practicaba con él una suerte de favoritismo al ocultarle a la Dirección de Tabaco y Naipes, en la respectiva foja de servicios que le presentaba anualmente, su "carácter poco precavido y afecto a bebidas espirituosas". Amén de la desigual foja de servicios armada por Sánchez en beneficio de Riestra (no ocurriendo lo mismo con los demás estanqueros) aquel lo eximió de prestar las debidas fianzas "...porque según él fué preciso dispensárseles con concepto a la fama de honrados que tenían, a la dificultad de prestarlas, y a la necesidad de facilitar expendedores en los comienzos del establecimiento de esta Renta".¹³⁴ También fué encontrado Sánchez en 1808 responsable por la quiebra ocurrida en el pasado al Administrador Principal de Tucumán José Manuel Soloaga en la suma de \$7.598.¹³⁵ Este último, que era natural de

Buenos Aires,¹³⁶ estaba obligado a remitir a la Administración General de la Renta en Salta "...los productos de su Administración en ciertos y determinados períodos, tan precisos y exigentes que por ningún motivo debió Sánchez dispensarlos".¹³⁷ Como Soloaga no tenía sueldo fijo y contaba sólo con el contingente del 7% de las ventas mayoristas que se practicaban en la Tercena principal, y el 2% sobre el remanente de las ventas practicadas en las Tercenas subalternas, tomó el recurso de ir valiéndose de los productos de la Administración para subvenir así a sus urgencias.¹³⁸ El monto de la falla o quiebra, fué tomada por Soloaga

"poco a poco para comer y vestir muy frugal y casi indecentemente, también lo es por su propia exposición que con el objeto y deseo de cubrir estas fallas y consultar a la conservación de su buen nombre, entró en algunos proyectos que habiendo tenido mal éxito a pesar de sus meditaciones, le doblaron el descubierto".¹³⁹

Si bien Sánchez estaba autorizado para hacer comparecer a Soloaga, y aún para suspenderlo, está claro por lo que surge del expediente que ninguno de estos recursos se tomaron. Por todo ello, los fiscales Olavarrieta, Caudevilla, y Cárdenas concluyen en 1808 que:

"...Si Sánchez por su desidia o condescendencia usó con Soloaga de una indulgencia tan contraria a su deber: si autorizado como estaba para pedirlos de un modo que no lo hizo, debe inferirse que los inicuos atentados de Soloaga traen su origen de la tolerancia de Sánchez siendo por lo mismo este tan responsable como aquel del descubierto indicado".¹⁴⁰

Pero pese a haber sido suspendido Soloaga en su oficio de Administrador, por sospechas de fraude, años después se lo habilitó nuevamente, oportunidad en la cual, según lo refiere el abogado Juan José Mariano Barón del Pozo "...se alzó con 20.000 masos de tabacos y dinero de la Renta, con el aparentado pretexto de ponerlos en giro para llenar el descubierto de la misma Renta".¹⁴¹ Más aún, hallándose del todo fallido y quebrado, Soloaga "...se valió de la autoridad del empleo para levantar peonada y capataces, y correr toda la jurisdicción del Tucumán para que le fíasen ganados los Hacendados, y habiendo malogrado este acto de sorpresa, pagó esta expedición con el caudal de la Renta".¹⁴² Asimismo, abroquelándose siempre en la autoridad que le confería la Renta de Tabacos, Soloaga emprendió varias malogradas expediciones a la jurisdicción de Santa Fé y Abipones, en busca de ganado vacuno, mular y yeguarizo, así como de algodones "...para que le fíen el total, costeando una parte con el caudal de la misma Renta".¹⁴³ También afirmaba Barón que Soloaga había engañado a más de 400 cosecheros "...asegurándoles que tiene licencias del Rey para la siembra de Tabacos en toda la Campaña, y ha trabado concierto de que le den la mitad ya beneficiado y marcado".¹⁴⁴ Pero pese a esta producción clandestina de tabaco que se exportaba a Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires, desde el mes de octubre de 1798 hasta el de febrero de 1799 creció en Tucumán a tal grado la carestía "...que se pitaban raíces y los cabellos de choclos en toda la campaña".¹⁴⁵ Fué entónces, con motivo del descontento y virtual estado de amotinamiento popular que se había generado, que el Gobernador de Salta condescendió en la venta del tabaco de contrabando, y Soloaga aprovechó para convertir "en factoría la Administración, mandando hacer cigarrillos de papel, y sacando ocho reales de cada maso de tabaco", el cual se vendía a 4 y 6 reales cada uno, "...cuando el Rey lo vende a real y medio".¹⁴⁶

Pero el colmo de la defraudación fiscal era lo que ocurría con la Renta de Tabaco y Naipes en Buenos Aires mismo. Manuel José de Lavalle declaraba el 30 de diciembre de 1793 que

"...el contrabando de tabaco Brasil se halla tan extendido en esta ciudad y sus campañas, que no se puede tocar de esta materia que causa rubor; porque desde el Cavallero Gobernador de la Plaza, hasta el más infeliz de ella, saben que nada se vende en los estancos por la multitud de

fraude que se expende, con tal desvergüenza, que ha sucedido pasar por delante de mi casa Administración de noche las cargas de tabaco Brasil con sus caballos, armas, y defraudadores".¹⁴⁷

El contrabando de tabaco seguía dos rutas: la terrestre y la fluvial. La primera se consumaba a lomo de mula a través de la Banda Oriental. La segunda operaba bajando los ríos Paraná y Uruguay. El Teniente Visitador del Resguardo revelaba que este último se practicaba

"...colocando las piezas de tabaco en las piraguas como si formaran piezas menudas, entre la carga principal, y después de pasar el registro de la falúa corsaria descargar en los parajes que les acomode o trasbordar en canoas o balsas para que sigan a su destino".¹⁴⁸

La región cuyana.

Finalmente, de los desfalcos tampoco estuvo exenta la región cuyana, pese a su carácter marginal respecto al circuito mercantil Altoperuano. Como Administrador de la Renta de Tabaco y Ministro de la Real Hacienda en San Juan, fué designado en 1785 Don Juan Manuel de Castro y Carreño, hijo de quien fuera Administrador de la Real Renta de Tabaco de Tucumán y Córdoba, Coronel Manuel Castro. En su gestión Juan Manuel revela haber aprendido de la experiencia de su padre los secretos y las vulnerabilidades de la burocracia colonial, pues una vez instalado en San Juan emprendió toda suerte de ilícitos. Ello dió lugar a que más tarde, en 1808, Castro y Carreño fuera acusado por el Comandante de Milicias de San Juan, José Xavier Jofré Rivero,¹⁴⁹ de deber su prosperidad a un sin fin de actividades ilegales. Estas actividades delictivas Carreño las combinaba a discreción y las sostenía merced a "...la armonía y unión con los subdelegados, a fin de que le disimulen tan escandalosos defectos".¹⁵⁰ Efectivamente, a juzgar por un testimonio de época Castro había conservado una fina e íntima amistad con el Subdelegado Santiago Jofré y Cano de Carvajal, dueño de trapiches donde se molía el mineral de Jáchal y Gualilán, y padre a su vez de José Xavier Jofré. Esta amistad duró hasta que Santiago Jofré falleció

"...tanto que jamás se le vió la menor independencia y lo trataba de padre de él y de sus hijos, del mismo modo se vió corresponderle el Subdelegado hasta la muerte de suerte que guardaron una armonía y confianza admirable, que no se puede dar mayor".¹⁵¹

Por un lado, José Jofré --hijo del finado Santiago Jofré y de María Josefa Riveros-- se había distanciado de Castro, denunciándolo finalmente en 1808 por el ilícito proceder de vender por su cuenta al por mayor los azogues del Rey, al precio de 12 reales cada libra, y a los mineros pobres de Jáchal que venían a comprarlo al por menor, a 18 reales cada libra. Asimismo le incriminó "...los excesivos valores en que expendía los Sumarios de Bulas e indultos, sin que aquel Pueblo haya recaudado la demasía".¹⁵² Además, José Jofré le imputó el "...punible comercio de los tabacos, que distribuía por amistad, usando de infieles romanas, y originándose de todo esto su desconcepto y mala opinión".¹⁵³ Por último, Castro y Carreño solía sacar guías fraudulentas declarando so capa de cargas de vino cargas de aguardiente, que si bien podían tener igual gravámen en el lugar de expedición no lo tenían en el lugar de destino.¹⁵⁴ También solía Castro otorgar las guías de aduana a sus paniaguados para que introdujeran sus mercaderías en destinos geográficos preestablecidos, y en su lugar comercializar la mercancía en puntos intermedios. En otras palabras, los comerciantes no pagaban los gravámenes ni en el destino fingidamente prefijado ni en el efectivamente arribado. Por último, los comerciantes retornaban la guía a Castro y Carreño, quedando este último cubierto y el fisco defraudado.¹⁵⁵ Otro testigo del proceso judicial antes mencionado concluye que el veloz enriquecimiento de Castro y

Carreño "...es un singular fenómeno que no tiene ejemplar tanto porqué no se le han conocido negocios que le pudieran haber producido estas ganancias como porqué el lugar no los tiene ni su giro los ofrece".¹⁵⁶ No obstante la riqueza acumulada, Castro y Carreño se endeudó excesivamente con el comerciante porteño Domingo Belgrano Pérez mediante una operación de fiado practicada en febrero de 1786 por valor de \$12.155, que nunca alcanzó a cancelar.¹⁵⁷ La quiebra fraudulenta del Administrador de la Aduana de Buenos Aires Francisco Ximénez de Mesa, y del Administrador de la Aduana de Montevideo Antonio Quintana Laso de la Vega, ambas cometidas en el bienio 1788-89, y la correlativa quiebra del comerciante Domingo Belgrano Pérez, con quien Castro y Carreño estaba endeudado, terminaron por arrastrar también la suerte de este último.¹⁵⁸

Con referencia a la quiebra del comerciante Domingo Belgrano Pérez, el Oídor Decano José Cabeza Enríquez, comisionado en varios incidentes de la quiebra del Administrador Tesorero de la Real Aduana de Buenos Aires Francisco Ximénez de Mesa, le imputó a Belgrano no haber hecho, en las primeras declaraciones que se le tomaron cuando se le consideraba cómplice de la quiebra de Mesa, manifestación de los efectos que pertenecieron a éste último.¹⁵⁹ En su defensa, Belgrano alegaba haber ignorado a quien pertenecieron tales efectos, y de si eran de Ximénez de Mesa o de Ortega y Monroy, otro de los imputados por cómplice de Mesa. Belgrano sostenía que siempre estuvo en la idea que el haberse puesto la mercadería en su poder de orden de Ortega,

"...provendría de algún encargo que este mismo sujeto hubiese tenido de algún comerciante de España, para darle salida, y que considerándome Ortega sujeto proporcionado, y de su confianza, para que por mi dirección corriese la venta de la factura, previno a José González Bolaños que me la entregase para este intento".¹⁶⁰

Con esta estrategia argumental pudo Belgrano zafar de las acusaciones de cómplice de quiebra fraudulenta, lo cual no le sirvió para sortear su propia quiebra, ni tampoco la de sus clientes en el resto del Virreinato, como fué el caso de Castro y Carreño en San Juan.

Pero la crisis económica provocada por el bloqueo continental que Inglaterra practicaba en Europa, la desarticulación del comercio exterior e interior que esta crisis engendró, la crisis minera que la penuria de azogue y mano de obra había causado, el fracaso de la burocracia en reprimir las quiebras o fallas de la administración colonial, y la consiguiente crisis fiscal que se desató en todas las provincias, necesariamente debió haber provocado fisuras y rivalidades que con posterioridad la revolución y la guerra civil se encargaron de acentuar a niveles hasta entónces desconocidos. Como botón de muestra, Mariano Moreno se refirió reiteradamente en su discutido Plan de Operaciones a la corrupción reinante en ese entonces.¹⁶¹

De la extensa enumeración de casos de corrupción administrativa señalados en este trabajo y del fiasco que resultó de malversar los caudales públicos en una economía minera en franca declinación, que acentuó el escándalo político, intentamos cuestionar la tesis revisionista que sostiene que la corrupción institucionalizada devino en una suerte de válvula de escape para el colonialismo español. En efecto, los ejemplos de corrupción reseñados en este trabajo, ocurridos en el interior del espacio colonial rioplatense, fueron en los casos más graves (aquellos en que se perjudicó la Real Renta de Tributos), cometidos por peninsulares, porteños, o forasteros del lugar de comisión del delito. En aquellos otros casos en que se perjudicó a las Reales Rentas de Alcabalas, Sisa, y Diezmos, sus autores fueron en la mayor parte de los casos criollos.¹⁶² Esto revela que los casos de corrupción que constituyeron una válvula de escape a la presión de las capas criollas, fueron sólo aquellos que gravaban la circulación de bienes; mientras que aquellos otros casos que constituían exacciones a la esfera productiva, en las que se victimizaba a la masa indígena, vinieron a conformar una suerte de

desafío foráneo, que ahondó el resentimiento para con los funcionarios procedentes de España o Buenos Aires, que hicieron posible los estallidos autonomistas que sembraron la historia del siglo XIX latinoamericano.

NOTAS

¹ Ver Saguier, 1988, 1990 y 1993.

² Collini, Winch y Burrow (1987) desarrollan el llamado ciclo de corrupción en analogía al apogeo y caída del imperio romano (Collini, Winch y Burrow, 1987, cap. VI).

³ Peralta Ruiz, 1991, 149.

⁴ Bonilla, 1981, 278, cit. por Peralta Ruiz, 1991, 150.

⁵ De acuerdo con el segundo axioma acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria norteamericana, las políticas económicas de la aristocracia culpables de distorsionar la distribución de dicha riqueza fueron: a) los gravámenes fiscales sin la correspondiente representación política, b) el establecimiento de una burocracia corrupta repleta de militares y clérigos parásitos, c) el favoritismo gubernamental, d) la erección de una iglesia oficial, y e) la emisión inflacionaria de papel moneda (Huston, 1993, 1083-1087).

⁶ Trimberger, 1978, 439.

⁷ Trimberger, 1978, 440.

⁸ Véliz, 1984, 92.

⁹ Padgett y Ansell, 1993, 1308.

¹⁰ Burrow, 1987, 214-216.

¹¹ Ver Saguier, 1991; y Acevedo, 1992, 420-423.

¹² El cobro de la Sisa correspondía a los Oficiales Reales de la Real Hacienda o en su defecto a sus Tenientes. Dichos Oficiales Reales ejercían su cargo en la sede de la Tesorería de las Cajas Reales que se hallaba primero en Jujuy y luego en Salta, y el Teniente de Oficial Real en su subse de que se hallaba en Córdoba. En Jujuy, sus principales funcionarios lo fueron el Contador Gaspar Lozano, y el Tesorero Manuel Sánchez de Bustamante (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86). En Salta lo fué Gabriel Güemes Montero, padre del prócer Martín Miguel de Güemes. Antes de la fundación del Virreinato del Río de la Plata el cobro de la Sisa era arrendado por la Real Hacienda al mejor postor. El proceso de cambio del sistema de arrendamiento por el de administración real varió en su cronología según la riqueza del lugar. En el Río de la Plata dicho proceso se inició con muchos años de retraso respecto a los Virreinos del Perú y la Nueva España. En México, dicho proceso se realizó en el espacio de 20 años (1756-1776), y en Quito entre 1765 y 1787 (Fernández Martínez, 1984, 47). En Córdoba, la Sisa seguía arrendándose en 1770 al Maestro de Campo Don José Rodríguez, dueño de la estancia de Alta Gracia, adquirida a las Temporalidades, quien fuera marido de Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Rodríguez fué el padre del jurista Victorino Rodríguez, ajusticiado en Cabeza de Tigre, de José Antonio

Rodríguez, casado con María Agueda Allende y Mendiolaza, hija del Alcalde Santiago de Allende y Losa; de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María del Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Súa y los Rodríguez Jurado; y del Chantre de la Catedral Justo Juan Rodríguez (LC, I, 336). Igualmente, en Santa Fé, el Real Derecho de Alcabala de tierra seguía arrendándose en 1792 en Juan Mejía por tiempo de tres años (AGN, Caja de Buenos Aires, Legajo 15, Asiento 1, Sala XIII, 14-1-2). Cabe señalar que no debe confundirse el cargo de Teniente de Oficial Real, que pertenecía a la Real Hacienda, con el de Teniente de Rey. El Teniente de Rey era equivalente al de Teniente Gobernador, y desempeñaba según Zinny sólo funciones militares.

¹³ Punta, 1988, 10. En 1768 el Cabildo de Córdoba se quejaba al Virrey del Perú del privilegio fiscal con que contaban los eclesiásticos cuyanos (Punta, 1988, 13-14). En los autos obrados en 1782 por la Diputación del Cabildo de Córdoba acerca de la alegada extenuación del ramo municipal de Propios, Carlos Estela, un comerciante de origen porteño, ex-Tesorero de la Real Hacienda de Córdoba, al igual que con anterioridad lo había denunciado el Teniente Gobernador Arriaga y la minoría del Cabildo de Córdoba, delata la situación imperante en dicho Cabildo como un grave caso de defraudación. Si el Cabildo de Córdoba había cobrado los derechos de entrada de carretas y arrias que debía percibir la Real Hacienda, los ingresos correspondientes a dicho ramo no podían, según Estela, menos que abundar "...por que bien notorio es las mulas que entran en aquella ciudad [Córdoba] de la de Buenos Aires anualmente" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 13, Exp. 269). Pero si, por el contrario, el Cabildo no había cobrado dicho derecho, y como hemos visto, tampoco los cobraba el Alguacil Mayor de Cajas Nicolás García Guilleto, ello sería evidencia de que los vecinos negociantes en las especies gravadas habían usurpado a los Propios este derecho (Sagüier, 1989a, 283). También observaba con asombro en 1786 Don Gabriel Güemes Montero al Gobernador Intendente de Salta del Tucumán, el irrisorio cobro que los Receptores de Sisa y Alcabala practicaban en Salta. En Salta del Tucumán "...las Alcabalas terrestres habían dado unos anuales ingresos tan limitados, cuando sólo con las ventas de vacas, caballos, mulas, y yeguas debían recabarse más de cuatro mil pesos en cada uno. Pasé órdenes positivas al nuevo teniente para que con estudiosa vigilancia inquiriese esta clase de tratos, y sin contemplación exigiese indistintamente de todos, la correspondiente Alcabala, y no hubo hacendado que no se admirase de semejante determinación, que allí para todos carecía de ejemplos (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.44, Exp.1158). Asimismo, ésta era la impresión que Don Rafael María Guerrero y Montañez, Tesorero de la Real Hacienda de Santa Fé, manifestara al Virrey en 1791 con respecto al partido del Rosario, en la provincia de Santa Fé, donde los Receptores de la Campaña "...limitaban su recaudación a sólo los recintos de las capillas de su residencia, y no adelantaban su cuidado a lo interior de las estancias" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 61, Exp. 1594, fs. 1.). Esta negligencia era atribuída en dicho documento al hecho de que dicho ramo de Alcabala, Pulperías, y Sisa no reportaba en la campaña utilidad alguna a los arrendatarios de la recaudación debido al "...costo de los caminos, que necesitaban andar en remotas distancias, para impedir las clandestinas introducciones, ventas, y extracciones de frutos y efectos" (Ibídem, fs. 1). Sin embargo, la corta recaudación obtenida no se compadecía con las "...cuantiosas porciones con que abastece aquel partido [Rosario] a esa ciudad, la de Córdoba, y Mendoza, y crecido el número de mulas, que de el mismo territorio se conduce a Salta, de las cuales ninguna guía han sacado los conductores" (Ibídem, fs. 3). De esta realidad el documento infiere "...que si fueron ocultas las extracciones, serían asimismo clandestinas las introducciones en los destinos, y que por consiguiente se ha hecho también extensivo el perjuicio a otras Tesorerías" (Ibídem, fs.3). También era negativa la impresión que en 1799 tenía el Ministro de la Real Hacienda con sede en Córdoba Gaspar Lozano, de la administración del ramo de Alcabalas de la provincia de La Rioja. Fundaba Lozano su aserto en que

"...no se verificó recaudar derecho alguno, ni de los ganados y mulas que allí se consumen, y expenden, ni de otros diferentes efectos, que se conducen de Chile, cuyo comercio está muy propagado en La Rioja y su jurisdicción con el aumento que han tomado los salitres, que se benefician y se extraen para dicha Capital" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 102, Exp. 2667).

¹⁴ El cargo de Teniente de Oficial Real fué detentado en Córdoba en la década de 1750 por Pedro Fernández de la Torre y Palacios, siendo sucedido por el que fuera hasta 1754 Alcalde Francisco Javier Garay, del clan de los Echenique. Ejerció Garay su cargo hasta febrero de 1760, en que fué reemplazado por Juan de Alberro. A su vez, este último fué reemplazado en 1764 por Francisco José de Uriarte (Ornaghi y Franciosi, s/f, 86). Garay fué herido de una puñalada en 1754, ejerciendo la vara de Alcalde. Era hijo de Fernando de Garay y de Josefa María de Torres y Salguero de Cabrera; marido de Petronila Molina Navarrete; cuñado del Alcalde José de Molina; hermano de Bartolina Garay, mujer del Alcalde José Santiago de Echenique y Cabrera; y padre del Alcalde Provincial Domingo Garay; de Petrona Garay, mujer del Alcalde Francisco Armesto y Allende; de Ipólita Garay, mujer del Alcalde José Benito de Acosta; de Fernando Garay; de Teresa Garay, mujer de José de Ariza; y de Francisca Garay, mujer de Fernando de Arce y Bustillos (CC, 1924, 164; y AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119). Alberro era casado con María del Pilar Fernández, y fué suegro de Juan Antonio de Saráchaga y de Rafael de las Casas y Arrascaeta, quien a su vez era hermano de José Miguel de las Casas, y de Petrona de las Casas, mujer esta última de Rosendo Españón, natural de La Coruña (LC, II, 134 y 135). Uriarte era casado con María Mercedes Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín de Mendiolaza y de Teresa de las Casas y Ponce de León; prima hermana de la mujer de José de Allende y Losa; nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, que proveía los ingenios de la ribera de Potosí; y cuñada de Santiago de Allende y Losa (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.97, Exp.4). En 1763 se le inició a Uriarte un sumario para averiguación de su proceder como Teniente de Oficiales Reales (AHC, Crímen, 1763, Leg.18, Exp.4). Al año siguiente el Alcalde Provincial José Martínez de Candia le inició un juicio por injurias (AHC, Crímen, 1764, Leg.19, Exp.13). Finalmente, en 1769, fué procesado por contrabandista (AHC, Crímen, 1769, Leg.22, Exp.15).

¹⁵ AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.39.

¹⁶ Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan, y casado con Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes. Heredó de su suegro la Subdelegación de Correos de Jujuy en 1795, alcanzó el Coronelato en 1799, y fué designado Alcalde de Primer Voto de Jujuy en 1807. Fué 2o. Jefe del Ejército del Norte, falleciendo en 1812. Padre de Diego José de Pueyrredón, muerto en la batalla de Ayohuma (Cutolo, V, 611).

¹⁷ AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

¹⁸ Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinuesa, José Toribio Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicueta, y Cipriano González de la Madrid.

¹⁹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

²⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 37, Exp. 951.

²¹ Dicho pasquín se halla reproducido en: José Gonsález Ledo y Eduardo R. Saguier (1991).

²² Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinuesa, José Toribio Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicueta y Cipriano González de la Madrid (AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97).

²³ marido de Magdalena Goyechea y de la Corte, nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y de Cesárea Ignacia de la Corte. Viuda, contrajo segundas nupcias con Juan Francisco Martínez de Tineo (Cutolo, III, 427). Era el padre del prócer de la Independencia Argentina General Martín Miguel de Güemes.

²⁴ AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. Por ser hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, era primo hermano carnal de su mujer.

²⁵ hija del Alférez José Zambrano y de Catalina Gómez de Vera (FB, VI, 305).

²⁶ Casado con Cayetana Martínez, hija del hacendado de Areco Felipe Antonio Martínez y de María Feliciano de Lima (FB, IV, 52).

²⁷ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.S-11, Exp.28, fs.2.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Arias Divito, 1978, I, 7.

³⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 105, Exp. 2721, n.736.

³¹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235.

³² Arias Divito, 1978, I, 32.

³³ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 105, Exp. 2721, n. 736.

³⁴ *Idem*.

³⁵ Fué Conductor de los Caudales de Potosí, y Administrador de la Renta de Tabaco y Naipes del Tucumán (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulos 509 y siguientes). En 1778 pide permiso en Buenos Aires para remitir unos efectos (AGN, Licencias y Pasaportes, Libro 15, fs.247-48). En 1798 inicia una demanda por cobro de pesos (AGN, Tribunales, Leg.55, Exp.8). El mismo año se decreta su quiebra (AGN, Comerciales, Leg.25, Exp.19). Finalmente, en 1808, se le devuelven sus bienes embargados por la quiebra que se le atribuyó al tiempo que fue Administrador de Tabacos en el Tucumán (AGN, Hacienda, Leg.24, Exp.576).

³⁶ AGN, Comerciales, Leg. 25, Exp. 19, fs. 90v.

³⁷ Lorenzo Mariano Grambel al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 13-XI-1784 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1).

³⁸ Anteriormente Comandante de la Villa Real de Concepción (Romero de Viola, 1987, 135).

³⁹ Lorenzo Mariano Grambel al Marqués de Loreto, Asunción del Paraguay, 13-XI-1784 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, 5-4-1).

⁴⁰ *Ibídem.*

⁴¹ Bischoff, 1952; y Lobos, 1985, 227-284.

⁴² Miguel Gregorio de Zamalloa al Gobernador Joaquín Alós, 13-II-1788, Asunción (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.3, Sala IX, 5-4-2).

⁴³ *Ibídem.*

⁴⁴ *Ibídem.*

⁴⁵ *Ibídem.*

⁴⁶ AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

⁴⁷ Juan Antonio Moro, Mariano de Iriarte, Agustín Vivas, Luis de Medina, Pedro Martínez de Vinuesa, José Toribio Olmos, Francisco Avelino Costas, Lucas Subicueta y Cipriano González de la Madrid.

⁴⁸ Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan, y casado con Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes.

⁴⁹ Hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, y marido de Gertrudis Medeyros, hija del Asesor Dr. José de Medeyros y de Jerónima Martínez de Iriarte, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de la Provincia de Guanta.

⁵⁰ AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

⁵¹ María Mercedes Rubianes, viuda del Teniente Coronel Gregorio de Zegada.

⁵² AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

⁵³ *Ibídem.*

⁵⁴ *Ibídem.*

⁵⁵ *Ibídem.*

⁵⁶ *Ibídem.*

⁵⁷ *Ibídem.*

⁵⁸ *Ibídem.*

⁵⁹ Nacida en Jujuy en 1763, hija del General Martín Miguel de Goyechea y de Cesárea Ignacia de la Corte, contrajo primeras nupcias en 1778 con el Ministro Gaspar de Güemes Montero, y segundas nupcias con Juan Francisco Martínez de Tineo (Cutolo, III, 427).

⁶⁰ AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

⁶¹ *Ibídem.*

⁶² *Ibídem.*

⁶³ *Ibídem.*

⁶⁴ *Ibídem.* Según la regla 29 del Reglamento del Gobernador de la Luz, del año 1803, todos los sueldos y prest de los individuos de Asamblea y Partidarios deben ser considerados gastos de Guerra y constitutivos del Ramo de Sisa (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.113, Exp. 2.905).

⁶⁵ Era hijo del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León y de Eugenia de Ledesma y Olmedo, cuñado del General Prudencio Palacios, y primo hermano de la mujer de José Manuel Salguero (Lazcano, 1969, III, 293). Era hermano de Domingo Ignacio León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775. Domingo Ignacio se casó con María Josefa Zavala, hija del General Juan Antonio de Zavala, nieta de María de Garay, y hermana del Dr. Juan Antonio de Zavala (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21). A Domingo Ignacio se le inició juicio sucesorio en 1785 (AHC, Escribanía N.1, Leg.405, Exp. 16).

⁶⁶ Bruno, 1967, VI, 483.

⁶⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.14, Exp. 286.

⁶⁸ Capitàn de Ejèrcito, de nacionalidad inglesa (Acevedo, 1992, 154). Había contraído en Buenos Aires escrituras de fiado de Castilla: en 1771 con Domingo Vea y Murguía por \$2.466 (AGN, Registro 6, año 1771, fs.195); y en 1773 con Gonzalo Doblas por valor de \$1.179 (AGN, R.4, 1773, fs.512v.); con M. Ol por valor de \$4.146 (AGN, R.5, 1773, fs.223v.); con Domngo Vea y Murguía por valor de \$3.137 (AGN, R.6, 1773, fs.353v.); y con Manuel Joaquín de Zapiola por valor de \$1.572 (AGN, R.6, 1773, fs.342).

⁶⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2216; y Criminales, Leg. 45, Exp. 3 y 18.

⁷⁰ falleció en 1792 (Acevedo, 1992, 149).

⁷¹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1812.

⁷² AGN, Sala IX, Criminales, Leg.8, Exp.9.

⁷³ Designado Oficial Real de las Cajas de Carangas por fallecimiento en 1754 de Diego Sandoval Benítez, un cuarto de siglo más tarde fué puesto en prisión y ejecutado por el Corregidor de Carangas Mateo Ibáñez, hermano del Marqués de Balbuena, y en 1781 se le concedió la jubilación como Corregidor, siendo reemplazado por Manuel José de Vélez (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.18, Exp.409; Tribunal de Cuentas de Lima, Nombramiento de Oficiales Reales, Libro 2, Fs.359 y 360;

Reales Cédulas, tomo 24, fs.79; y Reales Ordenes, Libro 49, fs.72).

⁷⁴ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907.

⁷⁵ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945, fs. 156-163v., 200-212v.

⁷⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 132, Exp. 3319.

⁷⁷ AGN, Sala IX, Interior, Leg. 64, Exp. 4,

⁷⁸ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 139, Exp. 3559.

⁷⁹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.87, Exp.11, fs.251.

⁸⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2907, fs. 31v.

⁸¹ Idem.

⁸² AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-14, Exp. 10, fs. 99.

⁸³ Idem, fs. 99v.

⁸⁴ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 115, Exp. 2945fs. 202.

⁸⁵ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 110, Exp. 2825, fs. 36v., acápite 71.

⁸⁶ Idem.

⁸⁷ Idem.

⁸⁸ Idem.

⁸⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 124, Exp.3146

⁹⁰ AGN, Sala IX, Reales Ordenes, Libro 26, f.231.

⁹¹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 10, Exp. 192, fs. 13.

⁹² Idem.

⁹³ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210.

⁹⁴ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp. 1770.

⁹⁵ AGN, División Colonia, Expedientes 1800-04, Sala IX, 9-4-5, Exp.No. 97, fs. 8.

⁹⁶ Idem.

⁹⁷ Apolant, 1966, 570, 865.

⁹⁸ Pomer, 1986.

⁹⁹ Para refutar las "imposturas", Riglos aduce, entre otras excusas, que al tiempo que gobernó Robles

"...antes ni después acá aya vendido ni dejado como afirma sin casa, por ser opuesto a mi natural el afligir a nadie ni valerme de la autoridad de los superiores para cosa que no sea de razón".

Más aún, para justificar su inocencia de los cargos de colusión con Robles que Constanza le achaca, Riglos afirma

"...que cuando llegó a gobernar estas Provincias dicho Excelentísimo Sr. el año 1691 me hallaba sin deuda ninguna y tenía edificadas las dos tercias partes de los cuartos que componen mi casa con el caudal procedido del fruto de mis estancias que me dauan más de mil mulas cada año y valían estas en esta ciudad en la ocasión a más de \$4 1/2 de manera que con ellas y los demás frutos que lograba de mis haciendas tenía mas de seis mil pesos de renta cada año y de su procedido en contado mas de 50 mil en plata que emplee en los géneros que me parecieron de conveniencia en los almacenes de Francisco de Retana [dueño de navíos de registro]". (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-1, Exp. 13, fs. 43).

¹⁰⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 12, Exp. 235.

¹⁰¹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-7, Exp. 3.

¹⁰² AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 136, Exp.2; y Leg. 115, Exp.15; y Hacienda, Leg. 66, Exp. 1776; y Leg. 80, Exp. 2085.

¹⁰³ pariente de la mujer del poeta Andrés Ortiz de Ocampo Ysfrán.

¹⁰⁴ A ello respondió Mercado, que "...los soldados no podían seguir su destino por falta de cabalgaduras, los juegos fueron con el Cap. Pedro de Villegas y otro oficial, las bebidas que llevó fueron dos cargas de vino y aguardiente y la venta que hizo dellas fué no sólo entre los soldados si también entre otros independientes que ocurrían a comprarle, lo cual sucedió cuando Mercado recibió el orden para regresarse en que ya no necesitaba de aquellos caldos de que se había proveído para su gasto" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp 9, fs. 249v).

¹⁰⁵ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 194, Exp. 9, fs.248v.

¹⁰⁶ Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer voto Juan José de Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo. Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

¹⁰⁷ Hijo de Juan José de Villafañe y Tejeda y de Petronila Dávila (Serrano Redonnet, 1979, 186). Cuñado de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo, y tío de los hermanos Francisco Antonio, Domingo, y Juan Amaranto Ortiz de Ocampo.

¹⁰⁸ Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán y de María Aurelia de Villafañe y Dávila; y

hermano de Domingo y de los Pbro. Andrés Nicolás y José Gabriel Ortiz de Ocampo, poeta.

¹⁰⁹ AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.39.

¹¹⁰ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 28, fs. 2.

¹¹¹ *Ibíd.*

¹¹² AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 411, fs. 21. Marido de Dominga Carreño Bazán, de origen riojano, hija del General Gregorio Carreño de Lozada, natural de España, y de Teodora Bazán de Cabrera; y cuñado de Francisca Carreño, mujer de Juan Lucas de la Colina (Martínez Villada, 1940, 68; y Lazcano, 1936, I, 118).

¹¹³ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590.

¹¹⁴ Hijo del Coronel Manuel Castro y de Doña Dominga Carreño Bazán, de origen riojano, y yerno de Juan de Lahoraia, comerciante avecindado en San Juan (AGN, Tribunales, Leg.115, Exp.19, fs.366).

¹¹⁵ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590., fs. 39.

¹¹⁶ *Idem*, fs. 24v.

¹¹⁷ *Ibíd.*

¹¹⁸ Guzmán, 1985, 268.

¹¹⁹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 180, Exp. 28, fs. 15.

¹²⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 590, fs.22.

¹²¹ *Idem*, fs.23.

¹²² Bazán, 1973, 14, 232.

¹²³ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044.

¹²⁴ *Idem*.

¹²⁵ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 98, Exp.2556, fs.10.

¹²⁶ *Idem*.

¹²⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2998, fs.172v.

¹²⁸ *Idem*, fs.173.

¹²⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044.

¹³⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 113, Exp. 2998.

- ¹³¹ nacido en Urriés, España. Para sus datos de familia ver Lazcano Colodrero, 1936, I, 224.
- ¹³² AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 120, Exp. 3044.
- ¹³³ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 63, Exp. 9.
- ¹³⁴ AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 54, Exp. 14; y Hacienda, Leg. 121, Exp. 3050.
- ¹³⁵ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, No.1165.
- ¹³⁶ Probablemente hijo de Francisco Zuloaga y de Ana María Gutiérrez (JR, 1987, ítem 2884).
- ¹³⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, No.1165.
- ¹³⁸ AGN, Sala IX, Comerciales, Leg.25, Exp.19, fs.30v.
- ¹³⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 576, N. 1165.
- ¹⁴⁰ Idem.
- ¹⁴¹ AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 514.
- ¹⁴² Idem, capítulo 515.
- ¹⁴³ Idem, capítulos 516 y 517.
- ¹⁴⁴ Idem, capítulos 518 y 519.
- ¹⁴⁵ Idem, capítulo 524.
- ¹⁴⁶ Idem, capítulos 528 y 529.
- ¹⁴⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.68, Exp. 1819.
- ¹⁴⁸ AGN, Sala IX, Leg. 62, Exp.1630, fs. 1-1v.
- ¹⁴⁹ Contrajo primeras nupcias con Dolores Pina y segundas nupcias con Dominga Moyano.
- ¹⁵⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427, fs.33.
- ¹⁵¹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 189, Exp. 16, fs. 110v.
- ¹⁵² AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427.
- ¹⁵³ Idem.
- ¹⁵⁴ Francisco Herrera, dependiente del Resguardo de San Juan declara en el expediente de Visita a la Tesorería menor de San Juan "...que se ha cansado de dar parte a Don Juan Manuel de Castro de que las más veces ha encontrado puestas en guías por de vino las cargas de aguardiente, y que le ha dicho Don Juan Manuel de Castro que la deje que allá en su destino lo repararán, que eso no importa nada en San

Juan con cuio motivo ha dejado correr así la salida de cargas de esta naturaleza (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1810, fs.155).

¹⁵⁵ José Huergo, vecino de San Miguel del Tucumán, rematador del Ramo de Sisa, digo "...que sufre un considerable perjuicio de resultas de no tener noticia de las guías que despacha el Ministro Tesorero de la ciudad de San Juan del Pico [Juan Manuel de Castro y Carreño] para los que conducen cargas de aguardientes y se dirigen a Salta y Jujuy, respecto a que los interesados sacan las correspondientes guías para las dichas ciudades y venden sus cargas en los términos de la del Tucumán sin satisfacer en esta los derechos que adeudan, ni en el destino que fingidamente proponen en San Juan, por que no teniendo entonces precisión de manifestar la guía, la vuelvan original al Tesorero, este queda cubierto, y el Ramo de Sisa defraudado llevando el rematador el perjuicio de no cobrar lo que legitimamente adeudan" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.52, Exp. 1353).

¹⁵⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 136, Exp. 3427, fs. 110.

¹⁵⁷ AGN, Protocolos, Registro 6, 1786, fs. 90v.

¹⁵⁸ AGN, Sala IX, Criminales, Leg. 32, Exp. 6, 7, 10, 11, y 13; Leg. 33, Exp. 4, Leg. 34, Exp. 4, Leg. 35, Exp. 5; y Leg. 36, Exp. 25; Hacienda, Leg. 35, Exp. 895; Leg. 36, Exp. 916 y Leg. 56, Exp. 1423; Tribunales, Leg. A-15, Exp. 19.

¹⁵⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 69, Exp. 1849, fs. 6v.

¹⁶⁰ *Ibídem*.

¹⁶¹ Moreno, 1918, 180-181.

¹⁶² Saguier, 1989.

TOMO II

Capítulo 6

El campo político como espacio de lucha. Las fracturas corporativas y geográficas en el interior Argentino (Siglo XIX)

Las fracturas de las elites políticas, a las que dieron lugar su profunda heterogeneidad, que derivaron en una permanente inestabilidad de los regímenes políticos, han sido y son de naturaleza pre-moderna, moderna y post-moderna. Aparte de las formas conflictivas más institucionales,¹ fundadas en fracturas modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales),² tuvieron lugar otras rupturas o transiciones (golpes y motines, revoluciones e imposiciones sucesorias), fundadas en fracturas pre-modernas (genéticas).

Las provincias, al igual que las naciones en el concierto mundial, han diferido y difieren notoriamente en el carácter y la intensidad de las líneas de fractura que están en la base del conflicto político organizado.³ En parte, las diferencias se deben a factores objetivos inherentes a la diversidad de sus estructuras pre-modernas (genéticas), modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales) y post-modernas (culturales: ecológicas, éticas y estéticas), es decir al hecho de que ciertas líneas de fractura no existen en algunas provincias. Pero por lo general, las diferencias se deben a factores subjetivos, es decir al grado en que ciertas líneas de ruptura se han politizado y otras no. El estudio comparado debería revelar que las diferentes líneas de fractura estuvieron politizadas en cada provincia con diversos grados de intensidad.⁴

En este sentido, en este trabajo nos formulamos una serie de interrogantes:

- 1) ¿es posible que en la base de los conflictos políticos de la segunda mitad del siglo XIX existieran una combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas (genéticas: geográficas, estamentales y corporativas) con otras fracturas de tipo moderno (ideológicas, políticas, económicas y sociales)?;
- 2) ¿admite la noción de nación los conceptos de cuerpos o corporaciones, feudos, estamentos y castas?, ¿acepta otra soberanía geográfica que no sea la de la nación, u otras religiones que no sean la católica?;
- 3) ¿es posible que una fractura pre-moderna fuere subsumida por otra moderna o post-moderna para la gestación del eje central de un conflicto político determinado?;
- y 4) ¿es posible que la institucionalización de las funciones centrales de un estado moderno atenúen la politización de las fracturas étnicas heredadas del Antiguo Régimen?.

Las fracturas socio-corporativas.

En la etapa de la Organización Nacional estuvieron presentes los conflictos nacidos de una fractura socio-corporativa. Los numerosos gremios artesanales (herrereros, sastres, zapateros, albañiles, carpinteros, etc.), existentes en Córdoba y las provincias del norte y del oeste, se habían movilizado, pues se hallaban amenazados en la estabilidad de sus oficios por la irrupción masiva de manufacturas importadas, y por las estrategias sociales y políticas orquestadas por las elites urbanas respecto de las clases subalternas.⁵ Cada Asociación de Artesanos poseía patrones culturales distintos con respecto al derecho de propiedad, a la legislación aduanera, a la Ley de Patentes, a la organización de la familia, a los patrones de residencia, a las aspiraciones de ascenso social, etc.⁶ En San Juan, el Gobernador Agustín Gómez había creado desde el poder la Sociedad de Socorros Mutuos "Obreros del Porvenir". En Córdoba, las décadas del 50 y del 60, los miembros de la Sociedad Terpsícore, que agrupaba a los artesanos,⁷ militaron primero en el Club Unión, enfrentado al Club Constitucional,⁸ y luego en las filas de los Rusos,⁹ facción netamente federal --coaligada en la Confederación Argentina con sede en Paraná, y duramente enfrentada a la facción liberal-- que apoyó primero al Gobernador Alejo del Carmen Guzmán y más luego al Gobernador Mateo Luque.¹⁰ Y en las décadas del 70 y el 80, Tejedoristas, Roquistas y Rochistas se disputaban en toda la República las clientelas de diversos tipos de artesanos, afiliados a distintas asociaciones. Siendo Silvano Bores, (a) "El Zorzal", socio honorario de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos, asociación Tucumana donde estaban afiliados todos los jefes de talleres artesanales, afirmaba en 1879 no haberle

"...costado mucho trabajo el desprenderlos de los tejedoristas y convencerlos que los intereses de ellos están vinculados con los nuestros".¹¹

El Club del Pueblo era en Tucumán el centro político que nucleaba a todos los gremios artesanales. Por ser Miguel M. Nougués el fundador de dicho Club tenía de su parte en 1879

"...a todos los artesanos con un entusiasmo que nunca lo he visto igual, y que nos demostraba nuestra inmensa superioridad sobre los amigos del Gobierno. Estos viéndose en tan reducido número, tuvieron que apelar a todo género de violencia sobre nuestros correligionarios, no habiendo conseguido hacer defeccionar si no a los más débiles que eran unos cuantos".¹²

Posteriormente, de las dos facciones políticas opositoras al Juarismo, Rochistas e Irigoyenistas o Bernardistas, los primeros eran los más beligerantes y los más inclinados a considerar también la cuestión social, capitalizando para ello los rencores nacidos de una fractura socio-corporativa o etno-corporativa. En efecto, los Rochistas implementaron una estrategia de movilización, inclusión y cooptación de las Asociaciones de artesanos (herrereros, sastres, zapateros, albañiles, carpinteros, etc.). En Salta, dirigiéndose a Victorino de la Plaza, Martín G. Güemes, (a) "El Caballero de los Trapos Sucios", afirmaba que los Rochistas manipulaban poblaciones inescrupulosamente, apadrinando

"...una miserable gavilla de artesanos, sin plan, sin rumbos, sin elementos, que se organizaba parodiando un Club alhajados por algunos ambiciosos que querían figurar aunque fuese a costa de la paz y progreso de nuestra querida provincia".¹³

Y en Catamarca, en oportunidad de aceptarse en los pueblos de Andalgalá, Santa María y Tinogasta la matrícula impuesta por la Ley de Patentes, el Diputado Nacional Francisco Caracciolo Figueroa se constituyó desde su llegada a Andalgalá

"...en reclamante universal por mala clasificación: un día se ha presentado al Juzgado encabezando 15 o 20 artesanos entre herreros, sastres, zapateros, albañiles o carpinteros, y una turba de 30 a 40 mujeres de la hez de este pueblo".¹⁴

Figueroa reclamó por aquellos artesanos que carecían de taller, como fué el caso de los 'sastres', como que

"...no los comprendía la Ley porque estos no tenían sastrería pues no tenían mercaderías ni introducidas ni compradas en plaza y que a los sastres solamente no aplicaba patente? la Ley, reclamó por herrerías, por dos bastante formales que he matriculado, dejando dos más pobres sin patente".¹⁵

También Figueroa incluyó a las mujeres en sus reivindicaciones al sostener que en Catamarca

"...no hay herrerías patentables, de carpinterías habló otro tanto y por fin llegó a las Panaderías pidiendo al Juez dé culto libre a las amasanderas y antes que el Juez lo hiciera él les dijo de su cuenta que vayan a amasar de lo que yo protesté haciéndolo responsable de lo que hacía".¹⁶

Finalmente, en Jujuy, donde la fractura de origen corporativo también subsistía, la cuestión social tomaba carta de ciudadanía. Un llamado Club de Obreros, es decir una asociación de artesanos, al servicio del Diputado José María Álvarez Prado,¹⁷ heredero de la facción Barcenista, tomó entidad política, es decir fueron movilizadas políticamente. En el caso específico de Jujuy, el partido gubernista era en Diciembre de 1890 tan reducido, a juicio del ex-Senador Nacional Segundo Linares, que el Gobernador

"...se ha visto obligado a erijir en entidad política a un Club de Obreros, elemento inconsciente de que dispone el Diputado [Álvarez] Prado, compuesto de la última clase social, la que incitada por el licor y por la impunidad, comete diariamente los desmanes que son consiguientes, escandalizando a esta sociedad y comprometiendo a los que lo mueven".¹⁸

La autonomía de las provincias, garantizada en la Constitución Nacional y en las Constituciones Provinciales --argumento central en que se basaba el régimen federal de gobierno y una de las causales de fractura genética-- se la bastardeaba cuando se la pretendía ampliar al extremo de convertirla en soberanía plena, exenta del control de constitucionalidad del gobierno federal. No obstante la primacía de la soberanía nacional por sobre las soberanías provinciales, a cada provincia le asistían derechos propios e indelegables, que la realidad del creciente proceso de centralización fué erosionando cada vez mas.¹⁹

Haciendo referencia al derecho que le cabe al gobierno federal de intervenir las provincias, el Senador Nacional por Corrientes Juan Eusebio Torrent, en la sesión del Senado en que participaron Vélez Sársfield y Sarmiento, pero en una posición opuesta a ambos, se confesó partidario de la intervención a la provincia de Corrientes,²⁰ sosteniendo que

"...siempre que el voto popular, que la soberanía del pueblo son abolidos [o violados], el derecho de intervención surge de la naturaleza misma de la forma [republicana] de gobierno".²¹

Las fracturas geográficas.

Al haberse visualizado la representación política, en lo que iba de los siglos XVIII y XIX, en términos geográficos y no demográficos, las elites se fueron polarizando regionalmente.²² Según Guerra y Lempérière (1998), los lugares de la política en el mundo colonial español eran las ciudades, las villas y los pueblos de indios.²³ Pero las políticas recolonizadoras y centralizadoras Borbónicas (1782) y las nacionalizadoras implementadas luego de Pavón (1862) desestructuraron las relaciones que mantenían las ciudades y las provincias entre sí.²⁴ Los patriciados de las ciudades más antiguas se sentían amenazados por los de las ciudades más nuevas, y las elites de las provincias más antiguas se sentían amenazadas por las elites de las nuevas provincias o territorios nacionales provincializados.²⁵ Esta desestructuración afectó en forma desigual a cada provincia, repercutiendo en las diferentes reacciones que estas tuvieron frente a las políticas centrales.

En este contexto teórico se fueron inscribiendo también las políticas respecto a numerosos rubros de la realidad cotidiana: la manipulación del transporte, las comunicaciones, los procesos educativos, los recursos económicos (hídricos),²⁶ y la diagramación de las redes ferroviarias.²⁷ El desarrollo de los planes ferroviarios y su diagramación en el terreno estuvo íntimamente vinculado a las luchas entre intereses y facciones políticas regionales. Respecto a las obras de tendido ferroviario, en el norte Argentino, el Diputado Provincial de Salta Marcos Figueroa,²⁸ le escribía a Roca que

"...es de mi deber hacerte saber que la Provincia en masa si bien apetece esta obra es en el concepto de que la vía que debe traer es por el Valle de Lerma, pasando a Jujuy directamente por Salta, que de no ser así protestan todos de semejante ferrocarril, desde que no venga a beneficiar la parte más rica de la provincia, y aproximar a la vía los ricos Departamentos de los Valles Calchaquies".²⁹

Si por el contrario, se trazaba la vía por Cobos o Jujuy, con ramal a Salta, Figueroa concluía que "...quedaremos reducidos al ostracismo sin esperanzas ni porvenir de ningún género".³⁰ Para Enero de 1884, el Presidente de la Corte de Justicia de Salta Dr. Ezequiel M. Gallo felicitaba al Ministro de Hacienda Victorino de la Plaza porque "...como buen salteño es el defensor de los intereses de esta provincia al sostener la traza del camino de fierro por el Valle de Lerma en su prolongación a Jujuy".³¹ También, a juicio de Félix M. Saravia, Plaza era uno

"...de los candidatos simpáticos y que se ha hecho acreedor al aprecio y cariño de los Salteños, porque se sabe que defendió ardientemente la cuestión traza del ferrocarril por el Valle de Lerma a Salta y Jujuy en el Gabinete y por otros mil títulos".³²

Respecto al proyecto de prolongación de las vías férreas de Sunchales a Santiago del Estero y Tucumán, éste fué presentado por el Presidente Juárez Celman al Congreso y fué declarado Ley gracias a haber seguido el Ing. Guillermo White el consejo de Juárez de no pedir garantía. De haber pedido garantía, el rechazo hubiera sido seguro. El Gobernador de Santa Fé

"...había hecho trabajos eficaces en contra, pues quería prolongar él al mismo punto su ferrocarril de trocha angosta que se encuentra actualmente en la Colonia Rafaela o San Cristóbal".³³

Se argumentaba además "...la competencia ruinosa que con él se haría al Central Norte de la Nación, en lo que realmente hay algo de verdad".³⁴ También era motivo de disputa la localización geográfica de

los talleres ferroviarios, centros concentradores de peonadas que servían de fuerza de choque en las pujas electorales. El Dr. J. M. Astigueta había iniciado trabajos para que dichos talleres se trasladaran de Córdoba a Tucumán. A ello agregaba el Gobernador Domingo Martínez Muñecas,³⁵ que convenía también trasladar la administración de la vía misma. Muñecas sabía que Astigueta "...ha encontrado resistencias tan vulgares y pueriles como egoístas, inatendibles tratándose de cosas de conveniencia permanente".³⁶ Como excusa se argumentaba que "...habría que abandonar los edificios que ya están trabajados en Córdoba...de considerable costo".³⁷ Pero ese argumento no era para Muñecas digno de tomarse en cuenta, pues "...es necesario que se sepa que esos edificios no valen lo que se dice, ni están trabajados de una manera sólida".³⁸ Por otro lado, esos edificios podían, a juicio de Muñecas "...venderse a particulares y aún a la Municipalidad de Córdoba que podría tomarlos para Hospitales, que no tiene".³⁹ Más aún, esos edificios

"...podrían regalarse a esa provincia para fines de utilidad pública con tal de que el hecho vulgar de esos edificios mal contruídos y erradamente trabajados donde están no fuera obstáculo para levantarlos de nuevo donde permanentemente conviene que estén, que es la estación de Tucumán".⁴⁰

Era en Tucumán donde

"...se hace la provisión de madera que se llevan a Córdoba para el servicio de la línea, de suerte que teniendo los talleres donde están las maderas se ahorran aquellos costos de conducción, con las ventajas de elegirlos de mejor clase y oportunamente en el lugar que se producen".⁴¹

Debiendo prolongarse tarde o temprano el ferrocarril a Jujuy, Muñecas agregaba que era en Tucumán donde

"...están mejor los talleres y administración de la Estación para proveer las necesidades de las dos vías por ser la más central, y por la facilidad de tener a la mano las maderas y el primero de los elementos para construir y reparar vagones y otros objetos correspondientes a los trenes".⁴²

Muñecas hacía notar también que Tucumán "...es el centro de todo el movimiento comercial no solo de la provincia sino del Norte".⁴³ Era también

"...el punto más próximo a las estaciones de mayor importancia de la vía, no quedando ya Córdoba, por su localidad y por el empalme de los dos ferrocarriles, sino como un lugar de tránsito para pasajeros y mercaderías".⁴⁴

Según Muñecas, la localización que él proponía de los talleres y la administración era de interés nacional y no meramente provincial. En esto, Muñecas alegaba que él no procedía como los Mendocinos y Sanjuaninos

"...que procuran hacer del ferrocarril andino una cosa muy casera, muy provinciana a costa de intereses más grandes por ser más nacionales: quieren hasta servirse de los productos del ferrocarril del Norte para sus propósitos egoístas y en ello mezclan intrigas indignas hasta rebajar la circunspección de la oficina de ingenieros".⁴⁵

Pero si bien en un principio, las elites se polarizaban en términos geográficos más que demográficos; con el tiempo comenzaron a polarizarse en términos poblacionales más que territoriales.

En este contexto teórico se inscribieron las disputas entre el centro Porteño y la periferia de las provincias interiores así como los procesos de localización y relocalización de las capitales provinciales.⁴⁶ La localización más discutida fué por cierto la de la Capital Federal, pues antes de ser elegida Buenos Aires, fueron propuestas Rosario, por su localización fluvial, y Río Cuarto, por su centralidad geográfica. Mignanego (1938) nos relata que para la localización de la nueva capital de la provincia de Buenos Aires (La Plata), fueron estudiadas tres hipótesis alternativas: 1} la de ciudad mediterránea, 2} la de colindante a Buenos Aires, y 3) la de fluvial o marítima, venciendo la segunda, por la importancia concedida a su proximidad con Buenos Aires.⁴⁷

La relocalización que más trascendencia tuvo en los anales del regionalismo argentino fué el caso de la capital de Entre Ríos, entre aquellos que defendían la antigua capital en Concepción del Uruguay, impuesta por los sucesivos gobiernos provinciales de Justo José de Urquiza; aquellos que buscaban una transacción emplazando la capital en su centro geográfico, Nogoyá; y aquellos otros más modernos que pujaban por la reforma constitucional con la capital en la Costa del Paraná.⁴⁸ En Entre Ríos, esta necesidad de cambio geográfico obedecía a que, a juicio del Diputado Rufino de Elizalde, "...cada uno de los Diputados vive en su Departamento, y no como en otras provincias de la República, en donde todos los días, casi, están en la Capital".⁴⁹ Para el Gobernador Eduardo Racedo, el centro político formado y denominado Costa del Uruguay "...no tiene importancia intrínseca en este Departamento, pero ni fuera de él".⁵⁰ De haber conseguido la oposición que no se tratara la modificación de la capital, Racedo le confesaba a Roca que "...se me hubiera hechado encima la otra costa [del Paraná] que tiene más importancia por su riqueza y numerosa población".⁵¹ Según Racedo, Enrique Berduc, los Diputados Núñez y Luis Leguizamón "...y los pocos que le quedan a [Ramón] Febre y [Dardo] Rocha...son de su partido para resolver la cuestión por el Paraná".⁵² Mientras que para el Ministro Entrerriano Juan Antonio Mantero, los Dres. Honorio Leguizamón, Benito Cook, Carlos Ugarteche, Alfredo Parodié Mantero, Francisco Quesada, Cigorraga y "...muchos otros jóvenes inteligentes no caben dentro de su partido, porque combaten la traslación de la capital como perjudicial en todos sentidos a la Provincia".⁵³ Mantero no se explicaba el propósito deliberado de llevar la capital al Paraná, pues habiendo examinado la cuestión

"...bajo su faz política, bajo su faz económica y bajo la faz de las conveniencias personales y en ninguna de ellas encuentro justificado el paso".⁵⁴

Pobre Entre Ríos, exclamaba Mantero,

"...si se establecen en el Paraná, con el círculo que actualmente lo rodea. Pobre sobre todo, los que no se hayan mostrado afectos a su política completamente personal. De esos va a ver el reino de los cielos, porque van a sufrir hambre y sed, y las persecuciones de la justicia".⁵⁵

Y para Anastasio Cardassy, fuere o no justa la traslación de la capital, era "...a todas luces inconveniente".⁵⁶ De resultas de esta pugna geográfica, hasta el día de hoy se respeta el principio de la alternancia --para el encabezamiento de las listas de candidatos electivos de la Unión Cívica Radical-- entre las costas del Paraná y el Uruguay.⁵⁷

Y también en Santa Fé regía la predominante incidencia de la fractura territorial o geográfica.⁵⁸ Esta fractura se manifestaba entre las localidades geográficas nortenas sufragáneas a la ciudad de Santa Fé, donde existía un fuerte arraigo Autonomista, y aquellas otras localidades sureñas identificadas con la ciudad de Rosario, donde se daba una sólida presencia Radical. Por ello, una de las cosas que abortaba las candidaturas era la filiación geográfica de los candidatos, según que fueran originarios del

Rosario o de Santa Fé. En la década del 80, la coalición integrada en el Club del Pueblo había sufrido una división profunda. En el Rosario, la facción hegemónica pertenecía al Dr. Gerónimo Cello, y en Santa Fé al Dr. José Gálvez. Mientras a Gálvez lo apoyaba la familia de Iturraspe, a Cello lo apoyaba la familia de Paredes, "...que son largas ambas y hace tiempo trabajan por el imperio".⁵⁹ Asimismo, a juzgar por la información que el Inspector Principal de Telégrafos Nacionales Pedro López le remite a Juárez Celman, entre las familias Gálvez e Iriondo "...se ha producido una escisión que convenía alentar, dando esperanzas a los Iriondos".⁶⁰ Y en 1897 como la candidatura de José Bernardo Iturraspe,⁶¹ estaba puesta en tela de juicio por Galvistas y Leivistas, surgieron como alternativas la del Dr. Luis A. Vila, prohijado por su primo Juan Terrosa, y ayudado por el Gobernador de Entre Ríos Sabá Z. Hernández; la de Juan Terrosa acompañado por "...los mismos elementos de familia que a Vila,...[ambos con] anteriores afinidades con Marcos Juárez y más tarde con el modernismo";⁶² y la del Dr. José García González, prohijado por el ex-Gobernador Juan Manuel Cafferata.⁶³ Pero al referirse a estos candidatos a Gobernador, Desiderio Rosas le manifestaba a Roca, "...que todos aquellos individuos son hombres del Rosario y tu sabes toda la repulsión y los temores que les suspiramos a los hombres de Santa Fé, ante el peligro para estos, de perder la Capital de la Provincia".⁶⁴ Finalmente, con motivo del asesinato del Jefe Político de Rosario Floduardo Grandoli, la candidatura de Iturraspe fué confirmada, nombrándose en lugar de Grandoli a su hermano Octavio "...hermano del finado y pariente mío por ser casado con una hija del Dr. Freyre".⁶⁵ A último momento, el Diputado Lorenzo Anadón intentó persuadir al Gobernador Luciano Leiva que eliminara la candidatura Iturraspe proponiendo la de Tiburcio Benegas, pero fracasó en el intento.⁶⁶

Dentro de la etapa de la Organización Nacional (1852-1880), si bien los conflictos políticos se amortiguaron a través de una política de conciliación, como en los casos de Jujuy y Corrientes, finalmente prevalecieron en la sustentación de las facciones políticas en pugna la fuerza gestatoria y gravitatoria de ciertas fracturas genéticas o pre-modernas. El estudio comparado nos revela como la línea de ruptura etno-lingüística estuvo politizada en Corrientes y Jujuy con más fuerza que en Córdoba y Catamarca; y que la línea de ruptura religiosa estuvo politizada en Córdoba y Catamarca con más fuerza que en Corrientes y Jujuy. También es interesante destacar, en el caso de Jujuy, como la facción Barcenista, que había tomado posiciones francamente anti-indígenas, fundaba su base social en corporaciones urbanas artesanales. Y en el caso de Catamarca, como la facción Figueroísta, apoyada por las corporaciones artesanales, se enfrentaba a los Castristas, de fuerte base ideológica Católica.

NOTAS

¹ sectarismos docentes y eclesiásticos, censura periodística, fraude electoral, corrupción de la justicia, y espionaje postal y telegráfico, ver Burton y Higley, 1987, 296-297 y 305.

² permítaseme citar a Saguier, 1997a y 1997b.

³ Bartolini, 1993, 222.

⁴ Bartolini, 1993, 222.

⁵ prácticas semejantes fueron experimentadas por los gremios artesanales de Colombia. Ver para ello a Urrutia, 1976; y Sowell, 1996.

⁶ Sobre el mundo artesanal de dos ciudades del norte argentino. Salta y Jujuy primera mitad del siglo XIX, ver Raspi, 2001.

⁷ su objetivo era costear los estudios universitarios de los hijos de sus miembros (Pavoni, 1993, 175 y 237, nota 635).

⁸ Pavoni, 1993, 27 y 84, nota 165.

⁹ Su Jefe era el Dr. Alejo Carmen Guzmán y sus principales hombres lo formaban: Manuel Lucero, Ministro Agustín San Millán, José Pío Achával, Jerónimo Yofre, Francisco Loza, Jerónimo Cortés, Fernando Félix de Allende, Eduardo Ramírez de Arellano, Marcos Figueroa, José M. López, José Severo de Olmos, Clemente Oliva, José María Díaz Rolón, Calixto Ordóñez, Tristán Achával, Pedro Serrano, Clodomiro Oliva, Ceferino Núñez, Severo Obregón, Arístides Aguirre, Domingo Garay y otros de destacada actuación (Díaz de Molina, 1972, I, 55). La denominación de Rusos obedecía a la terminología copiada de la Guerra de Crimea.

¹⁰ ver Frías, 1977 y 1978.

¹¹ S. Bores a J. Roca, Tucumán, 15-XII-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

¹² Miguel M. Nougués a J. Roca, Tucumán, 2-II-1879, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.7.

¹³ Martín G. Güemes a V. de la Plaza, Salta, 5-XI-1884, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393.

¹⁴ B. Cisneros a Manuel V. Rodríguez, Andalgalá, 28-XII-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56.

¹⁵ B. Cisneros a Manuel V. Rodríguez, Andalgalá, 28-XII-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56.

¹⁶ B. Cisneros a Manuel V. Rodríguez, Andalgalá, 28-XII-1886, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56.

¹⁷ marido de Filomena Margarita Padilla Bárcena y cuñado Manuel Padilla Bárcena y del Vicario Pablo Padilla Bárcena, hijos del Diputado Provincial Manuel Padilla y de María Bárcena Mendizábal (Calvo, VI, 35). Era hermano menor del Diputado Nacional Tiburcio Alvarez Prado, con cuñado de los Diputados Nacionales Pablo Carrillo Dávila Zegada, y Macedonio Graz Zegada Gorriti, y suegro del Diputado Nacional Miguel Antonio Iturbe Ojeda.

¹⁸ Segundo Linares a J. Roca, Jujuy, 17-XII-1890, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.61.

¹⁹ Con respecto al rol de las provincias en las cuestiones político-sucesorias, el Diputado Nacional Juan Pablo Albarracín, opuesto al Senador Nacional Agustín Gómez, sostenía que San Juan no podía por su posición geográfica, "...tan a trasmano", y por su escasa relevancia demográfica (electoral), "...iniciar candidaturas nacionales para Presidente de la República", y su rol político se

debería reducir "...a vigorizar candidaturas ya iniciadas en otras Provincias, que cuentan con un fuerte núcleo de opinión en su favor" (Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882, AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27). A este hondo complejo de inferioridad, sólo hizo excepción el Senador Rafael Igarzábal quien durante la presidencia de Sarmiento había proclamado infructuosamente en San Juan la candidatura de Manuel Quintana; durante la presidencia de Avellaneda había propuesto al Club del Pueblo, sin éxito alguno, la candidatura del Gobernador de Buenos Aires Carlos Tejedor; y durante la primera presidencia de Roca, en el segundo año de su gobierno, y faltando cuatro años para la finalización de su mandato, propuso la candidatura de Bernardo de Irigoyen. Esta última proclamación resultó, en opinión de Albarracín, "...con tan mala suerte como antes porqué a estas alturas, nadie quiere comprometerse, y lo que es peor, con el prejuizo de que él ha de ser el primero que la ha de abandonar como lo hizo con sus anteriores candidaturas" (Juan Pablo Albarracín a Julio A. Roca, San Juan, 25-X-1882 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.27).

²⁰ Torrent, en una precoz interpretación existencialista, al estilo Carl Schmitt, sostuvo que de las revoluciones "...no me ocupo de ver si son un derecho de los pueblos, desde que son algo más: son un hecho. Un hecho, por cuanto no hay esfuerzo humano que lo contraste. Las verdaderas revoluciones, son inevitables y son invencibles" (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.228).

²¹ Senador Juan Eusebio Torrent, Congreso Nacional, Cámara de Senadores, 11-VII-1878, 19a. sesión ordinaria, p.234.

²² para estudiar el caso del auge y declinación del poder regional, ver Palacio, 1983; y Waldow, 1994.

²³ ver Guerra y Lempérière, 1998, 114.

²⁴ ver Vives (1986).

²⁵ ver Robinson y Thomas (1974) y Colmenares (1991).

²⁶ En Cuyo, y más precisamente en San Juan, la acción del gobierno contra toda tentativa opositora "...se ejerce por medio del agua. Tal como suena. Es sabido que el suelo de San Juan, extremadamente seco, solo ha podido hacerse productivo por medio de obras de irrigación, que en una complicada red de canales abarcan toda la provincia. Como el agua no abunda, cada propietario tiene derecho a una cantidad determinada y paga por el servicio una cuota proporcional. Esta distribución de lo que allí es un elemento esencial de vida y de riqueza está a cargo de juntas electivas a razón de una minuciosidad y exactitud verdaderamente matemática, para que la irrigación alcance a toda la provincia. En tales condiciones se comprende el formidable recurso que el gobierno tiene en sus manos para acallar toda resistencia. Aunque las Juntas administrativas son electivas, la influencia oficial tiene en su formación un poder decisivo, porque el sufragio es en todas sus manifestaciones una simple parodia. De este modo el gobierno viene a tener en su mano la distribución del agua, es decir, la fortuna o la ruina de los particulares. Cuando un opositor molesta, se le cierra el canal en sus campos. Si no los tiene y se opera sobre algún pariente más o menos próximo. Es una espada de Damocles suspendida sobre todos los propietarios. Por estos apuntes puede darse cuenta el lector de la relación que median entre el gobierno y la población de San Juan. Es así, con esta arma incontrastable que los círculos dominantes se han perpetuado más de veinte años en el poder, sofocando en germen toda tentativa de

resistencia y manteniendo la disyuntiva de la sumisión o de la ruina a todos los elementos de arraigo de la provincia. Pero hay todavía otros recursos: el aumento de las cuotas de impuestos, las multas por la falta de conservación de los canales, las contribuciones de brazos para las obras de irrigación. Todos estos medios se emplean sin disimulos ni ocultaciones, obrando con la tranquila despreocupación del que explota un feudo propio ("La Situación de San Juan, El gobierno del agua. La Nación, Jueves 9-I-1902). Acerca de los cambios en la administración del agua de riego en Cuyo, ver Supplee, 1988, y 1993; y sobre el denominado torniquete del agua, ver Rodríguez, 1979; y Lacoste, 1994, 60.

²⁷ Para el caso argentino, ver Peña, 1945; Ortiz, 1946, y 1955, parte II, Cap.III y parte III, Cap.VI; Wright, 1974; y López del Amo, 1990. Para el caso de Colombia, ver Park, 1986, 460-464.

²⁸ hijo de Mariano Figueroa Goyechea y de su prima Mercedes Aráoz Figueroa; y sobrino del Gobernador Cnel. Alejandro Figueroa.

²⁹ Marcos Figueroa a J. Roca, Salta, 14-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

³⁰ Marcos Figueroa a J. Roca, Salta, 17-X-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.33).

³¹ E. M. Gallo a V. de la Plaza, Salta, 24-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.389).

³² Félix M. Saravia a V. de la Plaza, Salta, 1-XI-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.393).

³³ Miguel Juárez Celman a J. Roca, 1887 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56).

³⁴ Miguel Juárez Celman a J. Roca, 1887 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.56).

³⁵ concuñado del Diputado Nacional Julián Murga.

³⁶ Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

³⁷ Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

³⁸ Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

³⁹ Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

⁴⁰ Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

⁴¹ Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca,

Leg.12).

⁴² Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

⁴³ Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

⁴⁴ Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

⁴⁵ Martínez Muñecas a J. Roca, Tucumán, 7-X-1880 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.12).

⁴⁶ Zagarri, 1988, 1252.

⁴⁷ Mignanego, 1938, 8.

⁴⁸ ver Urquiza Almandoz, 1965, II, parte IV, cap.6, 397-403; III, cap.20, 25-36; y III, cap.41, 271-280. Según la oposición a Racedo, el cambio obedecía a la necesidad de vigilar a Santa Fé, cuya situación bajo el control de Simón de Iriondo no era Roquista (Rato de Sambucetti, 1980, 423). En realidad, la hegemonía de Paraná era un retorno a los tiempos en que gobernaba Pascual Echagüe, aliado de Rosas; y a la época en que fué la capital de la Confederación Argentina (Halperín Donghi, 1985b, 30).

⁴⁹ Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-VII-1873, p.557.

⁵⁰ E. Racedo a J. Roca, Uruguay, 21-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

⁵¹ E. Racedo a J. Roca, Uruguay, 21-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

⁵² Juan Antonio Mantero a J. Roca, 24-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

⁵³ Juan Antonio Mantero a J. Roca, 24-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

⁵⁴ Juan A. Mantero a J. Roca, 15-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

⁵⁵ Juan A. Mantero a J. Roca, Uruguay, Entre Ríos, 4-IX-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.33).

⁵⁶ A. Cardassy a J. Roca, Paysandú, 25-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

⁵⁷ Debo este valioso dato a la gentileza de mi correligionario Entrerriano Carlos Moreno.

⁵⁸ también se daban estas disputas en la provincia de La Rioja, entre las ciudades de La Rioja y Chilecito; en la provincia de Corrientes, entre las ciudades de Goya y Corrientes; en la provincia de Córdoba, entre las ciudades de Río Cuarto y Córdoba; en la provincia de San Luis, entre las ciudades de Villa Mercedes y San Luis; y en la provincia de Catamarca, entre los Departamentos del Oeste y los del Este.

⁵⁹ Cándido Pujato a J. Roca, Santa Fé, 14-VII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.39.

⁶⁰ Inspector Principal de Telégrafos Nacionales Pedro López a Juárez Celman, Rosario, 4-VII-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18.

⁶¹ hijo de José Buenaventura Iturraspe Gálvez y de Carmen Freyre Rodríguez del Fresno, casó cuatro veces, la primera con Clara Cabot, la segunda con Sofía Maurer, la tercera con Ana Sieber, y la cuarta con Dominga Cullen Iturraspe, viuda de Emilio Cabal y Gonsález (Calvo, II, 36).

⁶² Desiderio Rosas a Julio A. Roca, Rosario, 17-XI-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76).

⁶³ Nacido en Buenos Aires en 1852, hijo de Juan Lorenzo Cafferata y de Francisca Silveyra, y casado con Adela Garzón (Cutolo, I, 41). Fué padre del Diputado Nacional Juan F. Cafferata Garzón.

⁶⁴ Desiderio Rosas a Julio A. Roca, Rosario, 17-XI-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76).

⁶⁵ J. B. Iturraspe a Luis A. Sauze, Santa Fé, 9-XII-1897 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.76).

⁶⁶ J. B. Iturraspe a Julio A. Roca, Santa Fé, 8-I-1898 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.77).

TOMO II

Capítulo 7

El comicio como alternativa al putsch. El caso del interior argentino en el siglo XIX.

En el desequilibrio de las fuerzas políticas, aparte de las tradicionales rupturas o formas violentas de transición del poder (golpes, putschs y motines, revoluciones e imposiciones sucesorias), fundadas por lo general en fracturas pre-modernas (genéticas),¹ también tuvieron lugar otras formas conflictivas (desajustes o involuciones) más sutiles e institucionales (fraudes electorales, sectarismos docentes y eclesiásticos, censura periodística, corrupción de la justicia, espionaje postal y telegráfico; y diagramación y localización interesadas de ramales ferroviarios, capitales provinciales, juzgados federales y colegios nacionales), fundadas en fracturas modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales).²

El mecanismo inicial de representación pre-moderno o estamental (el capitular), legado histórico de la colonización Habsburga, y que las Reformas Borbónicas no alcanzaron a disolver, reducían el número de los elegibles (voto pasivo) y de los electores (voto activo) a un ínfimo núcleo de parientes y vecinos, lo cual tornaba al parlamentarismo pre-moderno de los Cabildos y la administración de justicia que de él dependía en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas.³ La polarización de las elites en términos de una representatividad pre-moderna (estamental y territorial o geográfica), fue seguida --a juicio de Zagarri (1988) y Gibson (1996)-- por una representatividad puramente moderna (poblacional o demográfica).⁴ A estas tesis se suman también las tesis de la gestación de partidos y facciones políticas, por difusión territorial y/o por penetración geográfica, de Panebianco (1988). Estas estrategias estuvieron combinadas con salidas electorales fraudulentas, aceleradas y distorsionadas debido a una diagramación interesada de los medios de comunicación y transporte (Telégrafos, Ferrocarriles, y una localización condicionada de los centros de poder (capitales de provincia, juzgados federales, colegios nacionales, centros de retransmisión telegráfica, etc.),⁵ donde las elites del interior tomaron conciencia de la necesidad de participar del control de la metrópoli porteña, o en otras palabras, de la necesidad de su federalización.⁶

Para todo el período que arranca con la Organización Nacional y para todo el interior argentino Sábato y Palti (1990) formularon la tesis de la universalidad del sufragio y el carácter estructural de las transiciones por transacción o sucesión (pactos, fraude electoral).⁷ Por el contrario, Pavoni (1995) refuta a Sábato y Palti (1990), y a Sábato (1992), resaltando que en el interior de Argentina las leyes electorales no respetaron el principio del sufragio universal.⁸ Y Andrenacci (1997), sostiene que la reivindicación de derechos políticos en Argentina "...jamás fue el sufragio universal, sino el sufragio secreto y obligatorio".⁹ Respecto a las salidas electorales, las estrategias de dominación estuvieron universalmente determinadas por la intensidad de la movilización política, argumento sostenido por Borón (1972); y por la intensidad de la venalidad política, o compra-venta de votos, tesis formulada por Buchanan y Tullock (1962, 1993). Pero a diferencia de McEvoy (1994), en su tratamiento del caso Peruano, lo que la historiografía científico-política local no ha alcanzado aún a vertebrar es la íntima

conexión que se dió en ese entonces entre las campañas y regímenes electorales y las administraciones comunicacionales (periodismo y telegrafía), judiciales y educativas.¹⁰

Cabe entonces, en el marco de estas tesis, formularse la siguiente pregunta:

¿las innovaciones institucionales (elecciones, colegios electorales, bicameralismo y diagramación y localización de capitales provinciales, juzgados federales, ramales ferroviarios y corresponsalías de diarios capitalinos) fueron asimiladas positivamente por el resto del aparato del estado, operando funcionalmente en la consecución del consenso entre las elites o, por el contrario, se corrompieron reproduciendo las miserias de un estado autocrático y de lo que se dió en llamar un estado oligárquico (fraude electoral, sucesiones impuestas o apuntamientos políticos, motines militares y rebeliones armadas)?. ¿estas innovaciones institucionales en el campo político se compadecían con los niveles vigentes en la administración de justicia, en el régimen educativo, y en la estructura comunicacional (periodismo)?

En este estudio no nos propusimos un análisis empírico de contenido temático, cuantitativo o cualitativo, de los discursos hallables,¹¹ ni una historia de las gestiones de gobierno, sino un análisis de las reacciones que diferentes políticos tuvieron frente a diversas leyes electorales y frente al comportamiento político de diversos actores públicos (funcionarios, periodistas, jueces, rectores, profesores, militares, gerentes de bancos, parlamentarios, sacerdotes, etc.).

Amén del régimen republicano, los regímenes representativo y federal de gobierno eran en nuestro país una utopía. En el caso de la legislación electoral, la necesidad de su modificación obedecía a que el sufragio universal, la inscripción en el Registro Cívico, la insaculación de los jueces electorales, la constitución de los comicios y la práctica de los escrutinios, elementos y escenarios centrales de la política moderna, del régimen representativo de gobierno y de la movilización y participación de nuevos segmentos de la sociedad hasta entonces ajenos a la política --incentivado tras el influjo de la Comuna de París (1870)-- eran una ficción democrática pues en dicha política y dicho régimen regía una suerte de fraude estructural o pre-moderno (genético), fundado no solo en la naturaleza de los mecanismos comiciales y puramente electorales, sino también en la naturaleza patriarcal de la administración de la justicia electoral.¹²

Si bien había sido posible erradicar parte de la estructura estamental, censitaria, señorial, nepótica y étnica heredada del Antiguo Régimen Colonial;¹³ separar parcialmente la Iglesia y el Estado;¹⁴ y ampliar los niveles de competitividad política garantizando las libertades de expresión, prensa y asociación, no había sido aún posible erradicar el fraude electoral y los métodos facciosos de acceso al poder (putschs, asonadas, motines), heredados de la anarquía, las guerras civiles y la dictadura Rosista;¹⁵ ni el peligro de disgregación territorial que la emulación de ficciones nacionales (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) provocaba, es decir "...la atribución de soberanía a naciones que seguían siendo en su mayoría entidades ficticias".¹⁶ Pero pese al fraude electoral, la movilización política de grandes sectores subalternos de la sociedad de entonces, urbanos y rurales, estaba parcialmente garantizada por haber tenido lugar en dichos eventos una movilización organizacional, y una movilización psicosocial e ideológica (afiliación, militancia).¹⁷

Evolución del sistema electoral argentino.

En la evolución del sistema electoral argentino, De Micheli (1991) distingue siete (7) etapas distintas, siendo la primera la que se extiende desde la primera ley electoral promulgada en 1857, hasta

la Ley Sáenz Peña, comprendiendo en dicho período cerca de media docena de leyes.¹⁸ Cada una de dichas leyes nacionales significaron --aplicando las tesis de Rusk (1970) y Converse (1972)-- profundos adelantos en la vida electoral del país, que al dotar a nuestro sistema constitucional de un contenido de acuerdos fundamentales permitió explicitar

"...la alegación a la soberanía y a la voluntad del pueblo...como uno de los contenidos concretos de nuestra Constitución a través de las normas consiguientes".¹⁹

Al no tener nuestra Constitución normas relativas al régimen electoral y a los partidos políticos la legislación electoral "...complementó en el orden valorativo los principios de nuestra Constitución".²⁰ Como cada una de dichas leyes significaron progresos relativos, en este trabajo he de tratar de desagregar la periodización establecida por De Micheli. A esos efectos, los argumentos para impugnar o defender la legislación electoral girarán esencialmente alrededor de experiencias concretas.

En las elecciones de mediados del siglo XIX, existían las mesas inscriptoras de sufragantes y las mesas receptoras de votos así como también los juicios y términos de tachas, semejantes a los vigentes en el Antiguo Régimen Colonial.²¹ En un comienzo, dictada la Ley 140, del 16 de Septiembre de 1857, que rechazó las cláusulas limitacionistas de las Constituciones Provinciales,²² los votos se computaban en forma individual "...principiando por [el candidato] que hubiere obtenido mayor número y siguiendo los demás en el mismo orden".²³ De tal manera, que era factible teóricamente, a juicio de Vera Villalobos (1994), que triunfaran candidatos de distintas listas, según el número de votos obtenidos por cada individuo. Sin embargo, en la práctica, esto no era así, porque los niveles de participación política eran tremendamente limitados, debido al fraude, al analfabetismo y a la arbitrariedad reinantes.

Las reminiscencias estamentales en el régimen electoral.

En los momentos electorales, las instituciones donde más se observaban las invasiones de un poder del estado en otro y las arbitrariedades eran: a) la Junta Electoral,²⁴ compuesta por los Jueces Federales y los Presidentes de la Legislatura y el Tribunal de Justicia, y b) la Justicia de Paz, responsable de administrar la justicia electoral.²⁵ Era en esta última donde más recaían los reclamos de prescindibilidad electoral.²⁶ La participación política de nuevos segmentos de la población consistía primero en la movilización electoral.²⁷ Para ello, era preciso que los sufragantes, previo a la emisión del sufragio, se inscribieran en el Registro Cívico o padrón. Luego, en el comicio, durante la emisión del sufragio, regía una tácita e informal prelación o discriminación estamental pues primero votaba la llamada gente decente y recién a renglón seguido el común o pueblo llano.

En especial en los ámbitos rurales, el electorado no concurría a los comicios individualmente sino que lo hacía integrando contingentes y por lo general armados. Para lograr la participación de dichos contingentes era preciso encarar grandes gastos. En los centros urbanos, como el pueblo era por lo general semi-alfabeto y estaba agremiado a sociedades o corporaciones artesanales o nacionales, para movilizarlos electoralmente e invitarlos a militar o competir políticamente era preciso invertir en medios y operaciones de prensa. Por de pronto, la Junta Electoral informaba en la década del 90 "...que donde había periódicos se ha hecho la publicación [de los registros]".²⁸ En Mendoza, el ex-Gobernador Nicolás Villanueva le aseguraba al Cnel. Julio Campos, que el periódico El Mendocino,

"...aunque no se precisa para hacer la propaganda, que está hecha por los mismos desaciertos y abusos del Gobierno, es indispensable para hacer ver al público (que está atacado de un miedo

cerval) que no es tan seguro como se cree que [Rufino] Ortega nos vá a comer a todos sin peligro de que alguno se indigeste".²⁹

Pero en las zonas rurales, donde prevalecía el analfabetismo, para movilizar electoralmente al campesinado era preciso cooptar caudillos y estancieros. Por lo general, en estos lugares los Jefes Políticos y los Comandantes de Milicias traían los contingentes de milicianos, que con su concurrencia volcaban el resultado de los comicios. En Salta, en 1854, el que luego fuera Gobernador, Manuel Puch,³⁰ designó la mesa escrutadora "...parándose encima de una mesa del salón, con sombrero y poncho calado, gritando por Don Fulano, a lo que contestaba la chuzma que llevó ebria afirmativamente".³¹ De las personas que pasaban por "decentes" concurrieron a dicha selección sólo diez personas, permaneciendo "...el pueblo todo indiferente a este escándalo".³² En Tucumán, tanto en la Capital como en los Departamentos, no se lograba reunir la masa de partidarios "...sino se les dá para almorzar o para cualquier cosa, pero es preciso darles".³³ En la campaña "...hay que darles caballos a casi todos, y como se les lleva de los establecimientos donde trabajan, al punto A o B donde está la mesa hay forzosamente que gastar".³⁴ Y en Santiago del Estero, para hacer una manifestación política en la campaña

"...es necesario prepararla con anticipación y promover fiestas ya sean riñas o carreras, darles bebida a los hombres, carne con cuero, etc. y animarlos bastante hasta que pierdan el miedo a la autoridad que no deja de hacer sentir siempre contra nuestros amigos".³⁵

Las elecciones, antes y después de la unificación nacional (Pavón), solían durar varios días debido a las distancias y la precariedad de las comunicaciones. Uno de los defectos principales de la ley 207 (1859) de elecciones, puesta en vigencia en todas las provincias después de Pavón (1862), era al decir del Diputado Nacional Rufino de Elizalde "...que las elecciones se hacían en tres días, manteniendo por muchos días la agitación electoral".³⁶ Es entonces que el Congreso, a mediados de Noviembre de 1863, dicta la ley 75, que se comunica a toda la República, ordenando hacerse en toda ella Registros nuevos, y

"...arreglando todos los términos, es decir: mandó abrir el registro cívico el segundo domingo de Diciembre del año 63, mandó cerrar el registro cívico el segundo domingo de Enero del 64; dió un mes para las reclamaciones y para la publicación hasta el 15 de Febrero que tuvo lugar la elección de Diputados".³⁷

Este requisito de la inscripción previa de los sufragantes fué de difícil cumplimiento, por cuanto la población rural se rehusaba a enlistar, temerosa de ser convocada para o por la leva. En Salta, Isidoro López Plaza,³⁸ fué elegido Diputado Nacional en una elección popular, donde al igual que todas las anteriores fué hecha "...sin la inscripción previa de los sufragantes en el Registro Cívico, por cuanto este no ha sido abierto hasta hoy por graves inconvenientes para ello".³⁹ El inconveniente fué, según López Plaza, que para esos días, reunido los contingentes de milicias, los gauchos que las integraban, acostumbrados a eludir la leva, "...lo que menos querían era que los apunten para cosa alguna".⁴⁰ Sin embargo, los enemigos políticos de López, en Buenos Aires, el Diputado Nacional por Salta Pedro Uriburu y los Diputados Nacionales por Tucumán Nabor Córdoba y Julián Murga, conocidos por "mazorqueros" o Derquistas, alegando el incumplimiento de la ley 75 no estaban dispuestos a aprobar la elección de Salta. Por ello López le confesaba a su primo político el Juez Federal de Santiago del Estero, Dr. Próspero García, que no iría a Buenos Aires a procurar su aprobación

"...pues no es justo viajar 500 leguas a pedir a esos Sres. que hagan su deber o que hagan

justicia sino que esperaré aquí que hagan lo que quieran, y esperaré el resultado, sea el que fuere".⁴¹

De hecho López no fué a Buenos Aires y su diploma no fué aprobado, perdiendo con ello el parlamento argentino a uno de los más lúcidos políticos que asomaron después de Caseros.⁴²

Para 1873 y debido al fraude generalizado que se registraba en los Comicios fué dictada una nueva ley electoral (Ley 623) que prescribió el tiempo, modo y forma en que habían de hacerse las elecciones de diputados al congreso nacional.⁴³ En esa oportunidad se discutió el modo de emisión del voto, es decir si debía ser público o secreto. Mientras los Diputados Manuel Montes de Oca, Bernardo de Irigoyen, Rafael Igarzábal, Pedro Goyena y otros "...se manifestaban en favor del voto secreto", el proyecto sancionado estableció el voto público.⁴⁴ Sin embargo, veinte años después, el Diputado Nacional Adolfo Dávila afirmaba que no era exacto que en Argentina se haya seguido el sistema del voto público, tal como lo afirmaba el Diputado Nacional José Cortés Funes, y que tampoco era exacto que el sistema argentino fuera el del voto secreto. Para Dávila, se conocieron para ese entonces, el año 1874, tres sistemas de votación: el voto público u oral, el voto escrito simplemente, y el voto secreto.⁴⁵ En última instancia, Dávila recordaba que se sancionó

"...una fórmula mixta, una fórmula de transacción, exactamente igual, por rara coincidencia, a la ley inglesa de 1872, sancionada después de haber oscilado la discusión, en la Cámara de los Comunes y en la de los Lores, entre las dos teorías extremas".⁴⁶

Por otro lado, la ley establecía un doble quorum para que una elección fuera aprobada. En efecto, el Diputado Dávila afirmaba que la ley estableció "...un quorum de actas para que proceda un escrutinio legal, y establece otro quorum de actas para que proceda una elección legal".⁴⁷ Mientras que para que proceda un escrutinio legal, "...se necesita dos tercios del total de las secciones electorales de cada provincia; para que proceda una elección legal, se necesita solo la mitad más uno del total de las secciones, de elecciones válidas".⁴⁸

Tan era así, que cuando algún partido o facción política pretendía privar de la victoria electoral a su opositor bastaba para ello que se adueñara de una porción de actas del Registro Cívico, lo que además impedía la desinsaculación de los escrutadores o integrantes de las Mesas. En Salta, cuando en vísperas de las elecciones de Febrero de 1876, el Diputado Provincial Marcos Figueroa Aráoz, comenzó a indagar a sus partidarios por las inscripciones del Registro Cívico resultó

"...que en época pasada, cuando los Uriburu dominaban, habían recogido todas las inscripciones de manera tal, que no contábamos con qué hacer votar a la inmensa cantidad de jente que teníamos".⁴⁹

Asimismo, la ley de 1873 mantuvo intacta la regla de la pluralidad y la unidad territorial de los distritos, pues

"...los ciudadanos votaban desde un distrito por una lista de candidatos: por lo tanto, la lista que obtenía el primer puesto en la carrera electoral arrastraba consigo la totalidad de las bancas o cargos de elector en disputa".⁵⁰

La aplicación de esta ley dió lugar a lo que se denominaba votación alternativa, una suerte primitiva de lo que hoy se conoce por Ley de Lemas.⁵¹ En Malazán, La Rioja,

"...dos fracciones, una con el nombre del Dr. [Manuel] Quintana, otra con el nombre del Dr. [Adolfo] Alsina, sostenían la candidatura del Sr. Diputado que presenta el diploma [Guillermo San Román], y solo había un partido que sostenía la candidatura de su opositor o rival".⁵²

La mesa electoral, al recibir la votación, "...consideraba como partidos distintos a cada una de las fracciones que sostenía la lista del Dr. San Román, y recibían un voto de cada uno de los tres partidos".⁵³ De tal manera que mientras los partidos daban dos votos al Dr. San Román, "...el otro por ser solo, no daba sino un voto a la candidatura contraria".⁵⁴ Esto era para el Diputado José Benjamín de la Vega "...la votación alternativa ejecutada por la mesa: dos por uno".⁵⁵

Pero tan generalizado se hizo el fraude electoral, a raíz de las debilidades de la ley 623, que en 1877 y como resultante de la Conciliación arribada entre Liberales y Autonomistas, se dictó la Ley 759, que dispuso para toda elección nacional que debía hacerse previamente la inscripción en el Registro Cívico Nacional.⁵⁶ Para ello, la Junta inscriptora debía remitir

"...copias de los registros de inscripción directamente al Juez Nacional para que este remita uno a la Cámara de Diputados y ponga otro a disposición de la Junta, para que ésta, en presencia de él, pueda hacer la insaculación de las mesas receptoras de votos".⁵⁷

Los niveles de participación político-electoral.

Más adelante, durante la llamada Generación del 80, pese a los altos niveles de competitividad política (libertades de expresión, prensa y asociación), y las prescripciones constitucionales y legales vigentes, los niveles de participación política permanecían aún muy limitados, pues las prácticas electorales continuaron siendo fraudulentas. Cuando no se negaba la publicidad de los padrones, producidos por el Registro Cívico Nacional, para desinsacular los escrutadores o integrantes de las Mesas, que era un derecho garantizado por la Constitución Nacional, se formaban mesas dobles, al "estilo Elizalde",⁵⁸ o se robaban directamente las actas resultantes de las elecciones. En Corrientes, los Mitristas fueron los que al no poder luchar en la elección legal organizaron en grupitos las llamadas mesas dobles.⁵⁹ En Monteros, una localidad de Tucumán, a fines de Diciembre de 1885, ya no había esperanzas de que publiquen el Registro Cívico, y la razón de ello era que "...el mismo Secretario y Juez de la Mesa están en todas las series, es decir cuatro veces".⁶⁰ Desde La Rioja, el ex-Diputado Nacional Guillermo San Román,⁶¹ le ratificaba a Dardo Rocha que la Junta insaculadora para la formación de las mesas de calificación y las mesas electorales "...nos asegura sino mesas nuestras por completo, en su mayoría favorables y en otras imparciales".⁶²

El Juzgado Federal había impartido en marzo de 1886 orden de prisión contra el Vice-Presidente de su Legislatura, Marcial Catalán, a instancias del político rochista Guillermo San Román "...por resistirse a entregar documentos de carácter nacional [refiriéndose por cierto al padrón del Registro Cívico Nacional]".⁶³ El suplente de la Junta Insaculadora Sr. Aravena le había entregado a Catalán el resultado de una insaculación fraudulenta, por haber sido hecha antes de vencerse el término de tachas, el 30 de diciembre de 1885, y sin tener a la vista uno solo de los Registros Cívicos de la Provincia "...que por las distancias a que se encuentran las secciones electorales, llegaron recién al Juzgado Federal el 9 del corriente".⁶⁴ Por ese motivo, la Junta Electoral,⁶⁵ se había reunido el 10 de enero de 1886 en el Salón de la Legislatura, y había practicado el sorteo de Conjuces. Pero el Ministro de Gobierno Olímpides Pereira, siguiendo instrucciones del Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, desconoció por decreto a la Junta Electoral y dió orden "...para que sean perseguidos y

reducidos a prisión todos los Conjuces legales, si el día de la elección concurren a desempeñar su mandato".⁶⁶ Por último, el 8 de marzo Catalán destituyó a los integrantes de las mesas electorales sorteados.

En realidad, aquel fraude fué la excusa argüida por San Román para vengarse del atropello que Catalán había hecho antes de la Junta Escrutadora integrada por Rochistas. Frente a la denuncia de San Román, la Corte provincial dictó una orden de prisión contra Catalán, por lo que éste optó por fugarse a Córdoba.⁶⁷ Días más tarde, el Tribunal Supremo de La Rioja fué intervenido por el Poder Ejecutivo Provincial, recayendo la intervención en el Camarista Dr. Lorenzo J. Torres,⁶⁸ y la Junta Escrutadora modificada para otorgarle mayoría al situacionismo.⁶⁹ No obstante, la modificación de la Junta Escrutadora, el oficialismo no se hallaba seguro de su triunfo, pues

"...nuestros agentes, que partieron a la campaña, principian a ser asaltados en los caminos y constituídos en prisión, lo mismo que muchos de nuestros amigos, por partidas armadas que el Gobierno, cumpliendo con las instrucciones traídas por el Ministro Pereyra últimamente, ha apostado en los caminos y puntos de tránsito, para cortarnos toda comunicación con las poblaciones de campaña".⁷⁰

En Salta, tan severa y temeraria era la exclusión de la oposición de la cosa pública, que en 1884, según Feliz M. Saravia,

"...cuando un individuo resulta electo Diputado a la Cámara Provincial se roban las actas y se vá hasta el extremo de no convocar a ese Departamento a una segunda elección, si el resultado no ha de ser en favor de un situacionista".⁷¹

Y en 1886, la zurrapa denunciada por el Rochista Inspector de Telégrafos Luis del Carril,⁷² consistió en dejar sin desinsacular (elegir los escrutadores de las Mesas Electorales) los Departamentos dominados por la oposición so pretexto de no haberse publicitado a tiempo los Registros.⁷³ Carril le informaba a Rocha que

"...nosotros hemos hecho buscar los Registros de los Departamentos no insaculados para reclamar de la Junta la insaculación que les corresponde y en caso que ella niegue la insaculación, nos presentaremos acusándola, sin perjuicio de hacer la elección con los insaculados para formar las mesas de Febrero".⁷⁴

En Catamarca, en las elecciones para Diputados, convocadas en 1884 por el Interventor Onésimo Leguizamón, el día de la elección, según contaba el Senador Nacional Manuel F. Rodríguez,

"...se hizo votar el número de sufragantes convenido [con la oposición] y haciéndolo solamente las personas decentes".⁷⁵

Sin embargo, como se había reunido gente del pueblo, es decir de la llamada plebe, Línor B. Sotomayor me aseguró

"...que esa gente no votaría y que con ese objeto tenía un agente entre ella, permaneciendo todo tranquilo, me retiré a casa",⁷⁶

Pero a las 12 del mediodía, "...Sotomayor me hizo decir que lo ayudase a contener la jente",⁷⁷ que con

Guillermo Castaños a la cabeza

"...pretendía votar por otra lista. No pudiendo ir personalmente, mandé a un hijo mío y fueron avisados los situacionistas que nada hicieron por impedirlo, pues que hasta los miembros de las mesas que pertenecían a ellos habían estado en el complot, y el hecho se consumó contra nuestra voluntad y deseos".⁷⁸

Finalmente, las elecciones las perdió el oficialismo. Según el Interventor Onésimo Leguizamón,⁷⁹ la elección

"...ha sido tumultuosa durante la primera hora, pero habiéndose apercibido de la causa, que eran los fraudes de dobles o triples votaciones y desórdenes consiguientes, y creyendo que elecciones presididas en tu nombre [Roca] no debían ser solo libres, sino honradas, ordené que los ciudadanos después de haber sufragado fuesen vigilados en grupos separados correspondientes a las dos mesas y a los dos partidos".⁸⁰

Al principio, los representantes del gobierno aceptaron la medida, como justa, imparcial y tranquilizadora; pero, después de una hora, viéndose sin votos,

"...reclamó de la vigilancia de sus amigos pensando echar mano de ellos para preparar sin duda nuevas emisiones de votantes. Yo [Leguizamón] mantuve la disposición, sin perjuicio de proceder a dejar en libertad completa a la parte decente, ocupada o enferma, y esto ha originado la protesta frívola de Ocampo y pocos amigos por actos que no afectan a la libertad del sufragio ni a la condición política de los ciudadanos".⁸¹

Las mesas, totalmente favorables a la situación, porque eran las antiguas,

"...comenzaron entonces a rechazar los votos de la oposición a pretexto de cambio de nombre, falta de edad, etc., y como estaban en mayoría, su decisión hacía ley".⁸²

Apercibido de estas arbitrariedades, por denuncia de los comisarios, Leguizamón se trasladó personalmente al atrio, y

"...por medio de reflexiones, advertencias y llamamientos amistosos a la equidad y honradez política conseguimos que el acto continuase sin interrupción hasta su término, no habiendo motivo para lamentar incidente alguno, sino la gritería grosera de Rodríguez y Castro que hubieron de perjudicar sus fueros en un momento en que se insolentaron injustamente con el Comisario Galiano".⁸³

En las elecciones para Diputados convocadas en 1884 por el Interventor Leguizamón, dos de ellas fueron ganadas por la oposición. En Pomán, un capitán que había mandado la intervención con un Piquete de Línea so pretexto de garantizar la libertad electoral, emitía

"...toda clase de amenazas, hasta de fusilar a nuestros amigos y echar a las tropas de línea al Juez Departamental".⁸⁴

En la Capital de Catamarca, un oficial de la Intervención fué "...hasta el grado de andar encabezando grupos electorales y tomando y rompiendo boletos de nuestros amigos".⁸⁵ Y todo este lujo de hostilización era

"...para hacer Diputado en Pomán al Presidente de la Asociación Católica y en la Capital a uno de sus miembros más exaltados. En La Paz ganó el partido situacionista a fuerza de tener el Departamento en masa, no habiéndose podido vencer nuestra mayoría ni poniendo en la cárcel a los agentes principales de la autoridad, como lo hizo otro Destacamento de fuerza de línea mandado por el Interventor".⁸⁶

Un año después, el Ministro de Gobierno Antonio del Pino,⁸⁷ le confesaba al Gobernador de Córdoba Juárez Celman, la impotencia política de su facción partidaria, a la sazón oficialista, pues

"...ha sido imposible quitar de algunas mesas calificadoras 4 o 5 jueces departamentales, que estaban sumariados y que debieran ser suspendidos".⁸⁸

Pero un par de meses más tarde, en Diciembre de 1885, la oposición Rochista denunciaba que como consecuencia de la clausura de las sesiones extraordinarias, el Poder Judicial había quedado

"...librado al capricho del Ejecutivo habiéndose producido ya el caso de separación de dos magistrados rectos con pretextos fútiles, quedando sin justicia que nos ampare y en situación desfavorable por lo que respecta a la intervención de esta en la formación de las mesas receptoras de votos".⁸⁹

A juicio del Diputado Nacional Estanislao Zeballos, los Jueces de Paz eran en 1882 "...con arreglo a nuestro sistema electoral, la llave de la elección". Estaba en manos de los Jueces de Paz de toda la República la pureza del sufragio,

"...porque son los Presidentes de las Juntas que hacen la inscripción de los ciudadanos, es decir, la calificación de los votantes, y bastaría que un Juez de Paz, pusiera entorpecimiento a un reclamo, para que un voto falso quedase en la inscripción, o para que un voto válido no fuese recibido en ella. Son, además de los funcionarios que dirigen la inscripción, los Presidentes de los Tribunales de Apelación por inscripción indebida....Son ellos los que deben entregar las urnas y los registros".⁹⁰

Y treinta años después, para el Diputado Nacional por Corrientes Adolfo Contte, los Jueces de Paz "...tienen a su cargo el registro civil de las personas; y según la ley nacional de elecciones, los encargados del registro civil son quienes expiden el duplicado de renovación de las libretas deterioradas o extraviadas".⁹¹

La violencia electoral.

La violencia siempre estuvo íntimamente vinculada con las elecciones provinciales y nacionales convocadas periódicamente por los gobiernos.⁹² Para Pepe Posse, (a) "El Doctor Amoníaco",⁹³ elecciones "...en el sentido legal y republicano no ha habido en ninguna parte".⁹⁴ Hasta donde alcanzaron las fuerzas de Línea, bajo las órdenes de los Gobernadores del Presidente Roca, las elecciones se hicieron según Posse "...aparatos de votaciones excluyendo opositores, encarcelando, persiguiendo o amenazándolos con las culatas de los remington para alejarlos de las mesas".⁹⁵ Ahora, decía Posse en Febrero de 1886, a dos meses de las elecciones de Abril, "...no hablemos de Juárez, que es para mí un muñeco político con entrañas de acerrín, no es él quien ha triunfado es Roca con su sistema de fuerza".⁹⁶ Posse, en un rapto de voluntarismo político, concluía que no se podrá fundar

gobierno regular según nuestras aspiraciones y nuestros deseos,

"...sino barriendo el suelo, triunfando con la lucha sobre la lucha, deshaciendo hasta los cimientos la obra de este soldado brutal que corrompió hombres e ideas para fundar el poder más cínico y corrupto de la que se recuerden en la historia de las repúblicas sud-americanas".⁹⁷

En 1885, desde Tucumán Lídoro Quinteros le advertía al rochista Luis del Carril que

"...conviene apoderarse de la Junta insaculadora, cosa que se obtendrá por el nombramiento del Juez Federal y por medio del Presidente de la Cámara de Justicia que es el Interventor Nacional del Banco Muñoz, el Dr. Oliva".⁹⁸

En Agosto de 1885, en vísperas de un acto electoral, V. López Cabanillas le informaba a Rocha desde Córdoba que

"...en la noche del sábado las bajadas y avenidas a la Ciudad habían sido ocupadas por fuerzas de policía y que nuestros amigos de los alrededores que se dirigían a la ciudad, eran presos y conducidos a la Policía".⁹⁹

La venalidad en el régimen electoral.

Frente a la soberbia de la fuerza bruta, no había otra forma de ganar elecciones que recurriendo a la venalidad, es decir comprando escrutadores mediante el dinero.¹⁰⁰ Desde Jujuy, en Febrero de 1886, el Gobernador J. M. Alvarez Prado,¹⁰¹ le informaba a Roca que a consecuencia del dinero derramado por los Rochistas y en consideración de estar Jujuy cortada de las demás provincias amigas y expuesta a sucumbir por falta de armas y municiones; "...comprendo que nuestro partido así debilitado solamente puede triunfar con el auxilio del poder judicial".¹⁰² Al parecer esta acusación era cierta, por cuanto en abril de 1886, Pío Uriburu le escribe a Luis M. Campos confesándole con gran sagacidad y realismo que en Jujuy

"...tenemos que vencer con dinero, pues en todos los Departamentos el Gobierno ha mandado fuerzas y los Escrutadores insaculados son enemigos. Hemos vístonos en el caso de tener que comprar a los Comisarios, escrutadores, etc.; pues careciendo de armas no tenemos otra arma que el dinero, de la que hay que valerse para contrarrestar la fuerza".¹⁰³

En Santiago del Estero, practicando nueva insaculación de escrutadores, tal como lo disponía la Ley Electoral, el Gobernador Absalón Rojas le aseguraba a Juárez Celman que mejoraríamos el resultado electoral "...eliminando aquellos sospechosos y también aquellos que por sus humildes condiciones pueden ser ventajosamente reemplazados".¹⁰⁴ Y como la Ley Electoral disponía que treinta días antes de cada elección debía hacerse una nueva insaculación de escrutadores, Absalón Rojas le comentaba a Juárez Celman, que

"...es indudable que la oposición ha conseguido comprarse algunos escrutadores en 2 o 3 Departamentos para hacerlos firmar actas falsas hechas antes o después de la elección y es indudable también que sigue sus trabajos en este sentido no solamente para obtener que les firmen estas actas, aunque sean dos o tres escrutadores, sino que pretenden conquistarlos para la otra elección, ofreciendo fuertes sumas de dinero".¹⁰⁵

En Catamarca, en 1886, en oportunidad de las elecciones Presidenciales, el Gobernador José S. Daza le denunciaba a Juárez Celman, que los Rochistas "...han mandado emisarios por todos los Departamentos,...a ver si corrompen a los conjucees por medio del dinero".¹⁰⁶ Para ello, según Daza, "...tendrán que fundir el Banco Hipotecario, pues en los dos o tres Departamentos que tenían sus guardas, no cuentan con un sólo hombre [escrutador] en las mesas [electorales]".¹⁰⁷

Para fines de siglo, el acto electoral de renovación de la Cámara no era, para el Diputado Nacional Benito Carrasco, un acto simple,

"...sino un acto complejo, que tiene una infinidad de actos preparatorios, como son la formación del padrón electoral, como es por consiguiente, la insaculación y el sorteo de los ciudadanos que deben presidir la formación del registro; como es, después, el período de tachas; como es, en seguida, el sorteo de las mesas que deben recibir los votos".¹⁰⁸

Al no estar la fecha de las elecciones lo suficientemente prescripta por la Ley 623, de 1877, los Gobernadores las fijaban arbitrariamente. Al discutirse el art.44 de dicha Ley, el miembro informante de la Comisión de Legislación Diputado Juan M. Garro,¹⁰⁹ manifestaba en 1874 que

"...no pueden ocultarse a nadie los inconvenientes que resultarían, si las elecciones de Diputados se verificasen cuando lo estimasen conveniente los poderes de provincia".¹¹⁰

Según el Diputado Garro, las elecciones las estimaban convenientes cuando los Gobernadores "...creen que el momento es oportuno para hacer triunfar sus miras y propósitos".¹¹¹ Esta situación la Cámara no podía ni debía tolerarla; pues la ley debe

"...determinar el tiempo dentro del cual debe verificarse la elección, a fin de quebrar en manos de los gobernadores de provincia esa arma que les dá los resultados que buscan, mandando al seno de la cámara a sus adictos".¹¹²

Por último, la ley estatuyó dos meses para que se inscribieran todos los ciudadanos que estuvieren en aptitud de votar. Vencidos esos dos meses, el Diputado Nacional Pascual Beracochea sostenía que

"...debe inmediatamente hacerse la publicación de ese registro, para que todos los ciudadanos que tengan reclamos que deducir por exclusión o inclusión indebidas ocurran ante la misma junta, que al efecto se ha convertido en tribunal de primera instancia, a deducir sus reclamos".¹¹³

El art.9 de la Ley establecía que la Junta Electoral se constituía cuando se hubieran cumplido los requisitos de un Registro Cívico: "...dos meses de inscripción, un mes de publicación, un mes para conocer todas las tachas, ya sea en primera instancia o ante el jurado, y luego ante el juez federal, por vía de apelación".¹¹⁴ Asimismo, la Ley establecía que la publicación del Registro Cívico debía hacerse en los periódicos y, donde no los hubiere, por vía de carteles. Las elecciones de Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Salta, Santiago del Estero y La Rioja, practicadas en 1872, adolecieron de vicios flagrantes, pues a juicio del Diputado Nacional oficialista por Mendoza José Vicente Zapata,

"...los registros no han sido publicados en el tiempo que la ley designa; el personal que debían tener las mesas inscriptoras, no fué designado en el tiempo que la ley marca; [y] el personal de las mesas receptoras de votos, tampoco fué nombrado en el tiempo fijado por la ley".¹¹⁵

Para fines de siglo, la venalidad electoral se había extendido a niveles inéditos. Tucumán era una de las provincias donde más se había registrado el fenómeno debido sin duda al boom azucarero. El caso llegó al extremo que mediante la compra-venta de votos, el popular gobernador Lucas Córdoba fue derrotado.¹¹⁶

El fraude censal.

Finalmente, para impedir una rápida circulación de las elites la oligarquía o clase dominante había generalizado mecanismos desvirtuadores, tales como el fraude censal. Este último consistía en no ajustar la representación parlamentaria a las cifras procedentes de los Censos de Población.¹¹⁷ En aquellas provincias donde la representación no se había ajustado aún al nuevo censo de 1895 (Ley 3289/95) la oposición fué reclamando perentoriamente su actualización. En 1904, la oposición Puntana le pidió al Interventor Francisco Beazley que solicitara al Ministro del Interior una resolución "...ajustando la representación legislativa al Censo Nacional del 95".¹¹⁸ Para el Senador Eriberto Mendoza era "...una verdadera reforma de ocasión y tendiente a favorecer a un partido".¹¹⁹ El adoptar el Censo de 1895 era para el Senador Mendoza "...del exclusivo resorte de las autoridades locales, [pues] el Censo es una ley nacional y para efectos nacionales las provincias están en su derecho de adoptarlo o no".¹²⁰ Si en San Luis dicha Reforma no estaba en vigencia, era a juicio de Mendoza porque

"...no se ha podido reformar la Constitución para variar la proporción de tres mil habitantes porque se elige cada Diputado y también porque la adopción del Censo del 69 es prescripción Constitucional y no legal".¹²¹

Y en Santa Fé, en 1922, los convencionales reunidos para reformar la Constitución de la provincia se quejaban de que la aplicación del Censo de 1894 no reflejaba con fidelidad "...la población que hoy encierran los departamentos más importantes".¹²²

No obstante toda esta legislación, el fraude electoral se perpetuó aún mas en el tiempo, y hubo que esperar primero hasta 1902, en que el Ministro del Interior de la segunda Presidencia de Roca, Joaquín V. González, dictó la efímera Ley 4161, que estableció el sistema de las circunscripciones uninominales, aunque de voto verbal o cantado,¹²³ declarada inconstitucional por el Presidente Quintana, y luego diez años mas, hasta 1912, en que se dictó la Ley Sáenz Peña, para alcanzar el voto universal masculino, secreto y obligatorio.¹²⁴ Sin embargo, a partir del 30 hubo que observar nuevamente la restauración del fraude, con la derogación de la Ley Sáenz Peña y la instauración de la Ley 12.298, por la cual se retornó al sistema de lista completa.¹²⁵ Por último, con el acceso del Peronismo al poder, se retornó a la Ley Sáenz Peña, pero con la novedad de incluir en el voto universal al voto femenino. Asimismo, el gobierno Peronista, con el objeto de triunfar como sea rediseñó en la Reforma de 1951 las circunscripciones electorales al capricho de los intereses políticos del oficialismo, reduciéndose así notoriamente la representación de la oposición Radical en la Cámara baja.¹²⁶

NOTAS

¹ permítaseme citar a Saguier, 1996.

² ver Burton y Higley, 1987, 296-297 y 305; y Rokkan, 1970. Sobre Rokkan, ver Bartolini, 1993,

220-224; Máiz, 1994, 105-106; y von Byeme, 1995, 161-162.

³ Solo aquellos que tuvieran casa poblada de por sí en la villa de su jurisdicción, fueren vecinos, mayores de 20 años de edad, fuesen honrados "de buena opinión y fama", no hubieran ejercido ningún oficio mecánico "ni otros trabajos humildes y bajos", fuesen personas beneméritas "...de buenas partes y servicios, idóneas, temerosas, y celosas del servicio de Dios nuestro Señor, limpias, rectas, y de buenas costumbres", es decir, carecieran de tacha racial alguna, y fuesen hijos de legítimo matrimonio, reducía enormemente el universo dentro del cual podía elegirse a un capitular, operando como una suerte de ley de embudo (Leyes 6, 10, y 12, Tít.10, Lib.4; Ley 8, Tít.3, Lib.5; y Ley 13, Tít.2, Lib.3 de la Recopilación de Indias; y Ley 3, Tít.9, Lib.3 y Ley 1 y 7, Tít.10, Lib.4 de la Recopilación de Castilla. Según Pedro Vicente Cañete "...el extranjero no puede ser Alcalde ni Regidor por la Ley 66, Cap.5, Tít.4, Lib.2, y Ley 2, Tít.3, Lib.7 de Castilla; no puede serlo tampoco el hombre desentendido, o de mal ceso, ni el mudo, ni el sordo, ni el ciego, ni el enfermo havitual, ni el que fuere de mala fama, ni el herege, ni la mujer, ni el siervo según la Ley 7 y 8, Tít.9, Lib. 3 de Castilla copiadas literalmente de la Ley 4, Tít.4, part.3, y Ley 7, Tít.6, part.7, incluso el clérigo de orden sacro, y los Alcaydes de Fortalezas que están igualmente prohibidos por la Ley 10, Tít.3, Lib.1, y por la Ley 15, Tít.5, Lib.3 de Castilla" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Para la noción de vecindad ver Lezcano de Podetti (1968). En cuanto a que solo los varones podían ser cabildantes, Barbier (1972) enfatiza el rol de las estructuras informales del poder, entre las cuales debe destacarse el rol de algunas mujeres, como fué el caso en Córdoba de María de Allende y Losa, esposa del Alcalde Gregorio de Arrascaeta; y de Clara de Echenique y Urtubey, mujer del Alcalde Provincial José Martínez de Candia; y en Mendoza, de María Josefa Corvalán, la mujer del Fiscal de la Real Audiencia de Santiago de Chile, Dr. José Perfecto de Salas. Entre otro de los requisitos de la elegibilidad capitular se hallaba el de haber cumplido con el "hueco" (Institución que prescribía en los Cabildos un intervalo de dos o tres años entre cargo y cargo [Hevia Bolaños, 1853, 14; y Bayle, 1952, 113-115]).

⁴ fundados en Hardoy (1983).

⁵ Si bien en un principio (1859) el comicio duraba el término de tres días, con el posterior desarrollo de las vías férreas y del telégrafo se logró disminuir sus plazos, y acelerarse la publicación de los padrones, y la insaculación y sorteo del personal de las mesas inscriptoras y receptoras. El art.9 de la Ley 623, de 1877, estableció que la Junta Electoral se constituía cuando se hubieran cumplido los requisitos de un Registro Cívico: "...dos meses de inscripción, un mes de publicación, un mes para conocer todas las tachas, ya sea en primera instancia o ante el jurado, y luego ante el juez federal, por vía de apelación" (Diputado Pascual Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión ordinaria, p.217).

⁶ Sobre la aceleración de los medios de comunicación, ver Ensinck (1977); Davire de Musri (1987); Moncaut (1993); y Pérez (1984).

⁷ Sábato y Palti, 1990, 417. Para estos dos autores, el carácter estructural del fraude consistía en una guerra espacial y temporalmente recortada (Sábato y Palti, 1995, citado en Lettieri, 1995, 10).

⁸ sobre el sufragio restringido en Bolivia, ver Irurozqui, 1996.

⁹ Andrenacci, 1997, 126. Por cierto, no podía ser de otra manera, desde que el sufragio universal se formuló en el Río de la Plata, por vez primera, en la Ley Electoral de 1821 (ver Ternavasio, 1997).

¹⁰ ver Saguier, 1995a, 1995b y 1996-1997.

¹¹ cables de prensa, fallos judiciales, manuales educativos, partes militares, debates parlamentarios, textos telegráficos, memorias bancarias, sermones y homilias religiosos, etc.

¹² rasgos semejantes pueden ser observados en la historia peruana, ver para ello Peloso, 1996.

¹³ en el voto activo y pasivo (constitución de Juntas Electorales y designación de los insaculadores de las Mesas inscriptoras y receptoras de votos).

¹⁴ privando a la primera de instrumentos de poder temporales (registro de actos civiles y administración de la caridad).

¹⁵ Bonaudo y Sonzogni, 1992, 101; y Guerra, 1993, 369 y 374.

¹⁶ Guerra, 1993, 369 y 374.

¹⁷ Borón, 1972, 215.

¹⁸ De Micheli, 1991, citado en Nino, 1992, 548.

¹⁹ Exposición del Convencional Alberto García Lema, Convención Nacional Constituyente, 1994, I, p.633.

²⁰ Exposición del Convencional Alberto García Lema, Convención Nacional Constituyente, 1994, I, p.633.

²¹ En el período colonial, el fenómeno eleccionario estaba compuesto por tres actos distintos: la calificación, la elección propiamente dicha, y la confirmación. El acto o sesión de la calificación debía ser, según el abogado porteño educado en el Chile colonial Dr. Mariano Pérez de Saravia y Sorarte, el lugar donde exclusivamente debían resolverse las causas que privaban o tachaban (impugnaban) a las personas de elegir y ser elegidas. Este acto o cabildo extraordinario, que en Potosí --a juzgar por lo que opinaba Pedro Vicente Cañete-- llamaban de dudas (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12), debía ser celebrado en la víspera de cada elección. Es decir, en dicho acto debían quedar decididas "...las tachas, y excluidos de la voz activa y pasiva los sujetos comprendidos en ellas, para entrar al día siguiente sin estos embarazos a prestar únicamente los votos o elegir" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 98, Exp. 7, fs.45). Quienes podían privar de voz y voto a algún cabildante, o incluso impugnar a uno o varios candidatos a ocupar cargos concejiles eran, amén de los cabildantes mismos, los Virreyes, los Gobernadores, y las Reales Audiencias. El objeto de estas sesiones extraordinarias de calificación de votos era para Mariano Moreno "...asegurar la dignidad de los sujetos, sin exponer a infamación a los que no se consideren dignos de ser elegidos" (AGN, Tribunales, Leg.98, Exp.5, fs.19v.). Después que en el acto de calificación de votos era reconocida la idoneidad de una persona, no debía según Moreno "...admitirse reproche alguno que se le oponga al tiempo de elegir" (Ibídem). Aquellos que resultaban no tener tacha ni vicio alguno se escribían en el Libro de Acuerdos como hábiles y suficientes para poder ser elegidos, y los que padecían de alguna nota o excepción verbal quedaban excluidos (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). Las excepciones verbales no se asentaban para evitar difamaciones (Ibídem). El acto de la elección debía ser por cédulas secretas el día primero de cada año, sin poder

saberse otra cosa sino que "...algunos de los candidatos propuestos, admitidos, y calificados por los mismos regidores" debían salir elegidos para Alcaldes (Ibídem). Las cédulas en blanco les eran repartidas en la misma Sala Capitular "...retirándose cada uno de por sí a la Mesa del Escribano [donde] escribe allí de su propia letra los nombres, y pasando con el Papel ya doblado al Presidente del Cabildo y demás Jueces, lo entrega por su mano dentro de una vasija hasta su tiempo" (Ibídem). Concluida la votación, se acercaban a la Mesa de la Justicia los dos Regidores más antiguos y el Escribano de Cabildo en cuya presencia se vaciaban los votos y se contaban, para confrontar su número con el de los vocales. Luego, el Presidente iba abriendo las cédulas una por una, las leía en voz alta, "...y por este orden corre y se publica el papel por los dos Alcaldes Ordinarios y los dos Regidores señalados para el escrutinio" (AGN, Tribunales, Leg.79, Exp.12). En tanto, el acto de la confirmación, celebrado obviamente a posteriori de la elección, era exclusivo de los Gobernadores-Intendentes, aunque en numerosas oportunidades lo practicaban los Comisionados designados al efecto.

²² Pavoni, 1995, 115.

²³ art.37 de la Ley 140, y art. 20 de la Ley 207.

²⁴ no confundir con las Juntas de Electores o Colegio Electoral, magníficamente descripta por Botana, 1977, 86.

²⁵ Los Jueces de Paz eran en esa época jueces legos y no letrados.

²⁶ Halperín Donghi, 1985, 87.

²⁷ Según Borón (1972) en la movilización electoral, una de las tres componentes de la movilización política, conjuntamente con la movilización organizacional y la psicosocial e ideológica, es una categoría en cuyo interior se distinguen por lo menos cuatro procesos parciales:

a) la extensión del sufragio;

b) la inscripción electoral;

c) el incremento en la proporción de votantes;

y d) la votación por los distintos partidos (Borón, 1972, 217).

²⁸ Diputado Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión ordinaria, p.218.

²⁹ Nicolás Villanueva al Cnel. Julio Campos, Mendoza, 30-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.207).

³⁰ hijo del Gral. Dionisio Puch de la Vega Velarde (GD.1841); y sobrino político del prócer Martín Miguel de Güemes Goyechea.

³¹ José Uriburu a Anselmo Rojo, Salta, 27-I-1856 (AGN, Sala VII, Colección Rojo, 10-3-2).

³² Ibídem.

³³ Carlos M. Maldonado a D. Rocha, Tucumán, 3-XI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

³⁴ Carlos M. Maldonado a D. Rocha, Tucumán, 3-XI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

³⁵ Félix Cordero a D. Rocha, Santiago del Estero, 14-VII-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

³⁶ Diputado Nacional Rufino de Elizalde, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-VII-1873, 561.

³⁷ Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-VII-1873, 561.

³⁸ Graduado en Chuquisaca durante el exilio de sus padres. Es muy probable que el Gral. Roca conociera a este político salteño en oportunidad que acompañara a su tío materno el Dr. Marcos Paz, cuando fué enviado por Mitre después de Pavón como Interventor a las provincias del norte (Yaben, 1938, V, 149).

³⁹ Isidoro López al Juez Federal Próspero García, Salta, 12-II-1866 (AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero García, Sala VII, 20-3-13).

⁴⁰ Isidoro López al Juez Federal Próspero García, Salta, 12-II-1866 (AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero García, Sala VII, 20-3-13).

⁴¹ Isidoro López al Juez Federal Próspero García, Salta, 12-II-1866 (AGN, Documentación Donada, Arch. Próspero García, Sala VII, 20-3-13).

⁴² Cutolo atribuye la no asunción del cargo a su muerte, pero la verdad fué que las rencillas internas pudieron más que su ya maltrecha salud.

⁴³ Sobre la reforma electoral de 1873, ver Segovia (1995).

⁴⁴ Diputado José Cortés Funes, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, p.151.

⁴⁵ "...El voto público oral se emite de esta manera: el ciudadano concurre al comicio y el oficial público encargado de tomar los sufragios recibe de viva voz, de los labios del votante, los candidatos por quienes vota. Se firma el asiento, se identifica debidamente la persona del elector, y con la nómina de los nombres de esta manera recogidos, se practica el escrutinio. El voto simplemente escrito, en contraposición del voto público, se hace por boletas escritas, impresas o manuscritas, en las que consta el número del registro de inscripción del votante, el nombre del candidato y el nombre del sufragante, y esta boleta se deposita en la urna: es el sistema argentino. El tercer sistema es el del voto secreto, el que se practica de esta manera: el sufragante se presenta ante el jurado, hace inscribir solamente su nombre y el número de inscripción en el registro que llevan los oficiales públicos, y a la urna no va sino una boleta en la que consta simplemente el nombre del candidato" (Diputado Adolfo Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, p.134).

⁴⁶ Diputado Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, p.159.

⁴⁷ Diputado Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, p.133.

⁴⁸ Diputado Dávila, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 11-VI-1894, 8a sesión ordinaria, p.133.

⁴⁹ Marcos Figueroa a Victorino de la Plaza, Salta, 7-II-1876, AGN, Arch. V. de la Plaza, Sala VII, 4-7-13, fs.381.

⁵⁰ López, 1971, II, 387, citado en Botana, 1977, 254.

⁵¹ exposición del Senador Domingo F. Sarmiento, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, 11-VI-1878, 19a. Reunión Ordinaria, p.203. Las listas, tal como lo describe Ternavasio (1995), "...no estaban constituídas por diferentes nombres, sino por una combinación de candidatos que se cruzaban y repetían" (Ternavasio, 1995, 75).

⁵² Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

⁵³ Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

⁵⁴ Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

⁵⁵ Diputado de la Vega, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 7-VIII-1874, p.577.

⁵⁶ sobre esta ley, ver Cullen-Crisol, 1991.

⁵⁷ Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-V-1878, p.48.

⁵⁸ por Rufino de Elizalde, el Ministro de Mitre.

⁵⁹ Manuel Derqui a J. Roca, Corrientes, 10-V-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.31).

⁶⁰ Juan Fuentes a Carlos Fauvety, Monteros, 24-XII-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.206).

⁶¹ hijo de Guillermo Dávila y de M. San Román; nieto del Coronel Nicolás Dávila; marido de Nicolasa Azcoeta y Torres; y padres del Gobernador Julio San Román y Azcoeta (Lazcano Colodrero, III, 396).

⁶² G. San Román a D. Rocha, La Rioja, 6-IV-1885 (AGN, Documentación Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

⁶³ Guillermo San Román al Comandante Marcelino Reyes, La Rioja, 17-III-1886 (AGN, Sala

VII, Arch. Rocha, Leg.205).

⁶⁴ Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

⁶⁵ compuesta por el Presidente de la Legislatura, el Juez Federal y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia. En caso de ausencia del Juez Federal lo reemplazaba el Administrador de Correos. El deber del Juez Federal consistía a juicio del Diputado Nacional Filemón Posse en "...informar si son ciertos los hechos en que las protestas se fundan". Pero era la Cámara Legislativa, juez de la elección, la que "...juzgaba de la gravedad de los hechos y de la prueba que sobre esos hechos se produzca, si es válida o nula la elección por estar o no la provincia tal o caul en condiciones electorales" (Filemón Posse, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 31-V-1886, p.109).

⁶⁶ Guillermo San Román a Dardo Rocha, La Rioja, 22-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

⁶⁷ Guillermo San Román al Comandante Marcelino Reyes, La Rioja, 17-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.205).

⁶⁸ nacido en La Rioja (no confundir con el homónimo porteño), hijo del Mayor Juan de la Cruz Torres y de Dominga Moreno, y marido de Delicia de la Fuente (Cutolo, VII, 375).

⁶⁹ San Román le expresaba a Luis María Campos que "...estamos en plena dictadura. El Poder Judicial acaba de ser derrocado para hacer mayoría en la Junta Escrutadora, por supuesto con un verdadero atentado constitucional. Quedamos sin tribunales y entregados a la justicia de un animal, como Lorenzo Torres, Camarista!!! y de un borracho consuetudinario un doctorcito Pazos!!!" (Guillermo San Román a L. M. Campos, La Rioja, 9-IV-1886, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

⁷⁰ "...El telegrama de Don Pedro Larrahona que acabo de recibir y le incluyo original, nos dá aviso de que el Dr. D. José A. Argüello y D. Jacinto Rincón, agentes nuestros para dirigir los trabajos en el Dpto. Vinchina, han sido presas y detenidos en Sañogasta, cuando se dirigían a su destino, para evitar elección popular en aquel Dpto. y simular actas oficiales bajo la presión de la fuerza. En los demás Departamentos, según avisos que me llegan de momento a momento, sucede lo mismo, y a esta hora habrán sido constituídos en prisión la mayor parte de nuestros amigos en la campaña, la cual es recorrida en todas direcciones por partidas de soldados armados, de línea, de policía y movilizados, que el Gobierno ha distribuído para evitar la elección y simular otra, como la de D. Rubín Ocampo, que han mandado al Congreso, hecha en el Despacho de Gobierno, estando sus registros con la tinta, los sobres y letra de los Escribientes del Despacho. Casi las dos terceras partes de la fuerza nacional del Comandante Fuentes, reforzada con un piquete de línea que llegó últimamente, incluso el Capitán Grigera y otro oficial mas, han sido lanzados a los Dptos. de los Llanos con el objeto de perseguir sufragantes, asaltándolos en los caminos y poblaciones de aquellos Departamentos. Además de estos oficiales, han marchado con fuerzas Bringas y otros profesores del Colegio Nacional, que andan por esos mundos cometiendo todo género de tropelías contra nuestros amigos, que desgraciadamente se encuentran con las manos atadas para escarmentar a estos bandoleros electorales que hacen espalda en el Gobierno Nacional" (G. San Román a L. M. Campos, La Rioja, 9-IV-1886, AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.204).

⁷¹ Félix M. Saravia a Victorino de la Plaza, Salta, 1-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. V. de la P., Leg.393).

⁷² era sanjuanino, hijo de Nicolás del Carril y la Rosa y de Januaria Benavídez Balmaceda, avecindado en Tucumán, y matrimoniado con Rosa Alvarez, nacida en Tucumán, y suegro del Senador Nacional por La Rioja, Segundo Tiburcio Gallo Ferreyra (Calvo, III, 276).

⁷³ Desde Salta, en marzo de 1886, en vista de que el Gobernador Solá mantenía la neutralidad y no consentía que se hiciera nada en favor de la candidatura de Juárez Celman, y ante la inevitabilidad del triunfo de Rocha, Benjamín Mollinedo le escribía a J. Celman que "...nos hemos propuesto evitar que tengan lugar las elecciones de Abril en 8 o 10 Departamentos; pues estando dividida la provincia en 21 secciones electorales, necesitamos evitarlas en aquel número para que no hayan los dos tercios de actas, resultando de este modo la elección nula...con el concurso del Dr. Martín G. Güemes, los Ortiz y alguno de los Figueroa, que son los que están en el secreto, es posible obtengamos el éxito deseado. En pocos días mas, tendrá lugar la insaculación de escrutadores y verificada esta, recién le avisaré a Vd. de una manera definitiva, si los 12 votos de Salta han de ser para Rocha o por el aire" (Benjamín Mollinedo a J. Celman, Salta, 5-III-1886, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.22).

⁷⁴ Luis del Carril a D. Rocha, Salta, 20-III-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.216).

⁷⁵ Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42.

⁷⁶ Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42.

⁷⁷ Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42.

⁷⁸ "...El resultado del cambio es el siguiente: en la Capital ha salido electo un hermano político del Dr. Castro y el joven D. Ramón Gil Moreno. Por los Departamentos del Valle Viejo y Piedrablanca, Don Antonio Rivera, el más decidido amigo político del Dr. Caracciolo Figueroa, y en otro Departamento ha sido eliminado uno de mis más seguros amigos" (Manuel F. Rodríguez a J. Roca, Catamarca, 29-XII-1884, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42). Si no ha habido la intención de soplarle la vela al candidato José S. Daza, con que fin se preguntaba Marcelino Guiol, "...¿se ha cambiado la lista, faltando vergonzosamente a un compromiso tan serio?" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394). Guiol no creía que este procedimiento

"...responda a que tal o cual fracción se hubiera querido llevar la vanagloria de poder decir '...yo he demostrado que gozo de más prestigio que los demás', porque sería una tontería siendo que llegaba al mismo fin, esto respondiendo al candidato pactado [Daza]" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394).

Por todos estos motivos, Guiol creía "...que hay gato y que ese gato sacará las uñas en el momento de la elección, y quien sabe si no lo arañan al pobre Daza!" (Marcelino Guiol a V. de la Plaza, Catamarca, 26-I-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. V. de la Plaza, Leg.394).

⁷⁹ En Diciembre de 1883, Juárez Celman se alegra que Roca "...participe de la antipatía que me inspira la persona de tan inflado mulato" (Juárez Celman a J. Roca, Córdoba, 20-XII-1883, AGN, Doc.

Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

⁸⁰ Onésimo Leguizamón a Julio Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸¹ Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸² Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸³ Onésimo Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 24-XI-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸⁴ Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 4-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸⁵ Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 4-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸⁶ Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 4-XII-1884 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸⁷ Hijo del Diputado Nacional José del Pino y de una hija de Andrés de Villegas y de Carmen Ortiz de Ocampo y Martínez de Arce.

⁸⁸ "...Esos jueces nos están costando muy mucho, no solo por el esfuerzo que tenemos que hacer para contrarrestarlos en sus pillerías sino por la burla que de ellos se recibe. Hombres de puntos medios, de luz y sombra, hermafroditas políticos todo lo quieren, pero sin responsabilidad" (Antonio del Pino a Juárez Celman, Catamarca, 26-X-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

⁸⁹ Lisandro Olmos a Dardo Rocha, Catamarca, 11-XII-1885 (AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.215).

⁹⁰ Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1882, I, 123.

⁹¹ Exposición del Diputado Nacional Adolfo Contte, Diario de Sesiones, 1908, I, Reunión n.2, 7 de Mayo de 1908, p.47.

⁹² Para un estudio de la chicana y la intimidación en la competencia electoral de 1869 en Texas, ver Baum (1993).

⁹³ Hijo de Simón Posse Tejerina y de Josefa Insúa, casado con Natalia Vásquez; primo hermano de los Gobernadores Juan y Wenceslao Posse Talavera, y de los Diputados Nacionales Emidio Posse Talavera y Filemón Posse Bores; y tío segundo del Diputado Nacional Benjamín Posse Alvarez.

⁹⁴ José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

⁹⁵ José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha,

Leg.214).

⁹⁶ José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

⁹⁷ José Posse a D. Rocha, Tucumán, 13-II-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

⁹⁸ L. Quinteros a Luis del Carril, Tucumán, 12-XII-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.214).

⁹⁹ "...Esa noche y en la mañana del domingo las agrupaciones de amigos establecidos en distintos puntos, fueron invadidos por la Policía y arreados al Dpto. Central y Comisaría no menos de 400 ciudadanos y en la mañana del domingo, rodeados nuestros Comités por agentes de Policía, eran arrastrados los grupos de nuestros partidarios que pretendían llegar hasta ellos. Así resulta que una masa de 500 a 600 ciudadanos y partidarios han sido sustraídos a nuestra manifestación. Y esto que no cuento las intimidaciones, las presiones parciales, los rumores siniestros esparcidos por la autoridad de actos de fuerza y de matanza, los mil actos de cohesión y fraude ejercidos contra nosotros" (V. López Cabanillas a D. Rocha, Córdoba, 3-VIII-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215).

¹⁰⁰ para un estudio acerca del valor del voto, ver Argersinger (1989) y Dawson (1992).

¹⁰¹ para Segundo Linares, Alvarez Prado "...se ha educado entre bolivianos y ha adquirido esa falsía y esa falta de respeto social que caracteriza a la raza indígena semicivilizada" (S. Linares a D. Rocha, Jujuy, 19-XI-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.215). Alvarez Prado era "...un hombre sin instrucción, de inteligencia clara, perspicaz, desconfiado, sumamente reconcentrado, que se puede en él confiar a pesar de tener siempre en cuenta su interés personal, que rara vez olvida sus rencores los que guarda sin manifestarlos sino por hechos, su palabra es suave en la que muy pocas veces se encuentran sus sentimientos expresados, razón por la que engaña a quien no le conoce. Tiene a sus órdenes un partido disciplinado que le reconoce como Jefe supremo y una Legislatura que se prestará a sus caprichos. La talla moral de sus amigos políticos poco se diferencia de los del "Club de la Juventud" [de Salta], siendo menos inmorales porque existen pocos empleos a distribuir y son más ignorantes lo que les hace entrar casi en la categoría de una tribu" (Francisco Costas a Dardo Rocha, Salta, 25-VII-1885, AGN, Sala VII, Archivo Rocha, Leg.216).

¹⁰² J. M. Alvarez Prado a J. Roca, Jujuy, 12-II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.50).

¹⁰³ Pío Uriburu a Luis M. Campos, 5-IV-1886 (AGN, Sala VII, Arch. Rocha, Leg.206).

¹⁰⁴ Absalón Rojas a Juárez Celman, Santiago del Estero, 26-II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

¹⁰⁵ Absalón Rojas a Juárez Celman, Santiago del Estero, 26-II-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

¹⁰⁶ José S. Daza a M. Juárez Celman, Catamarca, 11-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20).

¹⁰⁷ José S. Daza a M. Juárez Celman, Catamarca, 11-I-1886 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.20).

¹⁰⁸ Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 16-V-1898, 2a Sesión ordinaria, p.40.

¹⁰⁹ nacido en San Luis en 1847, hijo de Juan Francisco Garro y de Isidora Ortiz, marido de Eugenia Soria; y autor de un Bosquejo Histórico de la Universidad de Córdoba (Cutolo, III, 277).

¹¹⁰ Diputado Garro, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1874; reproducido en Diputado Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 6a sesión ordinaria, 10-VI-1892, p.164.

¹¹¹ Diputado Garro, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1874; reproducido en Diputado Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 6a sesión ordinaria, 10-VI-1892, p.164.

¹¹² Diputado Garro, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1874; reproducido en Diputado Rafael Castillo, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 6a sesión ordinaria, 10-VI-1892, p.164.

¹¹³ Diputado Pascual Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión ordinaria, p.217.

¹¹⁴ Diputado Pascual Beracochea, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 15-VI-1892, 8a sesión ordinaria, p.217. Acerca del Registro Cívico en la República Oriental del Uruguay, ver Gómez, 1921, I, 557, 597 y 615; y II, 202.

¹¹⁵ Diputado Zapata, Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 27-V-1878, p.58.

¹¹⁶ La Unión Provincial, el partido de Don Lucas Córdoba, no había aceptado arreglar con la Unión Popular, "...en la creencia de que el Interventor [Domingo T.] Pérez, cumpliera su promesa de impedir la venalidad en el acto electoral. Si el Interventor evitaba que los demócratas compraran votos, la victoria no podía ponerse en duda, y este mal cuarto de hora de credulidad en los compromisos del representante federal ha producido la derrota de la Unión Provincial.

Al día siguiente, cuando se instalaron las mesas, pudo desde los primeros momentos verse la enorme mayoría de la Unión Provincial: pero también se vió que los demócratas estaban surtiendo sus filas comprando los votos en la Unión Provincial. Netamente la campaña se hacía en contra de Don Lucas; era a él a quien los demócratas le sacaban sus elementos pagando cada voto a 30 pesos al principio y después a 70. La Unión Popular, mientras tanto, corría de atrás, conservándose con sus filas compactas, pues a su vez tenía dinero para contrarrestar la compra de los demócratas, a parte de que no era allí donde estos ejercían su acción corruptora. A las once la Unión Provincial llevaba mayoría en todas las mesas. Esta mayoría se conservó hasta las 12 y media. A esa hora la compra de votos arreció furiosamente. El Diputado [Pedro G.] Méndez en un automovil recorría todas las mesas y frente de los grupos se detenía y desde su máquina gritaba 'se compra votos al contado: se paga hasta 30 pesos'. El pobrerío de Don Lucas se desgranaba.

Aquella gente que había permanecido durante la larga campaña hambriendo por seguir a su caudillo, pero sin ninguna tentación a la vista, comenzó a irse a montones; grupos de 200 hombres con su jefe a la cabeza se pasaron hacia donde los billetes del Diputado Méndez tocaban la campana de llamada. Comenzada la desertión, así colectiva, aquello fue como la rotura de un chiquero, a la una la mayoría de Don Lucas había retrogradado enormemente y los demócratas se iban solos. La Unión Popular se mantenía. Para ella era cuestión de resistencia en las filas Luquistas; si estos se aguantaban a la tentación del dinero demócrata, podía obtener ventajas.

Pero la avalancha demócrata seguía y seguía, siempre surtiéndose en los clubes provinciales inextinguibles que proveían el mercado abundantemente. A las tres la Unión Provincial sabía que estaba vencida completamente y no hizo ningún esfuerzo ya, abandonando la lucha, mientras la Unión Popular seguía votando con los demócratas. A las 4 la elección se cerró y a la simple vista los demócratas estaban triunfantes; nadie dudaba de que así había ocurrido, y tan era exacto ese concepto, que la Unión Popular, urgida por la angustia de la derrota, propuso a la Unión Provincial que protestaran la elección en todas las mesas.

Pero la razón del triunfo de la Unión Popular está en esto. Los demócratas tenían una boleta octogonal y los provincialistas hicieron la suya de la misma forma en algunos momentos. De ahí resultó que muchos que compraron los demócratas votaron por los Provincialistas, disminuyendo así la suma correspondiente a aquellos, pero sin aumentar como para obtener el triunfo la cifra de la Unión Provincial.

En resumen, la elección fue una carrera en la que hicieron el tren los provincialistas con los demócratas luchando por la delantera, y como en la generalidad de los casos, ganó el que guardó caballo desde el fondo" ("Las Elecciones Tucumanas", El Diario, 17-I-1906).

¹¹⁷ ver Otero, 1996.

¹¹⁸ Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

¹¹⁹ Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

¹²⁰ Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

¹²¹ Eriberto Mendoza a J. Roca, San Luis, 9-VII-1904 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.104).

¹²² Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-IX-1922, Reunión No.37, pp.522-523.

¹²³ por este sistema cada uno de los distritos electorales se dividió en tantas circunscripciones cuantos diputados tenían derecho a enviar al Congreso (Vera Villalobos, 1994, 77).

¹²⁴ La Ley establecía el sistema de lista incompleta, por el cual la lista más votada se aseguraba 2/3 de las bancas, y el tercio restante correspondía a la lista siguiente en número de votos (Vera Villalobos, 1994, 83).

¹²⁵ Vera Villalobos, 1994, 86.

¹²⁶ Vera Villalobos, 1994, 90.

CONCLUSION del Tomo-II

Como consideración final, podemos afirmar, en base a los innumerables acciones colectivas suscitadas a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX aquí relatadas, que la causa eficiente de dichas acciones fue por lo general el cerrado comunalismo provocado por las prolongadas estructuras de parentesco (*gemeinshaft*), más fuertes que cambio político alguno, incluidas las Reformas Borbónicas (1782), la Revolución de Independencia (1810), y la Organización Nacional (1862), pues lograron perpetuarse en el tiempo, hasta que la inmigración, la alfabetización y el sufragio universal lograron acelerar la movilidad social, y con ella la circulación de las elites políticas, transformando a la llamada oligarquía argentina en una burguesía dependiente.

De la extensa enumeración de casos de corrupción administrativa señalados en este trabajo y del fiasco que resultó la malversación de los caudales públicos en una economía minera en franca declinación, la cual acentuó los escándalos políticos, intentamos cuestionar la tesis revisionista que sostiene que la corrupción institucionalizada devino en una suerte de válvula de escape para el colonialismo español. En efecto, los ejemplos de corrupción reseñados en este trabajo, ocurridos en el interior del espacio colonial rioplatense, fueron en los casos más graves (aquellos en que se perjudicó la Real Renta de Tributos), cometidos por peninsulares, porteños, o forasteros del lugar de comisión del delito. En aquellos otros casos en que se perjudicó a las Reales Rentas de Alcabalas, Sisa, y Diezmos, sus autores fueron en la mayor parte de los casos vecinos criollos. Esto revela que los casos de corrupción que constituyeron una válvula de escape a la presión de las capas criollas, fueron sólo aquellos que gravaban la circulación de bienes; mientras que aquellos otros casos que constituían exacciones a la esfera productiva, en las que se victimizaba a la masa indígena, vinieron a conformar una suerte de desafío foráneo, que ahondó el resentimiento para con los funcionarios procedentes de España o Buenos Aires, que hicieron posible los estallidos autonomistas que sembraron luego la historia del siglo XIX latinoamericano.